

28

Revista Científica

General José María Córdova

Revista Colombiana de Estudios Militares y Estratégicos

Colombian Journal of Military and Strategic Studies



ESCUELA MILITAR DE CADETES
General José María Córdova



Vol. 17, Núm. 28

oct-dic / 2019

Bogotá D.C., Colombia

ISSN 1900-6586 (impreso)

ISSN 2500-7645 (en línea)

Revista Científica

General José María Córdova

(Revista Colombiana de Estudios Militares y Estratégicos)

ISSN 1900-6586 (impreso) - ISSN 2500-7645 (en línea)

Volumen 17, Número 28, octubre-diciembre 2019

DIRECTIVOS ESMIC

Brigadier General Álvaro Vicente Pérez Durán

Director Escuela Militar de Cadetes

Coronel Javier Hernando Africano López

Subdirector Escuela Militar de Cadetes

Coronel Milton Mauricio Lozada Andrade

Vicerrector Académico Escuela Militar de Cadetes

Teniente Coronel Raúl Andrés Rodríguez Gallego

Jefe del Área de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación

INDEXADA EN

DOAJ - Publindex - Google Scholar - Redalyc - Latindex - SciELO - REDIB

CLASE - CIRC - MIAR - Rev Sapiens - EBSCO - WorldCat - SciRev - Suncat

Wilbert - LatinREV - BASE



Miles Doctus

Esta página queda intencionalmente en blanco.

Revista Científica

General José María Córdova

(Revista Colombiana de Estudios Militares y Estratégicos)

ISSN 1900-6586 (impreso) - ISSN 2500-7645 (en línea)

Volumen 17, Número 28, octubre-diciembre 2019

La **Revista Científica General José María Córdova** (Revista colombiana de estudios militares y estratégicos) es una publicación académica de acceso abierto, revisada por pares y editada trimestralmente por la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” (ESMIC), *alma mater* de los oficiales del Ejército Nacional de Colombia, a través de su Sello Editorial ESMIC.

EDITOR EN JEFE

Teniente Coronel Andrés Eduardo Fernández-Osorio, PhD(c)

Universidad de Barcelona, España

EDITORES ASOCIADOS

Marina Mirón, PhD

King's College London, Reino Unido

Leonardo Juan Ramírez López, PhD

Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Colombia

COMITÉ EDITORIAL

Rod Thornton, PhD

King's College London, Reino Unido

Rafael Martínez Martínez, PhD

Universidad de Barcelona, España

Marcelo Saín, PhD

Universidad Nacional de Quilmes, Argentina

Luis Alfonso Ramírez Peña, PhD

Universidad Santo Tomás, Colombia

Eduardo Pastrana Buelvas, PhD

Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

Alessandra Ciurlo, PhD

Pontificia Universidad Gregoriana, Italia

María Catalina Monroy Hernández, PhD

Universidad del Rosario, Colombia

EQUIPO EDITORIAL

Gypsy Español Vega

Gestora de contenidos y de internacionalización

Jorge Enrique Beltrán Vargas

Corrector de estilo

Gypsy Español Vega

Traductora

Rubén Alberto Urriago Gutiérrez

Diagramador

COMITÉ CIENTÍFICO

David Whetham, PhD

King's College London, Reino Unido

Fabricia Silva da Rosa, PhD

Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

Maxim Bratersky, PhD

Escuela Superior de Economía, Federación de Rusia

Juan Manuel Serrano Álvarez, PhD

Universidad de Antioquia, Colombia

Oscar Julián Palma Morales, PhD

Universidad del Rosario, Colombia

Philippe Dufort, PhD

Universidad de Saint Paul, Canadá

Víctor Rafael Martín Fiorino, PhD

Universidad Católica de Colombia, Colombia

SELLO EDITORIAL ESMIC

Hélver Martín Alvarado

Asesor Sello Editorial

Escuela Militar de Cadetes

“General José María Córdova”

Calle 80 # 38-00. Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: +57(1) 377 0850 Ext. 1104

Web oficial:

<https://www.revistacientificaesmic.com>

Contacto: revistacientifica@esmic.edu.co



Los contenidos publicados por la RCGJMC son de acceso abierto bajo una licencia Creative Commons: Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es>

Revista Científica General José María Córdova
(Revista colombiana de estudios militares y estratégicos)

ENFOQUE Y ALCANCE

La Revista Científica General José María Córdova (RCGJMC) es una revista interdisciplinaria, con un enfoque en las ciencias sociales (Clase 5I01, OCDE / UNESCO). Publica resultados de investigación en estudios militares y estratégicos. Este campo se centra en el análisis de escenarios de incertidumbre en seguridad y defensa para proporcionar a un amplio número de lectores, incluidos decisores políticos, miembros de las Fuerzas Armadas, profesionales, educadores, investigadores y estudiantes de las ciencias sociales, una comprensión del uso legítimo del poder y su adecuada aplicación en relación con los intereses nacionales, en beneficio de la formulación de políticas y la gestión pública.

MISIÓN Y VISIÓN

La RCGJMC explora perspectivas teóricas y prácticas innovadoras en cuanto al estudio del poder y su aplicación legítima en la defensa de los intereses nacionales. De esta forma, busca aportar a la construcción de una cultura estratégica, en la que se articule el uso de los medios disponibles con las formas de empleo de las capacidades nacionales para lograr los fines esenciales del Estado. La RCGJMC, como publicación interdisciplinaria, es un proyecto líder en la región de Latinoamérica y el Caribe, en el que convergen múltiples perspectivas académicas y experiencias profesionales que contribuyen al fortalecimiento del pensamiento y la cultura estratégica, a la optimización de la administración pública, al robustecimiento de la democracia y a la defensa de los derechos humanos.

ORIENTACIÓN TEMÁTICA

Los contenidos de la RCGJMC están enmarcados en los siguientes ejes temáticos y disciplinas correspondientes: 1) Educación y doctrina (ciencias militares); 2) Política y estrategia (ciencia política); 3) Seguridad y defensa (relaciones internacionales); 4) Justicia y derechos humanos (derecho); 5) Fuerzas Armadas y sociedad (historia y geografía); 6) Inteligencia y logística (administración); y 7) Industria y tecnología (economía).

RESPONSABILIDAD DE CONTENIDOS

La responsabilidad por el contenido de los artículos publicados por la RCGJMC corresponde exclusivamente a los autores. Las posturas y aseveraciones presentadas son resultado de un ejercicio académico e investigativo que no representa la posición oficial ni institucional de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, el Ejército Nacional de Colombia o el Ministerio de Defensa Nacional.

INDEXACIÓN

La RCGJMC se encuentra incluida en los siguientes Sistemas de Indexación y Resumen (SIR): DOAJ, Publindex, Google Scholar, Redalyc, Latindex, SciELO, REDIB, CLASE, CIRC, MIAR, Rev Sapiens, EBS-CO, WorldCat, SciRev, Suncat, Wilbert, LatinREV, BASE

ENVÍO DE PROPUESTAS

La RCGJMC fomenta la presentación de propuestas originales correspondientes a los ejes temáticos y disciplinas descritas anteriormente. Todos los envíos deben seguir las instrucciones para autores disponibles en <https://www.revistacientificaesmic.com/index.php/esmic/about/submissions>, y deben enviarse electrónicamente a <https://www.revistacientificaesmic.com/index.php/esmic/login>

Tabla de contenido

Editorial: Dossier “Guerras contemporáneas y su efecto en las Fuerzas Militares” Dossier “Contemporary wars and their effect on the Military Forces” <i>Andrés Eduardo Fernández-Osorio</i>	683-687
EDUCACIÓN Y DOCTRINA	
1. La violencia terrorista como espectáculo en internet: una aproximación criminológica Terrorist violence as an internet spectacle: a criminological approach <i>Miguel Ángel Cano Paños</i>	691-717
POLÍTICA Y ESTRATEGIA	
2. Geopolítica del Polo Sur: intereses y necesidades de Colombia en el Tratado de la Antártida South Pole Geopolitics: Colombia's needs and interests in the Antarctic Treaty <i>Carlos Enrique Álvarez Calderón y Eduardo Namen Mesa</i>	721-748
3. El río Amazonas: corredor estratégico para una Colombia trioceánica The Amazon River: a strategic corridor for a tri-oceanic Colombia <i>Valeria Rodríguez Ardila</i>	749-770
SEGURIDAD Y DEFENSA	
4. La política de fronteras de Colombia ante las nuevas amenazas de seguridad y defensa Colombia's border policy in the face of new security and defense threats <i>Cipriano Peña Chivatá, Paola Alexandra Sierra-Zamora y Juan Carlos Hoyos Rojas</i>	773-795
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	
5. La reparación de víctimas en la implementación de un proceso de justicia transicional Reparations to victims in transitional justice processes <i>Katterin Viviana Camargo García</i>	799-818
6. Aportes de la Academia a legitimidad de la justicia en Colombia Contributions of the Academy to the legitimacy of justice in Colombia <i>María Antonieta Corcione Nieto, Andrés Eduardo Fernández-Osorio, Leidy Johanna Cabrera Cabrera y Beyaert Camilo Rojas Yaima</i>	819-843

DOSIER: GUERRAS CONTEMPORÁNEAS Y SU EFECTO EN LAS FUERZAS MILITARES

7. **The mind and spirit are decisive weapons**
La mente y el espíritu son armas decisivas
Donald E. Vandergriff 847-868
8. **Public attribution as a regulator of emotion: Manipulating the political effects of hostilities**
La atribución pública como reguladora de emociones: manipulación de los efectos políticos de las hostilidades
Samuel Žilincík 869-889
9. **Insisting on victory: Victory versus success in limited and asymmetric wars**
Insistiendo en la victoria: Victoria versus éxito en guerras limitadas y asimétricas
Mustafa Coşar Ünal y Petra Cafnik Uludağ 891-922
10. **How insurgencies end: The quest for government victory**
Cómo terminan las insurgencias: en busca de la victoria del gobierno
Spyridon Plakoudas 923-938
11. **The Military Forces as an instrument of the socialization of the State**
Las Fuerzas Militares como instrumento de socialización del Estado
Fabián Ricardo Giraldo-Chaparro 939-970



Revista Científica General José María Córdova

(Revista colombiana de estudios militares y estratégicos)

Bogotá D.C., Colombia

Volumen 17, Número 28, octubre-diciembre 2019, pp. 683-687

<http://dx.doi.org/10.21830/19006586.519>

Editorial: Dosier “Guerras contemporáneas y su efecto en las Fuerzas Militares”

Editorial: Dossier “Contemporary wars and their effect on the Military Forces”

Andrés Eduardo Fernández-Osorio

Editor en Jefe *Revista Científica General José María Córdova*

Del carácter cambiante de las guerras contemporáneas de finales del siglo XX y principios del XXI se desprende la necesidad de reflexionar sobre una gama amplia de temas relacionados con los métodos integrales de preparación eficaz de las Fuerzas Militares. Esto permite superar los nuevos retos del entorno exitosamente, por ejemplo, escenarios complejos en las operaciones, acciones oportunas para enfrentar amenazas diversas y conciencia situacional para definir las estrategias a implementar. En este contexto, también es necesario examinar la importancia de factores intangibles en la guerra, que pueden influir en el proceso de toma de decisiones y, por ende, producir o no los efectos estratégicos deseados. Todo ello, sin dejar de lado el valor social que representan las Fuerzas Militares para la nación.

Por esta razón, el presente número de la *Revista Científica General José María Córdova* (Revista colombiana de estudios militares y estratégicos) ofrece un dossier de cinco artículos sobre guerras contemporáneas y su efecto en las Fuerzas Militares, seleccionados por la Dra. Marina Mirón —Centro de Ética Militar del King's College London—, como Editora Invitada. Los artículos, fueron elaborados por académicos y profesionales militares de reconocimiento internacional y contribuyen al entendimiento más amplio de los retos planteados por las guerras cada día más complejas.

Por otra parte, como es acostumbrado en el último número del año, la *Revista* agradece públicamente el trabajo del Consejo Editorial y de los pares evaluadores del 2019, gracias a cuyo compromiso y participación activa, se logró maximizar la difusión de los

proyectos de investigación relacionados con los estudios militares y estratégicos, así como incrementar la calidad de los contenidos publicados.

Parte esencial de las políticas de calidad de la *Revista* es mantener procedimientos claros y objetivos en la selección, evaluación, publicación y distribución de los artículos, para lo cual las recomendaciones y decisiones de los miembros del Consejo Editorial y de los pares evaluadores desempeñan un papel fundamental. Es por esto que la *Revista* publica, como justo reconocimiento, la relación de los académicos, docentes e investigadores, así como de los miembros del Consejo Editorial (Comité Editorial y Comité Científico), que participaron voluntariamente en la evaluación de los artículos durante el 2019.

Comité Editorial

Rafael Martínez Martínez, PhD

Universidad de Barcelona, España

Marcelo Saín, PhD

Universidad Nacional de Quilmes, Argentina

Luis Alfonso Ramírez Peña, PhD

Universidad Santo Tomás, Colombia

Eduardo Pastrana Buelvas, PhD

Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

Alessandra Ciurlo, PhD

Pontificia Universidad Gregoriana, Italia

María Catalina Monroy Hernández, PhD

Universidad del Rosario, Colombia

Comité Científico

Fabricia Silva da Rosa, PhD

Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

Maxim Bratersky, PhD

Escuela Superior de Economía, Federación de Rusia

Juan Manuel Serrano Álvarez, PhD

Universidad de Antioquia, Colombia

Óscar Julián Palma Morales, PhD

Universidad del Rosario, Colombia

Philippe Dufort, PhD

Universidad de Saint Paul, Canadá

Víctor Rafael Martín Fiorino, PhD
Universidad Católica de Colombia, Colombia

Equipo editorial

Gypsy Español Vega
Gestora de contenidos y de internacionalización

Jorge Enrique Beltrán Vargas
Corrector de estilo

Gypsy Español Vega
Traductora

Rubén Urriago Gutiérrez
Diagramador

Helver Martín Alvarado
Asesor del Sello Editorial ESMIC

Pares evaluadores

Adriana Otálora Buitrago
Alexander Sellamén Garzón
Ana Alexandra López Jara
Andrés Felipe Cardona Orozco
Camilo Andrés Castiblanco Durán
Carlos Alberto Ardila Castro
Carlos Andrés Rodríguez Beltrán
Carlos Enrique Álvarez Calderón
Carolina Pedraza Mariño
Claudia Patricia Garay Acevedo
Daniel Botero Rosas
Daniel Isaac Roque
David Whetham
Diana Britto Ruiz
Diana Patricia Gutiérrez Mejía
Eduardo Castrillón Muñoz
Elba María Bermúdez Quintana
Elizabeth Oviedo
Erika Constanza Figueroa Pedreros
Erika Paola Ramírez Benítez
Eutimio Mejía Soto

Fabio Saúl Castro-Herrera
Felipe Chávez Bustamante
Fernanda Navas Camargo
Frank Alexander Ballesteros Riveros
Henry Cancelado Franco
Herlendy Vanessa Gómez Jerez
Humberto Librado Castillo
Isabel Jaraba Otálvaro
Jaime Alfonso Cubides Cárdenas
Jaime Humberto Leiva De Antonio
Jairo González Quintero
Johanna Carolina Veloza Guío
John Cristhian Fernández Lizarazo
José Manuel Mora Álvarez
Josefina Garcés Velasco
Juan David Abella Osorio
Juan Fernando Gil Osorio
Juan Miguel Castro Herrera
Julio César Acosta González
Julio Roberto Bernal Riasquey
Kevin Mauricio Pérez Cortés
Laura Janneth Delgado Nieto
Laura Lucía Colmenares Botía
Leonor Yaneth Goe Rojas Hernández
Liz Oriana Perdomo Henao
Luis Alexander Montero Moncada
Luis Antonio González Santos
Luis Eduardo Amador Cabra
Manuel Alexis Bermúdez Tapia
Manuel Betancur Montoya
Manuel García Castellón
Marcela Godoy Corredor
Marco Iazzetta
María Catalina Monroy Hernández
María Elena Emma Escobar Ávila
Maribel Albarracín Muñoz
Marina Mirón
Marlene Cañizares Roig
Milton Ricardo Ospina Díaz
Mónica Patricia Mayorga Díaz

Nathalia Chacón Triana
Nicolás Botero Vásquez
Orlando Enrique Contreras Pacheco
Óscar Felipe Barrera Herrera
Pabla Vanessa Bermúdez Zea
Paola Alexandra Sierra Zamora
Pedro Buitrago Rincón
Rafael Franco Ruiz
Ricardo Esquivel Triana
Ricardo Gutiérrez Felipe
Rod Thornton
Santiago Cortés Fernández
Santiago Ramírez López
Sara Patricia Quintero Cordero
Sergio Gabriel Eissa
Sonia Esmeralda Rojas Rojas
Teresa de Jesús Vargas Vega
Ulf Thoene
Vanessa Cano Mejía
Viviana Ariza Márquez
Ximena Andrea Cujabante Villamil
Xochitl Arango Morales

Esta página queda intencionalmente en blanco.

EDUCACIÓN Y DOCTRINA

Education and Doctrine

Esta página queda intencionalmente en blanco.



Revista Científica General José María Córdova

(Revista colombiana de estudios militares y estratégicos)

Bogotá D.C., Colombia

Volumen 17, Número 28, octubre-diciembre 2019, pp. 691-717

<http://dx.doi.org/10.21830/19006586.514>

La violencia terrorista como espectáculo en internet: una aproximación criminológica

Terrorist violence as an internet spectacle: a criminological approach

Miguel Ángel Cano Paños

Universidad de Granada, España

RESUMEN. La presencia del terrorismo islámico en internet ha cambiado cuantitativa y cualitativamente en los últimos años como consecuencia de la irrupción del autodenominado Estado Islámico. Nunca hasta ahora había resultado tan fácil acceder a toda clase de propaganda extremista, en especial, en las redes sociales. Los estrategas mediáticos de Estado Islámico han conseguido convertir el terror más atroz en un espectáculo hollywoodiense, que logra captar la atención de jóvenes de religión musulmana que habitan en Occidente. A partir de estas consideraciones, el presente trabajo analiza los distintos canales en línea a través de los cuales el movimiento islámista está llevando a cabo tareas de propaganda, captación, adoctrinamiento y adiestramiento de nuevos miembros de esta ideología pan-islámica radical dispuesta a extender el terror por todo el planeta.

PALABRAS CLAVE: Estado Islámico; extremismo; internet; redes sociales; terrorismo islámico; jihad

ABSTRACT. The presence of Islamist terrorism on the Internet has changed quantitatively and qualitatively in recent years as a result of the emergence of the self-proclaimed Islamic State. Never before has it been so easy to access all kinds of extremist propaganda, especially in social networks. Islamic State media strategists have managed to turn the most atrocious horrors into a Hollywood-like spectacle that captures the attention of young Muslims living in the West. Based on these considerations, this work analyzes the different online channels used by the Islamist movement to carry out propaganda, recruitment, indoctrination, and training of new members of this radical pan-Islamic ideology eager to extend terror throughout the planet.

KEYWORDS: extremism; Internet; Islamic State; Islamist terrorism; jihad; social networks

Sección: EDUCACIÓN Y DOCTRINA • Artículo de investigación científica y tecnológica

Recibido: 6 de julio de 2019 • Aceptado: 2 de septiembre de 2019

CONTACTO: Miguel Ángel Cano Paños  macano@ugr.es

Introducción

La invasión yihadista de internet ha permitido que organizaciones como Al Qaeda y, sobre todo, el autodenominado Estado Islámico (EI) hayan podido abrir un segundo frente de batalla en su lucha contra Occidente y sus aliados en aquellos países de mayoría musulmana. Uno de los objetivos fundamentales de la utilización de internet por parte del terrorismo islámista ha sido radicalizar a un amplio segmento de jóvenes musulmanes de ambos性es localizados en la diáspora europea. Precisamente con la ayuda de estos jóvenes europeos recién reclutados, el terrorismo yihadista se ha adaptado con una rapidez asombrosa a la evolución tecnológica de la red global de internet, lo cual, en no pocas ocasiones, le ha permitido ir un paso por delante de las fuerzas de seguridad. Para ello podrían aducirse varias razones. Una de ellas es que las organizaciones terroristas ya no necesitan emitir sus comunicados y amenazas a través de sus propias páginas web y por parte de sus líderes más destacados. Más bien existe una amplia y al mismo tiempo descentralizada red de miles de páginas y foros, gestionados por militantes y meros simpatizantes, en los cuales se publican y difunden contenidos de naturaleza radical. Al mismo tiempo, el movimiento yihadista global ha encontrado en las nuevas tecnologías su mejor aliado para desarrollar actividades de carácter muy variado, como adoctrinar, difundir sus acciones, incitar a la violencia y expandir un mensaje de odio y terror a través, por ejemplo, de las redes sociales u otros medios en línea accesibles desde casi cualquier punto del globo, de carácter gratuito y de fácil difusión. Como se verá a lo largo del presente artículo, el corpus en línea del yihadismo se compone de escritos, fotografías, videos y archivos de audio, los cuales son divulgados fundamentalmente por colaboradores, simpatizantes y seguidores del movimiento yihadista global. Por consiguiente, resulta un hecho incuestionable que internet se ha convertido en un vehículo clave para inspirar, motivar y animar tanto la radicalización como la propia violencia.

No cabe duda de que el mensaje islamista radical difundido a través de internet ha calado en un sector de la diáspora musulmana que habita en Occidente. En este sentido, existen informaciones contrastadas que indican que un número considerable de individuos adscritos a la ideología islamista radical y residentes en Occidente se han trasladado en las últimas fechas a países como Irak o Siria con el objetivo de convertirse en “soldados universales de Allah” (Hernández & Carrión, 2015). Se trata en su mayoría de jóvenes musulmanes de ambos性es procedentes de Berlín, París, Londres o Bruselas, quienes en ocasiones viajan en grupo. Entre ellos se pueden encontrar a sujetos procedentes de barrios marginales con antecedentes penales por delincuencia común, pero también estudiantes universitarios, profesionales de distintos sectores como la medicina o la ingeniería, e incluso sujetos conversos procedentes de familias europeas autóctonas.

En la mayoría de los casos, internet es una parte muy importante del proceso de radicalización, ya que intensifica y agiliza dicho proceso. La red global puede proporcionar al usuario la información que está buscando, así como confirmar sus creencias.

Especialmente importante en este sentido son los videos e imágenes que refuerzan una visión particular del mundo, y que pueden ser potentes chispas para el proceso de radicalización. Además, internet permite a los individuos encontrar a personas ideológicamente afines —algo que desde luego resulta más difícil en un entorno físico— lográndose crear una comunidad en línea, diríase incluso una subcultura. Y, al hacerlo, se normalizan opiniones y comportamientos anormales, tales como puntos de vista ideológicos de naturaleza extremista que defienden entre otras cosas la utilización de la violencia para resolver los problemas y vengar eventuales desagravios (Institute for Strategic Dialogue, 2011).

A partir de lo señalado en los párrafos anteriores, este artículo tiene como objetivo analizar desde un punto de vista criminológico el elemento ambiental en el contexto del terrorismo yihadista y, más concretamente, la violencia terrorista difundida por EI a través de internet. Para ello, se va a prestar especial atención a aquellos lugares virtuales en los que actualmente se está difundiendo el mensaje de odio e incitación a la violencia terrorista. Como se verá a lo largo de los epígrafes siguientes, EI ha sido con toda seguridad la primera organización terrorista de la historia que ha logrado presentar el terror y la violencia a través de internet de una forma espectacular, *hollywoodiense* y tremadamente seductora para buena parte de su audiencia, a la vez que con consecuencias terribles para la población asentada en Occidente, como lo demuestran las últimas acciones terroristas cometidas en Europa.

Hay que señalar, por último, que este trabajo es la continuación de uno publicado en esta misma revista (vol. 17, n.º 26, 2019)¹, en el cual se analizó no solo la evolución de la presencia del terrorismo islamista en internet, sino también las medidas adoptadas en Europa para contrarrestar esta amenaza difusa, ubicua y tremadamente peligrosa.

El elemento ambiental en la violencia terrorista en internet

Foros de inspiración yihadista

La creación de foros yihadistas supuso en su momento la aparición de una red propagandística con una vasta ramificación y, por consiguiente, con una marcada ausencia de relaciones de signo vertical.

Actualmente, existe alrededor de una decena de foros en árabe y otros tantos en lenguas occidentales, los cuales pueden considerarse como el epicentro de la *ciberyihad*. Entre ellos hay que destacar los foros Al-Fida al-Islamiyyah, Ansar Al-Mujahideen, Shamukh al-Islam o Al-Faloja; todos ellos bastante populares dentro del movimiento yihadista global. Los simpatizantes gozan de una gran autoridad en estos foros, algunos de los cuales tienen decenas de miles de visitantes todos los días. Muchos de ellos suelen tener entre 4.000 y 18.000 usuarios activos, entre los cuales deben incluirse, lógicamente, los

¹ Dado que el actual trabajo se inserta prácticamente sin solución de continuidad en el ya citado, se reprodujeron en este algunos pasajes de la Introducción de aquél.

miembros de las agencias de seguridad que observan y, llegado el caso, manipulan las discusiones. La popularidad de los foros yihadistas depende en buena medida de las organizaciones terroristas y de los grupos mediáticos que publican en ellos, así como de la presencia activa de miembros prominentes.

En cuanto a su estructura social, al igual que sucede con el resto de foros que se encuentran en internet sobre diversas temáticas, los foros yihadistas muestran jerarquías claras, de acuerdo con el grado de participación y las distintas funciones que los miembros ostentan. En este sentido, muchos incluyen categorías como “principiante”, “miembro de élite” y “administrador”, las cuales son controladas por los administradores (Holtmann, 2012, p. 87).

Además de ser empleados para generar apoyo ideológico, los foros yihadistas han venido siendo también utilizados para compartir información táctica. Así, tanto las plataformas de mensajería instantánea como las propias salas de conversación en línea, han sido conocidas por tener “expertos”, los cuales responden directamente a preguntas acerca de cómo mezclar sustancias venenosas para realizar ataques con armas químicas, cómo llevar a cabo atentados suicidas o cómo introducirse en los sistemas informáticos del *enemigo*. En todos los foros yihadistas se anima a los nuevos reclutas a participar activamente y a leer literatura radical. Al mismo tiempo, estos foros radicales actúan como caja de resonancia para convencer a los miembros potenciales de unirse a la yihad y trasladarse a zonas de conflicto (Weimann, 2010, p. 21).

Como se verá en los apartados siguientes, una de las principales limitaciones que tiene la comunicación y la propaganda en las redes sociales y plataformas audiovisuales es su apertura y transparencia. Por ello, los extremistas todavía prefieren actuar en foros cerrados, para llevar a cabo sus labores de comunicación y coordinación de forma más segura, aun cuando saben de la infiltración por parte de las fuerzas de seguridad. Estos foros fortalecen los puntos de vista de sus miembros, crean comunidades virtuales, refuerzan las normas y normalizan el comportamiento. Al mismo tiempo, constituyen un importante espacio para realizar los correspondientes contactos y transmitir conocimientos, aunque ello únicamente sea posible tras haber transitado por varias capas de contraseñas y medidas de seguridad.

Los foros yihadistas han sido un instrumento clave para reforzar la retórica de una yihad que no conoce fronteras. Así, los usuarios de estas páginas pueden acceder en un mismo espacio a los materiales remitidos por grupos y organizaciones que operan en distintas partes del globo. Evidentemente, la unificación de toda esa propaganda dentro de un mismo lugar transmite a sus seguidores la percepción de que la acción de los diferentes grupos forma parte de un mismo enfrentamiento en defensa del Islam, más allá de las divisiones nacionales. Al mismo tiempo, los foros yihadistas han sido un instrumento clave para fomentar un sentimiento de pertenencia a una misma comunidad, pues se han convertido en un espacio de encuentro e interacción entre personas que comparten unas mismas creencias. Los partidarios del yihadismo deben enfrentarse en ocasiones a la

desagradable percepción de que sus ideas extremas son minoritarias en su círculo social por fuera de la red o incluso repudiadas (Torres, 2014, p. 160); sin embargo, los foros compensan ese aislamiento. Esta función de socialización virtual ha cobrado cada vez más importancia a medida que las redes terroristas perdían visibilidad en el ámbito físico debido al incremento de la represión policial y judicial, tras los atentados del 11-S en los Estados Unidos.

Por otra parte, tanto el ciberespacio en general como los foros yihadistas en particular generan un falso sentimiento de anonimato que fomenta una verdadera “desinhibición online”. Los potenciales yihadistas llegan al convencimiento de que pueden ocultar sus identidades permanentemente y que no tendrán que asumir ninguna consecuencia por sus actos. Al mismo tiempo, pueden interactuar de manera selectiva con aquellos que piensan igual, lo que sin duda les permite reforzar sus creencias y sentirse miembros de un importante colectivo. En este tipo de entornos, las conductas e ideas extremas y desviadas son absorbidas y percibidas como normales debido a las continuas interacciones con personas de su mismo credo. Los planteamientos moderados son expulsados de los foros y páginas web yihadistas, al tiempo que las voces más violentas son amplificadas por el resto del grupo (Torres, 2014, p. 161).

Hay que decir que España ha albergado a individuos que han desempeñado una importante función dentro del entramado terrorista en internet, en especial, en el contexto de los foros yihadistas. Las investigaciones policiales han permitido descubrir el elevado perfil de algunos de estos ciberyihadistas, así como también su capacidad para camuflarse en un perfil público de aparente normalidad, con una identidad radical a la que solo daban rienda suelta frente a la pantalla de un ordenador. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Mudhar Hussein Almaliki, al cual se hace referencia a continuación.

El 27 de marzo de 2012, la Guardia Civil detuvo en Valencia a este individuo de 51 años, de origen jordano pero nacionalizado saudí. Los agentes le acusaron de ser un importante gestor de algunos de los principales foros yihadistas del momento, como Al-Fida al-Islamiyyah, Ansar Al-Mujahideen o Shamukh al-Islam. Se trataba de un hombre discreto y educado que raramente se dejaba ver por su barrio. Por el contrario, Almaliki permanecía todo el día en casa conectado al ordenador. Los investigadores resaltaron el nivel de dedicación de Almaliki a la gestión de los foros yihadistas, una actividad a la que dedicaba entre 8 y 15 horas diarias. Un esfuerzo permanente que le había proporcionado un elevado estatus dentro de la estructura de gestión de algunas de las principales plataformas de propaganda yihadista. Desde su propio domicilio colgaba materiales para garantizar que siempre estuviesen disponibles en el ciberespacio, al mismo tiempo que realizaba sus propias aportaciones cargadas de radicalidad y odio. Se trataba de un islamista que admiraba al terrorista de Toulouse, Mohammed Merah², del que llegó a decir en un foro:

2 Mohammed Merah era un joven francés de 23 años, de origen argelino, que en marzo del 2012 protagonizó una serie de ataques en las ciudades francesas de Montauban y Tolouse, en el transcurso de los cuales fallecieron

“Es una sola persona, pero es un león que ha resistido más de 30 horas frente a un ejército al que llaman fuerzas especiales que temblaron por el asalto” (Ceberio & Simón, 2012).

Uno de los objetivos de Almaliki era ampliar la difusión de la propaganda yihadista, así como de otro tipo de contenidos prácticos, con nombres tan significativos como el llamado “Curso sobre venenos y gases venenosos más populares”, “Curso de explosivos del jeque Abu Khabab Almasri” o el “Programa del oficio del terrorismo”. Para ello, había subido múltiples archivos de esta naturaleza a repositorios de acceso público en internet, especialmente, el popular portal archive.org.

El 29 de mayo del 2014, la Audiencia Nacional condenó a Mudhar Hussein Al Malaki, conocido como el “bibliotecario de Al Qaeda”, a una pena de ocho años de prisión por considerarlo un integrante y “miembro destacado del aparato de propaganda de la red Ansar Al Mujahideen (RAAM)” —organización a la que la Audiencia Nacional le atribuyó el carácter de terrorista—. En su sentencia, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional detalla que el acusado practicaba “la yihad mediante la palabra”, difundiendo a través de internet material de exaltación del terrorismo yihadista y manuales que contribuían “directamente a la formación y adiestramiento terrorista” (Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 4.^a Sentencia núm. 2014/21, de 29 de mayo).

La “*Jihad*” escrita en inglés: la revista *Inspire* y otros magazines de inspiración yihadista

En el verano del 2010, la organización Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) publicó el primer número de la ya legendaria revista *Inspire*, un magazín yihadista publicado en inglés con distribución exclusivamente en internet. Ya desde sus inicios, la mencionada publicación logró un eco mediático considerable, sobre todo en Europa y EE.UU. La razón: la revista tenía y sigue teniendo como objetivo prioritario entusiasmar a los potenciales yihadistas y simpatizantes en la diáspora occidental, animándolos a llevar a cabo la “yihad individual” y movilizándolos para cometer atentados. Desde julio del 2010 han aparecido un total de diecisiete números de la revista. El último ejemplar hasta la fecha fue publicado en agosto del 2017.

Hay que decir al respecto que el predicador y reclutador Anwar al-Awlaki (1971-2011), quién gozó de gran carisma entre la comunidad islamista radical, jugó en su momento un papel de fundamental importancia como figura emblemática tanto de *Inspire* como de AQPA. Cabe señalar que dominaba el inglés, por haber nacido en EE.UU., país en el que pasó gran parte de su vida. Aunque era un sujeto que carecía de una formación teológica consolidada, muchos jóvenes simpatizantes y colaboradores lo veían —y lo ven aún— como una autoridad religiosa. Gracias a su carisma, sus capacidades retóricas y

siete personas, entre ellas, tres niños de una escuela judía. Tras los ataques, Merah murió en el transcurso de un tiroteo con la unidad de élite de la policía nacional francesa.

sus conocimientos de idiomas, al-Awlaki consiguió radicalizar a muchos yihadistas en Occidente y los indujo a cometer atentados terroristas contra EE. UU.: su influencia ha sido probada en más de veinte acciones. Dos de los casos que alcanzaron mayor repercusión mediática fueron el de Nidal Malik Hasan y el de Faisal Shahzad³. Debido a su incesante actividad en el ciberespacio, al-Awlaki fue considerado durante mucho tiempo como “el Bin Laden de internet”. El popular predicador murió en septiembre del 2011 en un ataque norteamericano llevado a cabo en Yemen con un avión no tripulado.

Como se acaba de señalar, la importancia de la revista *Inspire* reside fundamentalmente en la radicalización de la diáspora musulmana. Esta publicación digital producida en Yemen constituye sin duda una prueba evidente de la transnacionalización del movimiento yihadista a través de internet. Lo que a primera vista llama la atención de este magazín es su atractivo diseño y su moderna y fresca calidad visual; algo, desde luego, inusual para las publicaciones yihadistas aparecidas con anterioridad. La revista está pensada fundamentalmente para los simpatizantes del movimiento que viven en Occidente, quienes, por sus condiciones de vida eminentemente urbana, están familiarizados con publicaciones que presentan un aspecto semejante. El citado magazín, cuyos números tienen más de 70 páginas y abundante material visual, puede ser distribuido fácilmente a través de internet a tercera personas, con lo que el objetivo de propaganda y eventual reclutamiento está más que garantizado.

Los objetivos fundamentales que persigue la revista *Inspire* son los siguientes: 1) aleccionamiento ideológico (ciertamente de carácter rudimentario), 2) incitación a la violencia (junto con la *demonización* de Occidente) y 3) instrucción práctica para la comisión de atentados.

Con respecto al primer objetivo, evidentemente, la transmisión de una concreta ideología de carácter radical ocupa un papel fundamental en los contenidos de la revista. No obstante, en lugar de abordar discusiones teológicas con un gran contenido académico —algo típico de otras publicaciones yihadistas—, *Inspire* prefiere dar prioridad a la acción y la aventura. En este sentido, sus autores plantean una especie de contracultura opuesta al estilo de vida occidental, suministrando nuevas figuras con las que los lectores pueden identificarse. De este modo, a los aspirantes a yihadistas procedentes de Occidente se les ofrece la oportunidad de comenzar su viaje ideológico a partir de una determinada estética. Esto significa básicamente que el yihadista en ciernes se apropiará en primer lugar de una serie de normas de conducta y de un determinado código ético, algo que por otra parte sucede cuando un sujeto se adentra en una subcultura.

Debido a la simplificada forma de ver el mundo que propaga la revista *Inspire*, es evidente que esta se dirige fundamentalmente a simpatizantes sin una formación religiosa

3 El 5 de noviembre del 2009, el mayor Nidal Malik Hasan, psiquiatra del Ejército estadounidense, mató a 13 soldados e hirió a otros 29 en la base militar de Fort Hood (EE. UU.). Por su parte, el 1 de mayo del 2010, Faisal Shahzad, un ciudadano paquistaní-estadounidense nacido en junio de 1979, intentó cometer un atentado terrorista con un coche-bomba en el Times Square de Nueva York.

sólida. Esto es algo que se confirma si uno observa la cantidad de notas a pie de página que contienen los distintos artículos, notas que explican, en un lenguaje llano, los conceptos fundamentales del Islam. Por consiguiente, la actitud del magazín no pretende desde luego conquistar a una gran cantidad de lectores, sino más bien persuadir y radicalizar a un número limitado de individuos, con el objetivo de motivarlos a cometer atentados terroristas.

En cuanto al segundo objetivo (movilizar potenciales reclutas y colaboradores de la causa yihadista), el grupo principal de destinatarios son los simpatizantes que viven en países de habla inglesa, sobre todo en Occidente, pero también en África y Asia. El resultado de todo ello es una revista que manifiestamente se esfuerza por avivar un fenómeno que preocupa bastante a las fuerzas de seguridad europeas y de EE. UU.: el denominado “*homegrown terrorism*” o terrorismo autóctono. Este fenómeno se refiere a atentados terroristas en suelo occidental cometidos por sujetos que viven en el mismo país en el que actúan, y que por carecer de vínculo alguno con estructuras terroristas, apenas pueden ser detectados con anterioridad al ataque. En este sentido, los redactores de *Inspire* alientan constantemente a sus lectores a cometer atentados terroristas en sus propios países con medios sencillos, en lugar de emprender un peligroso y costoso viaje a un país oriental para participar en un campo de entrenamiento yihadista. Se considera que esta última opción acarrea el riesgo de que los servicios de inteligencia puedan desbaratar el plan y detener a los implicados.

Por último, el tercero de los ejes principales de la revista *Inspire* es la instrucción práctica para la preparación de atentados. En el contexto señalado, resulta tremendamente reveladora la rúbrica *Open Source Jihad*, que aparece en todos los números de la revista. Esta pretende motivar a potenciales terroristas y dotarlos de los conocimientos técnicos necesarios para cometer atentados en los países occidentales donde residen, a partir de utensilios caseros o artículos de uso corriente. Los temas tratados en esa sección van desde las instrucciones para la construcción de una bomba (*How to make a bomb in the kitchen of your mom*, aparecido en el primer número de la revista y que, al parecer, sirvió de inspiración a los hermanos Tsarnaev en el atentado de la maratón de Boston cometido en abril del 2013), hasta el manejo de un fusil de asalto AK-47, cómo hacer estallar un artefacto explosivo en un edificio o el aprendizaje de técnicas de comunicación segura. En este sentido, uno de los artículos más impactantes apareció en el segundo número de la revista, en el 2010, con el título: *The ultimate mowing machine*. El autor de este texto recomendaba instalar cuchillas de acero en el frontal de un vehículo pesado para, posteriormente, dirigirse a toda velocidad hacia una multitud de personas con el objetivo de matar al mayor número posible. Cabe recordar que un *modus operandi* semejante ha sido utilizado en Europa en los atentados de Niza, Berlín, Estocolmo o Barcelona.

Puede afirmarse que *Inspire* constituye, sin duda, el magazín de naturaleza yihadista que hasta el momento ha atraído la mayor atención por parte de Occidente. El lenguaje utilizado por la revista es claro, directo y de una simpleza extrema, entremezclado con

imágenes de gran calidad, que convierten a *Inspire* en un instrumento de comunicación y propaganda tremadamente llamativo. El eco mediático internacional que acompaña la aparición de cada nuevo número corrobora el enorme éxito de la publicación. De este modo, el principal objetivo de la revista, a saber, la movilización de simpatizantes para lograr su participación en la lucha armada, se ha conseguido en no pocos casos. La combinación de aleccionamiento religioso, propaganda política e instrucciones concretas para la comisión de atentados terroristas ha hecho de *Inspire* un instrumento de fundamental importancia en la lucha del movimiento yihadista contra los países occidentales, sobre todo, contra EE.UU.

Tras la muerte de Anwar al-Awlaki y Samir Khan en septiembre del 2011, cofundadores en su día de la revista *Inspire*, no pocos analistas consideraban que el futuro de esta publicación era incierto. Con todo, los números aparecidos hasta el momento contienen la suficiente fuerza explosiva de naturaleza ideológica como para radicalizar a potenciales terroristas y, en algunos casos, motivarlos a cometer atentados terroristas. Y es que su ideario ya se encuentra difundido a nivel mundial a través de internet, siendo imposible eliminarlo completamente. Tal y como señalan no pocos expertos, *Inspire* ha logrado desencadenar un movimiento yihadista radical a través de internet que ya no puede ser detenido (Peil, 2012, p. 44).

Actualmente hay que destacar otras dos revistas esenciales dentro del islamismo radical, que también aparecen publicadas en inglés: *Dabiq* y *Rumiyah*, ambas directamente vinculadas con EI. Con respecto *Dabiq*, ya su propio nombre permite entrever el gran simbolismo del que está cargada la publicación. Según la interpretación que hacen los radicales islamistas de los textos coránicos, Dabiq es una localidad situada en el norte de Siria en la cual tendrá lugar la batalla final entre el ejército islamista y todos los demás cruzados, con victoria final para el primero. El primer número de *Dabiq* se publicó en el 2014, y el último apareció el 31 de julio de 2016, para un total de 15 publicaciones.

El contenido y la temática que aborda esta revista es, como sucede con *Inspire*, muy variado. No obstante, pueden señalarse los siguientes temas como los más destacados: biografías, artículos sobre la fe y la religión, elogios, alabanzas y críticas a otros grupos yihadistas, la emigración al Califato (*hijrah*), el gobierno, la relación de EI con Occidente, así como actividades militares y terroristas tanto en los territorios controlados por dicha organización como en países Occidentales. Con todo, podría decirse que una de las diferencias palpables entre *Inspire* y *Dabiq* es el marcado carácter religioso de esta última en comparación con la primera.

Por su parte, *Rumiyah* (o, lo que es lo mismo, Roma) es la nueva revista que ha venido publicando EI desde septiembre del 2016. Hay que decir que su aparición viene a coincidir con la paralización de *Dabiq*. Esta circunstancia, unida al hecho de que Al Hayat Media Center —productora matriz de EI— es la encargada de publicar esta nueva revista, permite afirmar que *Rumiyah* es la sucesora de *Dabiq*. Casualmente, un mes después de la aparición del primer número de *Rumiyah*, EI anunció la caída de la ciudad de Dabiq

en manos del ejército “cruzado” sirio, por lo que es de suponer que la mencionada organización terrorista, previendo la caída de dicho enclave, se anticipó y cambió la estrategia mediante el tránsito a una nueva revista.

La estructura de este nuevo magazín, cuyo último número —el 13— apareció el 9 de septiembre del 2017, es bastante similar a la de la primigenia revista publicada por EI. Con todo, existen también algunas diferencias entre ellas. Por ejemplo, *Rumiyah* recoge infografías tomadas del periódico árabe al-Niba, que esclarecen ciertos conceptos relacionados con el Islam o la propaganda. También se aprecia, hasta el momento, una periodicidad más determinada, ya que los números aparecidos de *Rumiyah* desde su estreno han venido apareciendo con cierta frecuencia, mientras que *Inspire* y *Dabiq*, salvo contadas ocasiones, han sido publicadas con una gran discreción temporal, es decir, con notables desfases temporales entre un número y el siguiente. Lo que está por verse es si tal periodicidad mensual es mera casualidad y se difuminará de forma definitiva, o si más bien responde a la necesidad de EI de mostrar al mundo que no ha perdido fuerza a pesar de sus recientes y claras derrotas en el campo de batalla. En el momento de escribir estas líneas existen suficientes argumentos para negar esto último, pues están a punto de cumplirse dos años desde que EI publicó el último número de *Rumiyah*. Mientras tanto, en las últimas fechas el retroceso imparable de las zonas ocupadas por EI es un hecho incontestable.

Finalmente, conviene señalar la existencia de otras revistas yihadistas, vinculadas en mayor o menor medida a EI, las cuales están dirigidas a segmentos concretos de la población musulmana que vive en Occidente. Así, la revista *Dar al Islam* publica sus contenidos en francés, mientras que la revista *Istok* lo hace en ruso. También hay que hacer referencia a la revista *Al Nabá*, la cual se publica en lengua árabe.

Redes sociales (Facebook y Twitter)

Está fuera de toda duda que el desarrollo de internet y, muy especialmente, el de las redes sociales en los últimos quince años han cambiado los patrones de conducta y comunicación de buena parte de la sociedad mundial, lo que constituye una auténtica revolución tecnológica. Según un informe de la consultora We Are Social (2018), aparecido a comienzos del 2018, más de 4.000 millones de personas alrededor del mundo utilizan internet, a lo que se añade que 2/3 de la población mundial cuentan con un teléfono móvil.

En el concreto caso del terrorismo islamista, y en un primer intento para comunicarse, transmitir su ideología y reclutar a posibles adeptos, los grupos yihadistas emigraron de los foros en línea abiertos a aquellos otros a los que se podía acceder únicamente mediante invitación. Sin embargo, esta estrategia resultó insatisfactoria, ya que los foros de acceso por invitación limitaban enormemente el número de potenciales terroristas. Por el contrario, las redes sociales permiten llegar a un público sin restricción alguna. Cualquier persona puede unirse a un grupo mediante un simple clic. Asimismo, la difusión de material islamista radical se ve fácilmente amplificada por medio de la contabilización automática.

Por otra parte, los yihadistas pueden también esconder material potencialmente ilegal en la urdimbre de publicaciones en línea que aparecen en las distintas páginas web y redes sociales.

De este modo, las redes sociales se han ido convirtiendo en un medio muy importante para la captación de miembros y seguidores de la yihad. En estos casos, los jóvenes de ambos sexos de religión musulmana son objeto de un seguimiento especial por parte de grupos terroristas yihadistas con el objetivo de su reclutamiento. De un modo especial, aquellas comunidades virtuales con amplia aceptación en Occidente como Facebook, Twitter, MySpace o Second Life, así como sus equivalentes árabes, están siendo utilizadas cada vez más por los grupos terroristas y sus simpatizantes.

Facebook, lanzado en el 2004, actualmente tiene un estimado de usuarios cercano a los 1.490 millones de personas en todo el mundo, quienes pueden agregar fácilmente a otros usuarios para crear comunidades y compartir contenidos. De esta manera Facebook se convierte en un medio para que los yihadistas encuentren y contacten a sus simpatizantes de forma directa. Para ello, han movilizado a una serie de operativos con el objetivo de identificar a través de las redes sociales a potenciales candidatos que podrían ser receptivos a la ideología islamista. El objetivo es atraerlos para su causa mediante una cuidadosa labor de convencimiento a largo plazo. A través de Facebook y otras redes sociales, los yihadistas que actúan en la red identifican grupos cuyos miembros defienden en ocasiones posiciones antioccidentales y antisemitas, o bien simplemente denuncian la opresión del pueblo musulmán tanto en Occidente como en distintos conflictos que se desarrollan en distintos contextos geográficos.

Tras una conversación inicial inofensiva, los potenciales objetivos son seducidos paulatinamente e invitados exponer sus opiniones. En caso de que el diálogo se prolongue en el tiempo y se haga más intenso, los yihadistas comienzan a abordar temas como el Islam y, sobre todo, el sufrimiento de los musulmanes en el mundo, el cual es probado documentalmente mediante videos. En este estadio de la intercomunicación, el reclutador virtual invita al potencial candidato a trasladar la conversación de la red social en cuestión a un foro yihadista, al que únicamente se puede acceder a través de una clave o de aplicaciones de mensajería instantánea como Messenger o Skype. En este sentido, resulta sumamente interesante el relato expuesto en un libro por la periodista francesa Anna Erelle (pseudónimo), en el cual explica sus contactos a través de las redes sociales —para lo cual se hizo pasar por una islamista conversa— con un conocido yihadista perteneciente a la organización EI (Erelle, 2015). Se destaca, también, la intensa labor proselitista que realizan a través de Facebook las mujeres radicalizadas que se han trasladado al primer frente de batalla. En este caso, su actividad no se limita únicamente a buscar potenciales correligionarias, sino también a ofrecer rutas de acceso a Siria o Irak, o bien a intermediar para la búsqueda de un cónyuge en el Califato.

Por otro lado, la propaganda transmitida vía Facebook por radicales islamistas no se limita únicamente a captar futuros terroristas, sino que va mucho más allá. No es extraño

que los denominados combatientes extranjeros (*foreign fighters*) suban fotos a su perfil de Facebook mostrando imágenes bucólicas y románticas de la vida en el Califato, como aquellas que muestran a familias dando paseos por la naturaleza, a niños acudiendo a una escuela, a médicos atendiendo a pacientes o a mujeres llevando a cabo labores de enseñanza. Toda esta actividad llevada a cabo en Facebook por yihadistas europeos trasladados a la primera línea del frente tiene como objetivo transmitir una visión utópica del Califato, no solo con vistas al reclutamiento de muyahidines o terroristas suicidas, sino también para atraer al mayor número posible de sujetos con el objetivo de que se unan a la incipiente creación de un Estado donde vivir su interpretación del Islam en toda su pureza.

A pesar de lo explicado en los párrafos anteriores, los terroristas son muy conscientes de los riesgos que encierra su presencia en internet. En este sentido, conviene tener en cuenta que resulta ciertamente difícil utilizar redes sociales como Facebook sin que el usuario, al mismo tiempo, exponga a conocimiento público determinada información sobre su persona, lo cual le puede exponer a la correspondiente persecución penal. Por ello, tanto los militantes islamistas como los propagandistas de la yihad intentan en lo posible evitar el uso de las redes sociales. En su lugar, son los seguidores y simpatizantes de las organizaciones terroristas los que, en no pocos casos, hacen un uso asiduo de Facebook (Steinberg, 2012, p. 14).

Twitter, concebido como una plataforma de comunicación y distribución de mensajes cortos (máximo 280 caracteres), creada en el 2006 fundamentalmente para los usuarios de teléfonos móviles de última generación, permite a los yihadistas y a sus simpatizantes distribuir en tiempo real y por todo el mundo las últimas noticias sobre la yihad global. En junio del 2015, Twitter superó en todo el mundo la cifra de 300 millones de usuarios.

Son sobre todo celebridades y personajes mediáticos los que la utilizan para difundir entre sus seguidores sus quehaceres cotidianos y sus pensamientos, no obstante, el contexto terrorista no ha permanecido de espaldas a las ventajas que le puede reportar su uso. EI, por ejemplo, se destaca recurrir al uso de Twitter para la transmisión de sus mensajes. Su extensión ha sido tal que tan solo en el 2014, distintos estudios registraron alrededor de 46.000 cuentas pertenecientes a miembros de esta organización (Ortega, 2015; Ramsauer, 2015, p. 146), si bien la cifra podría ser bastante más alta.

En este sentido, los terroristas han podido comprobar cómo la estructura abierta de Twitter, y muy especialmente el uso de los denominados *hashtags*, les permiten mantener más cuentas abiertas y, además, alcanzar una mayor difusión. Resulta innegable que el uso de *hashtags* es probablemente el modo más efectivo para lograr que un mensaje se convierta en viral y alcanzar con ello su máxima difusión. Según señalan al respecto algunas fuentes, en la actualidad aproximadamente el 80% de la labor comunicativa de EI es transmitida a través Twitter (Tapia, 2016, p. 6). El motivo que lleva a esta decisión es que dicha red social cuenta con una cantidad de restricciones mucho menores que otras. Generalmente, y con el objetivo de asegurarse la centralización de los mensajes, el funcionamiento a través de esta red social se hace mediante la difusión de la información

principal, sobre todo, a través de unas cuentas determinadas y concretas. Es decir, son los denominados líderes espirituales o ciertas cuentas de renombre las que publican el grueso de las informaciones. También hay que mencionar la estrategia seguida por EI de crear un gran número de cuentas en Twitter minutos después de haber cometido un atentado en algún país occidental. A partir de ahí, el 90 % del resto de los mensajes publicados en relación con el acontecimiento se basan en seguidores que repiten, retuitean o marcan como favoritos lo que las reseñadas cuentas han dicho previamente (Tapia, 2016, p. 6)

Respecto a cuál es la utilización exacta que se le da a Twitter por parte del yihadismo militante, se ha podido comprobar que las temáticas son muy diversas, y lo mismo sucede con los propósitos específicos de los mensajes. Con todo, se puede afirmar que una de las temáticas preferidas de los distintos mensajes es la brutalidad. Con ella se pretende transmitir a sus seguidores un sentimiento de superioridad y de victoria. Así, por ejemplo, bajo los hashtags #decapitación y #beheading, se encuentran en Twitter miles de mensajes sobre las acciones que EI ha cometido al respecto. No cabe duda de que los mensajes que más repercusión mediática tienen son los de este tipo. Así, se pueden mencionar casos tristemente célebres como la decapitación del periodista James Foley en el año 2014 o el video *Healing of the Believers' Chests* —publicado a comienzos del 2015—, en el que el piloto jordano Muadh al-Kasasbeh fue quemado vivo. En ambas ocasiones, EI recurrió a Twitter para difundir la información, así como para publicar un video con los hechos; información que todavía resulta accesible en la actualidad.

Puede decirse, por tanto, que uno de los temas empleados por excelencia son los actos brutales, los cuales, en muchas ocasiones, vienen acompañados por un intento de reflejar triunfalismo. Cada vez que organizaciones como EI actúan, Twitter se nutre de información de dichos ataques, convirtiéndose en el vehículo con el que reflejan su supremacía y, al mismo tiempo, transmiten terror e incitan a la violencia entre los usuarios. Un ejemplo de lo explicado lo constituyen los ataques terroristas cometidos en distintos puntos de la ciudad de París el día 13 de noviembre del 2015. Desde el mismo momento en que los terroristas comenzaron a actuar, EI generó al menos cuatro hashtags (#Paris_On_Fire, #FranceUnderAttack, entre otros), para conversar con la audiencia sobre los atentados y, paralelamente, dirigir las conversaciones (Lesaca, 2017, pp. 55-56).

Por otro lado, innumerables *tweets* y mensajes en redes sociales publicados por decenas de extremistas que, procedentes de países como el Reino Unido, ya han llegado a Oriente Medio, han mostrado la realidad escalofriante de la ya denominada Jihad Cool con mayúsculas. Jóvenes yihadistas británicos, como es el caso de Abu Hussain Al Britani (más conocido como “Jihadi John”, fallecido en noviembre del 2015), utilizan las redes sociales para promover su mensaje, jactándose en la red de sus actividades brutales con la esperanza de animar a otros a viajar a Irak y Siria, del mismo modo que los militantes esperan atraer a la jihad tanto a ciudadanos estadounidenses como extranjeros de todas las nacionalidades, transmitiendo para ello un mensaje bucólico y atrayente sobre la (presun-

ta) idílica vida que les espera en el Califato a aquellos/as que decidan hacer la emigración (*bijra*) (Collins, 2014).

Además de la transmisión de todos estos mensajes, los terroristas han creado estrategias destacadas que coinciden generalmente con determinadas fechas en el calendario. Entre estas, se destaca el lanzamiento de *hashtags* concretos con finalidades eminentemente propagandísticas. A modo de ejemplo se puede mencionar la campaña creada el 20 de junio de 2014 con denominaciones como “#AllEyesOnISIS” (“todos los ojos sobre ISIS”) y “#mil millones de musulmanes en apoyo del Estado Islámico de Iraq y Shaam”. En días previos a esta fecha, los terroristas trataron de movilizar a las redes sociales y convencer a sus simpatizantes para que ese día subieran imágenes de apoyo a su grupo y las etiquetaran bajo ese *hashtag*. El resultado fue impactante y un rotundo éxito, ya que en países muy diversos —que no se circunscriben únicamente a aquellos del mundo islámico— surgieron imágenes de miles de internautas en las que aparecían con banderas de la organización (Larráoz, 2014, p. 14). Por otro lado, también es muy común en el universo yihadista virtual utilizar de forma ilícita lo que se conoce como *trending topics*, es decir, temáticas populares en tiempo real que son consultadas por miles de usuarios de Twitter repartidos por todo el globo. Así, por ejemplo, durante la celebración del Mundial de Fútbol de Brasil 2014, muchos tuiteos yihadistas iban acompañados por el hashtag #WorldCup o #brazil.

A partir de los datos presentados en los párrafos anteriores, la compañía dueña de la plataforma, radicada en San Francisco, decidió en septiembre de 2014 tomar medidas para evitar que Twitter se convirtiese en una lanzadera de contenidos terroristas. Según fuentes oficiales, más de 90.000 cuentas han sido eliminadas desde entonces, aunque los terroristas y sus simpatizantes han logrado adaptarse a la nueva realidad (Ortiz, 2015, p. 86). Efectivamente, la estrategia tanto de EI como de sus simpatizantes en Twitter ha cambiado: en lugar de “estrellas mediáticas” y usuarios de cuentas que ensalzan abiertamente la violencia terrorista, le han apostado a ser difusores casi invisibles de odio y captadores de nuevos reclutas. Este nuevo planteamiento de la actividad yihadista en línea se ha dispuesto para burlar los cada vez más exhaustivos controles de las redes sociales en general y de Twitter en particular. Lógicamente, una cuenta yihadista con gran cantidad de mensajes enviados, retuitetados y con numerosos seguidores llama mucho más la atención que otras que pasan casi inadvertidas.

Hay que decir, por último, que la presencia de contenidos yihadistas en español dentro de las redes sociales ha sido muy escasa, por las mismas causas que explican la escasa presencia de contenidos en este idioma en foros y páginas estáticas. Así, han sido muy pocos los perfiles de Facebook, Twitter o YouTube que han hecho una apología explícita del terrorismo yihadista empleando el español. Con todo, en las últimas fechas han aumentado los mensajes y amenazas que yihadistas españoles están lanzando a través de las redes sociales. En la mayoría de los casos se trata de jóvenes radicalizados, que no se limitan a expresar ideas o convicciones en sus contextos sociales más o menos inmediatos

o en las redes sociales, sino que han llegado a implicarse en grupos terroristas que operan en Siria o en Irak. Un ejemplo paradigmático es el de Abu Tasmin el Magrebi (Mohamed Hamdouch), el cual se hacía llamar en las redes sociales Kokito Castillejos, y que nació en dicha localidad marroquí en julio de 1986. Como la mayoría de los radicales del área delimitada por Tetuán, Tánger, Castillejos y Ceuta, Kokito tuvo contactos con Mustafá Maya Amaya, un individuo de 51 años que fue detenido en Melilla en marzo de 2014, y que, según parece, ha sido decisivo en los procesos de radicalización de jóvenes tanto magrebíes como españoles. Abu Tasmin fue, en su momento, muy conocido por haberse fotografiado, sonriendo, con las cabezas de cinco personas que habían sido previamente degolladas. Lo más inquietante es que gracias a su actividad en las redes sociales fue seguido por decenas de jóvenes residentes en España, algunos de los cuales se han trasladado a zonas de combate. Conviene señalar que este yihadista murió en Alepo en noviembre del año 2015, mientras combatía para la organización terrorista EI.

Plataformas audiovisuales (YouTube)

En general, los videos vienen jugando desde siempre un papel de fundamental importancia en el contexto de la propaganda islamista a través de internet. Estos han ganado en protagonismo a lo largo de los últimos años ya que, como consecuencia de la expansión de internet y de la implantación de las redes sociales, resultan más accesibles que en épocas anteriores. Además, debido fundamentalmente a las innovaciones técnicas, así como a las mayores capacidades de sus creadores en el ámbito de la tecnología, estos videos han alcanzado un impactante nivel de profesionalismo y calidad. También hay que tener en cuenta el cambio en las costumbres de los usuarios de internet: actualmente, muchos de ellos prefieren los videos a los textos, ya que los contenidos susceptibles de ser visualizados son más fáciles de aprehender. En el contexto descrito hay que destacar también el hecho de que los contenidos que aparecen en los videos de naturaleza yihadista son presentados de forma elocuente, espectacular, mostrando un nivel de credibilidad y fascinación asombrosos.

Especialmente entre los musulmanes que habitan en la diáspora occidental, los videos tienen un mayor grado de popularidad que los textos ideológicos del movimiento islamista radical. Ello es debido por un lado al nivel de formación religiosa e ideológica entre los islamistas de Occidente, el cual resulta inferior al de sus correligionarios que habitan en países árabes. Por otro lado, hay que tener en cuenta la circunstancia de que el material escrito suele estar redactado en árabe, una lengua que constituye un obstáculo idiomático para la mayoría de los jóvenes musulmanes que viven en Occidente. Por ello, la única forma de *calar* en la diáspora musulmana es mediante la elaboración de material audiovisual en las distintas lenguas que se hablan en el mundo occidental.

En efecto, la sociedad occidental se ha visto sin duda sorprendida por la maquinaria mediática que EI ha venido utilizando en las últimas fechas con una excepcional eficacia.

La calidad de las comunicaciones audiovisuales de esta organización terrorista no tiene parangón en la historia reciente. Los videos que mostraban a Osama bin Laden en cuevas afganas, grabados con medios rudimentarios, resultan ahora mismo algo prehistórico si se comparan con las producciones filmadas por EI con las técnicas más vanguardistas. Los expertos en tecnología audiovisual que militan o simpatizan con EI trabajan de manera sistemática para conseguir que sus videos alcancen aquel estándar visual y de impacto al que está acostumbrada la audiencia residente en Occidente.

Tal como señala Ortiz (2014, p. 38), la eficacia comunicativa de EI denota un conocimiento absoluto de las reglas de juego de la sociedad occidental globalizada, donde los contenidos violentos que aparecen en internet presentan una casi simetría con las películas, series o incluso videojuegos que son consumidos por gran parte de la juventud, lo cual da lugar a una *viralización* casi automática y a la deshumanización de las víctimas.

YouTube es un portal de internet especializado en la carga, descarga y visionado de videos que pueden ser compartidos. Esta plataforma fue creada en el 2005 en San Mateo (California), pero su activación en línea se inició en la primavera del 2006. YouTube dice ser la “comunidad de video en línea más grande e importante del mundo”. Cualquier persona puede visionar videos allí alojados, pero únicamente aquellos usuarios registrados pueden subir videos. Para aumentar el tráfico y el número de visitas, los titulares de cuentas en YouTube suelen colocar enlaces a los videos que han subido en una página web personal, en su perfil de Facebook o en otras redes sociales. Este mismo portal se ha convertido en el vehículo elegido por los yihadistas por la sencilla razón de que el formato audiovisual en varios idiomas se ajusta plenamente su propósito.

Por su naturaleza, YouTube facilita enormemente el hallazgo y la difusión de videos de contenido violento y radical. Prácticamente todos los videos yihadistas producidos en el mundo a lo largo de los últimos años pueden ser visionados en esta plataforma, desde sermones impartidos por clérigos radicales hasta escenas de combate, atentados terroristas suicidas o ejecuciones de rehenes occidentales en manos de EI. Puesto que cualquiera se puede suscribir a un perfil de YouTube, los simpatizantes de la yihad pueden ser informados de forma casi inmediata de la publicación de un determinado video. Además, YouTube garantiza entre sus usuarios un cierto anonimato ya que, al contrario de Facebook, mantiene ocultos a los abonados a un determinado perfil. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la Primera Enmienda a la Constitución norteamericana, la cual garantiza la libertad de opinión y de prensa, hace prácticamente imposible obligar a los servidores norteamericanos a eliminar de la red la totalidad de las páginas con contenidos yihadistas. Ello tiene consecuencias para la lucha contra la propaganda yihadista no solo en EE. UU., sino en los países europeos (El Difraoui, 2012b, p. 70).

La finalidad de prácticamente todos los videos yihadistas que pueden hoy en día encontrarse en internet es la propaganda, la cual encuentra eco en distintos grupos de destinatarios. De acuerdo con Frohneberg & Steinberg (2012, p. 82), pueden distinguirse —desde un punto de vista material— cinco categorías distintas de videos yihadistas: 1)

videos intimidatorios y amenazantes, 2) videos de ensalzamiento del martirio, 3) videos de contenido estratégico e ideológico, 4) videos de operaciones terroristas y 5) videos de instrucción. Ahora bien, hay que decir que una división clara de estas cinco categorías no es posible en la mayoría de los casos, ya que muchos de los videos yihadistas publicados en internet presentan características combinadas de las cinco categorías.

1) Dentro de esta primera categoría, están aquellos en los que se presentan distintas acciones como la toma de rehenes, ejecuciones o decapitaciones. El más famoso a la fecha es el que muestra la ejecución del empresario estadounidense Nicholas Berg por parte de Abu Musab al-Zarkawi en mayo del año 2004. En las últimas fechas han aparecido otros videos donde se reproducen ejecuciones de estas características, como la decapitación del periodista norteamericano James Foley en verano del 2014 por parte del terrorista de EI conocido como “Jihadi John”. También se destaca el video de la ejecución del piloto jordano Muaz al Kasasbeh, el 3 de enero de, 2015, por parte de terroristas de EI.

También pueden encontrarse numerosos videos en los cuales distintas organizaciones terroristas del espectro yihadista amenazan a Estados y sus ciudadanos con atentados terroristas en caso de que sus respectivos gobiernos no cambien su política exterior, retirando por ejemplo sus tropas de países musulmanes como Irak, Siria o Afganistán. Con respecto a esta primera categoría, en las últimas fechas puede observarse cómo la realización de los videos por parte de EI es extraordinaria, lo cual confirma que su nivel de producción audiovisual es de una calidad altísima, como así lo demuestran los planos, la música o la infografía; empleando además un lenguaje visual sumamente atractivo, el cual tiene dos objetivos prioritarios: a) infundir terror en la sociedad occidental y b) captar adeptos entre la diáspora musulmana.

2) En esta segunda categoría de videos se celebra la muerte de yihadistas en operaciones terroristas suicidas, ensalzándolos como verdaderos musulmanes y mártires en el nombre de Alá. Con respecto a esta categoría, el material visual consta de fotos o incluso videos cortos de los terroristas cuando todavía estaban con vida. En el caso de operaciones suicidas, se muestran imágenes de la preparación de la acción, así como —cuando ello es posible— tomas del cadáver del suicida. En este tipo de videos, los terroristas suicidas se muestran siempre a la cámara con la misma actitud: sonrientes, aseados y con el dedo índice hacia arriba en señal de su unidad con Alá. Los videos del ensalzamiento del martirio glorifican la guerra santa y contribuyen al reclutamiento de nuevos operativos, ya que, en no pocos casos, los autores de estos videos hacen un llamamiento a los potenciales internautas para que sigan el ejemplo del protagonista del atentado suicida.

3) Un aspecto esencial de los videos que pertenecen a esta tercera categoría se encuentra en la transmisión y, sobre todo, legitimación tanto de la ideología yihadista como de su inherente estrategia terrorista. Es evidente que la propaganda visual juega un papel muy importante en los procesos de radicalización. En ocasiones, ese proceso de acercamiento a los potenciales yihadistas comienza con la “indignación moral” de la mayoría de los jóvenes musulmanes, la cual es provocada a través de las —deformadas— infor-

maciones sobre las guerras que se están librando en países de mayoría musulmana. En este sentido, los distintos videos insertan ese conjunto de *injusticias* en un determinado modelo de explicación, dando respuestas a las preguntas en torno a por qué sucede algo así y cómo se puede actuar en contra de esa situación. Pues bien, en la mayoría de los casos, la respuesta que aparece señala que todo ello hay que contextualizarlo en una guerra que se está librando a nivel mundial contra el Islam, de tal forma que la única opción que le queda al pueblo musulmán es llevar a cabo la lucha armada (*yihad*). En este sentido, mientras que los videos con contenido meramente documental despliegan su efecto entre la comunidad yihadista, aquellos videos en los que aparecen figuras destacadas de organizaciones terroristas, dando directrices ideológicas y estratégicas, se dirigen tanto a sus propios seguidores como al enemigo.

4) En esta categoría se muestran operaciones yihadistas concretas en distintos escenarios, para demostrar su potencial destructivo con miras a intimidar al enemigo y —lo que para ellos es más importante— justificar a sus financiadores la actividad que desarrollan. Hay que decir que los videos de operaciones terroristas constituyen sobradamente los que más aparece en internet. Dentro de esta variante hay que incluir también aquellos videos de formación táctica donde se muestra a individuos y grupos participando en cursos de entrenamiento terrorista o de formación de combate. La finalidad de esta categoría es la propaganda para la lucha armada, sugiriendo a los potenciales reclutas que en las zonas de combate les espera una gran aventura que no pueden dejar escapar. Con respecto a esta categoría, el 17 de mayo de 2014, la productora Al Furqan —asociada a EI— publicó un gran documental de una hora de duración con el título “El sonido de las espadas” (*Clanging of the swords*). En él se muestran las victorias militares y las conquistas que los terroristas habían logrado desde el año 2013 en Irak y en Siria. El objetivo del documental era sin duda mostrar al mundo entero la potencia militar de EI y, sobre todo, su determinación para lograr la victoria.

5) Por último, están los videos que tienen como objetivo transmitir los conocimientos técnicos necesarios para construir artefactos explosivos, dispositivos incendiarios y la utilización de armamento. Hasta el momento, esta categoría supone solo un pequeño porcentaje de los videos yihadistas publicados en internet. Al respecto hay que decir que, hasta la fecha, no se ha logrado llevar a cabo un atentado terrorista de gran magnitud en el que sus autores hayan adquirido el *know how* exclusivamente a través de internet. El único caso conocido hasta ahora en el que los terroristas pudieron haber adquirido los conocimientos necesarios de este modo está constituido por el ataque llevado a cabo el 15 de abril del 2013, durante la maratón de Boston, por parte de los hermanos Tamerlan y Dzhokhar Tsarnaev. Por consiguiente, la idea de que internet podría haberse convertido en una especie de universidad a distancia virtual no puede ser sostenida (Cano, 2013).

Un estudio llevado a cabo por Conway & McInerney (2008, pp. 112-114) analizó a los usuarios y simpatizantes de videos de contenido yihadista publicados en YouTube, centrándose en aquellos que realizaban comentarios al material audiovisual de promoción del

martirio en la guerra de Irak. Los hallazgos de estos autores señalan que la mayoría de estos internautas tenían menos de 35 años y residían fuera de la región de Oriente Medio y el Norte de África, con el mayor porcentaje de partidarios ubicados en los Estados Unidos. Dicho análisis llevó a los investigadores a la siguiente conclusión: “Lo que es evidente es que el contenido yihadista se está extendiendo mucho más allá de los sitios web y foros yihadistas tradicionales, extendiéndose particularmente a las plataformas de video y a las redes sociales —dos características de la web 2.0— y, por lo tanto, extendiendo su radio de acción más allá de lo que podría concebirse como su base de apoyo central en la región de Oriente Medio y el Norte de África, abarcando también ahora a las poblaciones de la diáspora, conversos y simpatizantes políticos”.

En este sentido, en los últimos años se han podido identificar dos concretos actos vinculados al terrorismo yihadista que involucraban a una misma red de contactos de YouTube y Facebook, incluyendo también los canales virtuales del grupo extremista Al-Muhajiroun presente en YouTube. Se trata, en ambos casos, de sujetos para quienes, al parecer, YouTube jugó un papel importante tanto en su proceso de radicalización como en su paso a la acción (Klausen, Tschaen Barbieri, Reichlin-Melnick, & Zelin, 2012, pp. 40-41).

Taimour Abdulwahab al-Abdaly, un ciudadano sueco de origen iraquí, de 30 años, que desde el 2001 vivía en la localidad británica de Luton, hizo estallar dos bombas en el centro de Estocolmo el 11 de diciembre del 2010. En el primer caso se trató de un coche bomba, mientras que el segundo era un artefacto explosivo que estalló en su mochila, posiblemente antes de tiempo. Al-Abdaly murió, mientras que dos transeúntes resultaron heridos. Al-Abdaly era un ávido usuario de Facebook y YouTube. Al parecer envió un correo electrónico a la prensa poco antes de cometer el atentado suicida, a la vez que pudo haber intentado grabar y difundir su “operación de martirio”. El perfil de Al-Abdaly en Facebook, así como sus hábitos de visualización de videos en la plataforma YouTube, pudieron ser recuperados por las fuerzas de seguridad. Uno de los videos que Al-Abdaly visionó poco antes de su acto violento fue subido a Videomuslim, una cuenta de usuario asociada a Sharia4Holland, uno de los principales canales de Al-Muhajiroun presentes en YouTube.

El 2 de marzo de 2011, Arid Uka, un joven de 21 años de edad albano-kosovar, residente en Alemania, disparó mortalmente a dos soldados estadounidenses que estaban subiendo a un autobús en el aeropuerto de Frankfurt. Uka dijo a la policía que había sido motivado por un video publicado en internet —y que resultó ser falso— en el que aparecían soldados estadounidenses violando a una mujer musulmana. Dicho video había sido subido al menos en dos canales Sharia 4 en YouTube días antes de los disparos. Uka no era un miembro conocido de redes yihadistas locales y tampoco estaba bajo vigilancia antes de su ataque, a pesar de que existían indicios que apuntaban a que este joven se encontraba profundamente inmerso en las redes sociales yihadistas activas de internet. Así, Uka era “amigo” en Facebook de varios yihadistas conocidos, los cuales también estaban en la lista

de amigos del terrorista de Estocolmo, Taimour Abdulwahab al-Abdaly (Schahbasi, 2009, pp. 26-27).

La yihad a través de la música: *nasheeds*

No cabe duda de que internet ha jugado un papel fundamental en la creación de una propia “identidad o subcultura yihadista”, de la que participa un sector de la juventud musulmana. Los videos de rap, las nociones románticas de la revolución y la aventura, así como los relatos de primera mano sobre la “diversión” de la guerra de guerrillas o la vida bucólica en el Califato son las últimas tácticas usadas por los reclutadores islamistas como parte de lo que los expertos han identificado como una “intensificación de la radicalización”, tanto en los Estados Unidos como en otros países. Para no pocos autores, la (sub) cultura yihadista, concebida como una herramienta para crear una identidad común y movilizar nuevos reclutas con independencia del país de procedencia, es probablemente tan importante como su propia ideología (Sageman, 2004, p. 178).

Pues bien, en el contexto descrito hay que destacar también la difusión de cantos religiosos a capela, denominados *nasheeds*, lo cual, como se verá a continuación, ha logrado incluso establecer un estilo de música propio en el contexto yihadista.

Puede afirmarse que las *nasheeds* son al menos tan relevantes para el movimiento yihadista global como la propia poesía en el mundo islámico. Esta tesis es subrayada incluso por el propio Anwar al-Awlaki en una interesante declaración efectuada en su manual *44 Ways to Support Jihad*, en los siguientes términos (Al Awlaki, s. f., p. 19):

In the time of Rasulullah (saaws) he had poets who would use their poetry to inspire the Muslims and demoralize the disbelievers. Today nasheeds can play that role. A good nasheed can spread so widely it can reach to an audience that you could not reach through a lecture or a book. Nasheeds are especially inspiring to the youth, who are the foundation of Jihad in every age and time. Nasheeds are an important element in creating a “Jihad culture”.

Estos himnos (*nasheeds*) no solo se utilizan ampliamente en los videos de propaganda, sino que también están siendo distribuidos a través de internet en forma de archivos de audio, algo que también está ocurriendo con sus textos. Así, en los foros yihadistas más populares pueden encontrarse secciones especiales conocidas como *Sautiyat* (audios), en las cuales uno tiene a disposición todo tipo de *nasheeds* de inspiración yihadista, incluso colecciones completas de *nasheeds*, con más de 400 títulos.

En la mayoría de los casos, las *nasheeds* de naturaleza militante han sido compuestas en árabe, aunque pueden encontrarse en otros idiomas propios de mayoría musulmana, como el pashtu, el urdu, el turco y el bosnio. Con todo, hoy en día también hay canciones en inglés, alemán y holandés.

De acuerdo con Said (2012, p. 871), existe un total de cuatro categorías de *nasheeds*: 1) himnos de batalla, 2) himnos de glorificación del martirio, 3) himnos de luto y 4) him-

nos de alabanzas. La mayoría de *nasheeds* que aparecen en el contexto yihadista a través de internet encajan en una de las cuatro categorías citadas. Sin embargo, conviene señalar que existen también *nasheeds* que no pueden ser subsumidas en una categoría especial debido a que aparecen con poca frecuencia en las recientes publicaciones yihadistas. Se trata en este caso de aquellas relacionadas, por ejemplo, con la situación en Palestina, los presos o cuestiones políticas actuales.

La gran mayoría de *nasheeds* pueden ser subsumidas en la primera categoría (“himnos de batalla”). Estas canciones tienen un compromiso de lucha y se utilizan para estimular y movilizar a los combatientes muyahidines y sus partidarios. Por consiguiente, cuando se tienen en cuenta diversos estudios que evalúan otras publicaciones yihadistas, como los videos, no resulta sorprendente descubrir que la mayoría de *nasheeds* pertenecen a esta primera categoría. En este sentido, Finsnes (2010, p. 19) ha llegado a la conclusión de que el 48% de todas las producciones audiovisuales de naturaleza yihadista tienen como objetivo prioritario documentar batallas y ataques. De este modo, puede afirmarse que esta impresión resulta también válida en relación a las *nasheeds* yihadistas.

La segunda categoría de *nasheeds*, que hace referencia al martirio (*shuhada*), por regla general, no está dedicada a una sola persona en concreto, sino a la idea misma del martirio. La mayoría de *nasheeds* ubicables dentro de esta categoría describen la alegría de alcanzar el paraíso que le supone al *shahid*, alentando al mismo tiempo al resto a no darse por vencidos y a seguir luchando contra los infieles.

La tercera categoría es la que hace referencia a los himnos de luto. La denominada *marthiya* es un tipo muy antiguo de poesía en el mundo árabe que era compuesta para los amigos y familiares, personas de gran integridad y, a veces, incluso para animales u objetos inanimados. A diferencia de las *nasheeds* relativas al martirio, los cantos de duelo se dedican a una persona en especial.

La cuarta y última categoría principal de *nasheeds* está compuesta por los denominados himnos de alabanza. Estos poemas, que alaban a una persona de alta consideración, son una modalidad de poesía muy conocida en el mundo árabe denominada *madih* (elogio). La persona que es objeto de alabanza (*mamduh*) se describe de una forma estereotipada, cuyos atributos más comunes son la generosidad, la valentía y el honor. Estos elementos pueden encontrarse en casi todos los himnos de alabanza que se publican en el contexto yihadista, en los que el *mamduh* llega a ser equiparado a líderes importantes del universo yihadista, como Abu Musab al-Zarqawi, Abu Bakr al Baghdadi o el mismísimo Osama bin Laden.

Tal y como se ha señalado anteriormente, las *nasheeds* vienen siendo últimamente un instrumento eficaz para la propaganda yihadista. Con ellas se pretende no solo apelar a la razón a través de sus textos, sino también y fundamentalmente *remover* las almas (Said, 2012, p. 875). Estos himnos religiosos están actualmente muy extendidos a lo largo y ancho de internet, por lo que no solo los miembros y partidarios del movimiento yihadista, sino también sus simpatizantes, pueden fácilmente entrar en contacto con este material,

ya que se pueden encontrar muchas *nasheeds* radicales no solo de forma exclusiva en las páginas web de naturaleza yihadista, sino también en sitios de internet que dicen proporcionar “*nasheeds* islámicas”. Además, estos cantos se utilizan como un lazo de unión entre la escena yihadista global, de forma que resultan tremadamente útiles en la creación de una narrativa común y en la construcción y consolidación de una mentalidad colectiva.

La denominada *darknet*

Al hablar de las actividades islamistas radicales en la denominada red oscura o *darknet*, resulta necesario hacer una precisión terminológica entre dos conceptos que, en no pocas ocasiones, son utilizados indistintamente, aunque de forma equivocada ya que hacen referencia a dos realidades muy distintas. Así, por un lado, conviene hacer mención de lo que se conoce como red profunda, red oculta o *deep web*. En este caso se trata de aquella parte de internet que no se encuentra en la superficie o, lo que es lo mismo, a la que no se puede acceder de forma pública o a través de los motores de búsqueda estándar. Según los expertos informáticos, en la red profunda se alojan todas aquellas páginas que no son registradas por los buscadores más conocidos como Google o Bing. Para ello, uno debe imaginarse internet como una especie de iceberg: Google busca únicamente en la superficie o en la capa inmediatamente inferior, quedando una amplísima masa extramuros de las actividades cotidianas en internet por parte de la mayoría de los usuarios (Flade, Fuest, Nagel, & Schlesier, 2014). Hay que decir que la *deep web* no es sinónimo, en principio, de delito. De hecho, esta red profunda se pensó para aquellos internautas que preferían una navegación privada y, sobre todo, anónima, por cuestiones de persecución política o simple seguridad.

Por el contrario, la red oscura es aquella parte de la red profunda que reúne dos características específicas: a) solo se puede acceder mediante aplicaciones o programas informáticos específicos y b) sus contenidos reúnen en la mayoría de los casos un carácter delictivo.

De este modo, la red oscura o *darknet* constituye fundamentalmente un lugar de retiro para todos aquellos que, a la hora de navegar por internet, necesitan hacerlo de forma anónima; y ello, en la mayoría de los casos, para enmascarar actividades prohibidas. En la red oscura actúan tanto sicarios como traficantes de drogas, de armas, pedófilos y terroristas; pero también, en ocasiones, disidentes políticos que temen por su vida. Es allí donde únicamente pueden sentirse seguros.

Como se ha señalado anteriormente, las páginas web que se ubican en la red oscura únicamente pueden ser visualizadas tras haber descargado en el ordenador personal el correspondiente programa. El más conocido es la red TOR (*The Onion Router*). El navegador TOR está compuesto por una red de más de 5.000 servidores, los cuales se denominan “nodos”. La red TOR nació por la necesidad que ciertas personas tenían de que su contenido no fuera público ni fácilmente accesible. Si bien al principio tenía restringido su acceso por invitación, poco a poco se ha ido abriendo a cualquier persona que quiera entrar.

En la red TOR, la transmisión de datos se lleva a cabo desde un punto nodal a otro. Así, el ordenador de un usuario de TOR crea una conexión codificada hacia el primer servidor. Este reenvía a su vez los datos hacia un segundo punto nodal; el segundo a un tercero. Ahora bien: los distintos servidores únicamente conocen el punto nodal anterior y el inmediatamente posterior. Cuando un paquete de datos ha transitado por tres puntos nodales ya no puede rastrearse la dirección IP del emisor de ese paquete —a saber, el usuario—, ya que esta recibe una especie de manto invisible. Ello es debido a que los paquetes de datos son recodificados nuevamente entre punto nodal y punto nodal, recibiendo así una nueva dirección. A esto se le llama “enrutamiento de la cebolla”, porque va por capas, y de ahí el logo del servidor TOR. De esta forma, se hace imposible conocer quién está detrás de cada conexión en la web oscura, por lo que esta se convierte en un espacio perfecto para actividades delictivas como el terrorismo.

Tal y como se ha señalado anteriormente, para poder navegar por la red TOR, el usuario únicamente debe descargarse en su ordenador un pequeño programa que se denomina “TOR Browser Bundle” (www.torproject.org). Una vez descargado y puesto en marcha, el usuario puede navegar de forma anónima y visitar la cara oculta de internet.

Uno de los problemas principales que plantea la existencia de la web oscura es que la jurisdicción, que está basada en el territorio sobre el cual tiene competencia, no puede actuar en ella. Como no se sabe dónde eventualmente se cometen los delitos ni quién los comete, resulta prácticamente imposible actuar contra ellos.

Por otro lado, uno de los servicios más atractivos que proporciona la web oscura es el de la privacidad en las conversaciones. Por medio de un sistema conocido como PGP (acrónimo de *Pretty Good Privacy*), un usuario puede comunicarse con otra persona únicamente recibiendo un código otorgado por esta. Evidentemente, este sistema abre la puerta a la coordinación de organizaciones de forma confidencial a nivel mundial. En el sentido apuntado, las fuerzas de seguridad españolas encargadas de observar la presencia terrorista en internet tienen constancia de que en la web oscura están presentes organizaciones terroristas que la utilizan no solo para comunicarse entre ellos, sino también como medio para realizar tareas de propaganda y captación (Muñoz, 2015).

Dentro del contexto del terrorismo islamista, la web oscura es utilizada con asiduidad para transmitir mensajes encriptados u ocultos. Así, detrás de una imagen o texto de carácter inocuo, y una vez se han introducido una serie de palabras clave, aparecen contenidos de carácter neutro. Únicamente tras haber introducido varias contraseñas adicionales aparecen visibles los mensajes yihadistas. En este sentido, hay que citar el caso de Rajib Karim, un joven nacido en Bangladesh pero residente en el Reino Unido, experto en informática y trabajador de la compañía aérea British Airways, quien fue condenado en el 2011 por planear una serie de atentados terroristas mediante aviones comerciales. Al parecer, Karim utilizó la web oscura para contactar y conversar con el mismísimo Anwar al-Awlaki (Dodd, 2011; El Difraoui, 2012a, p. 14).

En definitiva, a pesar del uso de los foros públicos o semipúblicos, los extremistas todavía necesitan lugares seguros y privados para reunirse, comunicarse y coordinar sus actividades. En este sentido, resulta indudable que en las últimas fechas ha aumentado considerablemente el uso de la web profunda y, sobre todo, de la red oscura por parte de círculos yihadistas, siendo esta una de las áreas más difíciles de controlar. Por ello, es más que probable que ya se haya producido un aumento en el uso de la arquitectura oculta de internet, con repositorios de archivos, sitios de almacenamiento o páginas de comunicación anónima entre usuarios, para con ello proteger las conversaciones de la infiltración y la vigilancia.

Conclusiones

En los últimos años, el terrorismo de base yihadista ha sido un entusiasta del medio de comunicación global por antonomasia: internet. Ello, desde luego, no deja de ser sorprendente si se tiene en cuenta que organizaciones terroristas como EI se caracterizan precisamente por luchar contra todo aquello que representa la modernidad o la civilización occidental.

De entre todas las utilidades que presenta internet a nivel de propaganda y comunicación, han sido sin duda las redes sociales y las plataformas audiovisuales las que están siendo más utilizadas por el terrorismo global. En este sentido, resulta destacable el protagonismo que han adquirido los seguidores y simpatizantes del islamismo radical, ya que son ellos precisamente los que, en mayor número, están llevando a cabo las tareas de captación, adoctrinamiento, adiestramiento e incluso reclutamiento. Por otro lado, los combatientes extranjeros situados en el primer frente de batalla están utilizando internet no solo para llevar a cabo labores de captación, sino también para transmitir una imagen bucólica, romántica y atrayente de la vida en el Califato; imagen que en modo alguno se corresponde con la realidad.

Por otro lado, internet le ha servido al terrorismo islamista para crear una comunidad virtual que se extiende por todo el globo, más allá de nacionalidades, etnias o de la situación socioeconómica de sus miembros. Especialmente la propaganda audiovisual transmitida de forma magistral por EI ha conseguido crear una subcultura virtual entre miembros, seguidores y simpatizantes, donde se comparten agravios, emociones, anhelos y objetivos. Esta subcultura yihadista, nacida a través de los nuevos medios de comunicación en el ciberespacio, presenta en principio unas características semejantes a otras subculturas presentes en Occidente desde la década de los setenta, aunque tiene un potencial destructivo preocupante si se tienen en cuenta los últimos atentados terroristas cometidos en Europa en fechas recientes.

Cuando se acaban de cumplir cinco años desde que Abu Bakr al Bagdadi proclamase a principios de julio del 2014 desde la Gran Mezquita de Mosul la creación del Califato islámico, la estrepitosa derrota de EI parece estar próxima a consumarse. Sin embargo,

su ideología de terror, diseminada en los últimos años por todo el globo gracias a una magistral campaña de propaganda difundida a través de internet, ha permitido que, al día de hoy, sean todavía miles los sujetos que siguen seducidos por la idea de participar en la construcción de un califato universal, para lo cual están dispuestos a utilizar la violencia más extrema en forma de atentados terroristas.

Al contrario de lo que sucedía en el caso de la organización Al Qaeda, el nuevo terrorismo yihadista personificado en EI no necesita la presencia de un líder destacado encargado de amenazar a Occidente, adoctrinar a sus adeptos y dirigir las operaciones. Más bien al contrario, los nuevos “soldados universales de Allah” no necesitan ninguna figura a la que seguir, sino que son ellos mismos los que, a través de internet y las redes sociales, consiguen que el mensaje y la propaganda alcance unos niveles de audiencia nunca antes imaginados. Por ello, hay que afirmar que la eventual desaparición de EI no va a afectar su ideología.

El peligro inherente al binomio “internet y propaganda yihadista” supone, sin duda, un reto muy serio para los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad de los países occidentales. Tal y como se señaló en un trabajo anterior (Cano, 2019), el afrontar el problema de la violencia terrorista a través de internet implica aplicar dos enfoques antagónicos, aunque necesarios y, en cierta medida, complementarios. Así, en primer lugar, se requiere implementar una estrategia de signo represivo, cuyo objetivo debe ser no solo observar de forma intensiva la presencia yihadista en internet, sino también cerrar aquellas páginas web de contenido radical e identificar y anular a aquellos yihadistas más activos. Pero, por otro lado, también se necesita una estrategia de carácter profiláctico, dirigida a adoptar medidas más amplias, como la utilización de las denominadas “contranarrativas”, o bien, los programas de prevención de la radicalización. Estos últimos son los que, bien planteados e implementados, pueden lograr inhibir y contrarrestar procesos de radicalización o socialización en una violencia para la que sus promotores aducen supuestas justificaciones basadas en una lectura rigorista, intemporal y, sobre todo, irracional de los textos coránicos y de otras fuentes tradicionales del credo mahometano.

Declaración de divulgación

El autor declara que no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con el artículo. Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Criminología, evidencias empíricas y política criminal. Sobre la incorporación de datos científicos para la toma de decisiones en relación con la criminalización de conductas”. Agencia Estatal de Investigación (AEI) / Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Unión Europea (Ref. DER2017-86204-R). Investigador principal: Fernando Miró Llinares.

Financiamiento

El proyecto de investigación arriba mencionado, del que se deriva este artículo, fue financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) / Ministerio de Ciencia, Innovación

y Universidades y la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional —Feder— (Ref. DER2017-86204-R).

Sobre el autor

Miguel Ángel Cano Paños es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona (España) en el año 1994. Diplomado Superior en Criminología por la Universidad de Barcelona (España) en el año 1996. LL. M. por la Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Alemania) en el año 1998. Doctor en Derecho por la Universidad de Potsdam (Alemania) en el año 2003. Doctor en Criminología por la Universidad de Murcia (España) en el año 2015.

<https://orcid.org/0000-0001-5426-7227> - Contacto: macano@ugr.es

Referencias

- Al Awlaki, A. (s. f.). *44 Ways to Support Jihad*. Victorious Media. Recuperado de <http://bit.ly/2ZpxCtG>
- Cano Paños, M. (2013). El atentado de Boston. ¿Un cambio de paradigma en el contexto del terrorismo yihadista global? *El Criminalista Digital. Papeles de Criminología*, 1, 1-4.
- Cano Paños, M. A. (2019). La expansión, intensificación y seducción del terrorismo islamista a través de internet: análisis criminológico. *Revista Científica General José María Córdova*, 17(26), 271-287. <https://doi.org/10.21830/19006586.431>
- Ceberio, M., & Simón, F. (2012). Merah es uno solo, pero es un león que ha resistido más de 30 horas. *El País*. Recuperado de https://politica.elpais.com/politica/2012/03/27/actualidad/1332882355_963826.html.
- Collins, L. (2014). "Jihad Cool": The young Americans lured to fight for ISIS militants with rap videos, adventurism and first hand accounts of the 'fun' of guerrilla war. *Daily Mail*. Recuperado de www.dailymail.co.uk/news/article-2661727/Jihad-Cool-The-young-Americans-lured-fight-ISIS-militants-rap-videos-adventurism-hand-accounts-fun-guerrilla-war.html
- Conway, M., & McInerney, L. (2008). Jihadi video & auto-radicalisation: Evidence from an exploratory YouTube study. *Proceedings of the 1st European Conference on Intelligence and Security Informatics*, Esbjerg, Denmark, 3-5 de diciembre, 108-118.
- Dodd, V. (2011). British Airways worker Rajib Karim convicted of terrorist plot. *The Guardian*. Recuperado de <http://www.theguardian.com/uk/2011/feb/28/british-airways-bomb-guilty-karim>
- El Difraoui, A. (2012a). *Jihad.de. Jihadistische Online-Propaganda: Empfehlungen für Gegenmaßnahmen in Deutschland*. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).
- El Difraoui, A. (2012b). Web 2.0 – mi tienem Klick im Medienjihad. En: G. Steinberg (Ed.), *Jihadismus und Internet: Eine deutsche Perspektive* (pp. 67-75). Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).
- Erelle, A. (2015). *En la piel de una yihadista*. Madrid: Debate
- Finsnes, C. (2010). *What is audio-visual Jihadi propaganda? An overview of the content of FFI's Jihadi video database*. Recuperado de <http://rapporter ffi.no/rapporter/2010/00960.pdf>
- Flade, F., Fuest, B., Nagel, L.-M., & Schlesier, V. (2014). Geheimdienste blasen zum Angriff auf das Darknet. *Die Welt*. Recuperado de <https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article125181835/Geheimdienste-blasen-zum-Angriff-auf-das-Darknet.html>
- Frohneberg, R., & Steinberg, G. (2012). Videopropaganda und Radikalisierung. En G. Steinberg (Ed.), *Jihadismus und Internet: Eine deutsche Perspektive* (76-88), Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).

- Hernández, I., & Carrión, F. (2015). Diez mil europeos a la yihad. *El Mundo*. Recuperado de <http://www.elmundo.es/internacional/2015/03/09/54fc9cae268e3ef12b8b4578.html>
- Holtmann, P. (2012). Virtual leadership: How Jihadists guide each other in cyberspace. En R. Lohlker (Ed.), *New approaches to the analysis of Jihadism. Online and offline* (pp. 63-124). Viena: Vienna University Press.
- Institute for Strategic Dialogue. (2011). *Radicalisation: The role of the Internet*. Recuperado de <https://bit.ly/2H9xQkn>
- Klausen, J., Tschaen Barbieri, E., Reichlin-Melnick, A., & Zelin, A. (2012). The YouTube Jihadists: A social network analysis of Al-Muhajiroun's propaganda campaign. *Perspectives on Terrorism*, 6(1), 36-53.
- Larráyoz, D. (2014). Los Community Managers del terror: la propaganda online e ISIS y su ofensiva sobre Irak. *Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 82bis, 1-25.
- Lesaca, J. (2017). *Armas de seducción masiva. La factoría audiovisual de Estado Islámico para fascinar a la generación millennial*. Barcelona: Península.
- Muñoz, A. (2015). Viaje al lado oscuro de internet. *El Mundo*. Recuperado de <https://www.elmundo.es/españa/2015/03/05/54f7513cca47413e0f8b4570.html>
- Ortega, P. (2015). El Estado Islámico tiene 46.000 cuentas en Twitter. *El País*. Recuperado de https://politica.elpais.com/politica/2015/07/24/actualidad/1437753480_585841.htm
- Ortiz, A. (2015). *#Yihad. Cómo el Estado Islámico ha conquistado Internet y los medios de comunicación*. Barcelona: Editorial UOC.
- Peil, F. (2012). "Inspire": Das Jihad-Magazin für die Disapora. En G. Steinberg (Ed.), *Jihadismus und Internet: Eine deutsche Perspektive* (pp. 32-44). Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).
- Ramsauer, P. (2015). *Die Dschihad Generation. Wie der Apokalyptische Kult des Islamischen Staates Europa bedroht*. Wien: Styria.
- Sageman, M. (2004). *Understanding Terror Networks*. Philadelphia: University of Philadelphia Press.
- Said, B. (2012). Hymns (*Nasheeds*): A contribution to the study of the *Jihadist* culture. *Studies in Conflict & Terrorism*, 35, 863-879. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2012.720242>
- Schahbasi, A. (2009). Muslime in Europa. Radikalisierung und Rekrutierung. *SIAK-Journal, Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis*, 1, 20-34.
- Steinberg, G. (2012). Jihadismus und Internet. Eine Einführung. En Autor (Ed.), *Jihadismus und Internet: Eine deutsche Perspektive* (pp. 7-22). Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).
- Tapia, M. E. (2016). Análisis de la estrategia comunicativa del terrorismo yihadista: el papel de las redes sociales. *Instituto Español de Estudios Estratégicos - Documento de Opinión*, 2, 1-15.
- Torres, M. R. (2014). *Al Andalus 2.0*. Granada: Biblioteca GESI.
- We Are Social. (2018). *Global Digital Report 2018*. Recuperado de <https://digitalreport.wearesocial.com/>
- Weimann, G. (2010). Terrorist Facebook: Terrorists and online social networking. En M. Last, & A. Kandel (Eds.). *Web intelligence and security. Advances in data and text mining techniques for detecting and preventing terrorist activities on the web* (pp. 19-30). Amsterdam: IOS Press.

Esta página queda intencionalmente en blanco.

POLÍTICA Y ESTRATEGÍA

Policy and Strategy

Esta página queda intencionalmente en blanco.



Revista Científica General José María Córdova

(Revista colombiana de estudios militares y estratégicos)

Bogotá D.C., Colombia

Volumen 17, Número 28, octubre-diciembre 2019, pp. 721-748

<http://dx.doi.org/10.21830/19006586.521>

Geopolítica del Polo Sur: intereses y necesidades de Colombia en el Tratado de la Antártida

South Pole Geopolitics: Colombia's needs and interests in the Antarctic Treaty

Carlos Enrique Álvarez Calderón y Eduardo Námen Mesa

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Bogotá D.C., Colombia

RESUMEN. Después del espacio exterior y el fondo oceánico, el continente antártico sería la última frontera relativamente inexplicada de la humanidad. En efecto, la importancia geopolítica del Polo Sur viene en franco aumento desde que los desarrollos militares, las exploraciones sucesivas y el establecimiento de estaciones de investigación han puesto la Antártida en el centro de las consideraciones estratégicas de los Estados. Si se toma en consideración que la dinámica de la geopolítica antártica es un eco de otras existentes en el sistema internacional, este podría ser el momento preciso para que Colombia cuente con una visión de futuro al respecto e implemente acciones concretas para proyectar el desarrollo de los intereses del Estado hacia otras latitudes, tal como lo han hecho históricamente otros Estados.

PALABRAS CLAVE: construcción de la nación; geoestrategia; geografía política; seguridad del Estado; Polo Sur; recursos hídricos

ABSTRACT. After outer space and the ocean floor, the Antarctic continent is humanity's last relatively unexplored frontier. Undeniably, military developments, ensuing explorations, and the establishment of research stations have driven a steady increase in the geopolitical importance of the South Pole, placing Antarctica at the center of the states' strategic considerations. Given that the dynamics of Antarctic geopolitics echo others in the international system, this could be the right moment for Colombia to have a vision of the future in this regard and implement concrete actions to project the development of State interests towards other latitudes, as other states have historically done.

KEYWORDS: geostrategy; nation-building; political geography; South Pole; state security; water resources

Sección: POLÍTICA Y ESTRATEGIA • Artículo de investigación científica y tecnológica

Recibido: 28 de junio de 2019 • Aceptado: 2 de septiembre de 2019

CONTACTO: Carlos Enrique Álvarez Calderón ✉ carlos.alvarez@esdegue.edu.co

Introducción

Después del espacio exterior y el fondo oceánico, el continente antártico es la última frontera relativamente inexplorada de la humanidad. El más aislado de los seis continentes del mundo fue descubierto por balleneros en el siglo XIX, aunque fue explorado solo hasta principios del XX, ya que, durante gran parte de la historia, las tierras y los mares de latitudes extremadamente altas en los extremos polares de la Tierra eran importantes solo para unos pocos esquimales, comerciantes, misioneros y exploradores; en consecuencia, la mayoría de los Estados estuvieron largo tiempo indiferentes a estos lugares distantes.

Sin embargo, la importancia geopolítica del Polo Sur vendría en franco aumento desde que los desarrollos militares, las exploraciones sucesivas y el establecimiento de estaciones de investigación llevaran a la Antártida al centro de consideraciones estratégicas por parte de los Estados, lo cual daría lugar a reclamos conflictivos de carácter territorial. En consecuencia, doce Estados (incluidos los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética) concluirían para 1959 un tratado que suspendía las reclamaciones, prohibía la actividad militar y habilitaba el continente para su uso libre en la investigación científica (Dodds, 2009). Colombia se adheriría al Sistema del Tratado Antártico (STA) mediante la Ley 67 de 1988, con el propósito de obtener derecho a decidir en los aspectos que afectasen esta región del planeta, la cual tiene incidencia en diferentes zonas del Pacífico y el Caribe colombianos (Cancillería de Colombia, 2018a).

Desde entonces, en su calidad de miembro adherente, Colombia ha tenido voz, pero no voto en los asuntos antárticos; ello ha impulsado el interés del Estado colombiano de pasar del estatus actual de observador al de miembro consultivo del STA, para lo cual elaboraría la Agenda Científica Antártica (2014-2035) y el Programa Antártico Colombiano en el 2013. No obstante, dadas las múltiples características y aproximaciones históricas, topográficas, estratégicas y científicas sobre el continente antártico, no es posible proyectar una única visión; por lo tanto, este artículo se propone realizar una mirada interna del entorno colombiano que permita identificar y describir la política del Estado en la implementación del Tratado Antártico, así como caracterizar los logros de dicha política de acuerdo con los planes y programas de las instituciones encargadas. Finalmente, se hacen algunas recomendaciones en cuanto a los lineamientos, objetivos y estrategias que permitirían formalizar una política de Estado en el desarrollo de dicho tratado.

Vale decir que las recomendaciones de este artículo dejan abiertas las posibilidades para las acciones políticas pertinentes. Los reajustes al programa y a la agenda serían producto de la toma de decisiones, como ya lo hiciera la Armada Nacional con la creación de la División Asuntos Antárticos (perteneciente a la Jefatura de Intereses Marítimos). Colombia no debería correr el riesgo de seguir al margen del camino hacia la Antártida, riesgo que implica desaprovechar el enorme potencial de recursos de este continente y quedar relegado en el escenario geopolítico del futuro. Por lo tanto, este podría ser el momento preciso para contar con una proyección real e implementar las acciones pro-

puestas, en aras de encauzar el desarrollo de los intereses del Estado hacia otras latitudes, tal como lo han hecho históricamente las grandes potencias mundiales y otros Estados no tan “grandiosos”.

La Antártida: el Continente Blanco

La Antártida es un continente situado al sur del círculo polar antártico. Con un área de 14 millones de kilómetros cuadrados (km^2), es el cuarto continente en orden de extensión, representando el 10 % de la tierra firme del planeta. Su forma casi circular (de 4.500 kilómetros de diámetro) y fragmentada por el mar de Weddell y el mar de Ross presenta dos entrantes en forma de S que forman la península de Palmer, proyectada a unos 960 km sobre el extremo austral de Sudamérica (figura 1). Asimismo, exhibe un límite natural ubicado entre los 55° y 58° de latitud sur, denominado “convergencia antártica”, el cual constituye una importante frontera desde el punto de vista biológico y oceanográfico; este límite está definido por la corriente más intensa del mundo, llamada corriente Circumpolar Antártica, la cual rodea al continente en dirección W-E (Armada Española, 2018).

Para los oceanógrafos, Europa, Asia, África, América y Australia se encontrarían en una plataforma continental común. Sin embargo, la Antártica no se encontraría en ella; estaría separada de los otros continentes por un océano que se precipita a profundidades abismales de al menos 3.657 metros. Este sería un océano circumpolar rodeado de tierra, cuyas costas, sitiadas por paredes de hielo de cientos de kilómetros de ancho, terminan en escarpados acantilados de hielo, que desafían todo tipo de navegación (los icebergs componen un 11 % del continente).

La Antártida¹ es el continente más alto del mundo: su altitud media de 1.828 metros sería casi el doble que la de Asia, con una altitud media de solo 975 metros (a pesar de que contiene la cordillera del Himalaya). El Polo Sur está situado en una meseta de expansión cuya altura promedio es de aproximadamente 2.743 metros. Montañas gigantes con picos de más de 4.572 metros rodean la meseta central (la cual se encuentra siempre cubierta de hielo), por lo que la tierra aparecería solo cuando las grandes montañas rompen la helada corteza del interior.

La Antártida se divide en Antártida occidental o menor y Antártida oriental o Mayor. Ambas zonas se encuentran parcialmente separadas por una escotadura que se ubica entre el mar de Weddell y el mar de Ross; tal escotadura es llamada Antártida hundida y se trata de una gran cuenca subglacial delimitada por los Antartandes y los montes Ellsworth al oeste y los montes Transantárticos al este, así como por la meseta Polar en el sur. Gran parte de la llamada Antártida hundida se encuentra algunos metros bajo el nivel del mar debido al enorme peso de la escotadura glacial, que tiene espesores de más de 2.000 m. (Instituto Uruguayo Antártico, 2018, p. 1)

1 Se suele denominar indistintamente Antártida o Antártica, aunque con preferencia por el primer término, ya que es el más usado por cartógrafos y geógrafos. La denominación de Antártica viene dada porque el territorio más alejado y desconocido del planeta estaría rodeado por el océano Antártico.



Figura 1. Región Antártica.

Fuente: <http://mapas.owje.com/5/antartida.html>

Además, el continente Antártico podría ser el lugar más frío del planeta, imposibilitando los asentamientos de población, debido a una temperatura media anual de 57 °C bajo cero (en invierno puede descender hasta los -73° C). El hielo cubre un 98 % de la superficie de la Antártida, extendiéndose en algunos lugares en enormes láminas adheridas

al continente; la más grande es la barrera de hielo de Ross, con una superficie de 487.000 km² (tres veces más grande que el departamento del Amazonas), 800 km de longitud y varios cientos de metros de espesor. Por ello, las bases para las flotas pesqueras no se encontrarían precisamente en el continente antártico, sino en las cercanías de los grupos de islas de South Sandwich, South Orkney y Deception Island.

El hielo compacto que se extiende cientos de kilómetros desde la tierra antártica hacia el océano afecta el clima de Australia, Sudáfrica y Sudamérica. En efecto, la Antártida está catalogada como uno de los principales reguladores del clima mundial, pues en ella convergen todos los océanos del planeta, desde las aguas que bordean el Pacífico colombiano, hasta el mar Caribe que aporta sus aguas al océano Atlántico. De allí la importancia de la presencia efectiva del Estado colombiano, ya que las masas de aguas antárticas tendrían influencia en los espacios marítimos de Colombia, más aún cuando en la actualidad los factores antrópicos afectan el planeta y ocasionan fenómenos con impactos geopolíticos y geoeconómicos, como el cambio climático y los fenómenos de El Niño y La Niña.

Contextualización geopolítica de la Antártida

La Antártida había sido, hasta hace un siglo, una mera curiosidad geográfica; el continente no fue descubierto sino hasta principios del siglo XIX cuando balleneros y exploradores de varios países arribaron a la península Antártica (llamada Graham Land por los británicos, península de Palmer por los estadounidenses, Tierra O'Higgins por los chilenos y Tierra San Martín por los argentinos).

Ya en la antigua Grecia, geógrafos, matemáticos y filósofos especulaban sobre la existencia de una masa anti-ártica, desconocida, y que debía balancear lo cognoscible en las frías zonas boreales. Sin embargo, por entonces, el horizonte del mar parecía demasiado riesgoso y los precarios navíos no ofrecían garantías, de modo que ni los más aventureros solían internarse en tan procelosas aguas. (Witker, 2014, p. 200)

Por tanto, cualquier conocimiento específico sobre la Antártida dataría de finales del siglo XVII, cuando el capitán James Cook la circunnavegó (aunque nunca la vio) y pescadores británicos y estadounidenses se aventuraron en sus aguas para cazar focas en las islas y en el hielo (Roucek, 1986). La primera reivindicación formal del territorio antártico fue hecha por Gran Bretaña en 1908. Posteriormente, otros seis países harían reclamos formales: Nueva Zelanda en 1923, Francia en 1924, Australia en 1933, Noruega en 1939, Chile en 1940 y Argentina en 1943. Paulatinamente, Estados Unidos y otros nueve Estados (Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, la Unión Soviética y Sudáfrica) establecieron más de 53 estaciones de investigación científicas en la Antártida y las islas subantárticas (figura 2). Especialmente fructíferas serían las exploraciones del Año Geofísico Internacional (1957-1958), llevadas a cabo conjuntamente por varios Estados, que permitirían conocer una serie de hechos hasta aquel momento desconocidos sobre la Antártida: los estudios establecieron que la capa de hielo de la Antártida

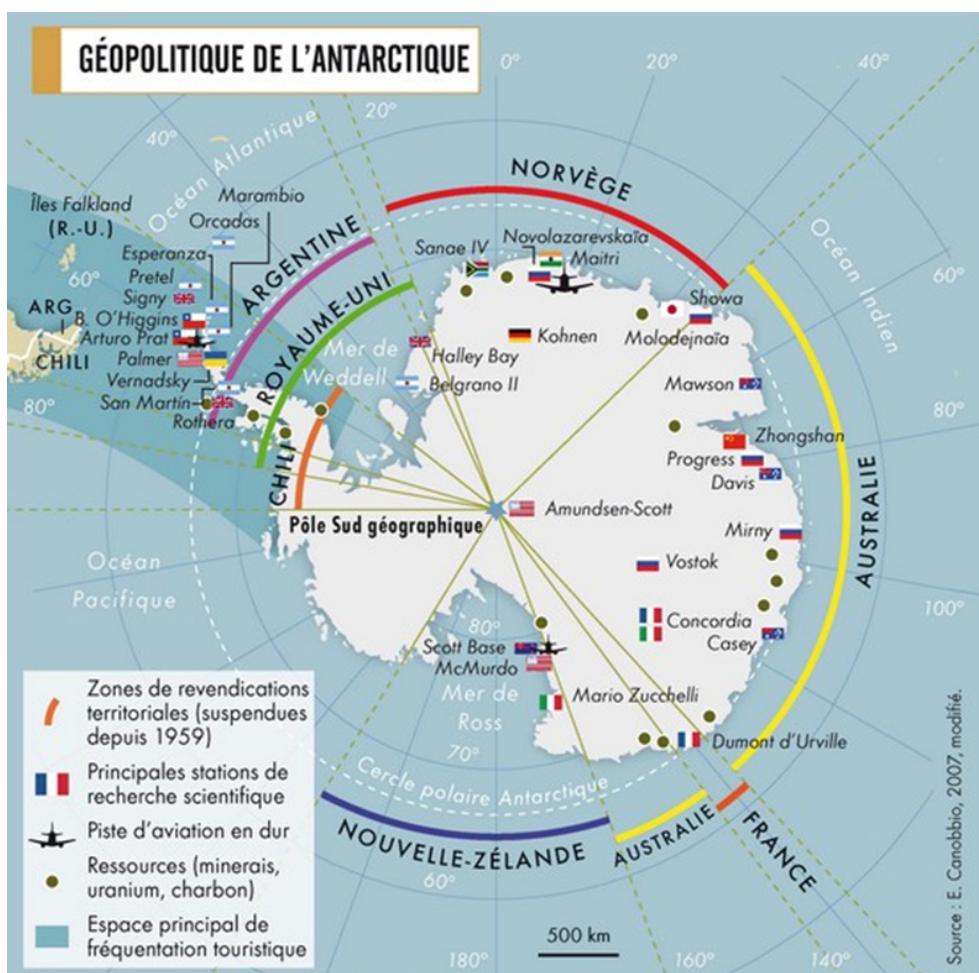


Figura 2. Geopolítica de la Antártida.

Fuente: www.le-cartographe.net

tenía un promedio de más de un kilómetro y medio de espesor y que algunas de las montañas que se alzaban sobre ella alcanzaban alturas de casi 4.500 metros. Además, se encontraron muchos minerales valiosos en las rocas expuestas de las montañas, así como inmensos depósitos de carbón y minas de manganeso, molibdeno, uranio, hierro, cobre, plomo y otros metales.

En 1950, el gobierno soviético presentó una nota a los gobiernos de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Noruega, Australia, Argentina y Nueva Zelanda, en la que argumentaba que no podía aceptar que la administración de la Antártida se decidiera sin la participación de Moscú, señalando que los navegantes rusos T. von Bellingshausen y Mijaíl Lázarev habían circunnavegado y habían llegado por primera vez a las costas del

continente antártico a principios del siglo XIX. Como los territorios de la Antártida y las aguas que rodeaban el área eran de gran valor económico (nueve décimas partes de la caza de ballenas del mundo tenía lugar en estas aguas), la Unión Soviética deseaba participar en su administración. Como resultado, en diciembre de 1959, los representantes de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Soviética concluyeron un tratado, cuyos principales efectos fueron suspender todas las disputas territoriales en el área, establecer el libre uso del continente Antártico para el trabajo científico y establecer un sistema de inspección mutua para prevenir cualquier actividad militar, incluidas las nucleares.

Al mismo tiempo, la Antártida ya era el centro de la política internacional, como lo demuestra el hecho de que, durante el mismo mes, Argentina enviaría un diplomático a Nueva York para iniciar una campaña de reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas ante las Naciones Unidas². Los reclamos territoriales ya se habían vuelto problemáticos en 1954, cuando Inglaterra con 16 bases en la Antártida, reclamó la soberanía sobre la mayoría de estas dependencias; asimismo, Chile, con cuatro bases en el área, reclamó soberanía sobre la parte occidental de las dependencias (incluyendo algunas de las áreas reclamadas por Argentina). La oferta de Gran Bretaña, en diciembre de 1954, para remitir el asunto a la Corte Internacional de Justicia no sería aceptada por Argentina y Chile; en consecuencia, la Corte rechazó en marzo de 1956 la solicitud para el reconocimiento de la soberanía británica y una declaración en contra de las “pretensiones y usurpaciones” de Argentina y Chile, sobre la base de que no tenía poderes en la materia, debido a que Argentina y Chile no aceptaban la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.

Contextualización geoeconómica de la Antártida

El continente antártico aparentaría no tener gran valor para los Estados, debido a un clima hostil que imposibilitaría el establecimiento de una masiva población y su desarrollo; en la región solo había asentamientos científicos, el mayor de los cuales era la estación científica norteamericana McMurdo (con más de 1.000 habitantes en el verano austral). No obstante, la Antártida tiene una importancia geopolítica y geoeconómica notable, ya que es un amplio territorio con recursos minerales no contaminados y aptos para la investigación científica; además, cuenta con una gran cantidad de otros recursos naturales disponibles para la explotación, lo cual generaría un equilibrio en el ecosistema y en el medioambiente. Según Gómez (2005), “los peces registrados en el océano Austral superan las 200 especies diferentes. Existe gran abundancia de bacalao, constituyendo el 75 % de los peces costeros antárticos”; el océano Antártico tiene una cantidad abundante de plantas flotantes microscópicas y animales que proporcionarían alimento para cardúmenes

2 El 2 de abril de 1982, las fuerzas argentinas terminarían invadiendo las Islas Malvinas y desencadenando una guerra limitada en el tiempo, lugar, objetivos y medios. El resultado sería una rendición de Argentina ante las fuerzas británicas, con un costo en vidas de 800 a 1.000 argentinos. La campaña de Gran Bretaña para recuperar las Malvinas duraría 75 días, en los que perdería 5 barcos y aproximadamente 250 hombres.

de kril antártico³, que a su vez son la principal fuente de alimento de peces, pingüinos y ballenas, y, por consiguiente, de una gran cantidad de aves y focas. En consecuencia, por ser una importante reserva de recursos naturales y biológicos, fue necesario crear un sistema de control y regulación de la caza y explotación, para evitar generar un desequilibrio en el ecosistema.

Asimismo, la Antártida contiene el 90 % de todo el hielo del mundo, lo que la convierte en la mayor reserva estratégica de agua dulce del planeta.

El agua cubre el 71 % de la superficie del planeta Tierra, formando grandes cuerpos de agua subterránea y teniendo presencia en la atmósfera, en los organismos y en el suelo. El volumen total de agua se estimaría en 1.386 millones de km³, pero sólo el 2,5 % sería agua dulce (el volumen restante sería agua salada). Del agua dulce, casi el 70 % estaría inmovilizado en las capas de hielo y los glaciares, y un 30 % estaría almacenado en los acuíferos del mundo. (Álvarez, Moreno, & Gómez, 2017, p. 390)

Realizando una comparación en km³ con otros continentes, y de acuerdo con el US Geological Survey (2016), se calcula que la Antártida contendría poco más de 30.000.000 de km³ de agua dulce en estado sólido (57 %), frente a los 2.600.000 km³ en Groenlandia (7,91 %), 91.000 km³ en América (0,27 %), 60.984 km³ en Asia (0,19 %) y 18.216 km³ en Europa (0,06 %). Dada la importancia de este recurso natural para la supervivencia de la humanidad, la Antártida es un imperativo estratégico y geopolítico para todos los Estados del mundo, por lo cual se requiere de un plan estratégico para poder tener provisión en el futuro de este recurso.

Una de las diferencias que caracteriza a la Antártida en comparación al Polo Norte, es la existencia de tierra continental, siendo esta tierra, una de las más ricas del planeta, ya que posee el 80 % de las reservas de agua dulce del mundo. Es sabido de la existencia de países con estrés hídrico, siendo el recurso acuífero uno de los más importantes en la agenda de política mundial. En el futuro, la explotación y obtención de agua dulce, podría traer grandes confrontaciones si no se soluciona el problema de soberanía. Un aspecto a remarcar es el hecho de que en forma natural, se desprende anualmente, aproximadamente el 10 % de la masa de agua congelada de la Antártida en forma de icebergs. De contar con la tecnología adecuada, esta masa de agua sólida podría abastecer a un total de 500 millones de personas. (Auza, 2016, p. 55)

Con relación a los recursos mineros presentes en la Antártida, es relevante señalar que el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente del Tratado Antártico (Protocolo de Madrid), que rige desde el 14 de enero de 1998, prohíbe toda actividad minera en la Antártida y designa este territorio como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia (Lamus, 2012). Sin embargo, con relación al inventario minero de la Antártida, el carbón

3 Es una especie de crustáceo de hasta 6 cm de longitud y 2 g de peso que forma cardúmenes de gran densidad (hasta 30.000 ejemplares por m³). Se alimenta de fitoplancton, por lo que constituye un eslabón esencial en la cadena trófica del ecosistema antártico.

fue el primer recurso no renovable descubierto en dicho continente; la mayoría de los espacios carboníferos están a lo largo de las montañas Trasantárticas, con una superficie de aproximadamente 100.000 km², en el lago Beaver, en las montañas del Príncipe Carlos, en la Tierra de Jorge V, en los territorios de Queen Maud y en las montañas Ellsworth y Horlick. Existe además la posibilidad de que dichos yacimientos se extiendan por debajo de la superficie de hielo del escudo antártico oriental (Ferrari, 2017). Debido a la baja calidad de los yacimientos (por el alto contenido de escorias) y por las enormes dificultades de su extracción y transporte, no habría mayor interés comercial en estos yacimientos⁴. Otro recurso mineral de importancia sería el hierro, a pesar de que no se ha podido determinar la cantidad exacta presente en la Antártida; no obstante, se reconoce que en la Antártida oriental existen yacimientos. También hay yacimientos de cobre en el área de la península Antártica y las islas Shetland del Sur.

También se ha encontrado amplias áreas cubiertas por módulos de manganeso en el fondo marítimo del océano Austral, sin embargo, su importancia no se halla en el manganeso sino en el cobre, níquel y cobalto que poseen, aunque se cree que las cantidades existentes no representan un beneficio importante para ser explotados económicamente ya que la concentración de estos minerales es más alta cerca del ecuador. (Sepúlveda, 2008, pp. 524-535)

De acuerdo a Sepúlveda (2008), en lo que respecta a las reservas de gas y petróleo, Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Japón han realizado prospecciones de potenciales yacimientos, y han encontrado petróleo en la plataforma submarina del mar de Ross y del mar de Weddell. Sin embargo, su explotación sería por el momento inviable en términos comerciales.

Además de hidrocarburos, existen en el continente Antártico energía geotérmica que, al ser energía renovable, se configuran con posibilidades de explotación económicas. A tal efecto, los países firmantes del Tratado Antártico iniciaron acciones tendientes a obtener una posición favorable con respecto a los demás Estados para intervenir en el momento de adoptar resoluciones relacionadas a la explotación de dichos recursos. (Auza, 2016 p. 55)

En la Antártida, la explotación de los recursos no renovables estaría marcada por una gran incertidumbre, ya que los datos obtenidos se basan en el 2% de la totalidad de la superficie del continente, situación que podría cambiar a futuro de la mano de los avances tecnológicos, que permitirían explorar y explotar la masa continental recubierta por la espesa capa de hielo existente.

⁴ Debido a que se han encontrado carbón, hidrocarburos, mineral de hierro, platino, cobre, cromo, níquel, oro y otros minerales en cantidades que no serían suficientemente grandes, el interés de explotación ha sido poco.

El Tratado Antártico

Desde 1959, la Antártida se ha encontrado protegida por el Tratado Antártico (TA), un acuerdo internacional de características únicas que la protege de los conflictos políticos internacionales. Como antecedente a la firma dicho tratado están el Año Geofísico Internacional (AGI) y el Comité Científico para la Investigación Antártica (CCIA) en 1958, cuyo objeto es promover y coordinar la investigación científica. Al año siguiente firmó el TA, con el fin de decidir de forma colectiva sobre el futuro del territorio⁵ situado más allá del paralelo 60° sur (López & Del Valle, 2010). El TA, así como los acuerdos, convenciones y protocolos que de él se han derivado constituyen el Sistema del Tratado Antártico (STA)⁶. Este último ha hecho posible, por una parte, que la Antártida se mantenga al margen de conflictos territoriales o de soberanía y, por otra, que los impactos sobre el medioambiente Antártico, incluidos los de carácter global, no hayan causado estragos de mayores dimensiones.

El TA establece tres categorías de Estados miembros: signatarios originarios, signatarios consultivos y signatarios adherentes con estatus jurídico de miembros consultivos (y adherentes sin ser consultivos). El criterio para ser parte de cada grupo depende en gran medida de la capacidad de realizar considerables investigaciones de carácter científico y contar con el equipo necesario para mantenerlas y llevarlas a cabo. Los miembros consultivos son miembros originarios y miembros adherentes que pasaron a tener estatus jurídico de consultivos; estos miembros tienen derecho a controlar el tratado y tener participación activa en las decisiones. Los miembros adherentes serían observadores dentro de las reuniones de tratado antártico, porque tienen voz pero no tienen voto (Uribe, 2003).

En definitiva, el TA se firmó en diciembre de 1959 en Washington y entró en vigor en junio de 1961; fue firmado por los 12 países que habían desarrollado actividades durante el AGI⁷. A través del tratado se generó un marco normativo para el uso pacífico de la Antártida, para la cooperación en la investigación científica, el intercambio de informaciones, el régimen de inspecciones de las actividades que se realizan, la condición de *status quo* de las reclamaciones territoriales de los países signatarios, las actividades de terceros Estados en la Antártida y las normas y convenciones para la conservación de los recursos y del ambiente. Le seguirían la toma de medidas adicionales de protección medioambiental, como la celebración de la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas

5 El TA abarca toda la tierra y las plataformas de hielo al sur de los 60° de latitud y deja sujetos los mares a las leyes internacionales.

6 El TA ha sido complementado por otros instrumentos jurídicos internacionales para encuadrar las actividades científicas y proteger el medioambiente. De esta forma se creó el Sistema del Tratado Antártico: la Convención para la Conservación de la Foca Antártica (Secretaría del Tratado Antártico, 1972), la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártida (Secretaría del Tratado Antártico, 1980) y el Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Secretaría del Tratado Antártico, 1991).

7 Argentina, Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Bélgica, Sudáfrica, Rusia, Chile, Francia, Gran Bretaña y Japón.

(1972), la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (1980) y la firma del Protocolo de Protección del Medio Ambiente Antártico (1991).

A la fecha, el TA ha sido aceptado por 55 Estados; 29 de ellos tienen estatus consultivo, mientras que otros 24 no son miembros permanentes sino adherentes y, por tanto, no tienen derecho a voto. De los 29 Estados con una presencia permanente en el continente, Alemania, Bulgaria, España, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Polonia, Reino Unido, Rumania, Rusia, Suecia, Ucrania, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Uruguay, China, Corea del Sur, India, Japón, Pakistán y Sudáfrica tienen bases científicas en la Antártida. De los países permanentes, solo Holanda carece de una base propia, aunque trabaja en laboratorios dentro de una de las bases del Reino Unido. Ninguno de los países adherentes opera con una base propia, de modo que todos desarrollan sus programas en colaboración con otros Estados.

A finales de 1987 comenzaron a trabajarse dos hipótesis a nivel internacional sobre el futuro de la Antártida: por un lado, que algunos países seguirían planteando reivindicaciones territoriales, por otro, que entenderían que la Antártida debía ser un patrimonio de la humanidad. Al respecto, siete de los Estados miembros consultivos del TA mantuvieron reclamos sobre importantes sectores del territorio antártico. Sin embargo, en virtud del artículo IV del TA, existe un “congelamiento” permanente de los reclamos de soberanía mientras dure el tratado, es decir, hasta el 2041 (Secretaría del Tratado Antártico, 1959), con excepción de Rusia y Estados Unidos, quienes se reservaron el derecho a hacer reclamaciones al momento de la firma del TA.

Ahora bien, dado que el artículo IV establece lo contrario (asegurando que las reclamaciones existentes hasta la firma del tratado se conservan e impiden la afirmación de nuevas reclamaciones mientras el tratado esté vigente), el TA creó un sistema innovador de “bifocalismo”, en el cual se podrían acomodar los intereses de los Estados tanto demandantes como no reclamantes. Esto permite que países como Chile, Argentina, Francia o Australia, por ejemplo, mantengan su reclamo legal sobre el territorio mientras cooperan con otros Estados para promover la ciencia y la conservación dentro del STA (Bray, 2016). En este sentido, la eficacia del STA constituye un caso único del derecho internacional. En efecto, la cooperación científica internacional regulada por ese sistema ha sido ejemplar entre los Estados vinculados, incluso durante los momentos más tensos de la Guerra Fría.

Colombia en el Tratado de la Antártida

El interés de Colombia en la Antártida empieza en la década de los ochenta, cuando varios investigadores colombianos propusieron la posibilidad de realizar algunas investigaciones científicas en el continente antártico. Estas aspiraciones se materializaron en 1989, cuando como ministro de Relaciones Exteriores, el cr. (r.) Julio Londoño Paredes presentó el proyecto que le permitiría a Colombia su ingreso como miembro adherente al TA. Desde entonces, Colombia ha tenido voz, pero no voto, en los asuntos antárticos (Congreso de

Colombia, 1988). Posteriormente, en el 2000, Colombia ratificó su interés en la Antártida, al intercambiar experiencias científicas con Chile. En 2012, Colombia asistió por primera vez a la Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos en calidad de observador, con la intención de no apartarse de las actividades científicas que se adelantaban en la Antártida.

Así mismo, Colombia manifestó en esa oportunidad su intención de integrarse de manera sostenida y continua a las actividades científicas y logísticas que se realizarían en el Continente Blanco. En este orden de ideas, Colombia buscó pasar del actual estatus de observador, a miembro consultivo del TA, ya que reconoció la importancia geopolítica y ambiental de este continente en materia de recursos naturales, ubicación estratégica y líneas de comunicaciones. En consecuencia, Colombia viene desarrollando unas actividades que buscan mantener viva su presencia en el continente antártico, sin embargo, estas por sí solas no son suficientes para la consolidación de un Programa Antártico Colombiano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo el lineamiento de la diversificación de la política exterior, se había propuesto aumentar la participación de Colombia en el STA. El propósito primordial sería aportar al conocimiento de la Antártida, razón por la cual se ha promovido a nivel nacional el establecimiento y desarrollo de una Agenda Nacional de Investigación Antártica (2014-2035), así como la institucionalización de un Programa Nacional Antártico. Esto le permitiría a Colombia desarrollar un trabajo permanente y sostenido en el tiempo, en materia de investigación científica en temas como el cambio climático, las nuevas especies vivas y los recursos naturales que aportan al desarrollo sostenible del país (Cancillería de Colombia, 2018b).

En consecuencia, el gobierno colombiano sancionaría la Ley 1880, por medio de la cual se aprobaba el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Protocolo de Madrid), con la que Colombia seguiría en el camino para convertirse en miembro consultivo del TA. Sin embargo, el papel de Colombia en el TA ha sido tímido, ya que no se cuenta con las condiciones necesarias para el mantenimiento de una presencia científica activa y permanente en la Antártida. Por lo tanto, es primordial forjar lazos de cooperación con países aliados, con el objeto de obtener un papel más preponderante dentro del STA, a través de la asesoría y el apoyo logístico de aquellos.

El coordinador de la Política Antártica Nacional ha sido el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien a través de una Secretaría Ejecutiva compuesta por la Comisión Colombiana del Océano (CCO)⁸, la Comisión Nacional de Asuntos Antárticos (CNAA)⁹

8 La CCO promueve la sostenibilidad, el desarrollo integral, la competitividad del océano y sus costas, el alcance de los intereses marítimos nacionales y la inserción en nuevos escenarios internacionales. Todos estos a través de la articulación, coordinación y armonización de las acciones del Estado, en razón de lo cual presentó la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros (PNOEC) para el periodo 2016-2030, documento que proyecta el camino de Colombia hacia una potencia media oceánica (PMO) (Comisión Colombiana del Océano, 2017).

9 La CNAA formula la política con la que se pretenden desarrollar de manera integrada y articulada los aspectos políticos, jurídicos, presupuestarios y tecnológicos que consoliden los intereses del país en la Antártida

y la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN)¹⁰ instrumentalizaría dicha política. En el marco de una experiencia de un poco más de tres décadas de participación del STA, los intereses de Colombia se han organizado mediante el Programa Antártico Colombiano (PAC)¹¹, el cual se ha convertido en la hoja de ruta que haría posible la materialización de los intereses nacionales en ese territorio, así como la puesta en marcha de las directrices que le permitirían a Colombia tener un papel más dinámico e influyente dentro de las decisiones que se tomen en el seno del TA (Comisión Colombiana del Océano, 2017).

Colombia participó en la 41.^a versión de la Reunión Consultiva del TA y la 21.^a Reunión del Comité para la Protección Ambiental Antártica, que tendrían lugar en Argentina en el 2018. La delegación colombiana, presidida por el director de Soberanía Territorial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, así como de miembros de la CCO y la Dirección General Marítima, aprovechó los espacios de la reunión para presentar sus aportes académicos y científicos, desarrollados a través de cuatro expediciones a la Antártida en los pasados veranos australes. De igual manera, se firmó entre los representantes del Instituto Antártico Uruguayo y la CCO un Memorando de Entendimiento de cooperación en materia antártica (Cancillería de Colombia, 2018).

Desde la adhesión de Colombia al TA mediante la Ley 67 de 1988 (Congreso de Colombia, 1988), la CCO ha trabajado en la planeación de los programas y proyectos de Colombia en la Antártida, para lo cual creó el Comité Técnico Nacional de Asuntos Antárticos (CTNAA)¹², como insumo técnico para la coordinación de las actividades logísticas y científicas. También estructuró la Agenda Científica Antártica de Colombia (2014-2035), según la labor asignada por el gobierno nacional con el Decreto 1690 (Colombia, Presidencia de la República, 1990). La CCO fue creada a través del Decreto 763 de 1969 y modificada por los Decretos 415 de 1983 y 347 de 2000; es un órgano intersectorial de asesoría, consulta, planificación y coordinación del Gobierno Nacional en cuanto a la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros (PNOEC) y sus diferentes temas conexos (estratégicos, científicos, tecnológicos, económicos y ambientales) relacionados con el desa-

(Comisión Colombiana del Océano, 2015). La CNAA está integrado por el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa Nacional o en su defecto el comandante de la Armada Nacional, el ministro de Hacienda y Crédito Público, el jefe del Departamento Nacional de Planeación, el presidente del Consejo Nacional de Oceanografía y el presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Colombia, Presidencia de la República, 1990).

- 10 La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales sería comisionada para participar en la CNAA y en las reuniones preparatorias y posteriores a la Expedición a la Antártida, así como en el desarrollo de dos iniciativas: el análisis de muestras de roca de la Antártida obtenidas a 300 metros de profundidad durante la Primera Expedición Colombiana a la Antártida (2014-2015) y la aprobación de un proyecto para la Expedición 2016-2017, con el apoyo financiero y de investigadores de la Universidad de la Sabana.
- 11 La Oficina de Asuntos Antárticos trabaja en desarrollar los intereses del país para llegar a ser parte consultiva del STA y servir de enlace en la coordinación del PAC, en cabeza de la Secretaría Ejecutiva de la CCO.
- 12 El CTNAA fue creado por la CCO con el fin de apoyar a la CNAA; este comité hace parte del área de asuntos internacionales de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano (SECCO).

rrollo de los mares colombianos y sus recursos (Comisión Colombiana del Océano, 2015)¹³. Además, la CCO fue designada como uno de los organismos encargados de la planeación y coordinación de los programas y proyectos de todas aquellas instituciones del gobierno, del sector privado y la academia que pudiesen brindar los insumos para entender cómo se están viendo afectados los ecosistemas antárticos y el impacto que dicha afectación podría llegar a tener en las aguas jurisdiccionales de Colombia.

Fue en el marco de esta organización institucional en el 2013 que se constituyó la Agenda Científica Antártica de Colombia, un “documento orientador que formula las estrategias para el desarrollo de las actividades científicas de Colombia en la Antártida; además, crea y plantea un marco para el desarrollo de la ciencia Antártica colombiana para las próximas dos décadas” (Comisión Colombiana del Océano, 2014a, p. 108). Del mismo modo, en el 2013, en el marco de la XXXVI Reunión Consultiva del Tratado Antártico realizada en Bélgica, se presentó el documento “IP 104”, en el cual se manifestó la intención por parte del Estado colombiano de realizar la Primera Expedición Científica de Colombia a la Antártida en el verano austral 2014-2015, en una nave propia (Comisión Colombiana del Océano, 2014b, p. 1).



Figura 3. Sistema Antártico Colombiano.

Fuente: Elaboración propia con base en el PAC, <http://www.cco.gov.co/programa-antartico-colombiano.html>

¹³ También el Estado colombiano crearía el Sistema Nacional de Manejo Integrado del Océano y los Espacios Costeros, cuyo objetivo sería el de articular los distintos órganos del Estado del ámbito nacional, regional y local que cuenta con la participación de los actores socio económicos relevantes. El Sistema tendría como referentes las tres Regiones Integrales de Planificación y Ordenamiento Territorial adoptadas en la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia PNAOCI: Región Caribe Continental y Oceánica, Región Caribe Insular y Región Pacífico, que permitirían articular en estos territorios, las políticas de desarrollo nacional con la problemática específica de las regiones costeras. El Sistema Nacional de Manejo Integrado del Océano y Espacios Costeros, coordinaría sus acciones con los siguientes Sistemas Nacionales: Planeación, Ambiental, Sistema de Información Ambiental para Colombia (SIAC), Sistema de Información Ambiental Marítima (SIAM) y Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) (Ministerio del Medio Ambiente, 2000).

Por su parte, el PAC definiría la política antártica con el fin de posicionar al país como un actor importante del STA. Con el propósito de materializar los objetivos de Colombia en la Antártida y mantener una presencia permanente en ese continente, se han estructurado cinco etapas dentro del PAC (Comité Técnico Nacional de Asuntos Antárticos, 2015). Si bien se ha establecido un periodo de tiempo para el desarrollo de estas etapas, algunas de las actividades incluidas en ellas no se limitarían a dicho periodo, ya que son concebidas como acciones transversales ejecutadas de forma permanente y paralela.

- *Etapa I:* Investigaciones en buques o estaciones científicas de otros países y estructuración de la Agenda Científica Antártica
- *Etapa II:* Desarrollo de expediciones en plataformas propias
- *Etapa III:* Establecimiento y funcionamiento de la Estación Científica de Verano “Almirante Padilla”
- *Etapa IV:* Establecimiento y funcionamiento de la Estación Científica Permanente en la Antártica
- *Etapa V:* Establecimiento y funcionamiento de campamentos, refugios y llegada al polo sur geográfico

En la actualidad, el PAC se encuentra consolidado en su segunda etapa e iniciando las acciones pertinentes para poder desarrollar la tercera (figura 4).

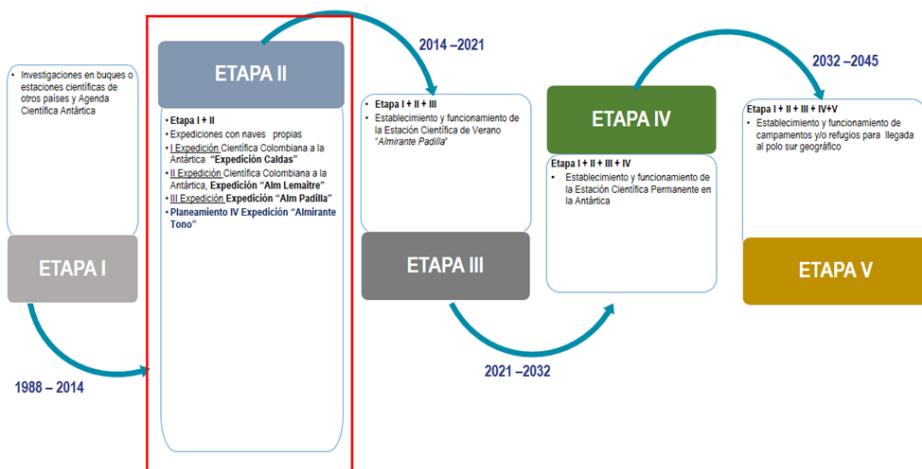


Figura 4. Etapas del Programa Antártico Colombiano (PAC).

Fuente: Elaboración Propia con base al PAC, en <http://www.cco.gov.co/programa-antartico-colombiano.html>

Intereses y necesidades de Colombia en el desarrollo del tratado

En general, el interés de Colombia en la Antártida se enmarca en los procesos de desarrollo para la ciencia, tecnología e innovación nacional, y sigue el espíritu de la protección ambiental y conservación de la integridad de los ecosistemas implementado por la Comunidad Internacional Antártica (Comisión Colombiana del Océano, 2016). Además, Colombia está comprometida con el intercambio de información científica y la transferencia de conocimiento, y reconoce las conexiones ambientales directas e indirectas que el país tiene con los hemisferios del planeta, así como la importancia de realizar expediciones científicas a la Antártica. En particular, los intereses de Colombia en la Antártida son las posibles reclamaciones territoriales sobre dicho continente y el cumplimiento del séptimo imperativo hidropolítico de Colombia.

Reclamaciones territoriales

Tomando en cuenta que, desde comienzos del siglo XX, en la Antártida se comenzarían a ver reflejados los intereses geoestratégicos de diversos Estados, vale recordar que el TA no permite reclamaciones territoriales sobre este continente, sin embargo, no las inhibe del todo. Así, el interés de Colombia en las cuestiones antárticas se fundamentaría en la teoría de la defrontación¹⁴, gracias a la ubicación estratégica de la isla de Malpelo¹⁵ en el océano Pacífico, que le permite a Colombia realizar una proyección geográfica hacia el Continente Blanco sobre los meridianos enunciados (Uribe, 2003). Además, el establecimiento de estaciones científicas colombianas en el Polo Sur podría sustentar a futuro a las reclamaciones territoriales.

A diferencia de algunos Estados, Colombia no ha reclamado territorio en la Antártida; en efecto, fundamentados en algunas doctrinas validadas por el derecho internacional, como las teorías del descubrimiento, la contigüidad, los cuadrantes y la ocupación efectiva, países como Noruega, Gran Bretaña, Australia, Chile y Argentina, entre otros, han reclamado territorio sobre el continente antártico (figura 5).

Otros países, como Brasil, Uruguay, Perú y Ecuador, fundamentan la posesión de un territorio en la Antártida con base en la teoría de la defrontación (figura 6); empero, “con base en la proyección que le da la isla de Malpelo, [Colombia] podría sumarse a este grupo de naciones de la teoría de la defrontación, pero no ha contemplado dicha proyección” (Ramos, 2015, p. 37).

14 Enfrentamiento de las costas a través de meridianos extremos con la Antártida.

15 En latitud 3° 51' 07" N y longitud 81° 35' 40" W (270 millas náuticas al oeste de Buenaventura).

Los países que reclaman derechos sobre la Antártida

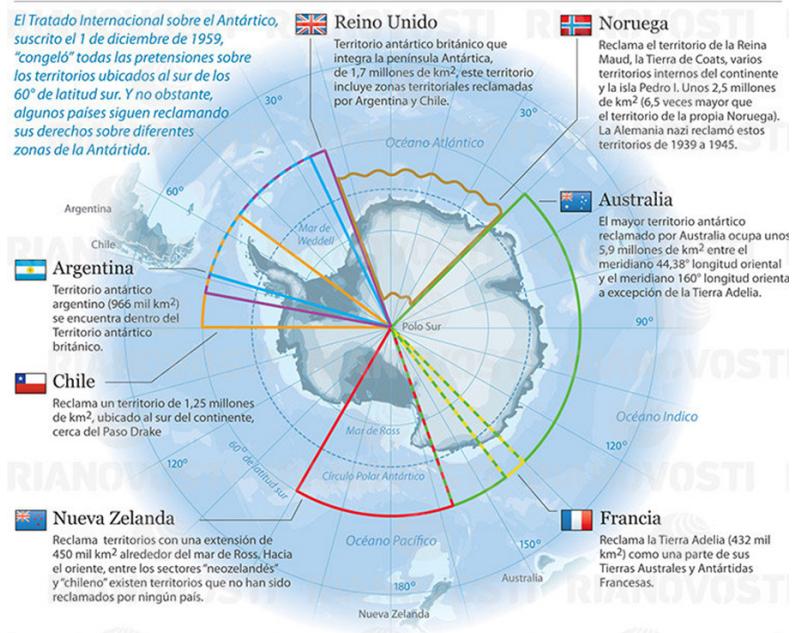


Figura 5. Reclamaciones territoriales.

Fuente: <https://mundo.sputniknews.com/infografia/20100128124876607/>

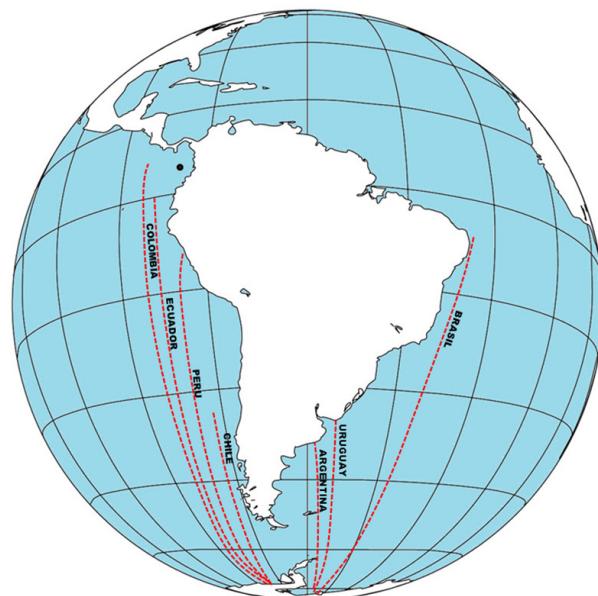


Figura 6. Teoría de defrontación de sectores antárticos.

Fuente: Elaboración propia con base en De Carvalho y De Castro (1956)

Al no haber participado en las actividades científicas llevadas a cabo durante el Año Geofísico Internacional entre 1957 a 1958, Brasil no fue invitado por los Estados Unidos a participar en la Conferencia Antártica y, por lo tanto, en la suscripción del TA. No obstante, ya existían visiones geopolíticas brasileñas que postulaban que ese país debía desarrollar una fuerte presencia en el Atlántico Sur, proyectándose hasta la Antártida. En consecuencia, De Carvalho y De Castro (1956) postularon su *teoria da defrontação*, con la cual se le asignarían al Brasil 500.000 km² en la Antártida (figura 7). Gracias al interés que suscitaría esta teoría en el pensamiento estratégico brasileño, particularmente entre los círculos militares, este país lograría la adherencia al TA en 1975 y la realización de su primera expedición a la Antártida en 1982, pasando a ser miembro consultivo del TA en 1983 e inaugurando su primera base permanente (Estación Antártica Comandante Ferraz) en la Antártida, en 1984.

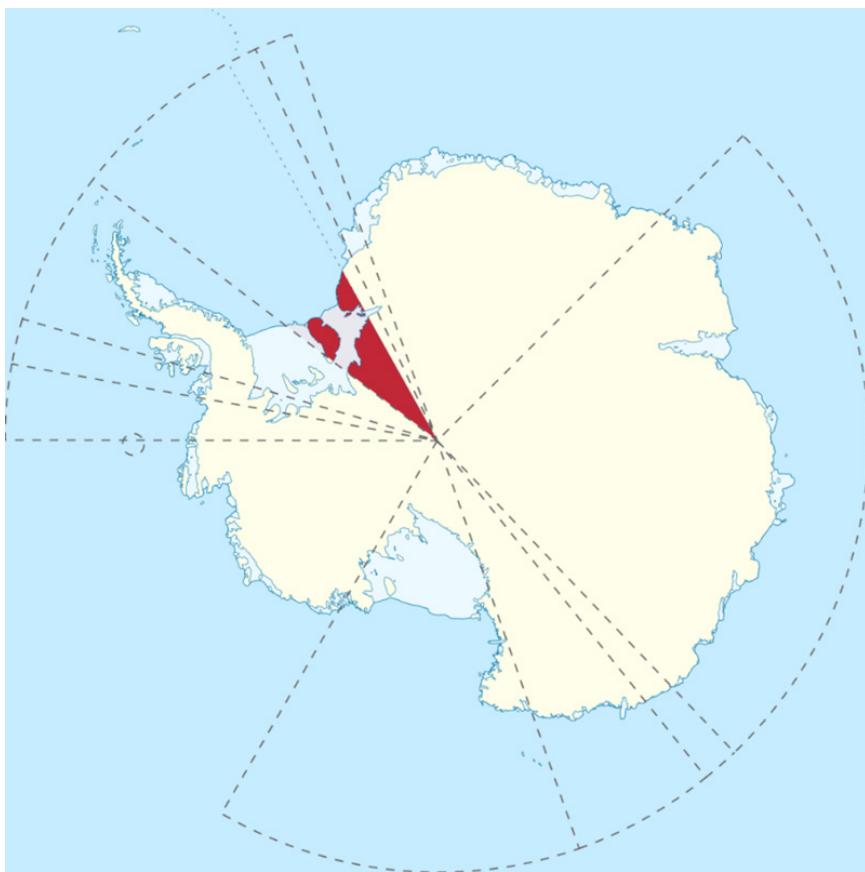


Figura 7. Zona de interés de Brasil.

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brazilian_Antarctica_in_Antarctica.svg

La posición geográfica de un país es vital para la proyección del poder nacional del Estado. En este sentido, por la ubicación geoestratégica que ocupa en el contexto del hemisferio americano, Colombia se constituye como un Estado portal; en efecto, “los Estados portales desempeñan un papel geoestratégico sumamente importante al unir diferentes partes del mundo, facilitando el intercambio de personas, bienes e ideas, y jugando roles económicos y sociales positivos” (Álvarez & Zambrano, 2017, p. 290). Adicionalmente, la posición favorable de Malpelo en el Pacífico permite a Colombia expresar su interés en la Antártida mediante la teoría de la defrontación. Todo lo anterior sin amenazar las pretensiones de los demás Estados miembros, con el fin de evitar un posterior conflicto e incluso un enfrentamiento de carácter militar en esta zona (Gutiérrez, 2015).

Séptimo imperativo hidropolítico de Colombia

De acuerdo con Álvarez (2017), los imperativos geopolíticos de un Estado serían “las necesidades estratégicas de carácter geográfico que un país debe perseguir si quiere lograr su propia seguridad y éxito en el plano regional o mundial; estos son ‘caminos’ no ideológicos, determinados por la geografía de un país y la de sus vecinos” (p. 373). Por ende, un imperativo hidropolítico podría considerarse como las necesidades estratégicas de carácter hídrico que un país debería perseguir si quiere lograr su propia seguridad y éxito en el plano regional o mundial, en otras palabras, “las obligaciones o deberes del Estado en función del espacio hidrográfico y las reservas de agua dulce que garanticen su conservación y/o aprovechamiento estratégico” (Álvarez et al., 2017, p. 466).

Álvarez et al. (2017) identificaron seis imperativos hidropolíticos para Colombia: 1) proteger y conservar el núcleo vital hidropolítico del Estado, es decir, la cuenca Magdalena-Cauca; 2) habilitar el *hinterland* hidrográfico del Pacífico y de la cuenca del río Atrato, que son zonas adyacentes al núcleo vital hidropolítico del Estado; 3) habilitar el espacio vital hidropolítico de Colombia, que comprende las vertientes hidrográficas de la Amazonía y la Orinoquía, como vías de comunicación multipropósito que facilitan una mayor competitividad de la economía de los espacios vacíos del suroriente de Colombia; 4) ocupar los espacios vacíos hidropolíticos de Colombia, es decir, aquellos territorios rurales y urbanos escasos de agua dulce; 5) utilizar la vertiente hidrográfica del Catatumbo como instrumento de proyección de poder del Estado colombiano hacia Venezuela; 6) vigilar todos los actores al margen de la ley que puedan efectuar prácticas nocivas sobre los recursos hidrográficos y ejercer control sobre estos últimos.

Con base en lo anterior, los autores de este artículo proponen un séptimo imperativo hidropolítico: la proyección del poder marítimo colombiano en la Antártida para la salvaguarda de los intereses hídricos y geoestratégicos de Colombia en el Polo Sur. Según Solís (1993), el “poder marítimo” sería la capacidad del Estado para crear, desarrollar, mantener, explotar y proteger sus intereses marítimos tanto en la paz como en la guerra. De acuerdo con Uribe (2016), el “poder marítimo” se refiere a los intere-

ses marítimos y al poder naval que los defiende, así como a la conciencia marítima del Estado que los potencia.

Ahora bien, Colombia podría comenzar a prever algunas soluciones a la problemática del cambio climático mediante la interacción entre la atmósfera, el océano y el hielo; o cómo el cambio climático en la Antártida influye en los océanos tropicales, alterando las costas y sus poblaciones. El deshielo de los polos supone algo más que un efecto del calentamiento global; en el equilibrio del planeta, los casquetes polares juegan un papel crucial. En primer lugar, actúan como regulador climático, ya que el porcentaje de luz solar que reflejan influye directamente en las temperaturas de los mares. En segundo lugar, los polos son las mayores reservas existentes de agua dulce. Durante el deshielo, esta pasa a formar parte de los océanos y las corrientes marinas, que funcionan también como reguladoras del clima. Si se produjera un cambio en la mezcla de agua dulce y salada dentro de esas corrientes, quedaría amenazado el equilibrio existente (Rodríguez, 2017).

Además, Winkelmann (2015) afirma que “la capa de hielo de la Antártida tiene la mayor capacidad para aumentar el nivel del mar. Si todo el hielo de este continente se distribuyese por todo el océano, el nivel global del mar subiría en unos 58 metros” (p. 2). Según las simulaciones, el continente antártico se quedaría sin hielo en unos 10.000 años si se quemaren todos los combustibles fósiles restantes, por lo que “la mayor parte de esta subida del nivel del mar pasaría en los próximos milenios” (Winkelmann, 2015, p. 2). Según Caldeira, Winkelmann, Levermann, & Ridgwell (2015), “las proyecciones revelan que el nivel del mar podría aumentar en 30 metros al final del milenio, con el derretimiento parcial de la Antártida. Esto implica un ritmo de unos tres centímetros al año, que es realmente rápido” (p. 3).

Los temas críticos para la investigación durante las próximas décadas en esta región del globo, entre otros, están el estudio de las conexiones atmosféricas y oceánicas entre Antártida y el resto del planeta, incluyendo la acidificación de los mares antárticos y los cambios del nivel del mar. También están la adaptación de la vida al ambiente y a los cambios del ecosistema antártico. La investigación en Antártida es crucial para entender las variaciones del clima y sus consecuencias. Por eso otro importante tema de estudio son los cambios climáticos del pasado como base para elaborar modelos predictivos de los cambios futuros. Uno de los grandes retos para el futuro es la investigación de los procesos que tienen lugar en la base del casquete glaciar antártico, donde en los últimos años se ha puesto de manifiesto la presencia de una abundante cantidad de agua líquida. (López, 2016, pp. 19)

Si la Antártida occidental llegara a descongelarse por completo, el nivel del mar aumentaría unos cuatro metros; en caso de producirse un deshielo total, las cifras oscilan entre los 57 y los 61 metros en un plazo de 500 años. Un dato sobre el que está de acuerdo la comunidad científica es que el nivel del mar habrá aumentado alrededor de un metro hacia el año 2100, lo que significaría una amenaza para las islas y ciudades costeras de Colombia. Además, un aumento del nivel del mar, el cambio de las condiciones del agua

y el clima, así como las inundaciones de las zonas costeras, destruiría muchos hábitats y llevaría a muchas especies terrestres y marinas al borde de la extinción. Por último, aunque la Antártida posea una configuración político-territorial única, no escapa a las aportaciones de distintas formas de generación de recursos económicos. Pese a la existencia de reglamentaciones internacionalmente admitidas en cuanto a la protección del Continente Blanco, se ha generado un interés muy marcado en la existencia de amplias posibilidades de explotación comercial; en consecuencia, Colombia podría estar interesada en el agua y en algunos minerales contenidos allí.

Hidroestrategia de Colombia en la Antártida

Es importante tener claridad sobre las definiciones básicas: la geopolítica es el “estudio de la interacción entre las dinámicas políticas, económicas, sociales, culturales y militares, y los factores geográficos de un territorio determinado”. La hidropolítica, por su parte, es “el estudio de la interacción entre las dinámicas políticas, económicas, socioculturales, ambientales, tecnológicas y militares, con las características hidrográficas de un territorio determinado” (Álvarez et al., 2017, p. 465). Mientras que la geoestrategia es “la gestión estratégica de los imperativos geopolíticos a través de políticas, acciones y estrategias determinadas” y la hidroestrategia” es la “gestión estratégica de los imperativos hidropolíticos, a través de políticas, acciones y estrategias específicas” (Álvarez et al., 2017, pp. 465-466)¹⁶.

Por ende, las acciones geoestratégicas emprendidas por el Estado Colombiano hasta la actualidad para implementación del TA han consistido en investigaciones en buques propios o estaciones científicas de otros países. Las próximas acciones planeadas serían 1) el establecimiento y funcionamiento de la Estación Científica de Verano “Almirante Padilla”, 2) el establecimiento y funcionamiento de la Estación Científica Permanente en la Antártica, 3) el establecimiento y funcionamiento de campamentos, refugios y llegada al polo sur geográfico. Con relación a lo ya realizado, Colombia ha emprendido en el marco del PAC, cuatro expediciones a la Antártida (Dirección General Marítima, 2016).

La I Expedición Científica a la Antártica se llevó a cabo en enero de 2015, con un buque de la Armada de Colombia, el primer buque colombiano en acceder a territorio antártico. El viaje duró cerca de un mes y asistieron los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores de Colombia. Con esta expedición, Colombia mostró su interés sobre este territorio marítimo y puso en marcha algunas directrices que permitieron recoger lecciones valiosas para cumplir un papel más dinámico e influyente en el seno del TA. Para esta expedición, Chile cooperó con Colombia con el objetivo de transferir experiencias de conocimiento; la expedición contó con nueve oceanógrafos, cinco hidrógrafos, un ingeniero mecánico, dos médicos, dos periodistas, cuatro realizadores y el personal orgánico

¹⁶ De acuerdo con Chávez (2016), la hidroestrategia es entendida como “... la aplicación del poder nacional para lograr objetivos de Seguridad Nacional que estén relacionados con las reservas o fuentes del agua del Estado, mediante dos medios generales de acción: la acción político-diplomática y el poder militar” (p. 350).

del buque. Los científicos también realizaron labores de estudio de los cambios fisiológicos cardiorrespiratorios, de composición corporal y su correlación con factores ambientales, así como una caracterización del ictioplancton como aporte al conocimiento de la biodiversidad en la costa Danco. En otra investigación se estudió la conexión entre el fenómeno de El Niño y los cambios de clima en la Antártida (Molares, 2015).

La II Expedición se inició con la integración de la delegación colombiana y el lanzamiento de la Expedición “Almirante Lemaitre”, en Santa Marta. La II Expedición se desarrolló durante el verano austral 2015/16, y contó con la cooperación internacional y el apoyo de Argentina, Ecuador, Chile e Italia. La delegación colombiana en esta expedición estuvo conformada por 15 instituciones nacionales que representaron el Estado, la academia y el sector no gubernamental, y por 15 proyectos enmarcados en 8 áreas temáticas de la Agenda Científica Antártica de Colombia (2014-2015). En total, la expedición contó con 24 investigadores asignados por la coordinación del PAC a diferentes bases, estaciones y buques de países amigos cooperantes. Durante esta expedición se desarrollaron proyectos de cuatro de las áreas temáticas de la agenda científica, cubriendo un amplio espectro investigativo. En el informe resultante, se consignarían los resultados preliminares de los proyectos, que coadyuvaron a insertar a Colombia en el plano internacional por sus aportes al conocimiento de la Antártida. Esta expedición igualmente fortaleció el PAC, y logró realizar el primer curso preantártico, que divulgó documentos rectores e hizo ciencia en el Continente Blanco por dos años consecutivos, sin contar con una plataforma de investigación propia. Si bien se presentaron retos logísticos para el desarrollo de las investigaciones, los científicos, sus instituciones y la CCO lograron sortearlos y cumplir con los proyectos de la convocatoria de esta expedición (Torres, 2016).

La III expedición de Colombia a la Antártida “Almirante Padilla” se llevó a cabo durante el verano austral 2016/2017. Para esta se contó con un componente de investigación a bordo del buque *ARC 20 de Julio* y otro componente de investigadores en bases y buques de países amigos. Para el componente del buque, la información recolectada en el primer crucero de investigación de Colombia a la Antártida fue un insumo para la comparación con los nuevos datos obtenidos. La III expedición enfatizó las áreas de geografía, hidrografía, oceanografía, seguridad marítima, relaciones suramericanas y antárticas, biodiversidad, ecosistemas y conectividad, cambio climático, medioambiente, logística antártica, biología humana y medicina antártica. Se realizaron 34 investigaciones, por parte de 24 investigadores de 21 entidades educativas (Torres, 2016). Es importante anotar que, durante todas las expediciones, se han realizado 58 proyectos ejecutados por universidades e instituciones del país.

La IV Expedición Científica a la Antártida “Almirante Tono”, verano austral 2017/2018, fue organizada por la CCO y el PAC, a bordo del *ARC 20 de Julio*. Contó con la participación de 70 tripulantes de la Armada, 44 investigadores, 23 entidades, Chile, Argentina, Perú, Ecuador y España como países aliados. Es importante para este trabajo compartir la conclusión a la que llega Ochoa (2015), después de valorar las tres primeras expediciones:

Haciendo un análisis cuantitativo del esfuerzo logístico, así como los costos generados para materializar el desarrollo de la Primera Expedición científica colombiana a la Antártida (Expedición “Caldas”), en términos de corto plazo y muy superficiales, es normal que la opinión pública afirme que en un país como Colombia que tiene infinidad de problemas económicos y sociales, la investigación y presencia en la Antártida no es una prioridad. Es por eso que se requiere una efectiva toma de decisiones, basada no solo en una planeación financiera y en una gerencia de mercados, sino que debe contarse con el apoyo de otros núcleos de la Alta Gerencia que nos permite visionar a mediano y a largo plazo la conveniencia de continuar con los objetivos plasmados en la “Agenda Científica Antártica de Colombia 2014-2035”. Respecto a la gestión humana, la Antártida ofrece nuevas cátedras de estudio e investigación, en la cual las instituciones y entidades públicas y privadas pueden incluir programas para la generación de conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico en beneficio de los intereses nacionales, lo cual a su vez sirve para fortalecer las capacidades profesionales del personal científico colombiano que participará a futuro en el desarrollo de investigaciones relacionadas con la Antártida en temas variados como el cambio climático, pesca, oceanografía, hidrografía, meteorología, biología marina, biotecnología, entre otros. Pero el núcleo temático que más causa impacto en la necesidad de que se continúe con la presencia de Colombia en la Antártida es el enfocado a la prospectiva y estrategia debido a que los beneficios para el país se verán reflejados en beneficio de los intereses nacionales que conllevarían paralelamente a un desarrollo económico y a un fortalecimiento del poder nacional; Este esfuerzo que está realizando el Estado colombiano por intermedio del Comité Técnico Nacional de Asuntos Antárticos para posicionarse como un Estado Consultivo con voz y voto dentro del Tratado Antártico busca principalmente acceder a mediano plazo a participar del aprovechamiento de los innumerables recursos naturales existentes en este continente, a la generación de desarrollo tecnológico, generar reconocimiento internacional y un relacionamiento positivo con los estados y la comunidad parte del Sistema del Tratado Antártico. Dicha situación pone a la Antártida en un buen escenario geopolítico de alto valor estratégico para la nación. (Ochoa, 2015, p. 20)

Conclusiones

En muchos sentidos, la dinámica de la geopolítica antártica es un eco de otras dinámicas existentes en el sistema internacional: en ella, existe una jerarquía de poder que no difiere de la política global, cuyas tendencias la influyen. No obstante, hay factores que indican que el entorno geopolítico antártico experimenta fenómenos distintos a los experimentados en el sistema mundial. En efecto, la ausencia de conflicto en la Antártida ha sido rigurosamente estudiada, pero sin un consenso académico sobre el porqué de su carácter pacífico. Algunos señalan que el STA ha sido el garante del éxito en la minimización del conflicto político y militar en el Polo Sur; sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas juega el mismo papel a una escala mayor en la política global y no ha tenido el mismo éxito que el STA, lo que indica que la mera existencia de instituciones globales no es suficiente como explicación.

Otros señalan que la diferencia entre los sistemas antárticos y mundiales radicaría en que los Programas Nacionales Antárticos de los Estados involucrados aumentan la inversión en actividades en la región, así como la percepción de que las consecuencias del mal comportamiento podrían llegar ser muy altas. Como resultado, los Estados están posiblemente más comprometidos con la diplomacia pacífica y constructiva en la Antártida que en el resto del sistema global. En este orden de ideas, la pretensión diplomática colombiana es llegar a ser miembro consultivo en el STA (al cual Colombia se adhirió en 1989), para tener voz y voto en las discusiones antárticas; aunque para lograrlo deba esperar 33 años más, ya que hasta el 2048 se espera la revisión de dicho tratado.

Pero para tener el “carácter consultivo”, es necesario realizar actividades de investigación científica, requisito que debería cumplirse mediante la conformación de un grupo internacional en el cual participen investigadores de los países del Sur del Continente y, como lo recomendó la Academia Colombiana de Ciencias, debería darse prioridad a los estudios sobre las reservas de agua dulce de la Antártida, dada su inmensa magnitud, así como al estudio de fenómenos atmosféricos condicionados por la dinámica global de la atmósfera y estratosfera que inciden en los movimientos de los aerosoles y sobre los factores que producen el aumento en las dimensiones de los agujeros de la capa de ozono. (Uribe, 2003)

En consecuencia, para que Colombia pertenezca como miembro consultivo del STA, es necesario que el Estado colombiano:

1. Reforme o adecue el Decreto 1960 de 1990, en orden a transformar la CNAA en un instituto, entendido como un organismo de ordenamiento público, con las reglas fundamentales del orden político y de la vida social, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores;
2. Mediante esta reforma, le dé el carácter de política pública al PAC, ya que sería un programa de interés nacional que debería convocar la participación a todos los actores del Estado;
3. Como consecuencia de lo anterior, adecue el Decreto 1690 de 1990, en los artículos 1 y 5, en cuanto a la composición y las funciones de la CNAA, ampliéndola en representación con miembros de otros sectores, particularmente, del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colciencias, ya que como rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, es el encargado de formular la política pública en este aspecto, así como direccionar, articular y fomentar el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico y la innovación del PAC; y
4. Asignar un presupuesto independiente al PAC, aprobado por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, para que tales recursos sean ejecutados a través de la CNAA.

La historia geopolítica del STA podría interpretarse como un proyecto de denegación estratégica que ha existido por 50 años, en el que los derechos soberanos de control territorial exclusivo y otras ventajas geopolíticas han sido restringidos para muchos Estados, en favor de las normas de cooperación científica y protección ambiental. A través de estos compromisos normativos, el STA ha sido un régimen altamente exitoso hasta el momento para la protección de los ecosistemas antárticos. En la última década, sin embargo, el creciente interés en la Antártida ha generado importantes desafíos geopolíticos, que están condicionados por rivalidades estratégicas más amplias a futuro. Además, la legitimidad del STA está cada vez más amenazada por las presiones externas a favor de una mayor actividad comercial en la zona y un estancamiento normativo interno del STA. En este contexto, según Bray (2016), el “bifocalismo” estaría bajo presión, ya que los problemas regulatorios emergentes cuestionan la propiedad de los recursos y el acceso al territorio, y los demandantes intentarían reforzar sus derechos soberanos en respuesta a la mayor actividad de los no demandantes en la Antártida y los desarrollos jurisdiccionales en otros lugares.

Esto hace que el delicado acto de equilibrio entre el nacionalismo asertivo y el internacionalismo cooperativo en la política antártica sea más difícil de sostener, por lo que la Armada Nacional de Colombia debe continuar operando del PAC, ya que este está plenamente alineado con la estrategia pentagonal, dándole preponderancia como una marina media de proyección regional que permitiría, entre otras, defender los intereses geopolíticos de Colombia en la Antártida.

Agradecimientos

Los autores desean agradecer a la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” por su apoyo en la realización de este artículo.

Declaración de divulgación

Los autores declaran que no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con el artículo. Este hace parte del proyecto de investigación de la Maestría en Estrategia y Geopolítica titulado Geopolítica Colombiana en el Posacuerdo: Riesgos y Perspectivas, y del proyecto de investigación de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales titulado Desafíos y Nuevos Escenarios de la Seguridad Multidimensional en el Contexto Nacional, Regional y Hemisférico en el Decenio 2015-2025. Ambos proyectos hacen parte del Grupo de Investigación Centro de Gravedad de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, reconocido y categorizado en A por Colciencias con el código COL0104976.

Financiamiento

Los autores no declaran fuente de financiamiento para la realización de este artículo.

Sobre los autores

Carlos Enrique Álvarez Calderón es politólogo y magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Becario del Center for Hemispheric Defense Studies “William Perry”, Washington. Asesor del Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar. Profesor e investigador principal de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Editor de la revista *Ensayos sobre Defensa y Seguridad*.

<https://orcid.org/0000-0003-2401-2789> - Contacto: carlos.alvarez@esdegue.edu.co

Eduardo Namen Mesa es capitán de fragata de la Armada de la República de Colombia, ejecutivo de Aviación Naval, especialista en Seguridad y Defensa y magíster en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Especialista en Política y Estrategia Marítima y profesional en Ciencias Navales de la Universidad Escuela Naval “Almirante Padilla”.

<https://orcid.org/0000-0002-1304-1501> - Contacto: eduardo.namen@armada.mil.co

Referencias

- Álvarez, C. (2017). Ocupación de espacios vacíos: una condición *sine qua non* para la seguridad multidimensional de Colombia. En C. Álvarez (Ed.), *Escenarios y desafíos de la seguridad multidimensional en Colombia* (pp. 307-386). Bogotá: Ediciones Escuela Superior de Guerra de Colombia.
- Álvarez, C., & Zambrano, J. (2017). Globalización desviada: plataforma de convergencia criminal. En C. Álvarez, C. (Ed.), *Escenarios y desafíos de la seguridad multidimensional en Colombia* (pp. 249-307). Bogotá: Ediciones Escuela Superior de Guerra de Colombia.
- Álvarez, C., Moreno, A., & Gómez, J. (2017). Respice aqua vitae: hacia una hidropolítica Nacional. En C. Álvarez (Ed.), *Escenarios y desafíos de la seguridad multidimensional en Colombia*, Bogotá. Bogotá: Ediciones Escuela Superior de Guerra de Colombia.
- Armada Española. (2018). *La Antártida continente helado*. Recuperado de <http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspanola/conocenespeciales/prefLang-es/06aniversarios--09xx-annos-campana-anotartica--02tratado--022compromisos-es>
- Auza, F. (2016). *La evolución del escenario Antártida y los procesos de liderazgo en el sector*. Recuperado de <http://www.cefadigital.edu.ar/handle/123456789/396>
- Bray, D. (2016) The geopolitics of Antarctic governance: Sovereignty and strategic denial in Australia's Antarctic policy. *Australian Journal of International Affairs*, 70(3), 256-274.
- Caldeira, K., Winkelmann, R., Levermann, A., & Ridgwell, K. (2015). Combustion of available fossil-fuel resources sufficient to eliminate the Antarctic ice sheet. *Science Advances*, 1(8), 2-12.
- Cancillería de Colombia. (2018, enero 25). *Presidente Santos sancionó ley de Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente*. Recuperado de <http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/presidente-santos-sanciono-ley-protocolo-tratado-antartico-proteccion-medio-ambiente>
- Cancillería de Colombia. (2018a). *Antarctic Affairs*. Recuperado de <http://www.cancilleria.gov.co/en/politica/asuntos-antarticos>
- Cancillería de Colombia. (2018b). *Colombia presente en 41^a Reunión Consultiva del Tratado Antártico y la 21^a Reunión del Comité para la Protección Ambiental Antártica*. Recuperado de <http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-presente-41a-reunion-consultiva-tratado-antartico-21a-reunion-comite>

- Chávez, L. (2016). Conceptos generales sobre hidroestrategia. En S. Uribe (Ed.), *Estrategia marítima, evolución y prospectiva* (pp. 327-352). Bogotá: Escuela Superior de Guerra.
- Colombia. Presidencia de la República. (1990). Decreto 1690. (01 de agosto de 1990).
- Comisión Colombiana del Océano. (2014a). *Resolución 018: creación del Comité Técnico Nacional de Asuntos Antárticos*. Bogotá: Comisión Colombiana del Océano.
- Comisión Colombiana del Océano. (2014b). *Agenda Científica*. Bogotá: Comisión Colombiana del Océano.
- Comisión Colombiana del Océano. (2015). *Asuntos Antárticos*. Recuperado de <http://www.cco.gov.co/asuntos-antarticos.html>
- Comisión Colombiana del Océano. (2016, mayo 11). *Informe de las Expediciones Antárticas*. Recuperado de <http://cco.gov.co/cco/prensa/114-asuntos-antarticos/218-informes-de-las-expediciones-antarticas.html>
- Comisión Colombiana del Océano. (2017). *Política nacional del los océanos y de los espacios costeros PNOEC*. Bogotá: Comisión Colombiana del Océano.
- Comité Técnico Nacional de Asuntos Antárticos. (2015). *Programa Antártico Colombiano*. Bogotá: Comisión Colombiana del Océano.
- Congreso de Colombia. (1988). Ley 67 del 19 de diciembre de 1988. Bogotá: Diario Oficial.
- De Carvalho, C., & De Castro, T. (1956). A questão da Antártica. *Boletim Geográfico*, 14(135).
- Dirección General Marítima. (2016). *Memoria expedicionaria: Colombia-Antártida*. Bogotá: Dimar.
- Dodds, K. (2009). La administración del continente polar: los orígenes geopolíticos del Tratado Antártico de 1959. *Revista de Historia Internacional*, 10(39), 27-49.
- Ferrari, A. H. (2017). Importancia económica de la Antártida. *Revista de la Escuela Superior de Guerra Aérea*, 239, 28-34.
- Gómez, M. (2005). Geopolítica sudamericana y la Antártica: ¿confrontación o cooperación? *Revista de Marina*, 2, 138-157.
- Gutiérrez, J. (2015). *Geopolítica, recursos naturales y zonas estratégicas en Colombia*. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada.
- Instituto Uruguayo Antártico. (2018). ¿Qué es la Antártida? Recuperado de http://www.iau.gub.uy/?page_id=121&lang=es p.1
- Lamus, F. (2012). Tratado antártico y mecanismos de protección del territorio antártico. *International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional*, 10(21), 255-295.
- López, J. (2016). *La investigación en Antártida es crucial para entender las variaciones del clima y sus consecuencias*. Recuperado de <https://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/la-investigacion-en-antartida-es-crucial-para-entender-las-variaciones-del-clima-y-sus-consecuencias/>.
- Lopez, M., & Del Valle, J. (2010). *La historia del descubrimiento y exploración de la Antártida*. Buenos Aires: Editorial CCEBA.
- Molares, R. (2015). *Primera Expedición Científica de Colombia en la Antártida*. Bogotá: Comisión Colombiana del Océano.
- Ochoa, J. (2015). Impacto estratégico nacional en la ejecución de expediciones científicas a la Antártida. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada.
- Ramos, C. A. (2015). Las pretensiones geoestratégicas de Colombia luego de su adhesión al Tratado Antártico. Bogotá: Universidad del Rosario.
- Rodríguez, A. (2017). *Geopolítica polar: conquistar un continente que no existe*. Recuperado de <https://elorden-mundial.com/geopolitica-polar-un-continente-que-no-existe/>
- Roucek, J. (1986). The geopolitics of the Antarctic: The land is free for scientific work but its wealth of minerals has excited imperialist claims. *American Journal of Economics and Sociology*, 45(1), 69-77.

- Sepúlveda, J. (2008). Importancia geopolítica del continente antártico. *Revismar*, 6, 524-535.
- Solís, E. (1985). *Manual de estrategia*. Santiago: Academia de Guerra Naval de Chile.
- Torres, R. (2016). *II Expedición de Colombia a la Antártida "Almirante Lemaitre"*. Bogotá: Comisión Colombiana del Océano.
- Uribe, D. (2003). *La era de la Antártida*. Bogotá: Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
- Uribe, S. (2016). *Estrategia marítima: evolución y prospectiva*. Bogotá: Escuela Superior de Guerra.
- Winkelmann, R. (2015). *El deshielo de toda la Antártida aumentará el nivel del mar en 60 metros*. Recuperado de [https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-deshielo-de-toda-la-Antartida-aumentara-el-nivel-del-mar-en-60-metros/\(reply\)/89343](https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-deshielo-de-toda-la-Antartida-aumentara-el-nivel-del-mar-en-60-metros/(reply)/89343)
- Witker, I. (2014). ¿Poder duro o poder blando? Algunas características de los programas antárticos de India y China. *Comentario Internacional*, 14, 199-219.



Revista Científica General José María Córdova

(Revista colombiana de estudios militares y estratégicos)

Bogotá D.C., Colombia

Volumen 17, Número 28, octubre-diciembre 2019, pp. 749-770

<http://dx.doi.org/10.21830/19006586.510>

El río Amazonas: corredor estratégico para una Colombia trioceánica

The Amazon River: a strategic corridor for a tri-oceanic Colombia

Valeria Rodríguez Ardila

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Bogotá D.C., Colombia

RESUMEN. Las características físicas de Colombia en cuanto a su riqueza fluvial representan unas ventajas difíciles de igualar por otros países de la región, pero su manejo inadecuado y sin proyección impiden el desarrollo y la explotación requeridos. Para ello se deben establecer metas que, más allá de un resultado económico favorable, ubiquen el país a la vanguardia geopolítica del continente. De acuerdo con este escenario, el artículo se plantea la siguiente pregunta: ¿puede el río Amazonas, como corredor estratégico, proyectar a Colombia geopolíticamente en el espacio oceánico del Atlántico sur? Para responderla, se llevó a cabo una investigación propositiva y prospectiva, que expone cómo el Estado colombiano se debe proyectar en una región que aún no cuenta con una participación positiva en el escenario nacional.

PALABRAS CLAVE: agua superficial; Amazonía; Atlántico sur; Colombia; Estado; geopolítica

ABSTRACT. Colombia's physical characteristics, in terms of its abundance of rivers, represents advantages, unmatched by other countries in the region. However, their inadequate and poorly planned management hinder their development and exploitation, which require the establishment of goals that, beyond offering a favorable economic result, place the country at the geopolitical vanguard of the continent. Given this scenario, this article asks the following question: Can the Amazon River, as a strategic corridor, project Colombia geopolitically in the oceanic space of the South Atlantic? A proactive and prospective study was carried out to answer this question and explain how the Colombian State should project in a region that does not yet have positive participation in the national scenario.

KEYWORDS: Amazon; Colombia; geopolitics; South Atlantic; state; surface water

Sección: POLÍTICA Y ESTRATEGIA • Artículo de investigación científica y tecnológica

Recibido: 10 de julio de 2019 • Aceptado: 8 de septiembre de 2019

CONTACTO: Valeria Rodríguez Ardila  valeria.rodriguez@esdegu.edu.co

Introducción

Desde principios del desarrollo de la vida en sociedad, la humanidad ha necesitado de los ríos para poder sobrevivir. Esta necesidad surge por la dependencia del agua dulce para la vida y de los recursos que de ella emanan. A medida que las sociedades se fueron ampliando y necesitaron más recursos para poder subsistir, los ríos se convirtieron en las grandes autopistas por las que se movilizaban personas y recursos. Un buen uso de estos sistemas les permitió a las poblaciones intercambiar bienes, servicios, conocimiento y formas de desarrollo. Entre mayor fuese la utilización de estos canales estratégicos, mayor desarrollo iban a tener los grandes asentamientos.

En la actualidad, estas dinámicas se mantienen: las grandes ciudades, pertenecientes a importantes Estados, utilizan los ríos como medios para sacar sus productos al comercio internacional. De aquí la importancia y la trascendencia de los ríos para la vida cotidiana: gracias a ellos se pueden sacar las grandes producciones a los océanos que, a su vez, permiten el desarrollo y el comercio internacional a gran escala. Ríos y océanos, entonces, han sido y seguirán siendo fundamentales para el transporte de grandes cantidades de materiales, bienes y mercancías en todo el planeta (Adeloye, 2009).

Colombia es uno de los países de Suramérica que, en el aspecto fluvial, posee unas ventajas comparativas significativas a diferencia de otros países de la región. Sin embargo, su atraso y subdesarrollo en la movilidad fluvial hacen se pierdan grandes posibilidades, ya que, como Estado no hay una proyección productiva al respecto para incentivar y desarrollar al máximo estas capacidades en el continente. Para contrarrestar esta situación a nivel nacional y regional, se debe pensar en la importancia de los corredores interoceánicos que posee el país. Más importante aún, se deben contemplar sus alcances, a fin de no solo tener un resultado económico positivo, sino también estar a la vanguardia geopolítica del continente. Dicha proyección incluye los mencionados corredores interoceánicos, puesto que Colombia no solo cuenta con una amplia red fluvial, sino también con dos salidas marítimas: una al mar Caribe y otra al océano Pacífico (Comisión Interamericana de Puertos, 2006).

De acuerdo con lo anterior, este artículo aborda la siguiente pregunta de investigación: ¿permitiría el río Amazonas, como corredor estratégico, proyectar a Colombia geopolíticamente en el espacio oceánico del Atlántico sur? Para poder resolverla, la investigación pretende consolidar los siguientes objetivos: a) determinar el valor geopolítico y geoeconómico de los ríos como corredores geoestratégicos, a partir de los aportes de la disciplina de la hidropolítica; b) estudiar las configuraciones geopolíticas del río Amazonas y del Atlántico sur, como escenarios de proyección de influencia con Brasil y Perú; y c) establecer cómo el río Amazonas permitiría proyectar a Colombia en el Atlántico sur y constituirlo como un país *trioceáñico*.

El diseño metodológico a utilizar es de tipo deductivo, en palabras de Dávila-Newman (2006, p. 181): “La deducción permite establecer un vínculo de unión entre

teoría y observación y permite deducir a partir de la teoría los fenómenos objeto de observación". En consecuencia, se pretende establecer, mediante la búsqueda de la literatura existente sobre hidropolítica, cuáles son los planes estratégicos fluviales nacionales y cómo el río Amazonas puede llegar a ser el corredor estratégico para Colombia. Por otro lado, el enfoque es de tipo cualitativo, ya que se sigue un conjunto de procesos cuyas etapas se desarrollan con el fin de responder la pregunta de investigación planteada (Hernández-Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). Esta fase ocupa un lugar privilegiado, en razón a que se quiere saber cómo el río Amazonas puede proyectar geopolíticamente a Colombia en el Atlántico sur.

En consecuencia, es un tipo de investigación propositiva y prospectiva, ya que expone la posibilidad de cómo el Estado colombiano se debe proyectar en una región en la que aún no tiene participación positiva en este sentido, a partir del planteamiento de Colombia como un Estado trioceánico. Lo anterior se pretende realizar mediante la utilización de métodos específicos, como el análisis de documentación oficial sobre el tema y la comparación, con otros países de la región como Brasil y Perú, de las características hidropolíticas del río Amazonas como vertiente fluvial al Atlántico sur. Esto con el fin de seleccionar y triangular la información, de la cual hay fuentes en abundancia, cuyo uso resulta pertinente para esta investigación (Cabrera, 2005).

El artículo, en consecuencia, se desarrolla así: primero se hace referencia a los ríos como corredores estratégicos, contexto en el cual el Amazonas es el corredor geoestratégico del eje occidente-oriente en Suramérica. A continuación, se desarrolla el aparte de Colombia y su proyección a través del río Amazonas y se finaliza con las respectivas conclusiones.

Los ríos como corredores geoestratégicos

En principio, los corredores estratégicos son aquellos que permiten en una región determinada el desarrollo de actividades indispensables como el transporte de mercancía y la movilidad de personas para el desarrollo social de una comunidad. Estos corredores pueden ser de alta montaña, carreteras, fluviales y fronterizos (Salas, 2010); para este artículo se hará énfasis en los fluviales.

Ahora, más claramente para el caso colombiano y a partir del mapa hidrográfico, se plantea que el país tiene cuatro cuencas hidrográficas que recogen 20 ríos navegables. La falta de infraestructura fluvial ha generado que estos corredores estratégicos no exploten su potencial como deberían, lo cual ha retrasado el desarrollo nacional (Comisión Interamericana de Puertos, 2006). No obstante, se establece que hay cuatro corredores fluviales estratégicos (figura 1): a) corredor Tumaco-Puerto Asís-Belém Do Pará; río Putumayo-Amazonas; b) corredor bioceánico Pacífico-Bogotá-Meta-Orinoco-Atlántico; c) navegabilidad del río Amazonas; y d) cuenca del río Atrato-San Juan (Invías, 2010).



Línea negra: corredor (a) Tumaco-Puerto Asís-Belém Do Pará; río Putumayo-Amazonas

Línea amarilla: corredor (b) Pacífico-Bogotá-Meta-Orinoco-Atlántico

Línea púrpura: corredor (c) río Amazonas

Línea roja: corredor (d) cuenca del río Atrato-San Juan

Figura 1. Corredores fluviales estratégicos.

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, en lo regional, en la parte norte y central del continente suramericano, la movilidad fluvial ha sido incipiente, a pesar de contar con la red fluvial más interconectada y eficiente del mundo (Crapivinsky & Ortega, 2002). Las cuencas del Orinoco y el Amazonas, junto con la cuenca de La Plata, permiten una perfecta navegabilidad en el continente de modo norte-sur por su interconexión. No obstante, en el sentido oriente-occidente la red se vuelve un poco más compleja, pero esto no significa que no haya posibilidad de la creación de canales interoceánicos. Por el contrario, se tienen previstos dos: el de Orinoco-Meta-Pacífico y el de Amazonas-Putumayo-Pacífico (Comisión Interamericana de Puertos, 2006). El dilema dentro de la perspectiva geopolítica para Colombia es qué tanto le favorecen estos canales interoceánicos y si existe alguna estrategia que beneficie en mayor medida al país.

Para responder el interrogante es fundamental que Colombia tenga un pensamiento hidropolítico, ya que no solo se comparten corredores estratégicos de gran importancia para el país y para la región, sino que también se cuenta con cuatro sistemas acuíferos, a saber: a) Panamá (Chocó-Darién); b) Venezuela (La Guajira-Táchira-Pamplonita); c) Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú (Amazonas); y d) Ecuador (Tulcán-Ipiales) (Ideam, 2013). Esto significa que la falta de conocimiento sobre los recursos hídricos, su potencial y las formas de aprovecharlo y protegerlo puede generar nuevas amenazas locales en el futuro.

Estos corredores se consideran como estratégicos, ya que, mediante su adecuación y uso, se proyectan para el Estado colombiano como una herramienta fundamental para la integración y desarrollo de diferentes zonas del país. Por su ubicación geográfica, representan nodos de alto valor estratégico, que deben estar interconectados para potencializar la conexión de puntos débiles en el territorio nacional. Los ríos, como corredores estratégicos tanto nacionales como regionales, y el desarrollo que su buena utilización genera en lo interno y externo, dan origen al concepto y uso de la *hidropolítica* para las relaciones interestatales.

La cuestión de la hidropolítica es un asunto nuevo y, a veces, difícil de comprender. Del mismo modo que su pariente cercana, la geopolítica, su fortalecimiento en el mundo académico en cuanto al concepto de las relaciones políticas del agua aún es poco claro en el mundo científico. Es por esta razón que es importante retomar el concepto de geopolítica, para entender qué futuro le espera a la hidropolítica y cómo su importancia puede trazar un nuevo horizonte para los Estados.

La Geopolítica era una pseudociencia, pues —se sostenía— elevaría el factor geográfico hasta un absoluto que se supondría determinante del Poder y, por consiguiente, del destino de las naciones. Su concepción básica —se decía— es el espacio, ya que en tanto que el espacio es un elemento estático, los pueblos que viven dentro de ese espacio o de los espacios en el mundo son dinámicos. Según tal visión errónea de la Geopolítica, los pueblos deberían extenderse por medio de la conquista del espacio o sino sólo les correspondería resignarse a perecer. Del mismo modo, el poder relativo de las naciones estaría determinado, inexorablemente, por la relación mutua de los espacios conquistados. (Duvauchelle, 1996, p.1)

La anterior aseveración muestra el carácter que existía en torno a esta rama científica, sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo “Saul Cohen, Patric O’Sullivan, Colin Gray, Godfrey Paker y Zbigniew Brzezinski están de acuerdo que existe un entorno físico del Estado y su situación con la Política Internacional de ese Estado. En esta apreciación se advierte que la Geopolítica facilita la predicción de los acontecimientos relacionados con la escena internacional” (Duvauchelle, 1996, p. 1). Esto le dio un sustento teórico lo suficientemente fuerte como para abrirse el camino como disciplina científica —dentro de la disciplina de las ciencias políticas y de las relaciones internacionales—, camino que está fundamentado en cómo los Estados podrían utilizar los análisis prospectivos que salieran de esta rama para tener en cuenta las diferentes formulaciones en cuanto a su política exterior y sus propios intereses (Torrijos & Pérez, 2014).

De acuerdo con lo anterior, se ahondará sobre el concepto de hidropolítica y su pertinencia para el desarrollo del tema de este artículo. La hidropolítica estudia cómo las relaciones internacionales son influenciadas por los factores hídricos que comprenden los Estados. Esta disciplina comprende y analiza las interacciones transfronterizas del agua a fin de evitar conflictos por ella y establecer estrategias de cooperación para la utilización

equitativa del recurso hídrico entre los países que lo comparten (Waterbury, 1997). En este orden de ideas, se resalta esta rama de estudio, ya que el agua es un recurso geopolítico de gran importancia, al ser necesaria para el desarrollo y sostenimiento de la vida en la Tierra, cuyo buen o mal uso puede afectar a toda una comunidad: estabilizarla o desestabilizarla.

Como un nuevo marco de estudio (diferente de la geopolítica, la oceanopolítica y la nueva petropolítica), la hidropolítica resalta la importancia del agua como un factor fundamental para las relaciones sociales, particularmente, las relaciones exteriores de los Estados (Martínez, 2014). En este sentido, el manejo del agua como recurso fundamental se plantea como una nueva amenaza posible para el orden mundial, así como lo es hoy el petróleo, que pone a las naciones en disputa. Esta disyuntiva es importante tenerla en cuenta, ya que, si se está hablando de Colombia como un Estado tríoceánico por utilizar el río Amazonas como un corredor estratégico, ¿qué piensan los demás países que tienen este mismo río?, ¿podría llegar a ser esta proyección geopolítica un tema de seguridad nacional? Este interrogante es importante, pero no tan fatalista como parece, ya que dentro del estudio de las corrientes fluviales precisamente uno de los apartes a estudiar es la seguridad y qué hacer para evitar inconvenientes (Álvarez, Moreno, & Gómez, 2018).

Por un lado, Wolf (2007) afirma que los conflictos por agua tienden a trascender y escalar, particularmente, por el uso indebido de ríos fronterizos, por ejemplo, en la construcción de canales o represas que perturben el cauce del río y afecten de forma negativa a otros Estados, o por errores humanos, en el sentido de que la explotación indebida de los ríos genera daños que afectan a las comunidades que los utilizan para su diario vivir (Wolf, 2007). Pero en un sentido amplio, compartir un río es más una forma de cooperación obligada que de amenaza, ya que los países que colindan con el río están más interesados en la supervivencia que en fraguar un enfrentamiento (Álvarez Calderón & Rodríguez Beltrán, 2018).

Retomando, entonces, lo anterior y manteniendo la premisa principal de este artículo, la utilización del río Amazonas como proyección geopolítica de Colombia no sugeriría un problema para la seguridad nacional del Estado, sino que, por el contrario, sería uno de los imperativos hidropolíticos¹ para obtener una seguridad multidimensional plena en el país (Álvarez, Moreno, & Gómez, 2018).

1 Obligaciones o deberes del Estado en función del espacio hidrográfico y las reservas de agua dulce para garantizar su conservación y aprovechamiento estratégico (Álvarez, Moreno, & Gómez, 2018, p. 466).

El Amazonas: corredor geoestratégico del eje-oriente en Suramérica

La cuenca del Amazonas y el río Amazonas como tal son el resultado de una diversidad de factores geológicos que, a través del tiempo, dieron origen a uno de los lugares más importantes de la Tierra —en sentido de recursos— y geoestratégicos del continente suramericano.

Durante el Mesozoico, el Amazonas era un río transcontinental cuando existía Gondwana, cuyo flujo atravesaba de oriente a occidente. Sin embargo, en razón a la elevación de la tierra y la formación de los Andes en el Cretácico, este río se convirtió en un mar interior y empezó a volverse más como un pantano, al no tener salida al océano; es así como se originó la cuenca amazónica (Almeida & Soudat, 1982). Con el paso del tiempo y por el bloqueo ocasionado por la cordillera, el río fue encontrando su desembocadura en el océano Atlántico, haciendo que sus aguas fluyeran hacia el oriente. El río Amazonas, como se le conoce hoy, tiene 2,4 millones de años (Río Amazonas, 2018).

No obstante, la cuenca del Amazonas, teniendo en cuenta que cuenca es “el área de terreno que contribuye al flujo de agua en un río o quebrada” (Department of Agriculture, 2018), es el corredor fluvial de mayor injerencia en la región, no solo por el tema del transporte, sino porque también se considera como uno de los corredores estratégicos de mayor importancia. A raíz de los diferentes ríos que posee el mencionado terreno, este abarca desde el Atlántico hasta el Pacífico. La cuenca comprende aproximadamente 36 ríos y 6 países del norte del continente suramericano, con 7000 km de cauce del río, que drena una superficie de 6,14 km², lo que la convierte en la cuenca más grande del mundo, cuya desembocadura arroja 219.000 km³ de agua fresca al Atlántico por segundo y es la fuente del 20 % del agua fresca del planeta (Charity, Dudley, Oliveira, & Stoltz, 2016).

También es importante resaltar que esta región es un eje ambiental de importancia global, ya que es un punto de equilibrio en el que se absorben grandes cantidades de dióxido de carbono, lo cual ayuda a la reducción de los gases de efecto invernadero. Esto genera una merma en los cambios del calentamiento global, lo cual es de vital importancia para el sostenimiento de la vida futura.

Por ser una cuenca tan extensa, los países que la abarcan hacen diferentes usos de su potencial hídrico, pero para este caso se hará énfasis en el uso del río Amazonas, por ser el principal de la cuenca. A continuación, se exponen los casos de Perú y Brasil, primero porque el eje estratégico occidente oriente del río se da en la intersección entre Colombia, Perú y Brasil y, segundo, porque las ciudades portuarias de Iquitos y Manaos se han desarrollado en torno al uso del río como autopista fluvial, lo cual no ocurrió con Leticia; por lo tanto, si se va a hablar de la proyección trioceánica de Colombia, se deben entender las dinámicas desarrolladas en estos dos países para poder hacer un análisis prospectivo para Colombia.

Así, pues, entre 1879 y 1912, la región de la Amazonía, particularmente en Colombia, Perú y Brasil —pero con un mayor impacto en estos dos últimos países—, experimentó una etapa económica conocida como la fiebre del caucho. Durante este periodo, hubo grandes transformaciones sociales y económicas tanto en Iquitos como en Manaos, gracias al árbol *Hevea brasiliensis*, cuya savia era la materia prima para el látex. Este importante elemento llevó al descubrimiento de la vulcanización del caucho y, posteriormente, al invento del neumático para los automóviles (Largo, 2018).

Esta novedad trajo consigo el desarrollo de una empresa muy lucrativa de actividad extractiva para obtener el material de las selvas amazónicas, ya que la industria automotriz se estaba desarrollando con rapidez, haciendo que el precio del caucho aumentara significativamente. Las ciudades puerto de Iquitos y Manaos adquirieron una alta relevancia económica en ambos países por ser un lugar de tránsito obligado para sacar el caucho (Largo, 2018).

Iquitos, por ejemplo, se posicionó como la ciudad principal del negocio del caucho en Perú, en razón a la gran influencia de los diferentes comerciantes e industriales europeos que se asentaron allí. El alto índice de extranjeros llevó a que el desarrollo del puerto surgiera a partir de los avances en la ingeniería naval y el transporte fluvial (Reyes, 2016), lo que mejoró las capacidades y usos del río Amazonas, pues “se incrementaron los barcos a vapor de rueda en su popa de diferente escala y tamaño, que recorrieron el río Amazonas o sus principales afluentes” (Pineda, 2013, p. 59).

Este auge fue el que permitió que el puerto se convirtiera en un importante polo de desarrollo de la región. De acuerdo con Pineda (2013), las comunidades ribereñas cercanas a esta zona tuvieron la posibilidad de generar nuevos comercios y rutas, ya que ofrecían la posibilidad de intercambiar todo tipo de bienes (Reyes, 2016), lo cual generó, a largo plazo, y a pesar del declive del caucho en el Amazonas, que Iquitos se sostuviera en el tiempo.

Por consiguiente, el tema del caucho es fundamental para entender el desarrollo de Iquitos como ciudad eje en el comercio fluvial del Amazonas (Camacho, 2004). Fue a partir de esta bonanza que la élite peruana giró hacia la parte amazónica del país. Esto trajo consigo la inversión extranjera y llevó a la población peruana a migrar hacia Iquitos, haciendo que las dinámicas estatales se enfocaran en el departamento de Loreto, lo cual dio lugar a una red estatal completa, no solo de reconocimiento territorial, sino también de intereses nacionales por tratarse de una fuente económica de gran envergadura (Rojas, 2007).

Hoy en día, Iquitos es una de las ciudades clave para el comercio fluvial, por no decir que es la más importante. Las aguas del río Amazonas, que conectan esta ciudad con otros puertos de la región, facilitan el transporte de mercancías hacia el interior del Perú. Si bien no se ha desarrollado un mercado de exportación por vía fluvial desde el país inca, el puerto de Iquitos posee altas capacidades para recibir buques de alto bordo, mientras que los otros dos puertos de apoyo (Yurimaguas y Puerto Maldonado) cuentan con atraque,

almacenaje y equipos para el movimiento de carga. El transporte fluvial en esta zona se caracteriza por ser de carga y pasajeros, lo que permite la conectividad de las zonas periféricas del Perú (Perú, Ministerio de TCVC, 2000). Sin embargo, a pesar de ser una zona próspera, no alcanza a ser líder nacional en cuanto al desarrollo.

El desarrollo social, medido en términos del Índice de Desarrollo Humano —IDH—, ha mejorado muy discretamente en Loreto entre los años 2003 y 2012 (0,118). En el año 2003 presentó un IDH de 0,280, que en 2010 se incrementó a 0,381 y en 2012 a 0,398. No obstante, el IDH continúa denotando un gran retraso socioeconómico de Loreto con respecto al país y al mundo. El promedio nacional para el año 2012 presentó un índice de 0,506. Loreto ocupa aproximadamente el puesto 17 en el ranking IDH determinado entre todas las regiones del Perú. (Gobierno Regional de Loreto, 2015, p. 35)

Por otro lado, la ciudad de Manaos tuvo un crecimiento similar al de Iquitos a partir de la fiebre del caucho; los altos niveles de desarrollo generados por el *boom* de este material permitieron que la inversión extranjera llegara y se asentara en la zona, lo que permitió que los intereses capitalistas se enfocaran en la región e invirtieran en su desarrollo. En este sentido, “el modo de producción capitalista permea los inicios de la colonización y poblamiento de la Amazonía, cuyo proceso puede ser genéricamente denominado de colonización y dependencia político-económica de la metrópoli” (Salazar, 1992, citado por Pérez, 2017). Por otro lado, debido a la siembra de caucho en el continente africano, Manaos tuvo un estancamiento económico, pero a partir del Decreto 288 de 1967, se reactivó y se convirtió en la Zona Franca de Manaos (ZFM), la cual buscaba “promover el desarrollo económico, político y social de la Amazonía occidental brasileña y las áreas de libre comercio en los Estados que componen la región” (Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración, 2002, p. 9).

En este orden de ideas, Manaos es una ciudad ribereña con unas características muy particulares, pues a partir de la ZFM se concibe como un área de libre comercio de importaciones, exportaciones e incentivos fiscales. Es el único puerto fluvial de la región que está en capacidad de importar y exportar productos, creando dentro de la Amazonia un centro industrial para la ocupación y desarrollo de la región (Almeida, 2011).

A diferencia de Iquitos, en Manaos se ha proyectado y consolidado un desarrollo estable y duradero, que lo ha convertido en el puerto determinante para la entrada de importantes productos a Brasil y a la región. Todo a partir de la instauración de unos polos económicos que son los que le han dado una base socioeconómica sólida a esta zona, al integrar productiva y socialmente la región con el resto del país; estos polos económicos son el industrial, el comercial y el agropecuario (Pellegrino-Correia, 2012). Según los datos de la Superintendencia de la Zona Franca de Manaos, existen 600 complejos industriales de alta tecnología en donde se producen televisores, celulares y motocicletas, entre otros (Suframa, 2018).

Finalmente, Leticia, la capital del departamento del Amazonas, ha tenido una historia compleja que ha sido olvidada por Colombia (Medina, 2017). En el momento de buscar su información auténtica se abre la puerta al abandono institucional y nacional característico de esta región del país. Dicho abandono es debido al proceso histórico que tuvo Leticia para el territorio colombiano, pese a su importancia como ciudad-puerto, pues es la única capital colombiana con puerto sobre el río Amazonas. Para los fines propuestos es importante saber sobre su desarrollo e importancia, lo cual se aborda a continuación (Vergel-Tovar, 2008).

Las dinámicas de Leticia como parte del territorio colombiano son poco conocidas y tampoco hay muchos registros sobre el tema. Para intentar tener una trazabilidad acerca del desarrollo de la ciudad puerto, es importante retomar los diferentes tratados que tuvieron lugar entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Es precisamente en este tiempo que se delimitaron territorios a través de la diplomacia y fue cuando el mapa de Colombia se fue modificando de forma trascendental. Este último factor será determinante para tenerlo en cuenta, ya que marca un punto sobre cómo se identifica el Estado colombiano frente a sus fronteras y sus respectivos territorios, lo que puede ser una variable en el estudio prospectivo de la viabilidad de Colombia como país trioceánico.

La historia y surgimiento de Leticia está ligada enteramente al Putumayo, ya que para la época del *boom* del caucho era este departamento el que recibía la atención nacional. En este sentido, desde 1850 existen relatos y estudios realizados por Agustín Codazzi en esa zona, centrados en las riquezas del Putumayo y la ubicación de su río como una frontera natural, que además otorgaba esperanzas de riqueza a los nuevos colonos. Sin embargo, fueron los aires de riqueza y explotación los que llevaron al propio Codazzi a poner mayor énfasis en la conquista y desarrollo del Putumayo, dejando de lado la parte sur del país —el Amazonas— (Wylie, 2013). Esta circunstancia hizo que parte del territorio nacional se viera desmembrado por las diferentes dinámicas regionales y económicas.

Además, el alto desarrollo de la diplomacia, ocasionado por el ambiente de paz entre los países latinoamericanos, llevó a que el mapa de Colombia se fuese transformando a partir de tratados y acuerdos, creando así la oportunidad de tener control y soberanía sobre territorios que eran prácticamente desconocidos para la unidad nacional. Con respecto a esto, los registros más antiguos de los que se tiene conocimiento sobre Leticia son de la época republicana, en 1867, cuando era un pequeño poblado de Perú, lejano del foco de importancia estatal, a razón del auge del caucho en Iquitos y por su disputa con Brasil por su cercanía con Tabatinga (Cardona, 2016).

No obstante, zonas aledañas a Leticia, como La Pedrera, eran constantemente asediadas por el gobierno peruano, en lo cual incidía bastante la casa comercial Arana, con el propósito de apropiarse del margen sur del río Caquetá para comerciar. Fue así como se dio un enfrentamiento armado en este territorio en 1911, dejando a varios sitios limítrofes con Perú en tensión hasta 1922. Posteriormente, con la firma del Tratado Lozano-

Salomón², el “caserío” conocido como Leticia empezaría a formar parte del territorio colombiano, junto con el resto del Trapecio Amazónico. El mencionado Tratado se ratifica en 1928, pero las tensiones siguen, ya que

... para el Perú, la soberanía nacional se extendía hasta el río Caquetá por el norte, en virtud del hecho que hasta allí llegaba la jurisdicción religiosa del Obispado de Lima, al cual la corona española había asignado el territorio amazónico, con finalidad misionera. Para Colombia, esos territorios, extendidos por el Sur hasta el río Napo y por el Oriente hasta la desembocadura del Caquetá en el río Amazonas, constituyan una herencia histórica del Virreinato de la Nueva Granada, por fuera de la doctrina del Utí Possidetis, de 1810, que tenía vigencia en el mundo hispanoamericano como base para la delimitación territorial de las naciones emergentes de los conflictos que se siguieron al ciclo colonial Ibérico. (Vélez-Rodríguez, 2012, p. 10)

Fue a partir de este choque de intereses que, el 1.^º de septiembre de 1932, Perú optó por entrar en un conflicto bélico llamado el Conflicto de Leticia, para recuperar lo cedido en 1922 (Ortiz-Sotelo, 2018)³. Las causas del conflicto son innumerables para Perú, tanto internas como externas. Por un lado, se encontraban los intereses económicos de la Casa Arana en el trapecio Amazónico, que ya no formaba parte del territorio peruano, por otro, estaba la voluntad del gobierno de conseguir una mayor favorabilidad entre la población civil (Atehortúa-Cruz, 2007). Aproximadamente un año después, luego de batallas de ambos frentes, con la exaltación del sentido patrio por parte del lado colombiano hacia esta región recóndita del sur del país, la guerra finalizó con un armisticio, y se dio al traste con la diplomacia debido a los vejámenes del conflicto del lado peruano. Solo a partir del Protocolo de Río de Janeiro, el 19 de junio de 1934, se recupera Leticia y el Trapecio Amazónico para Colombia (Atehortúa-Cruz, 2007).

Es así como Leticia pasó de ser de un caserío olvidado por Perú, a ocupar la posición más importante para este último y para Colombia. Entonces, los conflictos internos en Colombia se recrudecieron y la amenaza internacional se desvaneció casi por completo, lo que llevó, prácticamente, al olvido de la ciudad capital del departamento del Amazonas. La zona central del país se fue olvidando de Leticia, a pesar de que científicos y comerciantes tenían gran interés por esta. Su cercanía con Tabatinga hizo que, a pesar de la distancia con Bogotá, Leticia creciera lentamente, pero no a la par con Iquitos y Manaos; si bien el tránsito por el río Amazonas la convierte en un puerto casi obligado de paso, la falta de visión nacional hacia el crecimiento de este puerto ha hecho que se pierda gran parte del capital económico que se podría o se puede explotar en la región.

- 2 Este tratado delimitó, en parte, las fronteras que Colombia tenía con Perú, además, en él se reconoce como perteneciente a Colombia el territorio que hoy es Leticia y se le conceden a Perú unos territorios que se encontraban en disputa con el Ecuador desde la firma del Tratado Muñoz Vernaza-Suárez en 1906.
- 3 Si bien este artículo no indaga a profundidad sobre la historia del territorio amazónico en Colombia, sí es importante resaltar estos apartes históricos, ya que permiten conocer los contextos sociales, políticos y económicos de esta región, lo que hace posible contar con un sustento teórico y conceptual para realizar el análisis de qué tan probable es que Colombia sea un Estado trioceánico.

Empero, Leticia ha tenido un crecimiento importante gracias al auge del ecoturismo: la atracción por lo exótico y lo desconocido lleva a este rincón del país a investigadores, médicos y aventureros del mundo entero a probar, aprender y conocer las maravillas naturales de esta interesante región.

En igual sentido, un factor de atracción fundamental para esta región es el río Amazonas, ya que este la atraviesa y genera otros tipos de economías, tanto legales como ilegales. En principio, se debe tener en cuenta que el río es la autopista utilizada por comerciantes, pobladores y la sociedad en general de la zona, además, a lo largo de la cuenca se encuentra una variedad de recursos naturales, como el agua y la madera, así como también los hidrocarburos⁴ y la minería⁵. Los productos mineros que se extraen son bauxita, cadmio, cobalto, cobre, estaño, hierro, molibdeno, niobio, tántalo, pirita, plomo, titanio, tungsteno, uranio, zinc, arenas silíceas, calizas, diatomitas, evaporitas, yeso, feldespato, fosfatos, mica, petróleo, carbón, asfaltita, asfalto líquido, arcilla, mármol y coltán (Corpoamazonia, 2019; Riveros-Naranjo, 2013).

Ahora bien, como se puede observar, esta región es de gran riqueza en recursos, por lo cual es una zona de interés para los diferentes Estados. Hay que resaltar que los recursos mineros son tan solo una porción de lo que se encuentra allí, ya que también existe un sinnúmero de plantas que suelen ser utilizadas para hacer patentes científicas y para la exportación de sus diferentes y exóticos frutos, así como también la madera, cuyos componentes, por medio de procedimientos químicos, pueden generar compuestos de mayor valor (Muñoz-Parra, 2016). Todos estos recursos se pueden encontrar en diferentes zonas de la cuenca amazónica y, en la mayoría de los casos, es mediante los ríos que los encuentran y como se transportan.

Considerando lo anterior y partiendo del punto de que Colombia y sus vecinos tienen unas fronteras porosas, es importante hacer mención del tema del tráfico ilegal de recursos de la región. Esta última posee riquezas incommensurables, teniendo presente que aún faltan por ser explotadas en mayor medida. Sin embargo, esta característica especial hace que también surjan las economías ilegales a partir de estos recursos, ya que no hay un control estatal reglamentado y los grupos ilegales encuentran allí una oportunidad económica.

La economía ilícita se compone de tres productos que son los que mayores prebendas dejan en la región: el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de madera. El narcotráfico es el tema imperioso en la región, ya que trae altas ganancias, se puede producir en cualquier parte y genera gran rentabilidad. En igual sentido, los ríos por los que se conec-

⁴ El principal potencial de la cuenca Vaupés-Amazonas se limita a yacimientos de *shale gas* o gas natural (García-González, Cruz-Guevara, & Mier-Umaña, 2013).

⁵ “Cabe resaltar que en la zona sur de la región amazónica colombiana hay yacimientos y depósitos de recursos minerales que se denominan recursos identificados. En la región se localizan dos de las trece cuencas sedimentarias en las cuales se encuentra dividido el país, para propósitos de exploración y explotación de hidrocarburos. La cuenca, denominada Amazonas, ha sido poco o nada explorada” (Corpoamazonia, 2019).

tan las diferentes zonas, así como también la facilidad de la Triple Frontera, permiten que este negocio sea lucrativo, y el factor de los cultivos, que se encuentran tanto en Colombia como en Perú, hace que haya una ventaja comparativa en cuanto a la producción y distribución de la coca (Malamud, 2017).

Otro de los productos es la minería ilegal: en razón de la riqueza de la cuenca del Amazonas, se pueden encontrar diferentes tipos de metales y piedras preciosas, pero lo que tiene mayor rentabilidad es el oro (InfoAmazonía, 2018). La exportación de oro ilícito tanto en Colombia como en Perú se ha incrementado en los últimos años, por la gran demanda de este y los bajos precios del petróleo (Wyss & Gurney, 2018). Esta situación ha generado que en la región la minería ilegal aumente día tras día y en gran medida, y que hoy supere la exportación de cocaína, ya que produce al año 2400 millones de dólares, es decir, tres veces más que la cocaína y con un alcance de comercialización mejor, distribuyéndose en las grandes ciudades de Europa y Estados Unidos. El oro, a diferencia de la coca, no es ilegal, y como no existen los controles necesarios para saber su procedencia su comercialización es más fácil (Malamud, 2017).

Finalmente, la tala de árboles y, por consiguiente, el tráfico de madera, es el último de los productos del comercio ilícito. Esto se debe a la falta de control maderero en el sur del país. Si bien Colombia depende de la importación de madera, se estima que un 47 % de la que se vende a nivel nacional es ilegal, llegándose a comercializar 2,5 millones de metros cuadrados anuales (Calle & Flórez, 2018).

Es así como los recursos explotados, legales e ilegales, utilizan el río Amazonas y sus diferentes vertientes para transportar y hacer que se mueva la economía en una zona que no posee grandes impulsos financieros. Esto hace que la población sea dependiente tanto de la economía verde —ecoturismo y la explotación responsable de recursos— como de la ilegal (Malamud, 2017). Por otro lado, la falta de vías terrestres del territorio nacional ha hecho que el comercio, así como sus pobladores, se valgan del río para establecer canales de comunicación y transporte. También se ha producido un enlace comercial con Brasil debido a los límites del río, y un enclave en la frontera tripartita con Perú, todo lo cual hace que Leticia funcione como puerto de transporte altamente utilizado (Medina, 2017).

En este sentido, estas tres ciudades puerto (Iquitos, Manaos y Leticia) han tenido un crecimiento importante frente a lo que eran a finales del siglo XIX. Por un lado, Iquitos y Manaos han demostrado un amplio desarrollo a partir de las dinámicas comerciales, por otro, Leticia, a pesar de no tener la atención de todos los mecanismos nacionales para su progreso, ha generado un impacto para Colombia en la forma en la que ha avanzado a partir del ecoturismo, la pesca y la exportación de frutas exóticas. De esta forma, las ciudades puerto se han valido del río, principalmente, para crecer y expandirse, como también para aportar a sus diferentes naciones en el ámbito comercial, cultural y turístico.

Es así como el río Amazonas desempeña un papel fundamental en el impulso de las ciudades puerto, permitiendo el desarrollo y crecimiento económico, así como también una serie de alianzas que, mediante el río, son posibles y permiten que estas zonas —que

se creería pueden ser aisladas y sin conexiones— sean eficientes y dinámicas a la hora de entablar relaciones comerciales (Torrijos-Rivera & Pérez-Carvajal, 2013).

En este sentido, se rescata la dependencia y utilidad que tiene el río en la región y lo próspero que es para esta zona tener una puerta mucho más amplia hacia el desarrollo —desde la perspectiva colombiana— al proyectar un mayor interés hacia la salida al Atlántico sur.

Proyección colombiana por el río

En este orden de ideas es necesario que para poder hablar del río Amazonas en Colombia, se hable del Trapecio Amazónico. Este último es el extremo ubicado al sur del país, con forma de trapecio, que divide la frontera entre Perú y Brasil. Se puede decir también que este territorio fue lo que quedó luego de la firma de los tratados de Vásquez Cobo-Martins, en 1907; Suárez-Muñoz Vernaza, en 1916; Lozano-Salomón, en 1922; García Ortiz-Mangabeira, en 1928; y el Protocolo de Río de Janeiro, en 1934, que modificó por completo el territorio colombiano (Angarita-Navarrete, 2016). Por tanto, al Trapecio Amazónico lo destaca la capital del departamento del Amazonas, Leticia, en razón de su ubicación estratégica a orillas del río Amazonas, que le permitiría un desarrollo a la par de ciudades como Manaos o Iquitos, si hubiese una voluntad política nacional para hacerlo (pero que hoy es inexisteiente). Empero es a través del río que se obtendrá la voluntad política.

Al sur del río Guaviare y al oriente del meridiano de Bogotá yace una vasta extensión de territorio colombiano, 400.000 kilómetros cuadrados de tierras feraces, cruzadas por numerosos ríos navegables, nueva Mesopotamia que ostenta múltiples praderías, sabanas extensas cubiertas de pastos naturales suculentos, libres de inundaciones y de pantanos como los que caracterizan a nuestros llanos orientales, circunstancia feliz que excluye el mosquito de aquellas zonas privilegiadas y las presenta en condiciones más favorables para una colonización activa y floreciente. Esta sección del territorio patrio, cuya superficie es mucho mayor que la del reino de Italia, que holgadamente puede sustentar 50.000.000 de habitantes, comprende la Comisaría del Vaupés, la mitad del Caquetá y toda la Intendencia del Amazonas. La región descrita, carece de facilidades para aprovechar los puertos del Caribe y del Pacífico que hoy alimentan el comercio vivificador del país; nuestro erizado sistema orográfico y las enormes distancias interponen una valla económica infranqueable a la salida de este territorio por las vías del occidente y del norte. En compensación debemos a la inteligencia y acertada actuación de Fabio Lozano Torrijos el corredor de Leticia, que nos abre franca e inmediata comunicación hacia el Atlántico por el sudeste. Este pasaje amazónico desembotella admirablemente el rico y extenso territorio en que nos ocupamos; la carencia de tan fácil y eficaz vía de comunicación dejaría aquella comarca en desamparo insopportable, angustiosa situación mediterránea que la sometería a depresivos y onerosos tributos extranjeros, que siempre embarazan el progreso material de los pueblos independientes. (Armenta, 1935/1979, p. 7)

Una vez analizada esta extensa pero necesaria cita de Antonio Armenta, escrita en 1935, podemos observar la vitalidad de involucrar el Amazonas, en especial, Leticia y su corredor fluvial, a la vida y cotidianidad del país para no solo el desarrollo local, sino también nacional. Desde 1935, se encuentra una visión e intención clara, pero no realizada, de comunicar Colombia hacia el Atlántico sur a partir del tramo que se tiene del río Amazonas, es decir, utilizar la navegabilidad del río para llegar hacia el Atlántico y abrir las puertas al comercio y al desarrollo del sur del territorio nacional mediante esta vía fluvial.

Por consiguiente, el trifinio amazónico (la intersección de tres fronteras terrestres estatales) es una de las fronteras más peculiares que tiene Colombia⁶ (Benedetti, 2014). Esta característica geopolítica es un enclave de diferentes posibilidades, tanto positivas como negativas y por eso se debe profundizar en la implicación del Trapecio Amazónico en cuanto a la conformación de sus fronteras, así como también de las dinámicas que surgen entre estas naciones a partir del trifinio.

Es pertinente recordar que en América Latina las fronteras tienden a ser supremamente porosas, a diferencia de Europa, donde las fronteras tienden a ser periféricas, pero forman un conjunto social. En América Latina las fronteras tienden a ser poco desarrolladas y descuidadas por la estatalidad del país, cuya población circundante tiende a estar en pobreza extrema. Esto genera unas dinámicas de caldo de cultivo para la ilegalidad, ya que parte de las fronteras del sur del continente se encuentran justo en su corazón geográfico, lo cual facilita la proliferación de economías ilegales (Rojas, 2016).

En este mismo aspecto, la rigurosidad aduanera tiene una serie de limitantes, empezando por la extensión territorial de algunas fronteras, así como también por las diversas formas de crimen transnacional que opera en la región. Vale resaltar, al respecto, que la geografía juega un papel determinante, empezando por la característica de la conformación de las fronteras, que son en ocasiones políticas y no naturales, es decir, la división de territorios en su mayoría ocurrió por factores diplomáticos y no por barreras naturales como en ciertos casos europeos (Ranfla-González, 1984). Por lo tanto, en el Trapecio Amazónico, lo que ha mantenido cohesionada a la población, a pesar de sus diferentes nacionalidades, ha sido el río y esto ha influenciado los factores del comportamiento de la comunidad en la zona, el compartir recursos y el desarrollo alternativo que se ha dado.

Debido a la cercanía y complementariedad tanto histórica como cultural, Leticia y Tabatinga reciben el nombre de ciudades hermanas (Vergel-Tovar, 2008). Este concepto se debe resaltar dentro de las dinámicas de la frontera, ya que permite que ambas se comporten como una sola ciudad, teniendo presente que aquello que las une y divide es el río, y que su existencia misma surge a partir de su par, al otro lado de la frontera, así como por el alto flujo transfronterizo que se observa (Steinman, 2002). Por otro lado, también se

6 El país, sin embargo, tiene dos fronteras más de este tipo: la piedra del Cocuy, donde convergen Brasil, Venezuela y Colombia, y el Güepí, unión entre Ecuador, Perú y Colombia.

resalta que esta cercanía genera un problema de seguridad fronterizo, ya que no existe un control claro en el territorio y, de acuerdo con la teoría del realismo clásico de las relaciones internacionales para la seguridad, esto puede ser un factor de intromisión del gobierno brasileño en las dinámicas de Leticia, lo cual conllevaría, en un futuro no muy lejano, la apropiación de este territorio por la falta del interés de Colombia (Armenta, 1935/1979).

Como un segundo factor, se encuentra la lucha contra la ilegalidad, ya que la porosidad (tanto como las particularidades sociales y económicas en los puntos limítrofes de los países mencionados) crea el espacio perfecto para estas prácticas:

Las zonas fluviales de la Amazonia vienen siendo utilizadas desde hace ya algún tiempo para el tránsito y salida no solo de los narcóticos producidos en Colombia que van a parar a Europa y África por medio de rutas que parten desde diferentes lugares del océano Atlántico (Se estima que cerca del 40 % de la cocaína colombiana sale por el océano Atlántico, mientras que solo un 25 % sale por el mar Caribe) (Moreano, 2005, p. 180) (...) además el río Amazonas y la cuenca hidrográfica que la rodea son utilizados como una de las principales rutas para proveer a los narcotraficantes colombianos los precursores químicos para la elaboración de drogas psicotrópicas como la cocaína (Moreano, 2005, p. 184). En general, la interacción del mundo del narcotráfico se hace sentir en la zona con la presencia de las distintas problemáticas ligadas, es decir: tráfico de precursores químicos, pasta básica, clorhidrato de cocaína, lavado de activos, consumo, transacciones de cocaína por armas, entre otros (Ramírez, 2006, p. 19). El conflicto colombiano y sus respectivos actores armados ilegales han sido, en especial, el caldo de cultivo de esta problemática que ha aprovechado las condiciones que ofrece el entorno de la zona para llevar a cabo aquellos hechos ilícitos con mayor facilidad. Los grupos armados son uno de los principales actores que promueven y auspician el narcotráfico, bien sea como fuente de ingreso para sus fines delincuenciales o para la transacción y adquisición directa de armamento y municiones. (Tarapués-Sandino, 2012, p. 430)

En razón de lo anterior, la cooperación entre las autoridades de Brasil, Perú y Colombia en la zona es de carácter militar y policial, tratando de frenar el avance de grupos subversivos y bandas criminales mediante el apoyo mutuo para evitar un escalamiento de la inseguridad. Esto demuestra que dentro de este territorio la cooperación y el trabajo conjunto de los organismos de seguridad de los Estados implicados es vital para mantener un orden, ya que de esta misma forma operan los grupos y bandas criminales en la región. Por consiguiente, se puede constatar que, si bien cada Estado en su territorio determinado funciona de forma independiente, se necesitan los unos a los otros para garantizar un control y una soberanía territorial, no tanto entre ellos, pero sí frente a la criminalidad.

Finalmente, la hidropolítica del río Amazonas es el medio para establecer una zona estratégica tanto de diversidad como de cultura y, más importante aún, de conexión bioceánica. Es por este motivo que los países adyacentes al río Amazonas han desarrollado una serie de instrumentos diplomáticos para el uso y manejo del río, en virtud de lo que

este significa, tanto por su potencial geoestratégico y geopolítico como social para las diferentes comunidades que lo utilizan.

Si bien los ríos no tienen dueño y pertenecen a determinados Estados de acuerdo con el tramo que toque las fronteras, y dado que lo que pase en alguna parte del río va a afectar en conjunto al resto del afluente, es necesario pensar en conjunto. Por esto, el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), firmado en 1978 por los ocho países de la cuenca amazónica, establece la promoción del desarrollo integral y armónico de la cuenca del río, con el propósito de mejorar la conservación y utilización de los recursos de la cuenca, así como también la calidad de vida de sus habitantes (OEA, 1993).

Como se puede observar, existe una hidropolítica clara que se utiliza y es tenida en cuenta respecto de la utilización del Amazonas, así como también de los diferentes ríos de su cuenca. Por otra parte, se demuestra, a partir del TCA, que la navegabilidad en el Amazonas está a cargo de los países que tienen uso de este propiamente y no de la cuenca, resaltando que son los Estados los que pueden llevar a cabo actividades comerciales, de protección y de uso del río.

Lo expuesto se relaciona tanto con lo estipulado en la OTCA (Organización del Tratado de Cooperación del Amazonas) como con lo estipulado en el TCA, que parte del punto de la utilización y navegación del río: siempre y cuando el país tenga injerencia directa sobre este, puede navegar de extremo a extremo. Así se prevé que, en caso de que Colombia quisiera exportar o importar productos provenientes de regiones cerca de la desembocadura del Amazonas, lo podría hacer en razón a los acuerdos ya existentes sobre su navegabilidad.

Conclusiones

El presente trabajo hace un pronóstico prospectivo de la importancia que Colombia le debe dar al Trapecio Amazónico para implementar su voluntad política y sus capacidades económicas sobre el tramo que se tiene del río Amazonas. Se presentó no solo la evolución de las ciudades más importantes directamente relacionadas con el río Amazonas de Perú y Brasil (en cuanto a sus niveles de desarrollo gracias al uso provechoso de este corredor fluvial), sino también cómo le falta a Colombia una estrategia hídrica nacional que permita desarrollar acciones políticas por parte del Estado con el fin de emplear este recurso para impulsar el desarrollo nacional, el control territorial y la potencia regional en el comercio.

Con respecto a la pregunta inicial: ¿permitiría el río Amazonas como corredor estratégico proyectar a Colombia geopolíticamente en el Atlántico sur?, se puede determinar que la respuesta es afirmativa, ya que a partir de lo mencionado durante el presente artículo, en específico, en el apartado “El Amazonas: corredor geoestratégico del eje occidente-oriente en Suramérica”, se ponen de manifiesto las posibilidades, con su puerto en Leticia, como punto medio en el canal bioceánico nororiental del Amazonas, proyecto

que se encuentra planteado desde el 2014 (Unasur, 2010). En el mismo sentido, lo referido concuerda con lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo desde el 2010:

El mejoramiento de las condiciones de accesibilidad e intermodalidad, en el cual se establece que mediante mecanismos de cooperación internacional y en el marco de iniciativas de integración regional como IIRSA, se definirá a través de estudios, el potencial y vocación comercial de las principales cuencas hidrográficas, con el fin de establecer las acciones que las consoliden como corredores alternativos de movilización. (Departamento Nacional de Planeación, 2011)

En este orden de ideas, no solo sería importante para la región, sino también para el país, por el creciente tránsito de barcos mercantes que pasarían por esta zona. Asimismo, se destaca cómo el Amazonas es navegable todo el año y, debido a su red hídrica, permitiría que diferentes productos fueran importados y exportados del sur del país, generando un crecimiento económico nacional.

Por otro lado, al leer el artículo surge el interrogante paralelo de por qué entrar a fortalecer el comercio en una zona donde prácticamente no se tienen instalaciones e indumentaria en lugar de mejorar puertos como el de Urabá o Buenaventura. La respuesta es sencilla: los puertos de Colombia se deben mirar como un todo y mejorarlos todos. En efecto, la importancia portuaria debe ser integral, ya que todo forma parte del sistema multimodal de transporte que vincula los puertos del Pacífico con los de Brasil. A esta integralidad se le denomina una zona de influencia destacada, ya que une la región del norte del continente suramericano (el océano Pacífico y el Atlántico) a través del Amazonas (Vela-Meléndez, 2011).

Así las cosas, el Atlántico sur es otra salida al océano que se debe explorar. Por el simple hecho de tenerla, se deben invertir recursos para explotar de forma sostenible sus capacidades económicas y sociales, ya que, si no se hace desde el interés nacional, a futuro van a ser otros, externos a Colombia, quienes lo comiencen a utilizar. Es sencillo, cada Estado debe utilizar todos los recursos que tenga a su alcance para mejorar sus condiciones y capacidades. Colombia, durante mucho tiempo ha ignorado las múltiples capacidades que posee por causa del conflicto armado interno, pero es a partir de la exploración de estas ventajas geográficas que se tienen que se puede llevar desarrollo, economía y progreso a una zona del país que ha sido considerada por años como un espacio vacío. Este último ha sido llenado por grupos insurgentes, así como también por bandas criminales que, en su momento, hicieron uso de estos ríos en formas que el Estado jamás ha hecho hasta la actualidad (Álvarez, Moreno, & Gómez, 2018). No obstante, es momento de que la población civil colombiana se apropie de las ventajas que el territorio tiene para ofrecerle y, en esta misma línea, el Estado.

Si el Estado colombiano no proyecta el potencial que posee en principio Leticia, Puerto Nariño y Nazaret, se podría estar generando una conciencia regional de que a Colombia no le interesa tener el control ni aprovechar los recursos de esta zona, lo que podría despertar un interés tanto en Perú como en Brasil en tomarse, por medios diplomáticos,

ticos, estas zonas. Para evitar que esto ocurra, aparte de incrementar la voluntad política, se propone reivindicar la soberanía nacional de estos territorios a partir de la cooperación entre Perú y Brasil en tratados bilaterales comerciales, teniendo en cuenta el comportamiento de este trifinio: “un territorio sobre el cual pueden ejercer el poder y crear nexos de aceptación e identidad” (Pimiento, 2003, p. 89).

A manera de cierre, se puede decir, entonces, que si bien Colombia tiene el potencial de ser un Estado bioceánico, siempre y cuando tenga “la capacidad de conectar ambos espacios marítimos a través de corredores bioceánicos” (Álvarez, 2016, citado por Álvarez, Moreno, & Gómez, 2018, p. 468), también lo tiene para ser un país trioceánico: aunque sus fronteras marítimas llegan a dos océanos, son tres los espacios geográficos marítimos (Atlántico norte, el océano Pacífico y el Atlántico sur) que puede llegar a cubrir, gracias al aprovechamiento del río Amazonas. En geopolítica es un asunto de perspectiva, y Colombia, en este momento, posee los elementos y posibilidades para proyectarse como una potencia marítima regional, siempre y cuando robustezca sus puertos y exista una voluntad política imponente para desarrollar el comercio nacional e internacional por medio de ellos.

Agradecimientos

La autora desea agradecer al profesor Carlos Álvarez Calderón por su orientación y comentarios para el desarrollo de esta investigación, así como a la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, pues sus docentes y las materias por ellos impartidas sirvieron de inspiración para la realización de esta investigación.

Declaración de divulgación

La autora declara que no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con el artículo.

Financiamiento

La autora no declara fuente de financiamiento para la realización de este artículo.

Sobre la autora

Valeria Rodríguez Ardila es politóloga y candidata a magíster en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Sus áreas de investigación son seguridad, defensa y geopolítica. Actualmente se desempeña como investigadora principal de la Línea de Politología, del Centro de Estudios Históricos del Ejército del Comando de Educación y Doctrina.

<https://orcid.org/0000-0002-1511-1024> - Contacto: valeria.rodriguez@esdegu.edu.co

Referencias

- Álvarez Calderón, C. E., & Rodríguez Beltrán, C. A. (2018). Ecosistemas criminales. *Revista Científica General José María Córdova*, 16(24), 1-30. <https://doi.org/10.21830/19006586.352>
- Adeloye, A. (2009). Rivers and human development. In J. C. Dooge (Ed.), *Fresh surface water* (Vol. 3, pp. 116-141). Oxford: Unesco.
- Almeida, G., & Sourdat, M. (1982). *Génesis geológica y morfológica de la Amazonía, sus implicaciones actuales para el desarrollo de la región*. Conferencia presentada en el Programa de Apoyo a las Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana, Iquitos. Recuperada de <http://bit.ly/2lyKDTy>
- Almeida, S. (2011). *ZFM: negocios e inversión en la Amazonía*. Recuperado de <http://www.investexportbrasil.gov.br/sites/default/files/publicacoes/PSCI/SuframaEquador112011.pdf>
- Álvarez, C., Moreno, A., & Gómez, J. C. (2018). Respice Aqua Vitae: hacia una hidropolítica nacional. In E. Ramírez, & C. Álvarez, *Escenarios y desafíos de la seguridad multidimensional en Colombia* (pp. 387-478). Bogotá: Escuela Superior de Guerra.
- Angarita-Navarrete, J. A. (2016, enero 29). Colombia ha perdido el 54 % de su territorio a través de la historia. *Las dos Orillas*. Recuperado de <https://www.las2orillas.co/colombia-ha-perdido-54-territorio-traves-la-historia/>
- Armenta, A. L. (1935/1979). El Trapecio Amazónico colombiano localización de Leticia. *Sociedad Geográfica de Colombia*, 114(34), 1-8. Recuperado de https://www.sogeocol.edu.co/documentos/el_trap_amaz_col.pdf
- Atehortúa-Cruz, A. L. (2007). El Conflicto Colombo-Peruano: apuntes acerca de su desarrollo e importancia histórica. *Historia y Espacio*, 3(29). <https://doi.org/10.25100/hye.v3i29.1664>
- Benedetti, A. (2014). Espacios fronterizos del sur sudamericano. Propuesta de un modelo conceptual para su estudio. *Estudios Fronterizos*, 15(29), 11-47. <https://bit.ly/2lxyjmE>
- Cabrera, F. C. (2005). Categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento en la investigación cualitativa. *Theoria*, 14(1), 61-71.
- Calle, H., & Flórez, J. (2018). *Así funciona el tráfico de madera en Colombia*. Recuperado de <https://es.mongabay.com/2018/10/trafico-de-madera-en-colombia-amazonia-bosques/>
- Camacho, R. (2004). Novelistas y etnógrafos en el infierno de la Casa Arana. *Boletín de Historia y Antigüedades*, 826 (pp. 485-522). Bogotá: Academia Colombiana de Historia.
- Cardona, A. (2016, marzo 27). *Historia y región*. Recuperado de <http://historiayregion.blogspot.com/2016/03/la-ocupacion-peruana-de-puerto-leticia.html>
- Charity, S., Dudley, N., Oliveira, D., & Stolton, S. (2016). *Living Amazon: A regional approach to conservation in the Amazon*. Brasilia: WWF.
- Corpoamazonia. (2019). *Minería*. Recuperado de http://www.corpoamazonia.gov.co/region/Jur_mineria.htm
- Crapivinsky, J. C., & Ortega, E. (2002). *Amazonia: el corredor biocomercial del futuro*. San José: IICA.
- Dávila-Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. *Laurus*, 12, 180-205.
- Departamento Nacional de Planeación. (2011). *Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014*. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.
- Department of Agriculture. (2018). *El agua y las cuencas hidrográficas*. Recuperado de http://agricultura.uprm.edu/escorrentia/pdf/el_agua_y_las_cuencas_hidrograficas.pdf
- Duvauchelle, M. (1996). *La geopolítica y la oceanopolítica*. Recuperado de <https://revistamarina.cl/revisitas/1996/6/duvauchelle.pdf>

- García-González, M., Cruz-Guevara, L., & Mier-Umaña, R. (2013). Prospectividad de hidrocarburos en la cuenca Vaupés-Amazonas, Colombia. *Boletín de Geología*, 35(2), 15-29. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-02832013000200001
- Gobierno Regional de Loreto. (2015). *Plan de desarrollo regional concertado: "Loreto al 2021"*. Perú: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Definiciones de los enfoques cualitativo y cuantitativo, sus similitudes y diferencias. En R. Hernández-Sampieri, C. Fernández, & M. Baptista (Eds.), *Metodología de la investigación* (pp. 2-22). México D.F.: Mc Graw Hill.
- Ideam. (2013). Zonificación y codificación de unidades hidrográficas e hidrológicas de Colombia. Recuperado de <http://bit.ly/2lyI8Ra>
- InfoAmazonía. (2018, diciembre 10). Amazonia, saqueada por la minería ilegal. *El Espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/amazonia-saqueada-por-la-mineria-ilegal-articulo-828347>
- Invías. (2010). *Proyectos de navegabilidad en desarrollo*. Recuperado de <http://bit.ly/2jWp2Ee>
- Largo, A. (2018). *La fiebre del caucho*. Recuperado de <https://archivoshistoria.com/la-fiebre-del-caucho/>
- Malamud, M. (2018). Economías ilícitas en la Amazonía: un desafío para la gobernabilidad en Perú, Brasil y Colombia. *Globalización, Competitividad y Gobernabilidad*, 12(1), 34-47. 10.3232/GCG.2018.V12.N1.01
- Martínez, A. (2014). *Qué es la hidropolítica*. Recuperado de <https://www.iagua.es/blogs/andres-martinez/que-es-la-hidropolitica>
- Medina, M. (2017). *Leticia es tan importante como San Andrés, es el puerto de Colombia y no tiene la relevancia que debería tener*. Recuperado de <http://ieu.unal.edu.co/rssieu/item/leticia-es-tan-importante-como-san-andres-es-el-puerto-de-colombia-y-no-tiene-la-relevancia-que-deberia-tener-2>
- Muñoz-Parra, J. (2016). *La Amazonía colombiana y su importancia estratégica a nivel internacional*. Recuperado de <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/15482/Mu%C3%B1ozParraJessicaAndrea2016.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- OEA. (1993). *Programas Binacionales de Cooperación Fronteriza - Un Modelo para el Desarrollo de la Amazonía*. Recuperado de <https://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea08b/begin.htm#Contents>
- Ortiz-Sotelo, J. (2018). Reseña del libro *El conflicto de Leticia (1932-1933) y los ejércitos de Perú y Colombia*, de C. C. Arango. *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, 45(2), 285- 289.
- Pellegrino Correa, P. G. (2012). Regionalismo e (in)seguridad en la Amazonía transnacional: proyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y potencial de conflictos. *Revista Científica General José María Cárdenas*, 10(10), 163-174. <https://doi.org/10.21830/19006586.232>
- Pérez, G. (2017). Formación de una nueva clase obrera en regiones con polos de desarrollo: Manaos (Amazonía, Brasil) y Chubut (Patagonia, Argentina) en las décadas de 1960 y 1970. *Apuntes: Revista de Ciencias Sociales*, 44(80), 131-158. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0252-18652017000100005
- Perú, Ministerio de TCVC. (2000). *Transporte fluvial y vías navegables en el Perú*. Recuperado de <http://www4.congreso.gob.pe/historico/cip/materiales/rembarcaciones/doc1.pdf>
- Pimiento, I. (2003). Geopolítica, hecho fronterizo y organización espacial del área metropolitana binacional. *Perspectiva Geográfica*, 9, 79-96.
- Pineda, R. (2013). El río Amazonas: un gigante indomado. Una mirada hacia su historia contemporánea 1500-2010. *Boletín Cultural y Geográfico*, 47(84), pp. 37-66.
- Ranfla-González, A. (1984). Frontera política y espacio fronterizo. *Estudios Fronterizos*, 1(4-5), 47-68.

- Reyes, D. (2016). *Estudio de caso: la influencia de la Casa Arana en el conflicto colombo-peruano de 1932* (Trabajo de grado). Universidad del Rosario, Bogotá, D.C.
- Río Amazonas. (2018). In *GeoEnciclopedia*. Recuperado de <http://www.geoenciclopedia.com/rio-amazonas/>
- Riveros-Naranjo, B. (2013). *El "oro azul" en Colombia: su ubicación, explotación, legislación y comercialización internacional* (Tesis de pregrado). Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá.
- Rojas, E. S. (2016). *Las fronteras "porosas" de Sudamérica: ¿líneas divisorias o áreas de cooperación*. Recuperado de http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA39-2016_Fronteras_Porosas_Sudamerica_ESRD.pdf
- Rojas, J. (2007, septiembre 23). *Fiebre del caucho en Perú*. Recuperado de <http://peruamazonico.blogspot.com/2007/09/fiebre-del-caucho-en-el-per.html>
- Salas, L. G. (2010). Corredores y territorios estratégicos del conflicto armado colombiano: una prioridad por territorializar en la geopolítica de los actores armados. *Perspectiva Geográfica: Revista del Programa de Estudios de Posgrado en Geografía*, 15, 9-36.
- Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración. (2002). *Identificación de oportunidades comerciales para productos ecuatorianos en Manaos y su área de influencia*. Recuperado de [http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/acd6175bf7a37c4f03256ced005f12af/11ce793058fd461d03256ca-00042f182/\\$FILE/13-02.pdf](http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/acd6175bf7a37c4f03256ced005f12af/11ce793058fd461d03256ca-00042f182/$FILE/13-02.pdf)
- Steinman, R. (2002). *A geografia das cidades de fronteira: um estudo de caso de Tabatinga (Brasil) e Leticia (Colômbia)* (Tesis de maestría). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
- Suframa. (2018). *Zona Libre de Manaus*. Recuperado de <http://www.suframa.gov.br/invest/es-zona-franca-de-manaus.cfm>
- Tarapués-Sandino, D. (2012). Colombia y Brasil en la lucha contra el crimen transnacional: una revisión a sus posturas, acciones y estrategia de seguridad. En E. Pastrana, S. Jost, & D. Flemes (Eds.), *Colombia y Brasil: socios estratégicos en la construcción de Suramérica?* (pp. 423-453). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Torrijos Rivera, V., & Pérez Carvajal, A. (2014). Geopolítica sistémica aplicada: un modelo para entender las dinámicas cambiantes del sistema internacional. *Revista Científica General José María Córdova*, 12(14), 35-56. <https://doi.org/10.21830/19006586.55>
- Torrijos Rivera, V., & Pérez Carvajal, A. (2013). Repensando la teoría de la polaridad. Una aproximación al papel de Colombia en América Latina. *Revista Científica General José María Córdova*, 11(11), 29-66. <https://doi.org/10.21830/19006586.203>
- Vela-Meléndez, L. (2011). *Anatomía económica del subespacio del norte, base de la macrorregión norte*. Recuperado de <https://core.ac.uk/download/pdf/16369326.pdf>
- Vélez-Rodríguez, R. (2012). *La Guerra entre Colombia y Perú: el papel desempeñado por el General Amadeo Rodríguez*. Recuperado de <http://www.ecsbdefesa.com.br/defesa/fts/GCP.pdf>
- Vergel-Tovar, E. (2008). Ciudades gemelas en fronteras amazónicas: estudio de caso de Leticia y Tabatinga. *Cuadernos de Vivienda y Urbanismo*, 1(2), 348-393.
- Waterbury, J. (1997). *Hydropolitics of the Nile Valley*. New York: Syracuse University Press.
- Wolf, A. (2007). Shared waters: Conflict and cooperation. *Annual Review of Environment and Resources*, 32, 241-269. Recuperado de <https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.energy.32.041006.101434>
- Wylie, L. (2013). Green mansions to green hell . In L. Wylie, *Colombia's forgotten frontier* (pp. 46-74). Liverpool: Liverpool University Press.
- Wyss, J., & Gurney, K. (2018, enero 16). El oro sucio es la nueva cocaína en Colombia, y también deja un rastro de sangre. *El Nuevo Herald*. Recuperado de <https://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article194210829.html>

SEGURIDAD Y DEFENSA

Security and Defense

Esta página queda intencionalmente en blanco.



Revista Científica General José María Córdova

(Revista colombiana de estudios militares y estratégicos)

Bogotá D.C., Colombia

Volumen 17, Número 28, octubre-diciembre 2019, pp. 773-795

<http://dx.doi.org/10.21830/19006586.473>

La política de fronteras de Colombia ante las nuevas amenazas de seguridad y defensa

Colombia's border policy in the face of new security and defense threats

Cipriano Peña Chivatá y Juan Carlos Hoyos Rojas

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Bogotá D.C., Colombia

Paola Alexandra Sierra-Zamora

Escuela de Armas Combinadas del Ejército, Bogotá D.C., Colombia

RESUMEN. La delincuencia organizada ligada al terrorismo y al narcotráfico ha encontrado en la dinámica sociopolítica de las fronteras los espacios propicios para sus acciones, lo cual genera graves amenazas para la seguridad de los Estados. Esta situación hace necesaria la investigación de las nuevas amenazas para la seguridad y defensa nacional de Colombia, en especial, los sucesos similares a los descritos por Herman Khan, en los cuales hay intereses de diferentes actores que desestabilizan la seguridad, la soberanía y el territorio. Estos eventos que ocurren en la frontera con Venezuela son recurrentes y afectan no solo a Colombia, sino al equilibrio de poder democrático regional. Es indispensable, por tanto, considerar los mecanismos de seguridad colectiva y cooperativa, así como los instrumentos del poder y defensa nacional orientados a reducir las amenazas.

PALABRAS CLAVE: Colombia; Fuerzas Armadas; paz; política de defensa; política de seguridad; Venezuela

ABSTRACT. The sociopolitical dynamics of borders have provided terrorism and drug trafficking-related organized crime spaces that are conducive to their actions, creating serious threats to the security of States. This situation elicits the need to scrutinize the new threats to Colombia's national security and defense, especially events similar to those described by Herman Khan that involve the interests of different actors and destabilize security, sovereignty, and territory. The recurring events at the border with Venezuela affect not only Colombia but also the balance of regional democratic power. Therefore, considering the mechanisms of collective and cooperative security, as well as the instruments of national power and defense is essential to reducing threats.

KEYWORDS: Armed Forces; Colombia; defense policy; peace; security policy; Venezuela

Sección: SEGURIDAD Y DEFENSA • Artículo de investigación científica y tecnológica

Recibido: 5 de mayo de 2019 • Aceptado: 30 de agosto de 2019

CONTACTO: Cipriano Peña Chivatá cipriano.pena@esdegue.edu.co

Introducción

Este artículo se refiere a una investigación sobre un hecho de mucha actualidad dentro de la población colombiana y que ha tenido repercusiones directas para en el panorama político-militar del país. Se consideró pertinente indagar sobre los diferentes mecanismos de seguridad y defensa nacional (SDN) que permitan la reducción de las múltiples amenazas transnacionales fronterizas a las que se encuentra expuesta la población y la institucionalidad colombiana. Para comprender este panorama, es preciso apuntar algunos detalles que darán cuerpo y contexto al escenario que se indaga.

Colombia goza de una posición geoestratégica excepcional, al localizarse al norte de la línea del ecuador, y no solo comparte fronteras con varios Estados (Brasil, Perú, Ecuador, Panamá y Venezuela), sino que es un “Estado bisagra”, para los intereses y el desarrollo geopolítico y geoeconómico del hemisferio. En esta posición privilegiada, Colombia no solo participa de forma determinante en la realidad americana, sino que funge como “pivote geográfico” para los intereses globales. Su cercanía tanto a los dos mares como a las tres potencias medias regionales (México, Brasil y Perú), así como a Norteamérica, Mesoamérica, el Caribe y el resto de Latinoamérica, muestra no solo la importancia geopolítica, sino la dinámica sociopolítica a la cual está expuesta (Torrijos & Pérez, 2013). Precisamente por estas circunstancias es que es tan importante la frontera nororiental con el Estado venezolano, frontera que tiene una extensión de 2219 kilómetros, a lo largo de los cuales se ubican 36 municipios y tres ciudades (Arauca, Cúcuta y Maicao). Todos estos son parte integral sociopolítica y económica de los siete departamentos (La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía) limítrofes que integran la soberanía colombiana.

Venezuela era considerada, en el pasado reciente, una potencia media regional no solo por estar jugando en los primeros puestos como país con las mayores reservas de crudo del planeta, sino por su potencial minero de incalculables reservas en el sur del país y en límites con Colombia (cercanías a la serranía de Perijá, la alta Guajira y la cuenca del Orinoco). No obstante, actualmente dicho país sufre una de las crisis sociopolíticas más fuertes en su historia republicana y en la historia del continente.

En su proceso de trasformación del sistema político, que data de crisis anteriores, a partir del 19 de abril de 2013, el Estado venezolano elige un gobierno chavista, que promulga el ideario del socialismo del siglo XXI. Como consecuencia de esta decisión se generan cambios en la política exterior, lo cual acentúa de manera profunda su reconocimiento y legitimidad ante el sistema internacional. Si bien es cierto que a nivel regional el discurso y narrativa del socialismo del siglo XXI logra crear un bloque de poder fortalecido por la estrategia y diplomacia del petróleo, al final sus bases ideológicas y la respuesta del mundo desarrollado llevan al país a una crisis económica, política y social que es evidente hasta nuestros días. Así mismo, las relaciones de interdependencia política y socioeconómica global y hemisférica cambian radicalmente, en especial, con el gobierno de Colombia.

En el cambio radical del sistema político de Venezuela persiste un sentimiento altamente ideologizado, antihegemónico y antiamericano, que arrastra el entorno vecinal a la conformación de nuevos bloques de poder y alianzas estratégicas de carácter global, lo cual despierta viejos intereses geoestratégicos característicos de la Guerra Fría e incluso tensiones reales directas relacionadas con cambios en la Constitución de 1999 de Venezuela. De hecho, quedó registrado por parte de ese país las pretensiones de recuperar lo que se consideran las fronteras naturales de la Capitanía de Venezuela, registro que obviamente afecta la soberanía nacional de Colombia. En consecuencia, se genera un desequilibrio de poder regional, en el cual Colombia es aislado como represalia a su posición democrática y su política exterior. Esta nueva conformación política regional altamente ideologizada por el socialismo del siglo XXI se extiende hasta el Cono Sur y, bajo el liderazgo de Venezuela, encuentran nuevos aliados globales, incluidos aquellos considerados “Estados parias” o “eje del mal”.

Esta nueva dinámica de la problemática regional y vecinal impone un nuevo enfoque para la política exterior de Colombia, dado que el país se convierte para Venezuela en un “Estado tapón” que impide sus pretensiones de expansionismo ideológico sobre la región. De esta forma, las relaciones políticas, económicas y sociales de supervivencia y bienestar común en la frontera sufren un cambio radical, que se alimenta no solo de la fragmentación ideológica entre los dos Estados, sino de las asociaciones delictivas de los nuevos actores de la amenaza multidimensional, de la delincuencia organizada transnacional, de la delincuencia tribal y del nacimiento de nuevos grupos de criminales. Tales disidencias aprovechan las relaciones de “interdependencia crítica” para evadir la acción del Estado colombiano y refugiarse en el vecindario mediante el sobrepaso de fronteras.

En el análisis de la problemática fronteriza, Colombia registra una preocupante situación, por cuanto la frontera con Venezuela presenta la confluencia de todos los factores de inestabilidad que afectan a Colombia. Según este análisis, los factores de inestabilidad actúan como un sistema delictivo diferencial en comparación con otras regiones y fronteras del país. En esta frontera inestable, el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro, el hurto de combustibles, el contrabando, el abigeato, la conformación de grupos armados ilegales, las migraciones ilegales y el tráfico de armas, explosivos y municiones, entre otros fenómenos y problemáticas sociales, están estrechamente relacionados no solo con la delincuencia organizada transnacional, sino con la delincuencia tribal propia de la conformación de organizaciones delictivas tradicionalmente autóctonas (Ávila, Suárez, Sánchez, & Ramírez, 2017).

La problemática social relacionada con las economías ilícitas y el apoyo evidente del gobierno de Venezuela, que se aprovecha de esta situación para fortalecer su estrategia de desestabilización fronteriza, es diferencial y tiene un alto contenido político (Rodríguez & Ito, 2016). Este último está relacionado no solo con la expansión del socialismo del siglo XXI, sino con la defensa de la revolución, por cuanto estos grupos armados de delincuencia organizada (como las disidencias residuales de las FARC-EP y el ELN) hacen

parte, según estos mismos y el gobierno de Venezuela, de los “colectivos para la defensa de la revolución” frente a una supuesta intervención militar contra dicho país (Peña Chivatá & Díaz, 2019). Así que, si bien es cierto que en su conjunto los factores de inestabilidad son los mismos a nivel nacional, su pesada categorización —al igual que en la teoría de juegos— es diferencial en la frontera con Venezuela, pues las repercusiones económicas que se han ocasionado en el país, la desestabilización en lo pactado en el acuerdo de paz y el cambio de gobierno han sido las principales circunstancias del devenir político de Colombia, por cuanto guardan estrecha relación con los problemas más graves que tiene hoy la humanidad. En efecto, como producto de su inestabilidad social, política y económica, este país arrastra a los mismos ciudadanos venezolanos a generar la mayor migración humana registrada por las Naciones Unidas que conozca el continente americano: más de 3,5 millones de venezolanos que toman a Colombia como su principal receptor e incrementan los altos índices de inestabilidad y problemática social fronteriza.

Como ya lo mencionábamos en este apartado, es necesario revisar la teoría de la escalada de Herman Khan, porque, aunque se trata de un escenario estratégico diferente, en donde se juegan fines, medios y modos diferentes, sus pasos, evolución y eventos están estrechamente relacionados con la realidad fronteriza colombo-venezolana. Estos eventos se manifiestan a través de amenazas, provocaciones, cierres fronterizos, detenciones y expulsiones arbitrarias de ciudadanos colombianos, violación de la soberanía en la frontera, migraciones ilegales, adoctrinamiento ideológico en las comunidades indígenas, campañas y operaciones de información global contra autoridades y gobernantes colombianos, despliegue estratégico de tropas y adquisición de capacidades y medios militares bajo un concepto de incremento de la seguridad y de la carrera armamentista estratégica y ofensiva. Los recientes hechos relacionados con esta teoría de la escalada son evidentes y están relacionados con las campañas de información y desinformación estratégica de Venezuela, así como con la activación del teatro de la guerra y la conformación de las áreas de operaciones, concentración, movilización nacional y despliegue estratégicos contra la frontera de Colombia en una acción de ejercicios militares ofensivos apoyados por la presencia de tropas cubanas y rusas.

Esta situación ha generado la respuesta diplomática del continente a través de reuniones extraordinarias de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como la invocación por parte de los mismos ciudadanos venezolanos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en cabeza del gobierno legítimo, reconocido por el sistema internacional, para crear una coalición militar regional y hacer empleo efectivo y selectivo de la fuerza para sacar del poder al actual presidente de Venezuela.

Venezuela, al lado de Brasil, Ecuador y Nicaragua, lidera desde el pasado reciente un movimiento regional de expansión del socialismo del siglo XXI, que se fortaleció con bloques de poder como el ALBA, Unasur y Petrocaribe, algunos con aparente espíritu democrático o económico, pero ideologizados (Peña Chivatá & Díaz, 2019). En consecuencia, tales bloques de poder se fueron radicalizando y atrayendo intereses globales afines

a esta ideología, que buscaban quebrantar las relaciones de América Latina, en especial, entre Colombia y Estados Unidos. Dicha tensión regional se mantuvo hasta después del fallecimiento de presidente Chávez, pero el detonante de inseguridad se dio el 10 de enero del 2019, bajo la posesión del segundo periodo presidencial de Nicolás Maduro Moros (2019-2025). Aunque esta asociación ideológica se mantuvo por un periodo considerable, empezó a sufrir cambios significativos no solo por el fallecimiento de Hugo Chaves, sino por el cambio del sistema político en varios países de su entorno ideológico, incluido Brasil, Argentina, Chile y Ecuador.

Ahora bien, la situación actual nos presenta un nuevo escenario, pero —al igual que en el pasado— los cambios en el sistema político de México, la radicalización del socialismo en Nicaragua y la posición política conveniente en las Antillas como respuesta a la diplomacia del petróleo le dan un nuevo aire al expansionismo del socialismo del siglo XXI. Aunque la crisis interna en Venezuela —como ya se dijo— es cada vez más radical, pareciera que la capacidad de los organismos multilaterales de carácter regional, como la OEA, es cada vez más limitada políticamente para mitigar esta problemática. Aunque ha habido manifestaciones regionales e incluso globales que buscan solucionar la crisis, las iniciativas como el Grupo de Lima o el Acuerdo de Montevideo (e incluso la Comisión Internacional de la Unión Europea) no han logrado llenar esos vacíos de la diplomacia regional.

La frontera viva entre Colombia y Venezuela históricamente no había conocido una época más conflictiva y amenazante para la seguridad y defensa colombianas. Además, en el posacuerdo firmado entre el gobierno nacional y las FARC-EP nacen nuevos retos y amenazas, sobre todo, por las migraciones ilegales. Pero la dinámica delictiva fronteriza mencionada, así como la situación de estrecha relación entre los grupos armados organizados (GAO), los grupos de delincuencia organizada (GDO) y los grupos de delincuencia residual (GDR) nacientes de la estrategia de las FARC-EP, en asocio con la delincuencia organizada transnacional, amenazan no solo la seguridad y defensa nacional, sino que comprometen la seguridad regional (Álvarez & Rodríguez, 2018; Cubides-Cárdenas, Sierra-Zamora, Calixto, & Pabón, 2019; Torrijos & Abella, 2018). De hecho, en la frontera se encuentran los espacios vacíos y el ambiente propicio para generar una dinámica delictiva que se expanda en la región y afecte todo el continente, lo que convierte a Colombia en una plataforma de protección de los intereses del actual gobierno ilegítimo de Venezuela.

La ingobernabilidad mostrada por el sistema político venezolano y la interdependencia crítica con sus vecinos que otrora fueran sus aliados, ligada a factores de inestabilidad fronteriza, trajeron una nueva fenomenología delictiva al continente. Las migraciones masivas inicialmente parecían un problema menor, pero —al igual que en Europa— las disposiciones asumidas por los gobiernos regionales trajeron consigo una problemática social y de salud pública sin precedentes, lo cual generó la reacción de la comunidad internacional y, por supuesto, una extrema preocupación nacional y de los países cercanos

(Cubides-Cárdenas, Sierra-Zamora, & Mejía-Azúero, 2018). Los problemas de salud y de seguridad pública son evidentes, las estrategias de apoyo fronterizo se profundizaron en el continente y el presupuesto asignado por el Estado colombiano fue insuficiente por la magnitud de la problemática, con la especial consideración de que la población que está migrando en la actualidad son personas con actividades laborales no calificadas, madres cabeza de familia y un significativo número de mujeres embarazadas y hombres especialmente relacionados con actividades delictivas.

A esta problemática que afecta directamente a Colombia se suma el pulso político entre los Estados Unidos de Norte América, Rusia y China. Los primeros manifiestan que el gobierno venezolano representa una “amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidense”. Entre tanto, Rusia y China actúan con intereses geoestratégicos perfectamente detectables en el sistema internacional, apoyando solidariamente al gobierno bolivariano, dotándolo de pertrechos militares de alta tecnología y prestándole grandes sumas de dinero con el argumento de ayudar a superar la crisis venezolana (Bermúdez, 2019). Bajo este contexto, la problemática fronteriza no solo atrae la atención y preocupación de la comunidad internacional, sino que se constituye en el principal problema de inestabilidad de la región, ya que no solo hay intereses geoestratégicos en juego, sino alianzas perversas en defensa de la revolución venezolana, que compromete las organizaciones delictivas colombianas que se lucran del narcotráfico.

Escudándose en el argumento de la problemática fronteriza, Venezuela ha violado todos los acuerdos de carácter regional y global de disolución pacífica de conflictos, y ha aprovechado la situación para acelerar una estrategia de “securitización” (Brandes, 2019), con el argumento de la defensa de la revolución y la posible intervención de Estados Unidos en su territorio apoyado por Colombia.

Según el criterio de los mecanismos de confianza mutua (MCM), históricos en la región al lado de las confrontaciones globales, Colombia desde los ochenta ha venido fortaleciendo el impulso de una ley de fronteras que contribuya a crear mecanismos de coordinación internos con nuestros vecinos. Dicha ley contempla incluso comisiones binacionales de frontera, la conformación de comisiones técnicas especiales para temas específicos de la problemática social fronteriza, economía de subsistencia, intercambio de información específica para mitigar el impacto de la delincuencia, zonas de desarrollo fronterizo, cooperación macroeconómica, proyectos regionales de infraestructura fronteriza e incluso megaproyectos de intercambio de tecnología y seguridad energética. Tales iniciativas y compromisos en el pasado eran vigentes y dinámicos con Venezuela, pero a raíz del cambio del sistema político allí todas estas se desactivaron y desaparecieron del ambiente político.

En 1995, el gobierno colombiano lanza la ley de fronteras (Ley 191) y posteriormente diseña una política de frontera para fortalecer las relaciones binacionales. Los problemas presentados en las fronteras trascienden la capacidad del Estado para el manejo de esta problemática, por cuanto las organizaciones terroristas encuentran la posibilidad no

solo de generar una dinámica delictiva, sino de traspasar las fronteras evadiendo la acción del Estado y encontrando refugio y protección en Estados considerados por la comunidad internacional como “Estados canallas” —dado que albergan terroristas y construyen todo un andamiaje de protección internacional para estas organizaciones (Thornton, 2011)—. En la actualidad, el gobierno venezolano da refugio y protección no solo al ELN, sino, en el caso reciente a Iván Márquez y a toda la estructura delictiva de las disidencias de las FARC-EP, consideradas por el gobierno colombiano y la comunidad internacional como bandas criminales terroristas asociadas a las redes de narcotráfico global.

Atendiendo esta preocupación fronteriza, el actual gobierno colombiano no solo ha mostrado una estrategia de política exterior y de relaciones internacionales acorde con la agenda global para restablecer la gobernabilidad, la democracia y el bienestar del pueblo venezolano, sino que ha acudido al sistema internacional para que se brinde apoyo a la población migratoria que afecta especialmente a Colombia. Colombia lidera, en el Grupo de Lima y en las sesiones extraordinarias de la OEA y la ONU, la necesidad del restablecimiento pacífico de la democracia en Venezuela. En consecuencia, a nivel interno ha diseñado la Política de Defensa y Seguridad Nacional (PDS) así como el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que guarda estrecha relación con estas prioridades e intereses nacionales. Además, en las recientes reuniones extraordinarias de la OEA, el país ha presentado la iniciativa de una nueva ley de fronteras que permita mitigar esta crisis riesgos y amenazas.

El enfoque de la PDS y del PND es de carácter multidimensional y está fundamentado en una acción unificada y coordinada de esfuerzos interagenciales, que buscan fortalecer la legitimidad estatal¹, así como dar respuesta y apoyo a los ciudadanos venezolanos en territorio colombiano en concordancia con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. De hecho, la PSD comprende múltiples innovaciones con alcance trascendental, entre las que se cuentan las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII)², además de las amenazas contempladas en el *Routledge handbook of security studies* (2016) como el terrorismo, el crimen organizado, la ingobernabilidad, el déficit de la institucionalidad estatal, las migraciones, las amenazas cibernéticas y la inseguridad energética (Cavelti & Balzacq, 2016).

Se adicionan al portafolio las amenazas externas relacionadas con la intención de afectar la integridad territorial, la inestabilidad en países vecinos y las injerencias de potencias extrahemisféricas. Todo ello es, sin duda, representa un desafío para las Fuerzas Militares (FF. MM.), dada la misión constitucional de proteger la población, la frontera en defensa de la soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional, así como los recursos naturales e infraestructura crítica.

1 Véase la Política de Defensa y Seguridad (PDS), Presidencia de la República de Colombia, Ministerio de Defensa Nacional y Consejería de Seguridad Nacional (2019).

2 De acuerdo con la PSD, las ZEII son espacios del territorio con ausencia o déficit de legalidad, vacíos de institucionalidad o precaria presencia estatal que, además, son ricos en recursos hídricos, biodiversidad y medioambiente, y están en alto riesgo o en franjas de frontera, lo cual les otorga un carácter estratégico.

No en vano, los principios de la PDS se acoplan en torno a cuatro campos de acción como prioridades estratégicas e intereses nacionales: la disuasión y diplomacia para la defensa y la seguridad, el control institucional del territorio, la desarticulación del crimen organizado y la garantía de la seguridad ciudadana e institucionalidad.

Al amparo de las anteriores premisas, el presente artículo presenta, en primer lugar, un discernimiento de las amenazas latentes en la frontera colombo-venezolana; en segundo lugar, se proyectan los alcances de la política de seguridad y defensa, y en tercer lugar, se da cuenta del rol de las Fuerzas Militares de Colombia en el escenario fronterizo (Sierra-Zamora & Gil-Osorio, 2019). De igual manera, al final se presentan unas conclusiones sólidas, acogidas a una investigación acuciosa y detallada de la realidad que tiene en expectativa a la comunidad internacional.

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se consideró un sinnúmero de fuentes bibliográficas, recopiladas como fuentes primarias de investigación, entre ellas, entrevistas, documentos audiovisuales y foros relacionados con la problemática, todo lo cual sirvió como insumo para aplicar la metodología y llevar a cabo los análisis.

Amenazas latentes en la frontera colombo-venezolana

El concepto de frontera ha logrado especial interés en el Derecho Público Internacional (DPI). Primordialmente, en lo corrido del siglo XXI, hechos terroristas a nivel global dejan entrever la porosidad evidente de las zonas fronterizas, evidenciando la vulnerabilidad de las sociedades frente a la penetración de agentes desestabilizantes. De ahí, que se puedan entender las recientes dinámicas bélicas y, en especial, las nuevas amenazas a la soberanía y paz internacionales, más allá de cualquier discurso globalizante (Agnew, 2006, p. 85).

Ahora bien, frente a la noción de frontera en el interior de la teoría de la globalización pueden diferenciarse dos escenarios hermenéuticos. De una parte, se encuentran exponentes de la globalización como mecanismo que taladra la frontera y de paso agota la función limitadora que les fue arrogada tradicionalmente. En ese sentido, se agrega que

El mundo está cada vez más interrelacionado gracias al avance de las comunicaciones, el abaratamiento del transporte y las posibilidades que entrega internet, entre otros aspectos. Se trata de una mirada optimista de los alcances de la globalización, donde las fronteras se vuelven porosas. (Tapia, 2012, p. 179)

De otra parte, se presentan doctrinantes que consolidan un argumento en cuanto a que la globalización no genera debilitamiento de la frontera, al contrario, “lo que se observa es un fenómeno fraternizado, es decir, de cierre de fronteras y endurecimiento de los requisitos para la circulación de las personas” (Tapia, 2012, p. 179). A primera vista, la globalización ha logrado redefinir la frontera, al punto de que lo periférico ha cobrado centralidad. “No se trata de espacios accesorios, sino de ámbitos estratégicos que ejercen nuevas funciones, separar lo bueno de lo malo. La frontera marca la diferencia entre lo incluido y lo rechazado” (Villafuerte, 2009, p. 694).

La conceptualización de *frontera* parte del concepto de continente, limitador de espacios soberanos a partir de los cuales se construyen derechos y obligaciones que irradian tanto el derecho internacional público como el privado (Sierra-Zamora, 2018). Uno de los antecedentes más relevantes de la concepción de frontera se da en el año de 1648 con la Paz de Westfalia. Dicho tratado enmarca los espacios geográficos soberanos del Estado nación. Al respecto, se menciona que en geografía política una frontera internacional es considerada como una zona de indeterminada anchura cuya característica fundamental es que está cruzada por una línea que determina los límites de la soberanía territorial entre dos Estados (Pinzón, 2015, p. 121).

La división política territorial de un Estado puede ser comprendida por factores longitudinales objetivos (ríos, vías carreteables, muros, alambradas, cercas) y otros, sencillamente subjetivos e imaginables, comprendidos por difusos puntos de referencia. Esto último, dado a que la periferia soberana ha estado a la suerte de comunidades o pequeñas poblaciones que viven en la frontera y son ellos, quienes determinan las líneas limítrofes. (Eder, 2006, p. 261)

Ahora bien, existe una diferencia entre límite fronterizo y zona de frontera, el primero “enuncia elementos de división física entre realidades, políticas, económicas, culturales. Entre tanto, zona de frontera es un espacio territorial más robusto adyacente a la línea de separación pero que cualquier hecho la afecta directamente” (Newman, 2006, p. 145). Mientras el límite fronterizo es una construcción política de los Estados, que a través de un marco legal dividen un espacio geográfico que queda gobernado bajo intervención estatal, la zona de frontera es el resultado de cimentaciones sociales de los pueblos, “los cuales se pueden expandir más allá del límite jurídico del Estado, desafiar la ley territorial de cada Estado limítrofe y, a veces, crear una situación *de facto* potencialmente conflictiva” (García, 2015, p. 73).

Precisamente, con la globalización exponencial y la densidad poblacional, la frontera vista desde las líneas y zonas fronterizas ha recobrado relevancia en el derecho internacional. Hoy el intercambio económico, cultural, político y social no deja duda de que la frontera es una zona de alto valor desde el concepto de SDN. Si bien es cierto que la frontera es un motor de desarrollo social, también es cierto que una zona territorial que no goce de presencia estatal será un escenario perfecto de criminalidad. La política estatal “parte de una óptica difusa del concepto y relevancia de frontera, de hecho, la doctrina evidencia una visión vertical (*top-down*), a partir de controles militares y delimitación geopolítica los gobiernos encuadran su soberanía” (Dalacoura, 2012, p. 65).

El teatro bélico internacional se expandió por largos siglos de conquistas territoriales: ejércitos mongoles, persas, espartanos, romanos, cristianos, barbaros, franceses, alemanes, rusos, chinos y americanos edificaron el panorama político estatal del siglo XXI. Las guerras determinaron que la sobrevivencia de un Estado reside en el poder, la estrategia y el control militar que se ejerza en cada punto fronterizo (Miron, 2019; Thornton, 2015).

Las teorías y doctrinas castrenses son claras al definir que la seguridad del Estado está íntimamente ligada a la guerra, no obstante, los conflictos armados internacionales (CAI) han bajado de intensidad. *A contrario sensu*, “los conflictos armados no internacionales (CANI) han crecido de manera exponencial, al punto que es uno de los mayores desafíos para la SDN” (Green, 2018, p. 186).

Nuevas amenazas

Las denominadas nuevas amenazas para la seguridad y defensa de un Estado tienen que ver, en gran medida, con las denominadas fronteras porosas. La comprensión de este concepto se desprende de un proceso de transición y evolución del modelo clásico y rígido sobre las fronteras expuesto por Friedrich Ratzel hacia algo más flexible. Para explicar en breve esa situación, el profesor e investigador Everardo Garduño (2003) señala que la estricta limitación fronteriza era poco funcional para abordar los procesos de interdependencia económica global crecientes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es entonces que sobre esa situación se construye la perspectiva de áreas dinámicas que impulsan el contacto y la necesidad de intercambio cultural y comercial como referentes de un mundo globalizado.

Para Rueda Uribe (2017), la porosidad de las fronteras, en todo caso, presta garantías para la promoción de acercamientos y construcción de lazos económicos e identitarios entre países vecinos en el marco de la globalización y la expansión de los mercados allende sus fronteras, pero también trae consigo el aprovechamiento de tales potencialidades por parte de agrupaciones criminales dispuestas a satisfacer demandas crecientes en otras partes del mundo, una condición que toma réditos en medio de condiciones desfavorables o limitadas para la generación de oportunidades laborales legales.

De acuerdo con lo anterior, la situación de vulnerabilidad de la población y las limitaciones estructurales del Estado venezolano y colombiano se evidencia en la carencia de herramientas conjuntas funcionales para enfrentar el tema de la consolidación y expansión de los grupos criminales. En este orden de ideas, con la transnacionalización de las amenazas del narcotráfico y la minería ilegal, más las connotaciones negativas que ello supone en una frontera porosa, se limita el avance de potenciales aspectos positivos en lo social, lo económico, lo cultural y lo geográfico. Es así como el referente de seguridad nacional colombiana en el área de frontera con Venezuela asume serias complicaciones, dada la mutación veloz de los actores criminales de la zona, así como dificultades estructurales como la corrupción, que evitan que los efectivos policiales de ambos países trabajen coordinadamente ante las problemáticas de la zona (Rueda Uribe, 2017, p. 14).

Así mismo, el referente de una frontera porosa permite resaltar la existencia de esos problemas comunes que afectan los derechos humanos, exponen a los habitantes al control indiscriminado de bandas delincuenciales que insertan a jóvenes con falta de oportunidades a los círculos de violencia, todo ello promovido por las actividades ilegales del narcotráfico, la extorsión, el contrabando o la explotación minera ilegal.

Ahora bien, los 2219 kilómetros terrestres que bordean la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela permitieron, hasta finales del siglo XX (1999), que ambas naciones compartieran un espacio geográfico de hermandad y paz. Sin embargo, la llegada de un gobierno socialista a Venezuela cambió el escenario de convivencia habitual, al punto de que en las dos décadas transcurridas del nuevo milenio la frontera empezó a ser un espacio geográfico apto para el tránsito de grupos armados ilegales (guerrilla, paramilitarismo y bandas criminales) que abrieron espacios para el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y la migración ilegal, gracias a lo cual la criminalidad escaló a niveles preocupantes (Cubides-Cárdenas & Sierra-Zamora, 2018; Fernández, 2017).

Para el 2013, en consecuencia, la frontera es un territorio dinamizado por un poder criminal hostil y beligerante. Sin duda, el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, la comercialización ilegal de armas, la ingobernabilidad, la pérdida de la institucionalidad venezolana, la inseguridad energética y nuevas fuentes de conflictividad —como los recursos naturales y el medioambiente— (Cavelty & Balzacq, 2016) perturban la tranquilidad de las personas y afectan el desarrollo económico y social de la población civil fronteriza, todo lo cual genera inestabilidad y desequilibrio regional, en especial, en la periferia nororiental de Colombia³ (Novaes, 2015).

... al iniciar el siglo XXI se ha dicho que las fronteras colombianas son porosas, inseguras y expuestas a las industrias ilícitas, asumiendo los problemas fronterizos que se encuentran relacionados con otras causas como el contrabando en todas sus modalidades que a su vez producen efectos graves derivados del incumplimiento de las leyes aduaneras colocando al Estado en evidentes errores cada día. (Sánchez de Rojas Díaz, 2016, p. 6)

Por otra parte, los últimos dos gobiernos venezolanos han amenazado directamente al Estado colombiano, incluso, llegando a desplazar fuertes destacamentos militares a la frontera. Las Fuerzas Militares bolivarianas cuentan con un sofisticado armamento aéreo, naval y terrestre de origen soviético y chino. Rusia les vendió 92 tanques T-72B1V, aviones cazas Su30MK2V y helicópteros Mi-17V-5, Mi-35M y Mi-26T, y China los ha proveído con radares antiaéreos de última generación, al punto que Venezuela cuenta con uno de los mejores sistemas de defensa aeroespacial de la región latinoamericana (Jácome, 2006).

Este coctel de realidades hace de la frontera colombo-venezolana una de las regiones de mayor preocupación para la comunidad internacional, en especial, para Suramérica, dado que hoy este punto geográfico representa el mayor peligro para la SDN, puesto que las dinámicas criminales parecen asociarse a la inestabilidad política e institucional del Estado bolivariano (Jiménez Aguilar, 2008). De ahí que las empresas criminales enquis-

3 Para mayor información, ver el “Documento de base: problemas y peligros que plantea la delincuencia transnacional organizada en las distintas regiones del mundo” (1994), las “Conclusiones y recomendaciones” de la reunión celebrada en Courmayeur (Italia), en junio de 1994, y el “Informe de la Conferencia Ministerial Mundial sobre la Delincuencia Transnacional Organizada” (1994).

tadas en la frontera tengan en común la intención de reproducir niveles exponenciales de violencia, afectando la tranquilidad y convivencia ciudadana, desincentivando la inversión económica y acrecentando los niveles de desempleo, que contravienen los postulados de la nueva PDS del nuevo gobierno colombiano (Vitelli, 2018).

Adicionalmente, todas las dinámicas asociadas a los actores directa o indirectamente confabulados buscan fortalecer la criminalidad en la frontera, con un amplio portafolio delictivo de operaciones y actividades combinadas con narcotráfico, lavado de activos, trata de blancas, secuestro, extorsión, terrorismo, contrabando, tráfico de armas, prostitución y homicidios, entre otras que incluso han sido tipificadas en el Estatuto de Roma y que dejan abierta la competencia residual de la Corte Penal Internacional (CPI)⁴ para investigar, acusar, juzgar y condenar por delitos propios de su jurisdicción (Dinstein, 2019).

A lo largo y ancho de la frontera, las economías ilícitas se robustecen convirtiéndose en una fuente enriquecida para mantener y acrecentar la criminalidad. Todas estas actividades presentan cifras astronómicas, generando un superávit que asciende a más de 45 millones de dólares tan solo por secuestros y extorsiones. No es posible cuantificar la rentabilidad producto del narcotráfico, contrabando, tráfico de personas, armas, combustibles y minería ilegal. Algunas organizaciones internacionales —como la Central Intelligence Agency (CIA), la Nacional Security Agency (NSA), la Federal Bureau Agency (FBI), el MI5 (encargado de la seguridad e inteligencia interior), el MI6 (cuyas funciones de inteligencia se desarrollan fuera de las fronteras del Reino Unido), el Mossad Israelí, el Servicio de Seguridad de la Federación de Rusia (FSB) y el Servicio de Inteligencia Extranjera (SVR), entre otras— coinciden en la preocupación de que los agentes del crimen organizado que operan en la frontera colombo-venezolana puedan traficar con material nuclear y comercializarlo con grupos terroristas⁵ (West, 2015).

Todas las actividades criminales que se realizan en la frontera presentan actores, fuentes y connotaciones diferenciadas que afectan la seguridad de las personas y del Estado. Si bien, el acto criminal no está orientado directamente contra la integridad soberana, sí logra permear algunas de sus instituciones, lo que genera efectos implacables en la frontera. Las patologías criminales afectan la seguridad, la integridad física, la moral, el patrimonio y el desarrollo social de todos los pobladores que habitan y circulan en los 36 municipios y las tres ciudades ubicadas en la frontera nororiental de Colombia (Cañizares & Niño, 2017).

Si bien, las amenazas reseñadas *prima facie* presentan una configuración diferente respecto a las amenazas a la seguridad clásica, dada su naturaleza asimétrica, es precisamente este último factor el que genera cierta capa de invisibilidad que dificulta a las FF. MM.

4 La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), es un organismo internacional independiente que no forma parte de la estructura de las Naciones Unidas, con la que firmó un acuerdo el 4 de octubre de 2004, que regula la cooperación entre ambas instituciones.

5 Cfr. el análisis de estos temas y sus lógicas formulados por Walter Laqueur en “Postmodern terrorism: New rules for an old game,” *Foreign Affairs* (Sep-Oct 1996).

anticiparse y neutralizar los peligros derivados de su actuar criminal. La dificultad se da en la percepción y normatividad legal, que relegan a un plano secundario las amenazas de la delincuencia social, por considerarlas patologías tratadas por la política criminal y los agentes policiales y judiciales estatales, es decir, la competencia y jurisdicción no está en cabeza de las Fuerzas Militares; sin embargo, hoy todo ese portafolio criminal ha escalonado al punto de generar preocupación internacional, que ve la frontera como un punto geográfico desestabilizador de la seguridad regional e incluso atentatorio contra la paz mundial (Singh & Wang, 2015).

En consecuencia, el análisis de Stella (2014) permite interpretar que la realidad de los nuevos conflictos escapa a la lógica del protagonismo pleno por parte de los Estados: los actos de violencia armada como voluntad privada de varios actores —ya sean agrupaciones guerrilleras, bandas del crimen organizado, asociaciones lideradas por algún caudillo político, fuerzas del orden policiaco o militar— expresa lo atomizado que puede encontrarse el uso de las armas en un esquema estatal carente de legitimidad.

La defensa y seguridad estatal del nuevo milenio es una prioridad para todos los pueblos. Los hechos terroristas en la actualidad no dejan duda de que hoy el adversario tiene unas condiciones de cualificación que conllevan implementar tácticas, estrategias, equipos, tecnologías y políticas capaces de contrarrestar estos nuevos desafíos: la seguridad de la frontera no puede seguir manteniéndose con políticas criminales. De hecho, de acuerdo con el mandato constitucional, “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional” (Colombia, Presidencia de la República, 1991, art. 217), en especial si la novedad de las “nuevas amenazas” no radica en la ejecución de cada actividad criminal, delictiva o terrorista individualizada. Por el contrario, la relevancia está en la sumatoria de hechos transnacionales que globalizan la criminalidad, dadas las conexiones criminales, los alcances y la agilidad para cambiar espacios geográficos que les permiten mutar y repotenciar sus actividades delictuales (Ellis, 2017).

Discusión

Preocupados por las amenazas en la frontera, a inicios del 2019 el gobierno colombiano presenta la PDS “Para la legalidad, el emprendimiento y la equidad”. Bajo esta ruta, “las Fuerzas Militares deben implementar todo su potencial orientado a contrarrestar las amenazas y desafíos a la seguridad (...) se busca preservar y potenciar los intereses nacionales ante actores foráneos, al tiempo que promover la cohesión de la sociedad colombiana” (Colombia, Ministerio de Defensa Nacional, 2019, p. 5).

En ese sentido, la estrategia de las FF. MM. contempla despliegues de registro, control y consolidación de territorios hostiles. De esta manera, bajo la PDS, la frontera nororiental colombiana ha sido categorizada como ZEII. Esta zona geográfica se diferencia

de otras regiones por el carácter estratégico en términos de soberanía y la convergencia de actores y factores delincuenciales alineados en empresas criminales que amenazan y desestabilizan la seguridad limítrofe. Otra característica asociada a la ZEII son los grados de marginalidad, producto de necesidades básicas insatisfechas, como consecuencia de una ausencia estatal en la región (Avila, León, & Ascanio, 2013).

Es de resaltar, que la frontera es una zona rica en recursos naturales, donde se concentran economías y actividades ilícitas: el narcotráfico, el contrabando, la extracción ilícita de minerales, el tráfico de armas y la extorsión, entre otras. Una radiografía aproximada de la ZEII puede evidenciar la debilidad y el déficit de autoridad civil, en concurso con una incipiente prestación de servicios públicos y una ineficacia de las autoridades de justicia, sin pasar por alto que las vías de acceso son bastante precarias. Estas condiciones hacen que la frontera alcance la connotación de una ZEII, con un consecuente conjunto de elementos fácticos consolidadores de fuentes de criminalidad (Aguirre, 2011).

Dada la relatividad de la presencia institucional en gran parte de la frontera, la operatividad y gestión estatales se encuentran reducidas y caen en la cooptación y filtración de la industria criminal de algunos servidores públicos y civiles con funciones constitucionales (Robledo, 2016). En la dinámica y neoinstitucionalismo delincuencial, continuamente se asesinan líderes sociales y defensores de derechos humanos, mientras que los GAO y GDO, responsables directos de esta inestabilidad social, transitan libremente por la zona y generan a su paso niveles de violencia que enlutan gran parte de la sociedad. En contraste con esta realidad, la PDS contempla una plausible misión, bajo la tesis siguiente:

La intervención integral en estas zonas estará precedida del despliegue de unidades de las Fuerzas Militares y de Policía y será acompañada por la acción unificada del Estado, que contribuirá a eliminar los principales factores de amenazas a la seguridad. En las ZEII habrá una sola estrategia y unidad de mando y control civil para su ejecución, no obstante, esta sea interagencial. Además, las Fuerzas Militares prestarán servicios esenciales básicos de emergencia, por un periodo corto, mientras se crean las condiciones mínimas de seguridad requeridas para que puedan concurrir a la mayor brevedad las instituciones públicas titulares de tal responsabilidad. (Colombia, Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 2019, p. 38)

La frontera, como punto estratégico, ha sido estudiada, analizada y redefinida por los teóricos de defensa y seguridad internacional, quienes a través de una óptica vanguardista agregan al listado de amenazas las “fuentes de riesgos”, delimitando situaciones que en principio no representan un carácter hostil. Se consideran amenazas latentes las armas y desechos químicos depositados en aguas internacionales que las corrientes marinas trasladan a las aguas nacionales, así como las naves con propulsión nuclear cuya desgaste prende las alarmas en la comunidad regional. En el caso colombiano, despertaron especial interés en la zona fronteriza, las actividades de minería ilegal y las voladuras de oleoductos, que trascienden a fuentes riesgosas que, al igual que las actividades criminales, se convierten en

factores de depredación ambiental, situaciones que deben ser neutralizadas con prioridad por parte de las FF. MM. (Jones, 2012).

A todo esto, se debe agregar, como ya lo hemos registrado, 1) el Conflicto Armado No Internacional (CANI) que se vive en suelo colombiano y 2) la gobernabilidad, asociada a la inestabilidad y anarquía imperantes en territorio venezolano. Ambas situaciones parecen desembocar en la frontera colombo-venezolana, de manera que el hilo limitador de la frontera parece soportar dos desgracias diferenciadas pero asociadas a grados inaceptables de violencia, lo cual pone en riesgo la estabilidad regional y colateralmente amenaza la paz mundial. Casos como los conflictos armados en Siria, República Centroafricana, Sudán del Sur y Yemen no son aparentemente alejados de nuestra realidad, no son divergentes sino convergentes frente a las hostilidades que acentúan la complejidad del riesgo fronterizo. Los actores asociados a estas guerras se aprovisionan con facilidad de armamentos nucleares, químicos y municiones, producto del comercio y tráfico ilegal de armas⁶, pues la porosidad de la frontera es aprovechada como canal o vía de ingreso y salida de todo tipo de personas, elementos y material bélico. No es exagerado afirmar que la frontera, además de ser un punto estratégico del Estado, también es un punto estratégico representativo para la criminalidad, con la diferencia de que es esta última la que ejerce el control (Green, 2018).

Esta suma de factores de riesgo dificulta identificar anticipadamente el grado y perfil de las amenazas que atentan contra la SDN a corto, mediano y largo plazo. Hoy la amenaza es difusa, impredecible y letal; su carácter clandestino y la transnacionalidad en zona de frontera eleva el nivel de dificultad para neutralizar las amenazas (Hutchins, Cloppert, & Amin, 2011), hecho que representa un inmenso desafío para la PDS y particularmente para las FF. MM. Sin embargo, para contrarrestar este flagelo, la Política de Defensa y Seguridad (2019) propone lo siguiente:

Parte de una visión de seguridad que va más allá de la desarticulación de grupos criminales y de economías ilícitas. Tiene como objeto atender los intereses nacionales, consolidar la vigencia de la ley en todo el territorio nacional, fortalecer la legitimidad democrática de manera permanente. (Colombia, Ministerio de Defensa Nacional, 2019, p. 9)

Otro factor asociado a las amenazas latentes en la frontera colombo-venezolana es el alto grado de incertidumbre, dada la dificultad de identificar de manera premeditada y fiable los mecanismos y procedimientos apropiados para neutralizar las coacciones criminales respecto a las dinámicas y desafíos en materia de SDN, en especial, cuando las defensas, mecanismos y estrategias disponibles para los estados no logran sobreponerse a la naturaleza de los desafíos que deben enfrentar.

6 Ver United States Department of Defense, *Quadrennial Defense Review*, sección II, “The global security environment” 1997, o United States Department of Defense, *Annual Report of the Secretary of Defense to the President and the Congress*, February 1995.

No obstante, cualquier hecho que atente contra la seguridad en cualquier punto geográfico del planeta puede ser causal de riesgo para la seguridad internacional, por cuanto las experiencias conseguidas con los distintos conflictos mundiales nos permitieron entender que la seguridad es un asunto de interés internacional. En ese contexto, los Estados propendan a cooperar y asumir obligaciones conjuntas en defensa de la seguridad y paz globales, ya que se parte del hecho de que se está expuesto a un enemigo difuso, cuyo margen de poder o equilibrio militar⁷ resulta difícil de identificar (Williams, 2012).

Otra realidad es observable desde la asociación de Estados aliados en materia de seguridad, a partir de la cual cobran vigencia los *partnerships*, las alianzas de seguridad y los mecanismos de seguridad colectiva-cooperativa como hechos unificadores de esfuerzos para neutralizar las amenazas y fuentes de riesgo emergentes. Entre tanto, el análisis estratégico en defensa y seguridad internacional, bajo el paraguas de la teoría realista de las relaciones internacionales, asume que la seguridad, estabilidad y control de la frontera debe darse mediante el uso de la fuerza militar (Buzan & Hansen, 2009; Cubides-Cárdenas, Sierra-Zamora & Núñez, 2017).

Aunado a la doctrina internacional, en *Contemporary security studies* (Collins, 2016) se observa una relación, frente a situaciones que indudablemente están inmersas en las agendas de defensa y seguridad, de tal manera que la diplomacia coercitiva; el terrorismo; el tráfico y comercio ilegal de armas nucleares y químicas; el desplazamiento forzado; el crimen organizado internacional; y el tráfico de personas se incluyen en el portafolio de amenazas latentes. De igual forma, el informe *Global risks* agrega como amenazas a la seguridad las siguientes:

Los desequilibrios fiscales crónicos, la severa desigualdad de ingresos, la extrema inestabilidad de los precios de la agricultura y la energía, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, la urbanización descontrolada, el mal uso de tierras y aguas, el terrorismo, la corrupción, los Estados fallidos, el fracaso de las políticas antidrogas, la crisis en el suministro de agua y alimentos y los ataques cibernéticos, entre otros. (“WEF: una severa desigualdad”, 2013)

En consecuencia, en un concepto genérico de seguridad deben contemplarse las amenazas y las fuentes de riesgo que atentan contra el Estado, la población, las regiones, la integridad física, el patrimonio económico, la convivencia y estabilidad social (Finel, 1999). En ese sentido, los argumentos neorrealistas encuentran justificación en que la preocupación en defensa y seguridad estatal no deben estar centrados en amenazas mili-

7 En lo que hace referencia a operaciones militares multilaterales y, más aun, a la creación de fuerzas a disposición de las naciones, esta afirmación es relativa. La experiencia de estos años, desde el inicio de los noventa, muestra que las propuestas de fortalecimiento del organismo —como las que formulara el anterior secretario general Boutros Boutros-Ghali en “Global leadership after the Cold War”, *Foreign Affairs*, 75(2), 1996, 86-98, y en su Agenda para la Paz de 1992 (*An Agenda for Peace: Preventive diplomacy, peacemaking and peacekeeping, Report of the Secretary-General pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992*)— no tuvieron eco en los países más poderosos.

tares, sino que debe prevalecer una preocupación por entender “qué o quién debería ser protegido y frente a qué amenazas” (Krause & Williams, 1996, p. 230).

Por su parte, las FF. MM. entienden el rol que se debe asumir para consolidar y controlar la frontera con miras a restablecer la seguridad que hoy se encuentra amenazada. En tal virtud, se abre el espectro de seguridad en un enfoque amplio, con miras a neutralizar los GAO, los GDO y demás delitos transnacionales (Colombia, Ministerio de Defensa Nacional, 2019).

También es cierto que las FF. MM., conscientes de su misión constitucional, al amparo y cumplimiento de la PDS (2019), y conscientes de que la principal amenaza a la seguridad está en la frontera como una zona “vacía de institucionalidad o con institucionalidad precaria”, tienen la convicción y fortaleza para erradicar el accionar criminal y consolidar la presencia institucional. Esto ha de hacerse a través de una visión multidimensional de seguridad, en la que todos los actores e instituciones estatales se integren en beneficio de un bien común que permita fortalecer el espíritu nacionalista, que en la frontera resulta esquivo. Es por ello que

Uno de los principales focos de la Política es el desmantelamiento de las economías ilícitas logrando afectar la cadena de valor y todas las actividades con ella relacionadas, al igual que los bienes y riquezas acumuladas producto del delito (...). La disruptión de los negocios ilícitos trasciende la tradicional forma de enfrentar dichos fenómenos que se concentra en capturar las cabezas de los aparatos delincuenciales, dejando intacta la infraestructura y redes que soportan la continuidad de tales actividades. La Política busca afectar estructuralmente los negocios ilícitos para hacerlos inviables. (Colombia, Ministerio de Defensa Nacional, 2019, p. 39)

El rol de las Fuerzas Militares permitirá recuperar y consolidar el control territorial de la frontera colombo-venezolana, hecho que logrará “superar la estabilidad estática que se consigue inicialmente con la intervención militar y convertirla en estabilidad dinámica”. De esta forma, la seguridad en la frontera será una realidad de estabilidad perceptible a través del cambio económico y social. Bajo la protección de las Fuerzas Militares, las autoridades civiles e instituciones gubernamentales realizarán las tareas de consolidación que abrirán paso a un desarrollo sostenible (Ramírez, 2011).

Conclusión

La frontera nororiental colombiana ha sido un territorio marginal en el que la política de fronteras y la escasa presencia estatal se evidencia únicamente con la presencia de las FF. MM. Si bien los conceptos de globalización relativizan el concepto de frontera desde visiones eminentemente comerciales posmodernistas, también la exponen a una dinámica de delincuencia tribal en el marco del neoinstitucionalismo. La realidad es que la exposición permanente a amenazas y fuentes de riesgo ha trascendido al punto de que el concepto de frontera se revitaliza, cobrando vigencia desde la óptica de defensa y seguridad, puesto que

hoy la frontera en un espacio geográfico estratégico de connotación internacional, en el que las FF. MM. están llamadas a cumplir su rol garantista de integridad y defensa estatal.

Tras la marginalidad y exclusión de la frontera nororiental de Colombia por parte del Estado, la criminalidad se ha diseminado a niveles exponenciales y ha llegado al punto de edificarse un emporio de ilegalidad consolidado a través de economías ilícitas alimentadas por secuestros, extorsiones, narcotráfico, lavado de activos, contrabando, tráfico de armas, trata de personas y explotación ilegal de recursos naturales, entre otros factores de inestabilidad. Todo ello se ha gestado al amparo de los GAO, los GDO y los GDR, que mantienen una dinámica delictiva degradada, que ha evidenciado que el concepto de seguridad no se puede seguir entendiendo a la luz de las teorías contractualistas del siglo XVIII.

Las manifestaciones de inseguridad y debilidad institucional del gobierno socialista de Nicolás Maduro constituyen uno de los principales factores de inestabilidad fronteriza. Además, el Estado bolivariano ha militarizado la frontera con pretensiones expansionistas (registradas en la Constitución bolivariana de 1999), hechos de provocación que no solo atentan contra la seguridad y estabilidad regionales, sino que también le han permitido a los GAO sobrepasar la frontera y refugiarse en territorio venezolano. Aunado a lo anterior, están los intereses de Rusia y China en apoyar un “gobierno canalla”, convertido en un detonante bélico que amenaza la paz mundial. Precisamente, estos hechos han convertido la frontera en un lugar de atención y preocupación para la comunidad internacional, que ve en este coctel delincuencial una amenaza potencial a la seguridad y estabilidad regionales. Los Estados suramericanos históricamente se han alineado con la preservación de la paz y la convivencia pacífica, como garantes de los postulados de la Organización de las Naciones Unidas, sin embargo, las patologías y la fenomenología delictiva fronteriza se resisten a mantener la balanza de la convivencia pacífica equilibrada.

Si bien es cierto que la globalización causa efectos colaterales en la porosidad de las fronteras, las FF. MM. no han caído en el error de ser simplemente espectadores de las peligrosidades que encierran las amenazas fronterizas, sino que permanentemente centran sus esfuerzos en el despliegue de acciones conjuntas e interoperabilidad para edificar e implementar herramientas, estrategias y acciones contra los agentes que nutren la ilegalidad.

La frontera colombo-venezolana no es ajena a la irreductibilidad que existe en estas zonas limitantes de soberanía. Por el contrario, conserva las características que permean los elementos esenciales del Estado, el territorio, la población y el sistema de gobierno, frente a lo cual la política, la economía, la sociedad y la cultura son determinantes en la construcción y consolidación de un concepto unificado de SDN, más aún cuando la realidad demuestra que la frontera históricamente ha sido una zona geográfica periférica alejada de la política central. Dicho en otras palabras, en la frontera la percepción de Estado es difusa y ambigua, salvo acciones muy puntuales recientes producto de la misma dinámica y conflictividad fronteriza.

En el contexto histórico se entendía la frontera como una zona periférica de poca importancia, dado el nivel de hermandad y respeto mutuo por los principios regidos por el derecho internacional público, la seguridad colectiva y la no intervención en asuntos de carácter interno, pero el cambio del sistema político en algunos Estados de la región, el sentimiento antihegemónico y la fragmentación ideológica lograron alterar la balanza de poder regional y cuando las amenazas atentan contra la SDN, los principios tienden a relativizarse y degradarse.

Adicionalmente, la SDN no debe concentrarse en una política gubernamental o en la misión que tienen las FF. MM. de salvaguardar la seguridad e integridad territorial. El concepto de defensa y seguridad debe partir de una acción de corresponsabilidad ciudadana e institucional; todos somos garantes de la seguridad, por lo tanto, la defensa es un deber asociado a la nacionalidad y a la defensa de la paz mundial. Hoy, prevalece un nuevo concepto de seguridad, de manera que el deber se orienta a denegar el accionar de los GAO y los GDO, lo cual significa atacar las economías ilícitas y, conjuntamente, implementar una política de seguridad multidimensional que represente los intereses nacionales, asegure el Estado de derecho, vigorice la legitimidad democrática de las instituciones, promueva, cumpla y garantice el respeto de los derechos humanos (Cubides-Cárdenes, Suárez, & Sierra-Zamora, 2018; Cubides-Cárdenes, Sierra-Zamora, Caldera, Ávila, & Sepúlveda, 2018) y se convierta en el motor de la transformación estructural de la frontera. Solo de esta forma se logra garantizar la hegemonía territorial, y la PDS es un instrumento que representa los intereses nacionales e internacionales de convivencia, paz y estabilidad regional y global (Fernández-Osorio, 2019).

Agradecimientos

Los autores desean agradecer a la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” por su apoyo en la realización de este artículo.

Declaración de divulgación

Los autores declaran que no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con el artículo. Este expone los resultados de investigación del proyecto titulado “Estrategia nacional. Por una política de Seguridad y Defensa a la vanguardia de las amenazas contemporáneas” del Grupo de Investigación Masa Crítica, registrado con el código COL0123247 y vinculado a la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”.

Financiamiento

Este proyecto de investigación fue financiado por la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” mediante Acta 1941 del 5 de diciembre del 2018.

Sobre los autores

Cipriano Peña Chivatá es docente investigador del Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Coordinador de la línea de investigación Geopolítica, Estrategia y Seguridad Hemisférica. Especialización en Seguridad y Defensa Nacional y Especialización en Administración de la Seguridad. Magíster en Negocios y Relaciones Internacionales. Magíster en Fortalecimiento de la Democracia. Profesor de la Universidad Militar Nueva Granada. Docente por intercambio en la Universidad San Buenaventura. Investigador del Grupo de Investigación Masa Crítica. <https://orcid.org/0000-0002-5922-5023> - Contacto: cipriano.pena@esdegue.edu.co

Paola Alexandra Sierra-Zamora es abogada de la Universidad Católica de Colombia. Magíster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por la Universidad de Valencia en España. PhD (c.) en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por esta misma casa de estudios. Gestora de investigación del Centro de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Pertenece al Grupo de Investigación en Capacitación Militar de la Escuela de Armas Combinadas del Ejército. <https://orcid.org/0000-0002-3146-7418> - Contacto: paola.sierra@esdegue.edu.co

Juan Carlos Hoyos Rojas es abogado. PhD (c.) en Bioética. Magíster en Derecho Público Militar. Magíster en Educación. Gestor académico y administrativo de la Maestría en Derecho Procesal Penal en la Universidad Militar Nueva Granada. Docente de posgrados en varias instituciones de educación superior. Docente investigador de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Asesor jurídico del Ministerio de Defensa Nacional. <https://orcid.org/0000-0002-9133-246X> - Contacto: juan.hoyos@esdegue.edu.com

Referencias

- Agnew, J. A. (2006). Entre la geografía y las relaciones. *Tabula Rasa*, 5, 85-98.
- Aguirre, K. (2011). El tráfico de armas en Colombia: una revisión desde los orígenes a los destinos. *Urvio. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, 10, 36-59. <https://doi.org/10.17141/urvio.10.2011.1142>
- Álvarez Calderón, C., & Rodríguez Beltrán, C. (2018). Ecosistemas criminales. *Revista Científica General José María Córdova*, 16(24), 1-30. <https://doi.org/10.21830/19006586.352>
- Ávila, F., León, S., & Ascanio, E. (2013). *La frontera caliente entre Colombia y Venezuela*. Colombia: Penguin Random House.
- Ávila, A., Suárez, J., Sánchez, D., & Ramírez, M. (2017). *El subsistema fronterizo de Colombia: lugar estratégico de los mercados ilegales*. Ecuador: Flacso.
- Brandes, L. (2019). *El conflicto venezolano y su dimensión internacional*. Recuperado de <https://www.cetri.be/El-conflicto-venezolano-y-su?lang=fr>
- Bermúdez, A. (2019). Guaidó y la crisis en Venezuela: ¿puede acabar en un choque entre China, Rusia y EE.UU.? *BBC: News*. Recuperado de bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47007022
- Buzan, B., & Hansen, L. (2009). *The evolution of international security studies*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Cañizáres, W., & Niño, E. (2017). *Una mirada local al crimen organizado en la frontera colombovenezolana. Cúcuta: Fundación Progresar, Capítulo Norte de Santander, Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Social y Política.* Recuperado de <https://es.scribd.com/document/370047940/Una-mirada-local-al-crimen-organizado-en-la-frontera-colombo-venezolana>
- Cavelti, M. D., & Balzacq, T. (2016). *Routledge handbook of security studies.* USA: Routledge.
- Collins, A. (2016). *Contemporary security studies.* Oxford: Oxford University Press.
- Colombia, Ministerio de Defensa Nacional. (2019). *Política de Defensa y Seguridad para la legalidad, el empredimiento y la equidad PDS.* Bogotá: Ministerio de Defensa Nacional.
- Colombia, Presidencia de la República. (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá: Legis Editores.
- Cubides-Cárdenas, J., Sierra-Zamora, P., Caldera Infante, J. E., Sepúlveda López, M., & Ávila Hernández, F. M. (Eds.). (2018). *Justicia constitucional en Colombia: codificación del derecho procesal constitucional.* Colombia: Ediciones Ciencia y Derecho.
- Cubides-Cárdenas, J. A., Sierra-Zamora, P. A., Calixto Ortiz, D. A., & Pabón Caballero, N. (2019). Terrorismo por parte de las FARC-EP y políticas públicas orientadas a la seguridad nacional en Colombia durante 1990-2000. *Revista Científica General José María Cárdena*, 17(26), 309-325. <https://doi.org/10.21830/19006586.404>
- Cubides-Cárdenas, J., & Sierra-Zamora, P. A. (2018). *Reparación integral de las víctimas en la justicia transicional: historia, debate y actualidad dentro del acuerdo de paz firmado por el gobierno de Colombia y las FARC-EP.* Universidad la Gran Colombia: Bogotá.
- Cubides-Cárdenas, J., Sierra-Zamora, P. A., & Mejía-Azquero, J. C. M. (2018). Reflexiones en torno a la Justicia Transicional en Colombia: Fuerzas Armadas, víctimas y posacuerdo. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 23(2), 11-24.
- Cubides-Cárdenas, J., Sierra-Zamora, P., & Núñez, M. D. (2017). El Fuero Militar en el derecho colombiano y en el derecho ecuatoriano. En J. Cubides-Cárdenas (Ed.), *El fuero militar: justicia interamericana y Operaciones para el Mantenimiento de la Paz.* Bogotá D.C.: Sello Editorial ESMIC.
- Cubides-Cárdenas, J., Suárez, J. S., & Sierra-Zamora, P. A. (2018). El derecho internacional humanitario y la corte interamericana de derechos humanos en la protección de los derechos de verdad y justicia a las víctimas del conflicto armado interno colombiano. En J. Cubides-Cárdenas, & A. Fajardo (Coords.), *Cuestiones dialécticas en torno a los derechos humanos y la paz.* Brasil: Instituto Memoria Editora & Projetos Culturais.
- Dalacoura, K. (2012). The 2011 uprisings in the Arab Middle East: Political change and geopolitical implications. *International Affairs*, 88(1), 63-79.
- Dinstein, Y. (2019). *The international law of belligerent occupation.* Cambridge: Cambridge University Press.
- Eder, K. (2006). Europe's borders: The narrative construction of the boundaries of Europe. *European Journal of Social Theory*, 9(2), 255-271.
- Ellis, E. (2017). *El impacto migratorio y de seguridad en Colombia por el colapso de Venezuela.* Recuperado de <http://bit.ly/2kM8pf7>
- Fernández, H. A. (2017). Scope of the internal crisis of Venezuela in Colombia. *Triarius*, 1(19), 4-6.
- Fernández-Osorio, A. (2019). La implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP: un estudio comparado desde la experiencia internacional. *Análisis Político*, 32(95), 104-124. <https://doi.org/10.15446/anpol.v32n95.80977>
- Finel, B. (1999). *New thinking about security? Analytical pitfalls and applications to the Americas.* Recuperado de <http://bit.ly/2m6CC8C>.
- García Pinzón, V. (2015). Territorios fronterizos: agenda de seguridad y narcotráfico en Chile, el Plan Frontera Norte. *Estudios Internacionales (Santiago)*, 47(181), 69-93.

- Garduño, E. (2003). Antropología de la frontera, la migración y los procesos transnacionales. *Frontera Norte*, 15(30), 65-89.
- Green, L. C. (2018). *The contemporary law of armed conflict*. Manchester: Manchester University Press.
- Hutchins, E., Cloppert, M. J., & Amin, R. M. (2011). Intelligence-driven computer network defense informed by analysis of adversary campaigns and intrusion kill chains. *Leading Issues in Information Warfare & Security Research*, 1(1), 1-80.
- Jácome, F. (2006). *Venezuela 2006: avances en la doctrina de seguridad y sus impactos regionales*. Caracas: Ildis.
- Jiménez Aguilar, C. (2008). La frontera colombo-venezolana: una sola región en una encrucijada entre dos estados. *Reflexión Política*, 10(20), 258-272.
- Jones, R. (2012). *Border walls: Security and the war on terror in the United States, India, and Israel*. UK: Zed Books Ltd.
- Krause, K., & Williams, M. C. (1996). Broadening the agenda of security studies: Politics and methods. *Mershon International Studies Review*, 40(Supp. 2), 229-254.
- Machado, L., Reyes Novaes, A., & Rego Monteiro, L. (2009). Building walls, breaking barriers: Territory, integration and the rule of law in frontier zones. *Journal of Borderlands Studies*, 24(3). <https://doi.org/10.1080/08865655.2009.9695742>
- Miron, M. (2019). La guerra irregular, insurgencias y cómo contrarrestarlas. *Revista Científica General José María Córdova*, 17(27), 457-480. <https://doi.org/10.21830/19006586.497>
- Newman, D. (2006). The lines that continue to separate us: Borders in our “borderless” world. *Progress in Human Geography*, 30(2), 143-161.
- Novaes, A. (2015). Map art and popular geopolitics: Mapping borders between Colombia and Venezuela. *Geopolitics*, 20(1), 121-141.
- Peña Chivatá, C., & Díaz, D. (2019). *El poder y la estrategia militar para la negociación e implementación de los acuerdos de paz en Colombia*. Colombia: Escuela Superior de Guerra.
- Pinzón, V. G. (2015). Estado y frontera en el norte de Chile. *Estudios Fronterizos*, 16(31), 117-148.
- Ramírez, S. (2011). Civil society peacebuilding on Colombia's borders. *Accord. An International Review of Peace Initiatives*, 22, 59-62.
- Robledo, J. E. (2016). *La corrupción en el poder y el poder de la corrupción en Colombia*. Colombia: Penguin Random House.
- Rodríguez, R. F., & Ito, J. C. (2016). La frontera colombo-venezolana: dos visiones divergentes. En Andrés Molano-Rojas (Ed.), *Fronteras en Colombia como zonas estratégicas: análisis y perspectivas*. Bogotá, D.C.: Fundación Konrad Adenauer en Colombia.
- Rueda Uribe, E. (2017). *Análisis problemáticas de seguridad en la frontera entre el departamento de Norte de Santander y la República Bolivariana de Venezuela Periodo 2015-2016* (Tesis de pregrado). Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá D.C., Colombia.
- Sánchez de Rojas Díaz, E. (2016). Las fronteras “porosas” de Sudamérica: ¿líneas divisorias o áreas de cooperación? *Documento de Análisis*, 39, 1-26.
- Sierra Zamora, P. A. (2018). *La tutela de los derechos humanos en situaciones de postguerra: el caso colombiano*. Bogotá: Sello Editorial ESMIC.
- Sierra-Zamora, P., & Gil-Osorio, J. (2019). El Ejército nacional y las reglas de enfrentamiento relativas al uso de la fuerza: la asistencia militar cuando se presente un hecho fronterizo y no exista intención hostil. *Revista Exégesis*, 60, 1-24.
- Singh, V. V., & Wang, J. (2015). Nano/micromotors for security/defense applications. A review. *Nanoscale*, 7(46), 19377-19389. <https://doi.org/10.1039/c5nr06254c>

- Stella, F. M. (2014). *La estructura orgánica y los niveles de dependencia de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército Argentino a la luz de los nuevos ambientes operacionales y su necesaria evolución hacia una dependencia de un Comando Conjunto de Operaciones*. Buenos Aires: Escuela Superior de Guerra.
- Tapia, M. (2012). Frontera y migración en el norte de Chile a partir del análisis de los censos de población. Siglos XIX-XXI. *Revista de Geografía Norte Grande*, 53, 177-198.
- Thornton, R. (2011). Counterterrorism and the neo-liberal university: Providing a check and balance? *Critical Studies on Terrorism*, 4(3), 421-429, <https://doi.org/10.1080/17539153.2011.623419>
- Thornton, R. (2015). The changing nature of modern warfare. *The RUSI Journal*, 160(4), 40-48, <https://doi.org/10.1080/03071847.2015.1079047>
- Torrijos Rivera, V., & Abella Osorio, J. (2018). El comportamiento de las FARC tras la firma de los acuerdos de La Habana. *Revista Científica General José María Cárdenas*, 16(24), 31-60. <https://doi.org/10.21830/19006586.342>
- Torrijos Rivera, V., & Pérez Carvajal, A. (2013). Repensando la teoría de la polaridad. Una aproximación al papel de Colombia en América Latina. *Revista Científica General José María Cárdenas*, 11(11), 29-66. <https://doi.org/10.21830/19006586.203>
- Villafuerte, D. (2009). La centralidad de las fronteras en tiempos de mundialización. *Comercio Exterior*, 59(9), 693-709.
- Vitelli, M. G. (2018). Comunidad e identidad en la cooperación regional en defensa: entendimientos en conflicto sobre pensamiento estratégico en el Consejo de Defensa Sudamericano. *Capa-Revista da Egn*, 22(2), 233-260.
- WEF: una severa desigualdad de ingresos es lo que más amenaza a la economía global. (2013). *Gestión*. Recuperado de <https://gestion.pe/economia/wef-severa-desigualdad-ingresos-amenaza-economia-global-27294-noticia/>
- West, N. (2015). *Historical dictionary of international intelligence*. USA: Rowman & Littlefield.
- Williams, P. D. (2012). *Security studies: An introduction*. New York: Routledge.

Esta página queda intencionalmente en blanco.

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Justice and Human Rights

Esta página queda intencionalmente en blanco.



Revista Científica General José María Córdova

(Revista colombiana de estudios militares y estratégicos)

Bogotá D.C., Colombia

Volumen 17, Número 28, octubre-diciembre 2019, pp. 799-818

<http://dx.doi.org/10.21830/19006586.472>

La reparación de víctimas en la implementación de un proceso de justicia transicional

Reparations to victims in transitional justice processes

Katterin Viviana Camargo García

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Bogotá D.C., Colombia

RESUMEN. El presente documento analiza la reparación de víctimas en la implementación de un proceso de justicia transicional por violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Asimismo, contempla los tipos de reparación establecidos a nivel internacional y los componentes que se deben tener presentes para lograr una reparación integral con el objetivo de superar los efectos morales y físicos causados por un conflicto armado interno. La investigación contempla una metodología de análisis cualitativo-descriptivo que se despliega en tres focos: 1) componentes para la reparación de víctimas en el proceso de justicia transicional, 2) tipos de reparación de víctimas establecidos a nivel internacional para un conflicto armado interno y 3) la reparación de víctimas como un mecanismo para superar el conflicto armado interno.

PALABRAS CLAVE: conflicto armado; derechos humanos; justicia; persona desplazada; reparación; víctima de guerra

ABSTRACT. This document examines the reparations to victims in transitional justice processes for violations of human rights and crimes against humanity. It also contemplates the types of reparations established internationally and the components that must be considered to attain integral reparation to cope with the moral and physical effects brought on by internal armed conflict. The research follows a qualitative-descriptive analysis methodology that is divided into three focuses: 1) components for the reparation of victims in the transitional justice process, 2) types of reparation of victims established at international level for an internal armed conflict, and 3) the reparation of victims as a mechanism to overcome the internal armed conflict.

KEYWORDS: armed conflict; displaced person; human rights; justice; reparation; war victim

Sección: JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS • Artículo de reflexión

Recibido: 30 de abril de 2019 • Aceptado: 21 de junio de 2019

CONTACTO: Katterin Viviana Camargo García katterin.camargo@esdegue.edu.co

Introducción

A lo largo de la historia mundial, los conflictos armados no internacionales¹ se caracterizan por presentar un alto nivel de violencia interna que, según el contexto y el origen de este, pueden escalar sistemáticamente y generar daños económicos, materiales y humanos (Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR], 2012). Estos problemas que se presentan en el contexto contemporáneo son uno de los principales focos de inestabilidad e ingobernabilidad a nivel internacional, que dan lugar, además, a acciones que atentan contra la dignidad humana: violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

Por su parte, el Estado es el principal garante y responsable de los derechos humanos y derechos fundamentales que, constitucionalmente y por mandato internacional, están obligados a salvaguardar. Por lo anterior, en un escenario de conflicto armado, sin importar su origen, es el Estado el responsable del restablecimiento de la paz y de la reparación a las víctimas que puedan dejar las confrontaciones armadas. Si bien a nivel internacional existen marcos jurídicos (como el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los conflictos armados) encaminados a la protección de los derechos humanos en tales situaciones, estos no establecen lineamientos metodológicos para formular e implementar un mecanismo efectivo que garantice la reparación de las víctimas, debido a que en cada país el contexto es tan particular que no se pueden establecer fórmulas para garantizar una completa reparación económica ni moral (Quintero, 2018).

Por su parte, la justicia transicional (en adelante, JT) es un proceso aplicado a nivel global en el marco de los conflictos armados no internacionales, generalmente puesto en marcha después de un acuerdo de paz entre actores armados ilegales y el Estado. Con la JT se busca principalmente la rendición de cuentas por actos u omisiones de los bandos involucrados en el desarrollo del conflicto, que causaron un daño físico o moral a personas no relacionadas con la guerra y que, principalmente, suelen ser civiles (International Center for Transitional Justice, 2018). En este sentido, la JT busca la reparación de las víctimas, entendidas como las personas que de manera individual o colectiva sufrieron algún tipo de afectación al derecho internacional humanitario y los derechos humanos en el marco del conflicto por causa de alguna de las partes involucradas (Colombia, Ministerio de Salud y Protección, 2017).

Con respecto a lo anterior, en el caso de Colombia, las reparaciones a las víctimas del conflicto armado es un fin del *Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de paz*.

1 Según “el artículo 3 común [de los Convenios de Ginebra] se aplica a un «conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes». Puede ser un conflicto armado en que participen uno o más grupos armados no gubernamentales. Según la situación, puede haber hostilidades entre las fuerzas armadas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales o entre esos grupos únicamente. Dado que los cuatro Convenios de Ginebra han sido ratificados universalmente, el requisito de que el conflicto armado ocurra «en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes» ha perdido su importancia en la práctica. De hecho, cualquier conflicto armado entre fuerzas armadas gubernamentales y grupos armados o entre estos grupos sólo puede tener lugar en el territorio de una de las Partes en el Convenio” (Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR], 2008, p. 3).

ción de una paz estable y duradera², en cuya proceso de justicia transicional se contempla la retribución por sus sufrimientos, el derecho a la verdad, la justicia y la no repetición. En consecuencia, la reparación debe alinearse a normas y estándares internacionales. También se debe tener en cuenta lo que afirman Cubides, Caldera y Ramírez (2018):

El cambio político —con hondas repercusiones sociales y económicas— es determinante desde un punto de vista prospectivo, para el escenario propio de construcción de paz estable y duradera y de reconciliación nacional. Entendiendo el concepto de transición, como las transformaciones empíricamente perceptibles que suceden en el interior de un régimen político o en alguno de sus componentes, teniendo en cuenta las normas, las instituciones políticas, los valores, las creencias comunes.

Frente a este último aspecto es válido señalar que, si bien el aspecto económico podría en parte compensar el daño material causado, existen aspectos inmateriales y morales propios de la subjetividad de cada persona que se deben considerar para proponer una justa y adecuada reparación que evite revictimizar. Por lo tanto, no existe un principio general para resarcir a una víctima, todo esto depende de las condiciones que se establezcan en el marco de los acuerdos y en el proceso de JT para lograr una reparación adecuada, asequible y justa.

El presente artículo aborda el tema de las reparaciones a víctimas de violaciones a los derechos humanos y de delitos de lesa humanidad en los procesos de JT, en consecuencia, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los componentes de la reparación de víctimas en la implementación de un proceso de justicia transicional que den como resultado un mecanismo digno y justo para resarcir el daño moral y físico?

Para responder a ello, se tendrá en cuenta la forma en que se han estructurado las reparaciones a nivel internacional, cuándo se han considerado proporcionales a los delitos y violaciones según el derecho internacional público y cuál es la importancia de contemplar la participación de las víctimas en cada uno de los escenarios de reconstrucción social.

Finalmente, en el documento se plantea que las diferentes reparaciones deben cumplir con normas y estándares internacionales. Se debe tener presente que, en todo caso, ningún aspecto económico, simbólico o de rehabilitación ayudará de forma absoluta a olvidar el daño causado a una víctima; no obstante, se establecen diferentes tipos de reparación que imprescindiblemente se deben contemplar para una justa y adecuada reparación de los daños contra la dignidad de la personas en escenarios de conflicto armado. Se tienen en cuenta, también, las dificultades propias de los procesos de implementación de

2 El acuerdo fue firmado el 24 de noviembre de 2016 por el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), para la finalización del conflicto armado entre ambos actores y la construcción de una paz estable y duradera. Los puntos generales tratados en la mesa de negociación y plasmados en el acuerdo son a) política de desarrollo agrario integral, b) participación política, c) fin del conflicto, d) solución al problema de las drogas ilícitas, e) víctimas y f) implementación, verificación y refrendación (Colombia, Alto Comisionado para la Paz, 2016).

acuerdos en posconflicto, en los que suelen presentarse eventuales situaciones de reconfiguración de las dinámicas armadas (Jiménez, Acosta, & Múnera, 2017).

Componentes para la reparación de víctimas en los procesos de justicia transicional

Mucho se discutió sobre del tipo de justicia a implementar por parte del Gobierno Nacional durante el desarrollo del acuerdo de paz con la desmovilizada organización insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy, partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), quienes conforman un segmento de la llamada “oposición política”³ en Colombia.

Si bien se destaca el hecho de la inserción de un grupo armado ilegal en la vida civil, más aún, en la vida política, no se debe dejar de lado la implementación a cabalidad de los puntos del acuerdo final de paz que, en estos momentos, siguen estando en proceso. En este sentido, los procesos sociales y políticos siguen estando abiertos para lograr una “terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” que no solo se limite a asegurar los derechos de los excombatientes, sino que logre garantizar los derechos para la población civil víctima de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto. Por esta razón se estableció un tipo de justicia transitoria y especial, que solo es aplicable a individuos que guardan relación directa o indirecta en el conflicto.

Este tipo de modelo extraordinario de JT, por decirlo así, no es propio del hecho coyuntural del escenario colombiano, pues en casos semejantes de conflictos armados no internacionales en otros países se aplicó este tipo de justicia especial, llamada internacionalmente “justicia transitoria”.

En el mundo se han desarrollado conflictos armados tan complejos como el colombiano, que han llegado a alcanzar un nivel de hostilidades superiores y desproporcionadas, casos particulares como el proceso de transición de los países de la antigua Yugoslavia (Bosnia y Herzegovina, Croacia, Kosovo, Macedonia, Montenegro y Serbia), Etiopía, Malí, Nigeria y Macedonia, hasta llegar a los reiterados procesos de paz en el Chad. Todos estos han culminado necesariamente con la consolidación de un acuerdo paz, para el que fue necesaria la construcción de un marco jurídico especial para la transición.

¿Qué es la justicia transicional? Según Balkan Transitional Justice —programa apoyado por la Comisión Europea con el objetivo de publicar y transmitir informes referentes a la justicia transicional de los Balcanes—, la JT es un marco jurídico utilizado en las sociedades democráticas con el fin de facilitar la reconciliación y la estabilización después del conflicto. Este marco abre la posibilidad de implementar nuevos mecanismos que permitan la búsqueda de la verdad, aplicando procesos de investigación particulares, conformando comisiones y creando centros de análisis documental en los que se busque

³ Ver, por ejemplo, Londoño (2016).

enjuiciar a los individuos involucrados o perpetradores de violación a los derechos humanos (Balkan Transitional Justice, 2018).

Por su parte, el Centro Internacional para la Justicia Internacional [CIJI] (2018) sostiene que JT es un proceso de rendición de cuentas y reparación de víctimas que busca garantizar la dignidad y los derechos como ciudadanos y seres humanos de los individuos involucrados. En dicho proceso, la atención a las víctimas y el respeto a su dignidad son prioritarios.

Un aspecto destacado de lo propuesto por CIJI es que, dependiendo del escenario y la realidad del conflicto, los objetivos de la JT pueden variar y pueden ir desde la creación de instituciones para consolidar la confianza, el Estado de derecho y el acceso a la justicia hasta fomentar la reconciliación. En cualquiera de los casos, se debe fomentar “el reconocimiento de la dignidad de los individuos, la reparación y la admisión de las violaciones de derechos” (CIJI, 2018, § 5)

No existe un modelo único de JT, pues las condiciones del conflicto pueden tener diferentes orígenes y, según el escenario, los niveles de violencia y complejidad pueden escalar sistemáticamente y dejar a su paso consecuencias de índole diversa. Por lo general, la intensidad de un conflicto armado tiene diferentes indicadores que pueden ayudar a su medición (muertes, homicidios y número de acciones hostiles, entre otros), sin embargo, estos no tienen el alcance cualitativo para establecer un estándar analítico que permita diseñar las bases que permitan una reconstrucción social, pues el daño moral en los individuos involucrados en el conflicto trasciende lo material.

Para tal contingencia, la comunidad internacional —principalmente las instituciones garantes de los derechos humanos— estableció una serie de referentes normativos amparados en la *Declaración Universal de Derechos Humanos*, proclamada el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este documento se consagra una serie de derechos que no deben ser transgredidos para ningún ser humano, sin importar raza, edad, sexo, condición económica o política. En principio, son 30 derechos universales, que deben ser garantizados por el Estado:

Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. (ONU, Asamblea General, 1948, § 4)

Bajo dicho manifiesto, se resalta la idea de que la base de la libertad, la justicia y la paz es el reconocimiento de la dignidad y los derechos humanos inalienables entre iguales (ONU, Asamblea General, 1948). En este sentido, en un escenario de guerra, de transición y de paz, el respeto de la dignidad humana es la piedra angular.

Dicho lo anterior, ¿qué es la dignidad humana? y ¿cómo garantizar el respeto de la dignidad humana en un escenario de transición? Esta última pregunta resulta muy compleja de responder, pues depende del escenario, de la capacidad institucional del Estado, de los factores culturales, económicos, políticos y sociales.

La dignidad humana es un concepto que se remonta a las raíces filosóficas de la Antigua Grecia. Según Martínez (2013), parafraseando a Eduardo Nicol, la discusión filosófica se desarrolló en tres aspectos centrales: la metafísica, la epistemología y la antropología. Según esta última, la comprensión de la naturaleza humana se deriva, dentro de varios, de un aspecto esencial: la *dignidad*. Este concepto es definido, de acuerdo con los griegos, como algo valioso, apreciado, precioso y merecedor, por lo cual, en la práctica, la dignidad refiere a “ser tratado como lo que se es” (Martínez, 2013, §§ 15-16).

Para Valdivieso (2012), la dignidad parte del respeto de la especie humana y la defensa de los derechos humanos que se enmarcan en el régimen jurídico del derecho internacional por una serie de actos históricos como declaraciones y tratados, vinculantes para los sujetos reconocidos como tales por los distintos Estados, organizaciones y actores. Desde estas definiciones puede afirmarse que la dignidad humana es todo aquello relacionado con el ser humano, reconocimiento adquirido históricamente y cristalizado en los derechos esenciales derivados de su condición. En síntesis, la dignidad humana la podemos relacionar con un trato entre pares o como la define Valls:

[...] la dignidad humana consiste en la capacidad que tenemos los humanos de darnos ley moral a nosotros mismos. En la jerga kantiana, los primeros profesan heteronomía moral (ley de otro), mientras los segundos proclamamos la autonomía moral del ser humano (ley de uno mismo) [...] la dignidad común, que emana de esta capacidad de obligarnos por respeto a la libertad y dignidad ajenas, no se pierde por un comportamiento indigno, porque la misma libertad moral implica siempre la capacidad de enmienda. Esta dignidad inherente a la condición humana hace que seamos fin en y por nosotros mismos. De donde resulta que ningún humano puede hacerse señor de otro y subordinarlo a su voluntad. Ni nadie puede darse voluntariamente en esclavitud. Y no siendo relativo el valor dignidad, hay que declararlo absoluto. (Valls, 2015, pp. 70-81)

Considerando lo anterior, resulta esencial garantizar el respeto de los derechos humanos, es decir, de la dignidad humana. Por tanto, durante y después de la consolidación del proceso de paz (también llamado *periodo de posacuerdo*), no solo para el Estado, sino para la comunidad en general, deben prevalecer el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos.

Ahora bien, ¿cómo garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignidad humana? El cumplimiento parte del principio del contrato social, de acuerdo con el cual el Estado, como garante de los principios esenciales como el de la seguridad, debe emplear los medios y capacidades disponibles para corresponder a su misión. Entre estos aspectos se encuentra el fortalecimiento de las capacidades institucionales tanto jurídicas como coercitivas, reconociendo en todo caso la responsabilidad en caso de incapacidad o de

omisión en el cumplimiento de su mandato constitucional. Al respecto, la implementación de una justicia alternativa es uno de los diferentes medios con que se cuenta, como un espacio de convergencia de sujetos y actores implicados para resolver una cuestión en común. El aspecto negativo es el nivel de eficacia y efectividad con que se cuenta para lograr tal objetivo.

¿Quiénes deben participar? Todos aquellos relacionados directa o indirectamente con la violación de los principios fundamentales durante y después del conflicto armado. Por eso en la mesa de negociación no solo deben participar los plenipotenciarios del Estado, combatientes y víctimas, sino todos aquellos sectores que de alguna manera resultaron afectados por el conflicto.

Si bien, como se mencionó antes, no existe un modelo internacional de JT que obligue a los Estados a seguir con su cabal cumplimiento, existen normas internacionales vinculantes que sí estipulan textualmente los deberes del Estado en materia de derechos humanos, cuyo no cumplimiento implica sanciones económicas y políticas.

En consecuencia, la normatividad institucional estipula los lineamientos que deben seguir los sujetos y actores para el respeto a los derechos humanos. En total son aproximadamente 14 tratados, protocolos, convenciones internacionales vinculantes y no vinculantes, dentro de los cuales se destacan los siguientes: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (prioriza la abolición de la pena de muerte), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, 2006).

Con lo anterior se señala que los lineamientos para la constitución de una JT deben estar alineados con el cumplimiento y respeto de los protocolos y tratados internacionales, más aún cuando el principio fundamental con el cual se promueve una justicia transitoria tiene como objetivo la no repetición de las acciones ilegales en el marco de un conflicto armado y el castigo por las violaciones al derecho internacional humanitario.

Otro acto administrativo internacional realizado por el Estado colombiano es el reconocimiento de las competencias de la Corte Internacional de Justicia, aspecto por el cual la República de Colombia, mediante el Estatuto de Roma, reconoce y facilita el juzgamiento y castigo de quienes cometan genocidio, crímenes contra la humanidad o de guerra.

De esta manera, en cumplimiento con los compromisos adquiridos por el Estado a nivel internacional, Colombia debe, en primera instancia, salvaguardar los derechos humanos de sus ciudadanos en cualquier escenario, bien sea en tiempos de paz o de guerra. En segundo lugar, el Estado colombiano debe asumir de manera objetiva el juzgamiento de todos los actores que participaron en crímenes de guerra, genocidios, crímenes de lesa humanidad y otras transgresiones de los derechos humanos.

Para Alejandro Aponte (2018), director del Departamento de Justicia Transicional de la Universidad de la Sabana, la Justicia Especial para la Paz (justicia transicional), a diferencia de la justicia penal, tiene como objetivo buscar la verdad, la justicia (exclusivamente para el marco del conflicto armado) y la reparación; esta última, objetivo de análisis en el presente documento.

La reparación de víctimas en la justicia transicional

¿Cómo se define *victima del conflicto armado*? Para el Ministerio de Salud de Colombia, las víctimas son aquellos individuos cuyo cónyuge, compañero o compañera permanente, pareja del mismo sexo o familiar en primer grado de consanguinidad resulte herido o víctima mortal por circunstancias del conflicto. Esto comprende también el hecho de que este pueda resultar herido o con una afectación física o moral (Colombia, Ministerio de Salud y Protección, 2017).

Por su parte, el Estado decretó la Ley 1448 de 2011, con medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. En esta ley se define el estatus de víctima, en el artículo 3, de la siguiente manera:

Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1.º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. (Colombia, Congreso de la República, 2011, art. 3)

Uno de los aspectos centrales de todo el proceso de paz es la no repetición de las hostilidades armadas, hecho por el cual existen diferentes mecanismos para la superación del escenario de inestabilidad social: “Por lo tanto, debe ser un deber del Estado proporcionar todas las medidas necesarias para que la reparación pueda desarrollarse. La atención de dichos aspectos puede evitar que surjan nuevas situaciones de tensión e incertidumbre” (Cubides, Ramírez, & Betancourt, 2018, p. 200). En este sentido, Heather y Lawrence (2003) abordan el cambio de perspectiva de la justicia restaurativa por el de la justicia conciliatoria, dos enfoques que, según los autores, tiene objetivos contrarios. La primera se presenta como una forma de represión, pues los procesos de justicia restaurativa en la Europa monárquica, alrededor de 1180, dejaron a la deriva a las víctimas de atrocidades cometidas por reyes y monarcas, a causa de la exclusión total o parcial de estas en los procesos conciliatorios, que se generaban solo entre los actores involucrados enfrentados.

De hecho, en el 2014, después de dos años del inicio de los diálogos de paz entre el Estado colombiano y las FARC, en el reconocimiento de competencias y responsabilidades, la guerrilla reconoció la existencia de víctimas en el conflicto, es decir que hasta ese momento esa agrupación no contemplaba la existencia de daños físicos y morales a la ciudadanía no combatiente por sus hostilidades (“Las FARC dan paso histórico”, 2014).

Por otra parte, desde el Estado colombiano, en el marco del reconocimiento de la participación política, se habilitaron curules en el Senado y en la Cámara de Representantes para excombatientes de las FARC, no obstante, en el 2017, el Senado desestimó las curules destinadas a las víctimas del conflicto (Palacios, 2017). Actualmente, cursa un nuevo intento para recuperar las curules de las víctimas, mientras que los excombatientes se encuentran ya en ejercicio de su participación.

Por otra parte, en la perspectiva de la justicia restaurativa, se sostiene que el objeto central del daño a las víctimas debe repararse, para lo cual se plantean las siguientes consideraciones: 1) facilidades para las víctimas en los tribunales, 2) mejorar el asesoramiento, 3) indemnización por algunos delitos y 4) facilitar los procedimientos judiciales que posibiliten la participación de las víctimas de manera indirecta y simbólica en el sistema de justicia penal (Heather & Lawrence, 2003).

En este punto, factores subjetivos y de fondo —propios de la situación en que se realizaron los hechos y según el impacto causado— tienden a ir en contraposición de las condiciones reales y racionales para llevar a cabo una justa reparación. En consecuencia, en un sentido pleno del concepto de lo que significa *reparación*, es posible que la víctima no sea resarcida de manera total, debido a que existen factores inmateriales imposibles de llevar a un estado ideal de manera simbólica o económica, como una pérdida humana, una daño físico o moral. Por eso, Heather y Lawrence señalan la importancia de la “restauración emocional y la disculpa”, sosteniendo que cada víctima es un mundo aparte que debe ser analizado y tenido en cuenta por la justicia. Por otra parte, hasta que no se estructure un sistema claro de justicia, puede que esta, a corto y mediano plazo, no cumpla con su objetivo final: la no repetición de las acciones, factor que representa un riesgo a la legitimidad del Estado (véase, por ejemplo, Vásquez & Gil, 2016; Zamudio, 2016).

Con respecto a esto último, existen lineamientos internacionales para la protección de los derechos humanos que particularizan, por ejemplo, el derecho de las víctimas, y resaltan los componentes básicos para el establecimiento de una JT en el marco de un conflicto armado interno, mecanismo que permite establecer los límites jurídicos que tienen como objetivo buscar la verdad, la justicia y la reparación. Por esta razón, todo proceso de justicia transitoria debe ajustarse a principios internacionales y buscar el respeto a la dignidad humana de la persona afectada de forma directa e indirecta.

Tipos de reparación establecidos a nivel internacional para un conflicto armado interno

Ahora bien, tras haber revisado la normatividad internacional en cuanto a los derechos humanos y la dignidad humana, es posible ahora pasar al siguiente cuestionamiento: ¿en qué consiste la reparación de víctimas en el marco de la JT?

A nivel internacional, la JT plantea los mecanismos judiciales y políticos que buscan instaurar en el Estado de derecho la posibilidad de abordar las heridas generadas por vio-

laciones a los derechos, avanzar en los procesos de conciliación, proveer justicia, develar las raíces del conflicto y garantizar la no repetición (Ardila, 2010).

En la actualidad, la normatividad internacional resalta la importancia de la reparación de las víctimas de un conflicto armado. Para este caso, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 60/147, el 16 de diciembre de 2005, la cual establece los “principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” (ONU, Asamblea General, 2005, pp. 1-2).

En dicho documento se establece la jurisprudencia que poseen las víctimas de hacer valer su derecho, interponer recursos y obtener reparaciones. De esta forma, la comunidad internacional, garante del cumplimiento de la normatividad internacional, reafirma las obligaciones para con las víctimas de sufrimiento y supervivientes. Se debe aclarar que, si bien la citada resolución establece las directrices internacionales del derecho de las víctimas a la reparación, no establece la forma en que esto debe hacerse.

En cuanto a esto, en el apartado VII de la citada norma, referente al “Derecho de las víctimas a disponer de recursos”, se establecen tres aspectos: 1) el acceso a la justicia, 2) la reparación debe ser adecuada, efectiva y rápida en relación con el daño sufrido y 3) las víctimas tienen derecho a acceder a la información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación (ONU, Asamblea General, 2005). Además, el Estado debe llevar a buen término la reparación, en concordancia con la normativa que se encuentra en el apartado IX (“Reparación de los daños sufridos”), en el que se afirma que, entre las diferentes formas de reparación en proporción al daño sufrido, se pueden considerar la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición (ONU, Asamblea General, 2005). El cumplimiento de estos aspectos está a discreción del Estado, lo cual está condicionado a variables como el interés del sistema político y la confluencia de múltiples actores.

En complemento con lo anterior, la Asamblea General, sostiene que la restitución, “... siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario” (ONU, Asamblea General, 2005, Cap. IX). Para ello se plantea devolver las condiciones materiales a la víctima, como la restitución del lugar de residencia, empleo o la devolución de bienes, aspectos, en todo caso, materiales.

Otro factor es el referido a la indemnización, en el que se argumenta que debe realizarse “de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario” (ONU, Asamblea General, 2005, Cap. IX).

Los anteriores aspectos implican dejar de lado la perspectiva subjetiva y establecer, en el marco de la JT, un sistema de límites, garantías y estándares normativos, pues, de no tenerlos, se dificulta bastante llevar a buen término la reparación, más aún, en el desarrollo de un conflicto de más de 50 años, en el que las condiciones sociales, económicas y políticas deben contemplarse. Por eso, la JT requiere de capital humano interdisciplinario nacional e internacional que se ajuste a las realidades de los casos abordados.

La reparación de las víctimas en diferentes enfoques internacionales

A continuación, se describen tres diferentes perspectivas —todas internacionales— que abordan los componentes significativos de la reparación de las víctimas.

El derecho internacional y los derechos humanos

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reparación es un principio del derecho internacional que debe ser respetado y cumplido adecuadamente. De acuerdo con Steiner y Uribe (2014), el Tribunal Interamericano sostiene que la reparación tiene como objetivo retornar a la situación anterior, lo cual comprende la compensación de daños patrimoniales y extrapatrimoniales. En este sentido, se puede inferir que la interpretación de la Corte se alinea con los parámetros consagrados por la Asamblea General.

Un aspecto destacado resaltado por los autores es la competencia que asume la Corte en materia de reparación: garantizar el goce de los derechos y libertades, reparar las consecuencias de las violaciones cometidas y ordenar el pago de una indemnización justa (Steiner & Uribe, 2014).

Para Pérez-León (2017), la Corte es competente para establecer el tipo de indemnización por la cual será reparada víctima sobreviviente. En caso de que no sobreviva, la familia recibirá la indemnización correspondiente al daño causado. En todo caso, la reparación y la indemnización son los componentes centrales del derecho de las víctimas.

Derecho internacional humanitario (DIH)

Según Pérez-León (2017), la preocupación central del DIH son las víctimas, aunque en el marco normativo no se aborde en sentido expreso el concepto. La principal cuestión que aborda este derecho es la violación de los derechos humanos en el marco de un conflicto armado; lo que se busca es prevenir las acciones sobre objetivos no válidos o ilegítimos conocidos en pleno derecho. En efecto, las víctimas son 1) aquellas personas que sufren daño directo, 2) familiares o dependientes directos de la víctima, 3) personas que resultaron afectadas por intervenir en favor del cumplimiento de una norma y 4) organizaciones o entidades (víctimas colectivas) (Pérez-León, 2017).

Un aspecto por señalar, considerado en el DIH, es la categorización que reciben las víctimas. La primera de ellas es la relacionada con la participación directa en los conflictos cuando, por diversas circunstancias, se haya perdido el estatus de combatiente (objetivo

legítimo militar) o cuando, siendo combatiente, se le hayan violado sus derechos. La segunda se refiere a las personas que no participaron directamente en el conflicto, pero, por omisión o por efecto de las hostilidades, resultaron afectadas de forma indirecta.

El autor concluye que, sin importar el inicio, desarrollo o conclusión del proceso contra el implicado responsable, la calificación de víctima será efectuada. Este aspecto permite considerar que el estatus de víctima se mantendrá sin importar que el caso sea juzgado y que exista un acuerdo con el infractor.

Derecho penal internacional

De acuerdo con la normatividad internacional y su competencia, en 1998 diferentes Estados acudieron a la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas en Roma, con lo cual se conformó la Corte Penal Internacional y se firmó el tratado referente al Estatuto de Roma. Fue así como se estableció la competencia internacional de los países que ratificaron el Estatuto para juzgar a personas y no a los Estados por actos relacionados con genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Si bien, el objetivo es el juzgamiento de los actores materiales responsables y relacionados con tales infracciones, también se hace referencia la importancia de la reparación.

Según Pérez (2011), en concordancia con las legislaciones internacionales, los Estados eran los únicos avalados para exigir indemnización, pero, de acuerdo con el artículo 75 del Estatuto de Roma, la reparación no solo incluye la indemnización, sino también la restitución y la rehabilitación. Un aspecto relevante es que la Corte puede emitir una decisión directa contra la persona involucrada. Frente al probable impedimento de que las personas relacionadas no puedan cumplir con la decisión, se estableció un Fondo Fiduciario que les permite a las víctimas acceder al derecho a la reparación.

El modelo reparativo

En este punto se enfatiza la importancia de la justicia reparativa para las víctimas del conflicto armado, pues en el *Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera* se establece la reparación y la restauración como principio de la Justicia Especial para la Paz.

Lisa Laplante (2015) aborda dos enfoques de justicia: la reparativa y la restaurativa. La primera tiene como fundamento corregir un error a través de la compensación, enfoque que, como ya se ha comentado, es acogido por instancias internacionales. Una crítica a este tipo de justicia es que deja sin soportes el modelo de justicia correctiva. Se señala el hecho de que en la JT, la víctima renuncia a un procedimiento judicial que, últimas instancias, favorece al infractor, pues se aleja de la lógica crimen-castigo.

Claramente, bajo el anterior enfoque pueden evidenciarse opiniones antagónicas, por ejemplo, las que señalan que la justicia no solo debe ser considerada como un castigo

a modo correctivo, sino existen otras formas de “corregir” la conducta. En este sentido, ¿puede librarse de alguna manera el infractor de las responsabilidades materiales y morales con este modelo? En cierta medida, el infractor lo está logrando, pues el objetivo de este modelo es reparar a la víctima, lo que, en primera instancia, resulta difícil de conceder a causa de que nunca se puede llegar a un estado ideal de reparación absoluta o en una proporción justa cuando se han afectado los derechos humanos, en especial, con delitos mortales. Además, en una segunda instancia, el infractor no se está sometiendo de manera a los procedimientos legales del Estado, sino a un tipo procedimientos acordados entre las partes.

El modelo restaurativo

Mientras en el caso reparativo se parte de la lógica crimen-reparación, en el modelo restaurativo —según Laplante (2015)— se parte de la lógica en la que el infractor reconoce sus obligaciones y acepta la flexibilidad de optar, según corresponda, una modalidad para restaurar el bienestar individual o el colectivo. Un aspecto relevante de este enfoque es que, en él, la justicia se adapta al daño cometido, pues se parte de la proporcionalidad.

Laplante (2015) manifiesta que esta perspectiva es empleada generalmente por las comisiones de la verdad, y se caracteriza porque el Estado es considerado como incapaz de reparar totalmente a las víctimas en los aspectos inmateriales, emocionales y morales.

En esta perspectiva se puede identificar la complejidad de llevar a cabo procesos reparativos, cuando se pone en tela de juicio la competencia cabal que pueden llegar a tener los agentes representantes del Estado, que no han participado directamente en las hostilidades. Lo anterior puede llegar a generar mecanismos de negociación que no satisfagan completamente en la JT, pues el punto central y el “deber ser” es reconocer a las víctimas y su rol en la negociación y consolidación de un acuerdo al mismo nivel de los representantes legales y de los actores infractores. Frente a este aspecto, se puede poner como ejemplo la posición de quienes consideran que las víctimas de las FARC no tuvieron en la mesa de conversaciones del proceso del acuerdo final una participación preponderante y acorde con los daños recibidos en masacres y otros actos hostiles⁴.

Tipos de reparación

La reparación es un derecho que poseen las víctimas que fueron objeto de daño físico, mental, emocional e incluso financiero. Según Theo van Boven, el propósito de la reparación es aliviar el sufrimiento y brindar justicia respecto a los daños causados por actos ilícitos, por lo tanto, la reparación deberá acoplarse a las necesidades e intereses de las víctimas. Existen, en consecuencia, diferentes clases de reparación, dentro de las cuales se

⁴ Ver al respecto, por ejemplo, Mendieta (2017), “Víctimas en La Habana” (2014) y Brett (2017).

repasan en los apartados siguientes las cinco con mayor reconocimiento a nivel internacional que abarcan el daño generado a terceros (Cruz, 2010).

Restitución

En el marco legal del Estatuto de Roma se sostiene que la reparación debe devolver a la víctima a una situación “anterior a la violación de sus derechos”, un requerimiento ambiguo a causa de la difícil proporcionalidad de la restitución frente al delito, dadas las situaciones como el daño físico, mental y moral, imposibles de restituir en su totalidad.

La restitución, en todo caso, comprende la devolución o el pago de los bienes por daños o pérdidas sufridos. En cuanto a los daños al medioambiente e infraestructura, se debe exigir a los victimarios responsables la restauración, reconstrucción, reposición de los daños, instalaciones comunitarias y el reembolso de los gastos generados por daños o por motivos de reubicación y disgregación de una comunidad. Este último punto, en el caso colombiano, involucra el desplazamiento forzado (ONU, Asamblea General, 1948).

Compensación

Este tipo de reparación consiste en devolver el daño a partir de una valoración económica proporcional al delito causado. La compensación comprende el daño físico o mental por pérdidas laborales, educativas u otras relacionadas con tales prestaciones. En el caso del aspecto moral, se comprende la asistencia jurídica, cobertura de gastos generados por servicios médicos, psicológicos y rehabilitación (ONU, Asamblea General, 1948).

Rehabilitación

La rehabilitación, entendida como la asistencia médica y de compensación a fin de permitir la asistencia a la persona para su óptimo desempeño (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018), comprende la atención psicológica y los servicios sociales para aliviar los daños causados, como discapacidades (ONU, Asamblea General, 1948).

Satisfacción

El principal objetivo de la satisfacción involucra varios aspectos como la verificación de los hechos, pero su esencia principal es la divulgación pública de la verdad. Mediante la realidad de los hechos se busca restablecer la dignidad y la reputación (ONU, Asamblea General, 1948).

Garantías de no repetición

Esta es una de las tipologías complementarias que busca, mediante medidas estructurales, que los hechos perjudiciales no vuelvan a ocurrir. Con este fin, se contempla el fortalecimiento del sistema judicial, la protección de los defensores de los derechos humanos y la promoción del respeto de los derechos (ONU, Asamblea General, 1948).

En resumen, el derecho de las víctimas es un principio del derecho internacional, gracias al cual se reconoce que la víctima es objeto y sujeto que constituye el eje central de la normativa de protección y defensa de los derechos humanos. En consecuencia, la restauración e indemnización hacen parte de los componentes principales del Estado de derecho, por las cuales deben trabajar organizaciones, actores públicos y privados. Asimismo, se reconoce que la competencia de los organismos internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos, bien sea en el marco de un conflicto armado o no armado, da lugar a la existencia de organizaciones e instancias especializadas formalmente creadas y concebidas con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad.

En cuanto al caso colombiano, aún no se tiene certeza de la magnitud de los daños causados por la violencia armada generada por los distintos actores del conflicto. Tampoco es claro hasta qué punto los responsables tengan las capacidades económicas y la voluntad política para lograr reparar a todas las víctimas, pues, además del daño moral causado en el tejido social, ya de por sí difícil de reparar, la normatividad internacional contempla la reparación económica, un aspecto que frente a los más de 50 años de conflicto es bastante complejo de llevar a cabo (Cubides, Sierra, Calixto, & Pabón, 2019).

Según Ardila, Jiménez y Acosta (2018), el país requiere políticas públicas que permitan la construcción de una cultura estratégica con el fin de llegar a los objetivos nacionales. Este planteamiento permite identificar que, desde el aspecto jurídico, la rama judicial debe articularse con otras esferas para mejorar la efectividad organizacional y, así, identificar y judicializar los principales actores involucrados en el conflicto armado colombiano. De hecho, el nuevo escenario, caracterizado por la reconfiguración de actores armados, implica un tipo de justicia especial que no sea indulgente con actores que faciliten los medios o actúen en favor de intereses criminales, en particular, con afectación para los derechos humanos.

La reparación de víctimas y la superación del conflicto armado interno

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia es un mecanismo que tiene como objetivo la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los delitos cometidos por las FARC antes del 1.º de diciembre de 2016. Esto quiere decir que los actores que sigan en la insurgencia después de tal fecha deberán someterse a la justicia común y podrán llegar a ser juzgados por otras instancias con agravantes en su condena.

Se debe indicar que el acto legislativo que estructura la JEP se realizó el 4 de abril de 2017: “Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones” (Colombia, Congreso de la República, 2017). La JEP hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Es de destacar que el modelo hace énfasis en medidas restaurativas y reparadoras con el objeto de buscar “la restauración del daño causado y la reparación de las víctimas

afectadas por el conflicto, especialmente para acabar la situación de exclusión social que les haya provocado la victimización” (Colombia, Congreso de la República, 2017, Cap. I).

De acuerdo con el apartado anterior, se puede señalar que el modelo restaurativo se ajusta a las condiciones propias del conflicto colombiano, pues los daños causados a lo largo de 50 años de hostilidades deben ser analizados en función del contexto. Téngase presente que los períodos de mayor violencia armada fueron las décadas de los ochenta y los noventa, cuando las dinámicas de las hostilidades enfrentaron múltiples actores (insurgentes, autodefensas, narcotraficantes y fuerza pública), por lo cual dicho modelo cuenta con la flexibilidad requerida para analizar cada caso (Fernández-Osorio, 2018; Padilla, 2012).

En materia de cumplimiento organizacional con respecto a las normas estipuladas a nivel internacional, se señala que la JEP se compone de 18 magistrados especializados distribuidos en tres salas: 1) Reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, 2) Amnistía o indulto y 3) Sala de definición de situaciones jurídicas (Jurisdicción Especial para la Paz [JEP], 2017).

En materia de sanciones, se debe tener presente que la JEP tiene como finalidad, en primer lugar, garantizar los derechos de las víctimas y, en un segundo momento, consolidar la paz, para lo cual establece sanciones de carácter restaurativo y de reparación. En el caso puntual de la esencia de las sanciones, estas deben ser “alternativas u ordinarias”, dos conceptos que resultan ambiguos si no se establecen limitantes conceptuales. En consecuencia, todo depende de la interpretación que se le dé a la norma.

Ahora bien, puede afirmarse que la JEP, que es la justicia transicional para el caso de Colombia, cumple con los componentes básicos establecidos a nivel internacional, pues presenta un enfoque dotado de mecanismos reparativos y restaurativos, ambos componentes imprescindibles para la superación del conflicto. En efecto, el Estado colombiano ha implementado el enfoque de reparación integral, que comprende la rehabilitación, indemnización, satisfacción, restitución y garantías de no repetición (Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, 2017).

Por otra parte, se reconoce que, hasta que no se den las primeras condenas expedidas desde la JEP, no se pueden establecer las respectivas consideraciones de los daños causados ni establecer si la justicia cumplió o no con su objetivo de reparación.

Como consideración final, se resalta la idea de que el mejor hecho que puede destacar la JEP es la no repetición de los hechos violentos contra la población civil, un aspecto que requiere la necesaria observación de las instituciones internacionales, pues el conflicto armado no internacional sigue latente en Colombia.

Conclusiones

La reparación de víctimas en el proceso de implementación de la justicia transicional debe establecer un marco jurídico alineado con los parámetros internacionales, con el

fin de ser el soporte para la reparación integral de las personas afectadas por el conflicto de manera directa e indirecta. Con este planteamiento se busca la no repetición o reincidencia de conflictos armados. Por eso, en un proceso de paz como el colombiano, la justicia no debe ser un mecanismo de protección de los principales actores involucrados en la firma del acuerdo final de paz, sino que debe ser una herramienta que identifique también actores indirectos en el conflicto que por sus acciones hayan contribuido a la generación de violencia.

Los lineamientos internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos establecen componentes básicos para el establecimiento de una JT, un mecanismo jurídico que permite buscar la verdad, la justicia y la reparación. En el caso de la JEP, se puede determinar el cumplimiento básico de lineamientos internacionales que resaltan la idea de la dignidad humana de las víctimas afectadas directa e indirectamente.

Estos aspectos implican un sistema de límites, garantías y estándares normativos. Asimismo, llama la atención la estructuración del enfoque restaurativo, pues, dadas las condiciones propias del conflicto, este puede ser un camino viable para el juzgamiento. Así las cosas, será necesario ver de qué forma se establecen las primeras condenas y reparaciones de la mano del funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

De llegar a estructurarse un proceso de negociación activo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en este deben participar y tener mayor cabida los representantes de las víctimas. Asimismo, debe considerarse la posibilidad de dar mayor cabida a los representantes de la fuerza pública, ya que en este tipo de procesos no se trata de predominios políticos, sino de asuntos de Estado (no de gobierno).

Para finalizar, se resalta que los mecanismos alternativos de justicia en el marco de un proceso de posconflicto deben contar con garantías jurídicas para que los actores ilegales se disuadan de participar con las armas y de llevar a cabo acciones criminales que afecten la población civil en materia de derechos humanos.

Agradecimientos

La autora desea agradecer a la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” por su apoyo en la realización de este artículo.

Declaración de divulgación

Este artículo hace parte del proyecto de investigación “Retos para la Fuerza Pública y la sociedad colombiana en posacuerdo frente a los nuevos conflictos” de la línea de investigación Derechos Humanos, DICA y Justicia, del grupo de investigación Memoria Histórica, Construcción de Paz, Derechos Humanos, DICA y Justicia, de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. La autora declara que no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con el artículo.

Financiamiento

La autora no declara fuente de financiamiento para la realización de este artículo.

Sobre la autora

Katterin Viviana Camargo García es candidata a magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados, de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia, Colombia. Abogada de la Autoridad Nacional de Televisión.

<https://orcid.org/0000-0002-1936-837X> - Contacto: katterin.camargo@esdegu.edu.co

Referencias

- Aponte, A. (2018). ¿Por qué es necesario crear un modelo de justicia transicional? *El Espectador*. Recuperado de <https://colombia2020.elespectador.com/jep/por-que-es-necesario-crear-un-modelo-de-justicia-transicional>
- Ardila, C., Jiménez, J., & Acosta, H. (2018). Una aproximación a la Política de Seguridad y Defensa desde la cultura de seguridad y defensa nacionales. En G. Eljach Pacheco (Ed.), *Políticas públicas y gestión pública en Colombia: estudios de caso*. Bogotá: Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos - CAEL, & Secretaría General del Senado de La República de Colombia.
- Ardila, D. (2010). *Justicia transicional: principios básicos*. Recuperado de <http://escolapau.uab.cat/img/progabmas/derecho/justicia/doc004.pdf>
- Balkan Transitional Justice. (2018). *What is transitional justice?* Recuperado de <http://www.balkaninsight.com/en/balkan-transitional-justice/what-is-transitional-justice>
- Brett, R. (2017). *La voz de las víctimas en la negociación: sistematización de una experiencia* [Versión digital en PDF]. Recuperado de <http://bit.ly/2YZVW5C>
- Centro Internacional para la Justicia Internacional (CIJI). (2018). *¿Qué es la justicia transicional?* Recuperado de <https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional>
- Colombia, Alto Comisionado para la Paz. (2016). *Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*. Recuperado de <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/acuerdo-general/Paginas/inicio.aspx>
- Colombia, Congreso de la República. (2011). Ley 1448. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones (junio 10 de 2011).
- Colombia, Congreso de la República. (2017). *Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones*. Recuperado de https://www.jep.gov.co/Marco%20Normativo/Normativa_v2/02/AL02.pdf
- Colombia, Ministerio de Salud y Protección. (2017). *Víctimas del conflicto armado*. Recuperado de http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Victimas_Inicio.aspx
- Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). (2008). *¿Cuál es la definición de “conflicto armado” según el derecho internacional humanitario?* Recuperado de <https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf>
- Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). (2012). *Conflictos internos u otras situaciones de violencia: ¿cuál es la diferencia para las víctimas?* Recuperado de <https://www.icrc.org/spa/resources/documents/interview/2012/12-10-niac-non-international-armed-conflict.htm>

- Cruz, L. (2010, enero-abril). El derecho de reparación a las víctimas en el derecho internacional. Un estudio comparativo entre el derecho internacional de responsabilidad estatal y los principios básicos de reparación de víctimas de derechos humanos. *Revista de Derecho Político*, 77, 185-209. Recuperado de <http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/viewFile/9108/8701>
- Cubides Cárdenas, J., Ramírez Benítez, E., & Bentancourt, L. (2018). Sujetos internacionales y víctimas: actores fundamentales para la reconciliación y promoción de derechos humanos en Colombia en el posconflicto. En M. Guarino (Ed.), *Dialogos: los derechos humanos después del acuerdo*. Bogotá: Ediciones Escuela Superior de Guerra.
- Cubides Cárdenas, J. A., Sierra Zamora, P. A., Calixto Ortiz, D. A., & Pabón Caballero, N. (2019). Terrorismo por parte de las FARC-EP y políticas públicas orientadas a la seguridad nacional en Colombia durante 1990-2000. *Revista Científica General José María Cárdena*, 17(26), 309-325. <https://doi.org/10.21830/19006586.404>
- Las FARC dan paso histórico para reconocer a víctimas del conflicto armado. (2018). *El País*. Recuperado de <https://www.elpais.com.co/judicial/las-FARC-dan-paso-historico-para-reconocer-a-victimas-del-conflicto-armado.html>
- Fernández-Osorio, A. (2018). El papel del Ejército Nacional de Colombia para el fortalecimiento de la paz en el posacuerdo con las FARC. En L. Cabrera y M. Corcione Nieto (Eds.), *Aportes y retos en el posacuerdo: una perspectiva desde las ciencias militares* (pp.15-37). Bogotá D.C.: Sello Editorial ESMIC.
- Heather, S., & Lawrence, W. (2003). Repairing the harm: Victims and restorative justice. *Utah Law Review*, 15, 15-42
- International Center for Transitional Justice. (2018). *¿Qué es la justicia transicional?* Recuperado de <https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional>
- Jiménez, J., Acosta, H., & Múnera, A. (2017). Las disidencias de las FARC. En J. Cubides, & J. Jiménez (Eds.), *Desafíos para la seguridad y defensa nacional de Colombia. Teoría y praxis*. Bogotá: Escuela Superior de Guerra.
- Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). (2017). *Jurisdicción Especial para la Paz*. Recuperado de <https://www.jep.gov.co/Paginas/JEP/Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx>
- Laplante, L. (2015). Just repair. *Cornell International Law Journal*, 48. Recuperado de <https://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Laplante-final.pdf>
- Londoño, J. F. (2016). *Oposición política en Colombia: completar la democracia y garantizar la paz*. Bogotá: Registraduría Nacional del Estado Civil, Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (Cedae) y Centro de Análisis y Asuntos Públicos (CAAP).
- Martínez, V. (2013). Reflexiones sobre la dignidad humana en la actualidad. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 46(136), pp. 39-67.
- Mendieta, L. (2017). Entrevista realizada por la revista *Semana*. Recuperado de <https://www.semana.com/nacion/articulo/militares-y-victimas-de-las-farc-se-sienten-excluidos-de-participar-en-politica/551878>
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2006). *Los principales tratados internacionales de derechos humanos*. Recuperado de <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreaties.pdf>
- ONU, Asamblea General. (1948). *Declaración Universal de Derechos Humanos*. Recuperado de https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
- ONU, Asamblea General. (2005). *Resolución 60/147*. Recuperado de <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx>
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2018). *Atención médica y rehabilitación*. Recuperado de <https://www.who.int/disabilities/care/es/>

- Padilla, J. M. (2012). Guerra jurídica: el caso colombiano. *Revista Científica General José María Córdova*, 10(10), 107-142. <https://doi.org/10.21830/19006586.230>
- Palacios, J. (2017). *Víctimas quedaron sin curules en el Congreso*. Recuperado de <http://www.senado.gov.co/historia/item/27439-victimas-quedaron-sin-curules-en-el-congreso>
- Pérez, A. (2011). Las víctimas ante la Corte Penal Internacional ¿El final del oxímoron víctimas-justicia internacional? *Revista de Derechos Humanos Dfensor*, 7, pp.22-27.
- Pérez-León, J. (2017). Las reparaciones en el derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho penal internacional. *American University International Law Review*, 23(1), 7-49.
- Quintero, K. L. (2018). Los integrantes de la fuerza pública como víctimas del conflicto y la revictimización. *Revista Científica General José María Córdova*, 16(24), 109-127. <http://dx.doi.org/10.201830/19006586.358>
- Steiner, C., & Uribe, P. (2014). *Convención Americana sobre Derechos Humanos comentada*. Recuperado de <http://www.corteidh.or.cr/tablas/30237.pdf>
- Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas. (2017). *Ruta integral individual*. Recuperado de <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/atenci%C3%B3n-asistencia-y-reparaci%C3%B3n-integral/ruta-integral-individual/11416>
- Valdivieso, A. (2012). La justicia transicional en Colombia. Los estándares internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario en la política de Santos. *Papel Político*, 17(2), 621-653.
- Valls, R. (2015). El concepto de dignidad humana. *Revista de Bioética y Derecho*, n.º especial, 278-285.
- Vásquez Hincapié, D. J., & Gil García, L. M. (2016). Las conductas punibles y faltas contra la disciplina y el servicio en la justicia penal militar y en el Reglamento de Régimen Disciplinario. *Revista Científica General José María Córdova*, 14(18), 49-72. <https://doi.org/10.21830/19006586.42>
- Víctimas en La Habana: los que fueron y los que faltaron. (2014). *Verdad Abierta*. Recuperado de <https://verdadabierta.com/victimas-en-la-habana-los-que-fueron-y-los-que-faltaron/>
- Zamudio Rodríguez, D. J. (2016). El régimen jurídico militar y el derecho internacional de los derechos humanos. *Revista Científica General José María Córdova*, 14(18), 97-112. <https://doi.org/10.21830/19006586.44>



Revista Científica General José María Córdova

(Revista colombiana de estudios militares y estratégicos)
Bogotá D.C., Colombia

Volumen 17, Número 28, octubre-diciembre 2019, pp. 819-843
<http://dx.doi.org/10.21830/19006586.516>

Aportes de la Academia a la legitimidad de la justicia en Colombia

Contributions of the Academy to the legitimacy of justice in Colombia

María Antonieta Corcione Nieto

Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Bogotá D.C., Colombia

Andrés Eduardo Fernández Osorio

Escuela de Aviación del Ejército, Bogotá D.C., Colombia

Leidy Johanna Cabrera Cabrera

Escuela de Armas Combinadas del Ejército, Bogotá D.C., Colombia

Beyaert Camilo Rojas Yaima

Centro de Misiones Internacionales y Acción Integral, Bogotá D.C., Colombia

RESUMEN. La legitimidad de la justicia en Colombia pasa por uno de los momentos más desfavorables en la historia del país, debido a los altos niveles de corrupción y la falta de imparcialidad y credibilidad de las instituciones y actores llamados a preservarla. Una opción primordial para su restablecimiento está en la Academia, debido a su vocación de investigar objetivamente, con base en métodos y teorías con fundamento científico que no obedecen a poderes particulares. En este artículo se presenta un estudio de la producción de la academia en Colombia sobre la justicia, a partir del uso de herramientas bibliométricas, en contraste con los ocho factores determinados por el Proyecto de Justicia Mundial, para identificar el valor de sus aportes, su pertinencia y las dificultades a superar.

PALABRAS CLAVE: academia; Colombia; conflicto y paz; justicia; legitimidad; producción bibliográfica

ABSTRACT. The legitimization of the justice in Colombia is going through one of the most delicate phases in the history of the country due to the high levels of corruption and the lack of impartiality and credibility in institutions and in actors tasked with preserving it. The primary option to reestablish the said credibility is the Academia given its calling to conduct objective research based on methods and theories with scientific grounding which do not submit to individual powers. This article presents a study on justice conducted by Colombian researchers, using bibliometric methods – which stands in stark contrast with the eight factors determined by the Global Justice Project – in order to identify the value of its insights, its value and the difficulties that are to be overcome.

KEYWORDS: academia; bibliographic production; Colombia; justice; legitimacy; peace and conflict

Sección: JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS • Artículo de investigación científica y tecnológica

Recibido: 9 de junio de 2019 • Aceptado: 6 de septiembre de 2019

CONTACTO: María Antonieta Corcione-Nieto maria.corcione@esmic.edu.co

Introducción

La justicia, como uno de los bienes primordiales en toda sociedad, busca no solo regular la interacción entre sus integrantes y fomentar un comportamiento armonioso, sino brindar confianza en la existencia y fines del grupo social y sus instituciones. No en vano, Rawls (2012, p. 3) considera la justicia como “la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es a los sistemas de pensamiento” y Sen (2010, p. 24) la contempla como “la mínima moralidad humanitaria que gobierna nuestra relación con todos los demás”.

De esta forma, la justicia se torna en un instrumento de normativización que permite la protección balanceada de los derechos, libertades, deberes y responsabilidades de los ciudadanos. Así mismo, se convierte en un fin al transformar la sociedad en un “complejo autónomo de estructuras político-sociales que intermedian las acciones de los individuos o los grupos con las formas organizadas e institucionalizadas del poder” (Wolkmer, 2002, p. 136).

Ahora bien, la supremacía de la justicia y su correcta administración están ligadas a su legitimidad ante los ciudadanos. Aunque la justicia conlleva una determinada subordinación del grupo social al Estado como sistema de poder, solo a través de la legitimidad se “consolida su existencia y determina [su] naturaleza [como] medio de dominación” (Weber, 1964, p. 171). De forma similar, tal como lo sugiere Held (1991, p. 184), “la legitimidad del Estado se funda predominantemente en la autoridad legal, en el compromiso con un código de regulaciones legales”, por lo cual es necesario “trascender la mera validez de las normas jurídicas buscando la legitimidad (justicia) de la legalidad” (Del Hierro, 2013, p. 185).

No obstante, para Colombia, un país cuya historia ha estado marcada por un conflicto armado interno y múltiples escenarios de negociación, la legitimidad de la justicia se convierte en uno de sus mayores desafíos para lograr un escenario de reconciliación. La presunta ineffectividad de la justicia colombiana frente los hechos de violencia, violaciones a los derechos humanos y episodios de victimización ha generado en los ciudadanos una desconfianza del 74% en el sistema judicial nacional (Gallup, 2019, p. 94), así como una tendencia a tomar la justicia por mano propia para contrarrestar la impunidad (Mojica Rozo, 2018; Guerrero, 2003; Villa Gómez, 2013).

Este desafío de la justicia en Colombia —recobrar la legitimidad y el reconocimiento por parte de los ciudadanos para lograr una adecuada administración de justicia— se torna aún más complejo en razón de que las instituciones y principales actores de la sociedad (Congreso, partidos políticos, altas cortes, organismos de control y medios de comunicación, entre otros), llamados a promover la legitimidad de la justicia, tienen niveles de entre 40% y 80% de desaprobación (Gallup, 2018, 2019). Esta situación, aunada a un negativismo de más del 65% sobre el futuro del país (Yanhaas, 2019, p. 31), dificulta aún más el retorno de la confianza de los ciudadanos en la prevalencia de las leyes y extiende el escepticismo sobre la legitimidad de la justicia, situación a todas luces inconveniente para la reconciliación en Colombia.

Sin embargo, el escenario para la justicia en Colombia aún cuenta con posibilidades para la mejora de su legitimidad, una de las cuales está en la academia. En efecto, para los autores de este artículo, la academia es un actor primordial —aunque muchas veces ignorado—, dado que puede contribuir ampliamente al fortalecimiento de la legitimidad de la justicia en el país, mediante su producción investigativa (publicación de nuevo conocimiento), la divulgación de sus resultados, el planteamiento de debates y reflexiones pertinentes en torno a las realidades nacionales sobre el conflicto armado y la paz, y la búsqueda de reconocimiento de la justicia como única garante de la democracia y los derechos humanos. Todo ello contribuye de forma directa a un mejor entendimiento de las complejidades del caso colombiano y a un mejor accionar frente a la situación nacional, incluso, en relación con el contexto regional e internacional.

Concretamente, este artículo tiene dos objetivos ante la falta de legitimidad como desafío de la justicia en Colombia. Primero, identificar los aportes investigativos de la academia a través de la caracterización de su producción bibliográfica sobre el tema, de acuerdo con los ocho factores determinados por el Proyecto de Justicia Mundial (2019): 1) restricciones en los poderes gubernamentales, 2) ausencia de corrupción, 3) gobierno abierto, 4) derechos fundamentales, 5) orden y seguridad, 6) cumplimiento de la normativa, 7) justicia civil y 8) justicia penal. Segundo, establecer oportunidades de mejora en la investigación de la academia colombiana que permitan contribuir a la legitimidad de la justicia en Colombia y al fortalecimiento de las instituciones.

Para tal fin, el documento se ha estructurado en cinco secciones. La primera se ocupa de describir el escenario de deslegitimación de la justicia en Colombia, la segunda profundiza en el rol de la academia como actor social, la tercera expone la metodología utilizada y caracteriza la investigación bibliográfica en Colombia, la cuarta discute la contribución de la academia a la justicia y la legitimidad, y la quinta aporta unas consideraciones finales.

Los avatares de la justicia: entre los actores institucionales y la realidad nacional

La realidad nacional presenta grandes desafíos para la democracia en cuanto a la eficacia de las instituciones y la legitimidad del sistema judicial. Desde la Constitución de 1991, el país se ha encaminado hacia la formación de un Estado social de derecho, fundado para la consolidación del ordenamiento nacional; sin embargo, el conflicto armado y la violencia han dificultado la continuidad y capacidad en el accionar de las instituciones (Cortés Albornoz, 2015; García-González, Sánchez-Sánchez y Salcedo-Díaz, 2017).

En los últimos años en Colombia, la justicia ha estado en el centro de los debates políticos, suscitados por múltiples factores como la violencia, la corrupción, la crisis de derechos humanos y la creciente judicialización de la protección de los derechos de las personas. Bajo este panorama, las instituciones nacionales y, en especial, las que se relacio-

nan con la justicia sufren desde hace más de una década una de sus crisis más profundas (Latinobarómetro, 2017).

En la actualidad, la política y los partidos políticos en particular son objeto de un sentimiento de desafección y desconfianza por parte de la ciudadanía. Sin que Colombia sea una excepción, en toda América Latina los partidos políticos están en crisis. Esto se acompaña de un profundo descontento de amplios sectores de la sociedad colombiana con los partidos políticos y el sistema de partidos vigente, a causa del trasteo electoral, sumas colosales de dinero en las campañas, clientelismo rampante, secuestro y asesinato de candidatos, amenazas de sabotaje, compra de votos y de jurados, y violencia contra electores.

Desde esta perspectiva, se cuestiona la existencia misma de las instituciones partidistas y el rol que desempeñan en la sociedad (Ungar Bleier & Arévalo, 2004). Sin embargo, esta desfavorabilidad (Figura 1) no ha significado su desaparición, ya que su existencia es fundamental para el arraigo de las instituciones democráticas (Basset, 2019).

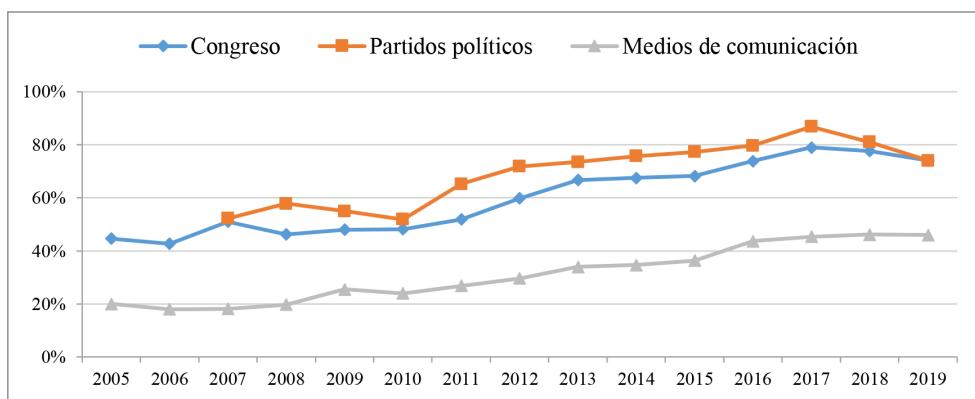


Figura 1. Opinión *desfavorable* sobre actores políticos y medios de comunicación.

Fuente: elaboración propia con base en la información de Gallup (2019).

Aun cuando el arraigo de las instituciones democráticas está afianzado, esto no significa que no se encuentren afectadas. Como se resaltó, los partidos tradicionales ya no cuentan con un mayoritario apoyo popular, mientras que los partidos políticos nuevos aparecen y desaparecen con facilidad, dado que en la mayoría de los casos solo responden a los intereses de sus líderes y dirigentes (Arbeláez Villegas, 2018).

A esta crisis de los partidos se le suman las dinámicas de corrupción y clientelismo que surgen en la estructura de estos, lo que aumenta la baja aceptación de la ciudadanía. Por otra parte, la polarización del electorado frente al acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP exigió que los partidos tradicionales fueran contundentes en la toma de posiciones, lo que para algunos de ellos fue imposible —lo cual los sumió en el fracaso electoral— (Torrijos Rivera y Abella Osorio, 2018; Observatorio de la Democracia, 2019).

Uno de los escenarios de actuación de los partidos políticos, el Congreso de la República —responsable de crear las leyes en las cuales se basa el sistema judicial—, mantiene un similar comportamiento de desfavorabilidad en la opinión pública. En 2018, casi tres de cada cuatro colombianos no estaban de acuerdo con las actuaciones de este cuerpo colegiado (Gallup, 2018). Un año después, el panorama sigue sin cambiar.

En este contexto, los grandes perjudicados son el poder ejecutivo y el poder judicial, que no cuentan con una contraparte respetada, un desequilibrio que los ciudadanos perciben notablemente. Aunque siempre está allí, en silencio, la posibilidad de renovar el Congreso para convertirlo en una corporación admirable que dé la talla frente a las necesidades del país, esta opción se diluye cuando se registran nuevamente nexos de los parlamentarios con grupos al margen de la ley o relación con grandes escándalos de corrupción (Se hunde proyecto, 2019; Un Congreso que ni suena ni truena, 2013).

De forma similar, los medios de comunicación también han sufrido una evidente pérdida de confianza (46% de desfavorabilidad) por parte de la sociedad colombiana (Gallup, 2019, p. 88). Es claro que la polarización desatada en las últimas campañas electorales —que afectó a toda la sociedad—, unida a las diferencias que hay en cuanto al proceso de paz o el manejo de la seguridad, entre otros asuntos, también terminó por influir negativamente en la percepción de los medios de comunicación (Por qué las instituciones están en crisis, 2014).

Así mismo, los múltiples intentos fallidos de reformas judiciales para intentar la recuperación de su dignidad y majestad han puesto en evidencia los males que aquejan al sistema judicial: politización de la justicia, judicialización de la política, corrupción, congestión e impunidad, entre otros (Charry Urueña, 2017).

El 2017 fue uno de los años más álgidos de esta crisis del sistema judicial (Figura 2), por cuenta de las investigaciones realizadas en contra de magistrados, jueces, fiscales y litigantes por casos relacionados con corrupción. “Una paradoja tan lamentable, que los actores del sistema judicial hayan sido cooptados por el delito que más daño hace al país, ha tenido efectos en la opinión pública, que reconoce esta coyuntura como la peor crisis que afronta el poder judicial” (*¿Cuál es el origen de la crisis que sufre la justicia colombiana por corrupción?*, 2017).

Esta coyuntura no es casual, ya que las investigaciones han develado que no se trata de casos aislados sino de una problemática estructural que inicia en la formación, selección y desempeño de los actuales operadores judiciales. Aun así, el sistema judicial sigue teniendo problemas serios de calidad y transparencia (Acosta, 2018), así como demoras en los procesos jurídicos y negligencia, lo que hace que los colombianos crean cada vez menos en la justicia (Resultados de la encuesta Gallup sobre corrupción y Juan Manuel Santos, 2017).

Sin confianza en el poder legislativo ni en el judicial, tampoco la imagen de los altos tribunales puede salir favorecida. La Corte Suprema de Justicia tiene una percepción negativa del 54 %, mientras que la Corte Constitucional, que hace unos años era una de

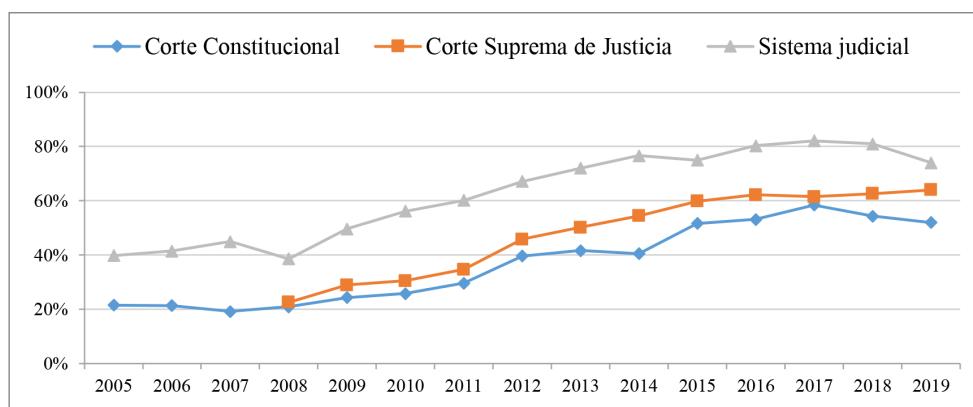


Figura 2. Opinión *desfavorable* de altas cortes y sistema judicial.

Fuente: elaboración propia con base en la información de Gallup (2019).

las instituciones más respetadas por los colombianos, tiene una imagen desfavorable del 41 % para el 2014 y del 59 % para el 2017 (Los protagonistas del escándalo de corrupción en la justicia, 2017; Casos de corrupción en la rama judicial y Cortes, 2018; Por qué las instituciones están en crisis, 2014).

Una de las causas de la desfavorabilidad de las cortes la constituye el denominado “choque de trenes”, que se ha presentado en numerosas ocasiones ante los fallos entre los altos tribunales por sentencias que se contradicen entre sí (Se agudiza choque de trenes entre altas Cortes, 2018). Tal como lo plantea Salinas Alvarado (2017, p. 177),

(...) este choque de trenes generó inseguridad jurídica en el común de los ciudadanos, y aún al interior de los poderes públicos, pues muchos no saben a quién acatar, si a la Corte Constitucional o a la Suprema, o al Consejo de Estado, ya que esta situación es relativamente nueva y se colige que las altas cortes están en el mismo nivel jerárquico.

Los organismos de control y la Fiscalía General de la Nación (FGN) también mantienen bajos niveles de aceptación. La Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de la República (CGR) presentan una desfavorabilidad superior al 30% desde el año 2013 (Figura 3).

La Fiscalía General de la Nación, encargada de la investigación y acusación de los sospechosos de haber cometido crímenes que son objeto de la acción de la justicia penal (Dávila, 2012) en curso en el Congreso, modifica sin un análisis cuida-doso el equilibrio de poderes establecido en la Constitución de 1991. Afecta la autonomía e independencia de la Rama y le da mayor capacidad de incidencia al Ejecutivo, mientras el Legislativo se blinda frente a la posibilidad de ser investigado, juzgado y condenado. La reforma a la justicia no atiende el conjunto de problemas largamente diagnosticados. Introduce modificaciones en algunos aspectos, como la conges-tión, pero ni en ellos cuenta con un consenso suficiente para que se pueda esperar que al ser aprobada tenga un impacto

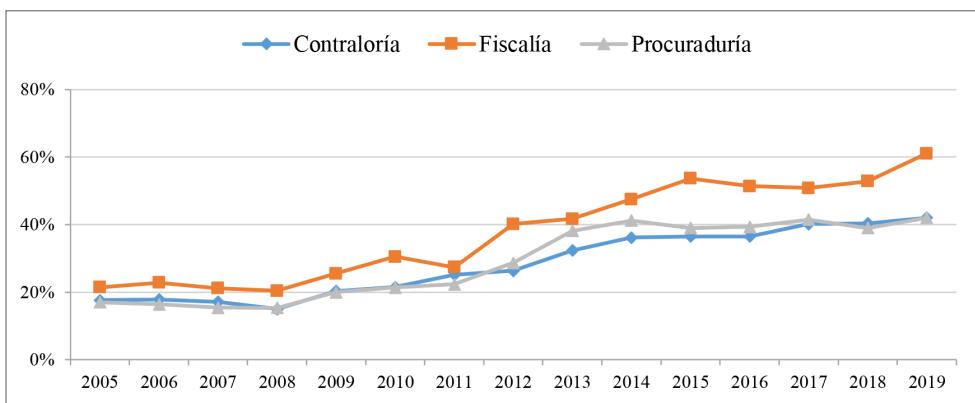


Figura 3. Opinión *desfavorable* de organismos de control y Fiscalía General de la Nación.

Fuente: elaboración propia con base en la información de Gallup (2019).

significativo. La reforma a la justicia parece, de antemano, condenada al fracaso (tanto la comentada en este paper, como la que está saliendo luego de varios debates adicionales y esfuerzos gubernamentales por no dejarla fracasar, tampoco sale bien librada. Desde el 2015 la deslegitimación de la institución supera el 50 %, debido a los señalamientos en torno a una significativa injerencia y cooptación de los intereses del narcotráfico y de los grupos armados ilegales, especialmente, sobre las instancias regionales y locales del aparato judicial. De allí, entonces, la falta de investigación y de judicialización sobre figuras delincuenciales son bastante claras (Dávila, 2012)en curso en el Congreso, modifica sin un análisis cuida-doso el equilibrio de poderes establecido en la Constitución de 1991. Afecta la autonomía e independencia de la Rama y le da mayor capacidad de incidencia al Ejecutivo, mientras el Legislativo se blinda frente a la posibilidad de ser investigado, juzgado y condenado. La reforma a la justicia no atiende el conjunto de problemas largamente diagnosticados. Introduce modificaciones en algunos aspectos, como la congettión, pero ni en ellos cuenta con un consenso suficiente para que se pueda esperar que al ser aprobada tenga un impacto significativo. La reforma a la justicia parece, de antemano, condenada al fracaso (tanto la comentada en este paper, como la que está saliendo luego de varios debates adicionales y esfuerzos gubernamentales por no dejarla fracasar.

Como resultado de esta crisis y de la lenta y costosa aplicación de la justicia, los que incumplen las normas tienden a reincidir impunemente en su conducta y el ciudadano queda, por decirlo así, invitado a defraudar y a dañar su propio comportamiento, mientras que los funcionarios de los juzgados se convierten en objeto de constantes reclamos airados y quedan sometidos a estrés continuo (Acosta, 2018).

Si bien la falta de credibilidad y legitimidad de las instituciones ha estado presente en el escenario nacional desde hace tiempo (Figuras 1 a 3), en el 2019 llega a niveles demasiado altos, que necesariamente obligan al Estado a tomar decisiones de fondo para revertir esta tendencia. La pregunta sigue siendo la misma: ¿Qué actor puede mediar para

la recuperación de la legitimidad de la justicia? Los autores apuestan por la academia como actor fundamental.

Dinámicas de la academia frente a la justicia: entre el conflicto armado y la paz

La academia es un espacio social al servicio del conocimiento. El conocimiento que se genera de la investigación no solo potencia la producción de riqueza en la sociedad, sino que además resulta fundamental para la construcción de los referentes que aseguran el sentido de pertenencia y la identidad relacionada con esa pertenencia (Hernández, 2000). De acuerdo con esta premisa, los retos de la academia y, específicamente, de las ciencias sociales —como herramienta de análisis que pueden contribuir directa o indirectamente a la búsqueda de una sociedad más justa— han sido inseparables de la prioridad que se otorga al análisis sistemático de las estructuras socioeconómicas y al estudio de los conflictos en este contexto. De esta forma, los actores del ámbito académico están llamados a participar en el proceso de construcción del diagnóstico general de la sociedad.

De forma particular, la investigación sistemática de los problemas sociopolíticos de la nación se convirtieron en un asunto de alta prioridad para el mundo universitario (Restrepo Parra, Tabares Ochoa y Hurtado Galeano, 2013), por lo que existe un número amplio de trabajos que indagan sobre el conflicto armado y la paz desde diferentes disciplinas (por ejemplo, Ortiz Sarmiento, 1994; Tamayo y Bonilla, 2014; Valencia Agudelo, 2016). Estos estudios se han desarrollado con una gran variedad de enfoques y objetivos, entre los que se destacan los análisis de las causas políticas, sociales y económicas, así como una prolífica publicación de dissertaciones relacionadas con temas como conflicto y justicia, conflicto y cultura, conflicto y víctimas (Pérez Pérez, 2011), entre otras.

El inicio de la producción en investigación social asociada a la realidad colombiana se dio en la década del sesenta, cuando se produce la publicación del libro *La violencia en Colombia*, de Guzmán, Fals Borda y Umaña Luna (1962). Este libro, que es una mezcla entre diagnóstico y denuncia, fue recibido con estupor e indignación por los altos poderes de la sociedad colombiana: fue debatido en el Congreso, escudriñado y manipulado por la prensa, con el mérito enorme de volcar el tema hacia la opinión pública. Con todo, “el libro marcó una peculiar forma de intervención de los intelectuales en la sociedad y frente al fenómeno dominante en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX” (Sánchez Gómez, 1993, p. 41).

Ya durante los años ochenta se gestó una creciente demanda gubernamental de estudios calificados sobre la violencia. La relación entre intelectuales y Estado establecida por el contexto violento que afrontaba el país avalaba a los académicos para elaborar informes a través de los cuales se conceptualizaba, definía, diagnosticaba y se hacían recomendaciones e intervenciones sobre la violencia. “En esta medida, los intelectuales académicos

cos asumieron, en este ciclo político, la función de especialistas en la interpretación del fenómeno y se convirtieron en artífices de la definición de una nueva política sobre el orden público y la paz” (Cartagena Núñez, 2015, p. 40).

Esta primera aproximación se dio con el informe *Colombia: violencia y democracia* (Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1987), que se convirtió en un referente analítico tanto para el mundo académico como para distintas dependencias oficiales, las cuales lo incorporaron en el diseño de planes gubernamentales. A partir de aquí, las ciencias sociales reconocieron que tenían que decir y aportar algo al Estado; por su parte, el Estado reconoció que la academia debía tener un lugar en la construcción misma del Estado y en la construcción de la política pública (Jaramillo Marín, 2011). Así pues, la universidad tiene como tarea central apropiar y ampliar el saber necesario para el desarrollo colectivo.

No obstante, como plantea Jaramillo Marín (2010), un informe público sobre memoria o sobre verdad, la instauración de una comisión o de un grupo de comisionados de reputado prestigio son necesarios pero no suficientes en el proceso plural y sostenible de esclarecimiento, justicia y reconciliación que necesita el país.

A lo largo de la búsqueda de la paz, de la justicia penal, las reparaciones, la pesquisa de la verdad y la prevención de la recurrencia de los hechos, los investigadores se han convertido en consultores, forjadores de opinión e intermediarios culturales, entre otros. De esta forma, el conocimiento y la autoridad científica que sobre las realidades nacionales tienen las universidades, los centros de investigación y los intelectuales se hacen imprescindibles para caracterizar las crisis por las que ha atravesado el país. Además, la búsqueda objetiva de la verdad, el estudio metódico y razonado, y el interés social y cultural que caracterizan los estudios académicos les concede a estos últimos credibilidad y aceptación general con respecto a los temas estudiados.

Caracterización de los aportes investigativos de la academia al tema de justicia

De acuerdo con el Proyecto de Justicia Mundial (2019), que evalúa la situación de la justicia y el derecho en 126 países, Colombia ocupa el puesto 80 con una tendencia de crecimiento negativo del 1,4% en comparación al año 2018 y debajo del promedio de la región. Este índice se basa en más de 120.000 encuestas a hogares y a 3.800 expertos para medir cómo es experimentado y percibido el Estado de derecho en situaciones prácticas y cotidianas por el público en general en todo el mundo de acuerdo con los ocho factores sobre justicia propuestos por el Proyecto y enunciados en la Tabla 1 (Proyecto de Justicia Mundial, 2019, pp. 161-163).

Tabla 1. Los ocho factores del modelo del Proyecto de Justicia Mundial

Factor	Descripción
Restricción a los poderes gubernamentales	Medida en la que el poder del gobierno es limitado efectivamente por las ramas legislativa y judicial, así como también por entidades independientes de control. Además, este factor indica en qué proporción los funcionarios públicos son sancionados por mala conducta y si el proceso electoral se da de conformidad con la ley.
Ausencia de corrupción	Medida en la que los empleados públicos de las ramas ejecutiva, judicial y legislativa, así como los militares y policías no utilizan sus cargos para beneficio propio.
Gobierno abierto	Medida en que los datos gubernamentales y las leyes son públicas, hay derecho a la información y la participación cívica, así como mecanismos para tramitar las quejas ciudadanas.
Derechos fundamentales	Medida en que hay ausencia de discriminación, garantía del derecho a la vida y al debido proceso, así como libertad de expresión, opinión, creencias, asociación y también derechos laborales.
Orden y seguridad	Medida en que se controla el crimen, los conflictos civiles y la violencia para resolver disputas civiles.
Cumplimiento de la normatividad	Medida en la que las regulaciones se cumplen efectivamente, en la que los procesos administrativos tienen una demora razonable y existe un debido proceso acorde a la ley.
Justicia civil	Medida en la que las personas pueden acceder a la justicia civil y esta está libre de discriminación, corrupción, demoras no razonables y es aplicada efectivamente.
Justicia penal	Medida en que la investigación penal es llevada a cabo efectivamente, es imparcial, libre de corrupción y acorde con el debido proceso.

Fuente: Proyecto de Justicia Mundial (2019) (traducción propia).

El método propuesto por el Proyecto de Justicia Mundial permite hacer un balance, por una parte, del impacto de la justicia en la vida diaria de los ciudadanos y, por otra, de la legitimidad con la que cuenta el sistema judicial. Al ser una organización sin ánimo de lucro, creada por iniciativa de la Asociación Norteamericana de Abogados, el Proyecto de Justicia Mundial tiene un alto componente investigativo, que busca la concienciación pública sobre la importancia de la justicia, con el fin de estimular reformas gubernamentales a partir del Índice del Estado de Derecho, calculado desde 2008 de manera constante en más de 99 países. Igualmente, el Proyecto sugiere factores específicos de acuerdo con los cuales se puede caracterizar y cuantificar la efectividad estatal y la de los actores sociales para ayudar a revertir la crisis de legitimidad de la justicia. Para el caso de estudio, permite

situar los factores del modelo como temas que pueden ser analizados desde la academia colombiana.

Así, pues, con el fin de tener un panorama de la producción investigativa en cuanto a la comprensión de la justicia en el contexto del conflicto armado y la búsqueda de la paz, se compilaron los datos registrados en la plataforma GrupLAC de Colciencias¹ de los grupos de investigación en las categorías de *violencia, conflicto y paz* sobre temas de justicia en Colombia entre 1982 y 2019. La información extraída de la plataforma GrupLAC, correspondiente a 5.202 grupos de investigación, fue recopilada en una base de datos diseñada para la toma de datos bibliométricos a partir de la compilación de la producción académica de generación de nuevo conocimiento con base en los ocho factores del modelo del Proyecto de Justicia Mundial.

De esta forma, se realizó un análisis de la dinámica de la academia en torno a su función como agente de fortalecimiento de la justicia en Colombia, en términos de la producción científica de nuevo conocimiento —libros, capítulos de libro y artículos—. Este tipo de estudios, de corte bibliométrico, complementan de manera eficaz las opiniones emitidas por los expertos de cada área y proporciona herramientas útiles y objetivas en los procesos de evaluación de los resultados de la actividad científica sobre conflicto y paz, necesarias en el escenario de posacuerdo que se vive actualmente el país. Al respecto, Alcaín y San Millán Bujanda (1993, p. 31), afirman que

El análisis bibliométrico constituye en la actualidad una valiosa herramienta, tanto para el estudio del estado de la cuestión de distintas disciplinas científicas, y por tanto utilizable por los profesionales de las mismas, como para el estudio de la producción científica de un autor, un departamento o una universidad, o para una mejor gestión de los propios centros de información y documentación y bibliotecas.

Así mismo, Vélez Restrepo y Galeano Marín (2002, p. 2) sugieren que

Es un esfuerzo por develar, desde la heterogeneidad de los materiales documentales que sobre el tema circulan en el medio, la trama de relaciones y conexiones temáticas presentes en los mismos, estableciendo un orden jerárquico, señalando vacíos y necesidades de articulación y haciéndolos viables y accesibles para que sean utilizados por la comunidad académica.

Se debe aclarar que los datos obtenidos provienen de fuentes secundarias (*registros* en la plataforma GrupLAC) en lugar de fuentes primarias para la obtención de la información, lo que implicó dos supuestos: 1) la clasificación de la producción en categorías correctas dentro de la plataforma y 2) el registro de la información completa en la plataforma.

¹ Disponible en: <https://scienti.colciencias.gov.co/ciencia-war/busquedaAvanzadaGrupos.do?buscar=sinBuscar>

Contribución de la academia nacional a la justicia y su legitimidad

La justicia en Colombia no ha logrado corresponder a las necesidades del Estado de derecho y los retos que presupone el conflicto armado, por el contrario, ha perdido su legitimidad frente a los ciudadanos. Tal como sugiere Carvajal (2002, p. 171) “Durante gran parte de la historia del país, la justicia y el derecho han estado alejados del respeto a la vida humana y de la realización de las demandas colectivas, siendo este hecho una de las razones del actual conflicto social”. Este panorama indica de manera directa una necesidad sentida en torno a la comprensión de los fenómenos sociales asociados a la justicia, necesidad que para el caso de este estudio ubica en la academia a un actor determinante.

Sin embargo, las dinámicas de la academia, entendidas como la tasa anual de publicaciones, han contribuido moderadamente a la disminución en la desfavorabilidad de la justicia (Figura 4). En efecto, por una parte, la producción bibliográfica no ha tenido un crecimiento acorde con la evaluación de los diversos temas sobre conflicto armado y la paz en Colombia (a excepción del año 2016) y, por otra, la desfavorabilidad del sistema judicial ha continuado con un incremento constante año a año.

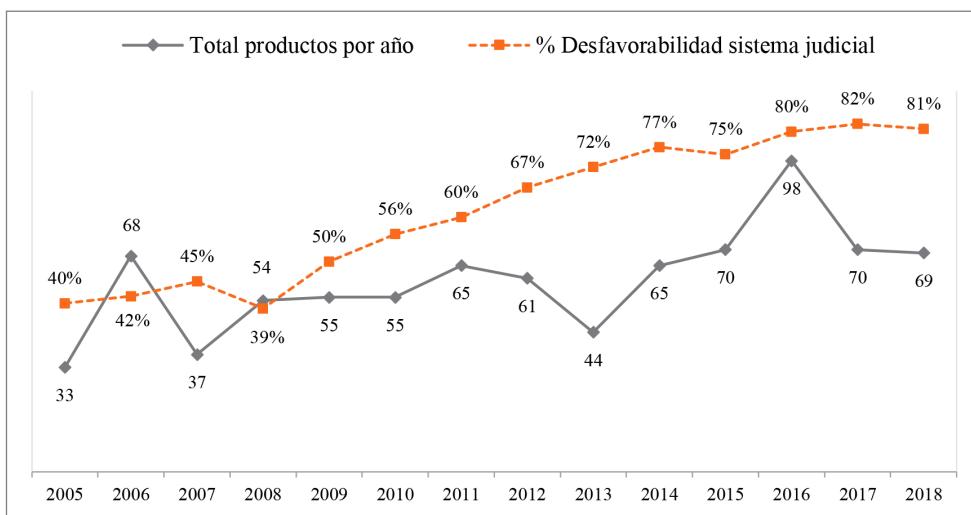


Figura 4. Desfavorabilidad del sistema judicial vs. producción académica sobre justicia.
Fuente: elaboración propia con base en la información de Gallup (2019) y Colciencias (2019).

Aunque no pretendemos indicar que existe una correlación directa entre la producción académica y la favorabilidad de la justicia en Colombia; sí estamos convencidos del valor que representan las interpretaciones de esta frente a los contextos nacionales y la generación de conocimiento preciso, imparcial y de libre divulgación, sin los cuales se haría

más remota la posibilidad de que los colombianos recuperen la confianza en las instituciones. Además de otras dinámicas propias de la investigación, la producción bibliográfica de la academia constituye un registro que le da voz y fundamento a muchas problemáticas, lo cual ha sido efectivo a la hora de fundar y desarrollar procesos de reinserción en la vida civil, reconstrucción de memoria y de reparación, a pesar de las consabidas dificultades. Con antelación, investigadores como Martínez Sánchez (2015, pp. 14-15) han criticado los aportes de la producción académica y su discurso jurídico en la implementación de acuerdos de paz. Por ejemplo, la consecuencia, luego de la promulgación de la ley de Justicia y Paz, fue el ejercicio juicioso por parte de los investigadores de la publicación de estudios sobre reparaciones en Colombia.

Lo anterior refleja que la agenda académica, en materia de investigaciones, estuvo sometida al desarrollo de una ley y no por una iniciativa propia de ejercicio investigativo. Que lo anterior no se entienda como un interés exangüe o desfallecido manifiesto por la academia al indagar sobre temas tan difíciles, como lo puede ser la intención de volver a una víctima a su estado inicial antes de haber sido transgredida. Más bien, lo que quiere decir es que la situación nacional de desesperanza, e incluso de miedo, también pudo haberse trasladado al ámbito académico, en el que hubo otros temas de una urgencia superior.

Así pues, la agenda académica sobre justicia se ha centrado principalmente en el análisis técnico y de políticas públicas, con exclusión notable de la reflexión política. La investigación sociojurídica propiamente dicha es poca, dispersa (Palacio, 1996), descontextualizada e irrelevante frente a las necesidades en relación con temas de interés público y de justicia social (Montoya Vargas, 2009), mientras que la investigación social que conjuga temas jurídicos se ha consolidado a lo largo del tiempo de manera mucho más rigurosa conceptual y empíricamente (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2012; García Villegas, 2008; Guarín, 2012; Ruiz Cano, 2014). En ella es predominante el análisis comparado, juicios de vigencia normativa, sofisticación institucional, estudios de caso esencialmente descriptivos y discusiones de constitucionalidad y convencionalidad (Orjuela Ruiz & Lozano Acosta, 2012).

Pese a que la producción académica no ha tenido impactos considerables en la favorabilidad de las instituciones y en la legitimidad de la justicia de manera directa, la Figura 5 muestra cómo la dinámica de generación de nuevo conocimiento representada en los tres tipos de productos evaluados sí presenta incrementos importantes en su tasa de publicación anual. Es decir, aunque la academia considere los acontecimientos de orden político y social relacionados con la legitimidad de la justicia como un objeto de estudio, y aunque a lo largo de las décadas de los ochenta y los noventa se hayan gestado las condiciones que permitieron la consolidación de un grupo de intelectuales —científicos sociales y economistas, especialmente— como un nuevo actor político con intervención concreta en la producción de políticas sociales y económicas (Cartagena Núñez, 2015), su análisis

no logra el impacto necesario para reversar la crisis en la que se encuentra el sistema de justicia nacional.

Por una parte, esto es especialmente cierto para los artículos científicos que, antes del año 2003 no superaban la tasa de 15 artículos anuales. Luego de este año, en ningún caso dicha tasa disminuyó a menos de 15 artículos anuales. El incremento en la tasa de publicación de capítulos de libro se hizo conspicuo a partir del año 2006 que, salvo una excepción, tampoco disminuyó a menos de 15 publicaciones anuales. La tasa de publicación de libros también tiene una tendencia a incrementarse desde el año 2006, pero de una forma más errática y en menor proporción que los otros dos tipos de productos.

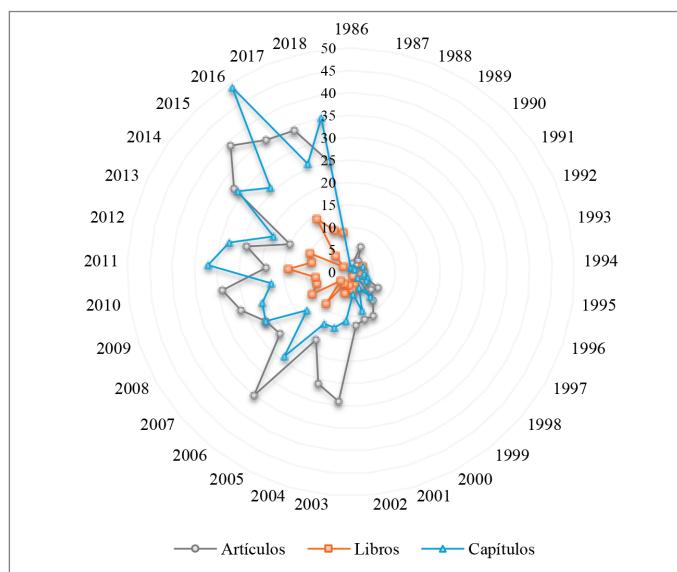


Figura 5. Producción académica colombiana sobre justicia.

Fuente: elaboración propia con base en la información de Colciencias (2019).

Aun cuando Archambault y Larivière (2010) plantean que las ciencias sociales y las humanidades concentran el grueso de su producción más destacada en libros, para el caso de estudio no es significativo este tipo de producto en particular. La distribución dispar de producción de libros es contraria al aumento de la publicación de artículos en revistas indexadas que se registran en la plataforma ScienTI. Como lo exponen Vélez-Cuartas, Gómez-Flórez, Úsuga-Ciro y Vélez-Trujillo (2014, p. 2), según la tendencia mundial de consignación de datos bibliográficos en plataformas digitales, la dinámica de publicación, registro y divulgación es limitada, lo que hace que se observe este comportamiento errático en la publicación de artículos, capítulos y libros.

Se puede decir que la medición de la ciencia y el conocimiento emergente de la investigación académica enfrenta problemas complejos como son la carencia de bases de

datos globales fiables para todos los campos de conocimiento; el no reconocimiento de otras formas de comunicación del conocimiento académico investigativo; y el establecimiento de puentes metodológicos y teóricos entre las situaciones nacionales y regionales de la ciencia (micro) y las dinámicas globales (macro).

Por otro lado, de forma consistente durante el periodo evaluado, el tema de justicia criminal/civil ha sido el tema sobre el que más publicaciones se han desarrollado. Este patrón se mantiene independientemente del tipo de publicación o del año de observación (Figura 6), seguido por los temas que abarcan los derechos fundamentales, orden y seguridad y transparencia (gobierno abierto), dejando de lado la producción sobre corrupción, tema central para comprender la crisis que se registra en el sector de justicia en Colombia (Figura 7).

La tendencia a cubrir los temas de justicia criminal y civil de manera consistente probablemente se deba a que en esta categoría se inscriben la justicia civil y la investigación penal, temas centrales en el marco del conflicto armado interno y los procesos de paz que se han llevado a cabo desde la década de los ochenta en el país.

Como fenómeno social y político, la implementación de la llamada justicia transicional, que comprende la justicia restaurativa (Carvajal Pardo, 2010) y prospectiva (Tabarquino Muñoz, 2018) —compuesta por procesos, juicios y reparaciones, cuyos principios fundamentales son la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (Teitel, 2003) para las víctimas— ha sido el objeto de estudio de la producción de nuevo conocimiento; “la cantidad de trabajos que se han hecho desde la academia con la participación de las víctimas ha sido notoria, tanto por su contenido, como por el número” (Martínez Sánchez, 2015, p. 16).

De forma particular, luego de la firma del acuerdo de Santafé de Ralito, se inicia un periodo de justicia transicional dentro del proceso de Justicia y Paz. Con la implementación de la Ley 975/2005, centrada en los derechos de las víctimas, se observa un incremento en la publicación de artículos, libros y capítulos de libro (Figura 6).

Con toda la retórica transicional generada por el proceso de Justicia y Paz, se inscribe el inicio de las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Con la aprobación del marco jurídico para la paz en 2012, se establece un nuevo conjunto de mecanismos de justicia transicional que, entre otras cosas, pretende evitar la impunidad de los graves crímenes cometidos por los diferentes actores y otorgar garantías a las víctimas (Gómez Isa, 2014; Cubides Cárdenas, et al., 2019).

En este nuevo escenario de posacuerdo, la producción enmarcada en la categoría de justicia criminal y civil vuelve a tener un incremento (Figura 6), lo cual deja claro que el interés de las miradas académicas se centra en la justicia enmarcada en el conflicto armado, sus víctimas y las medidas reparativas.

De esta manera, los referentes teóricos y empíricos que se registran en la literatura científica, en sentencias de tribunales, informes de organizaciones internacionales y organismos no gubernamentales (ONG), así como en documentos de política pública sobre justicia, han estado inscritos en el desarrollo de los estudios sobre violencia.

Hoy los conceptos de violencia y conflicto son predominantes y son también movilizados activamente por instituciones del Estado, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), organizaciones sociales y grupos de interés que utilizan este saber para activar agendas políticas, como en el caso de la política pública para el fin del conflicto, que soslaya sistemáticamente los problemas asociados a la cultura, la educación y la desigualdad social. En este sentido, es válido afirmar que el saber que se ha producido sobre la violencia tiene una diversidad de efectos sociales que es importante rastrear, y que el no hacerlo puede impedir plantear salidas críticas a las teorías y a las manifestaciones de la violencia. (Vera Lugo, 2015, p. 263)



Figura 6. Producción académica colombiana sobre justicia según el modelo del Proyecto de Justicia Mundial por año (1986-2018).

Fuente: elaboración propia con base en la información de Colciencias (2019).

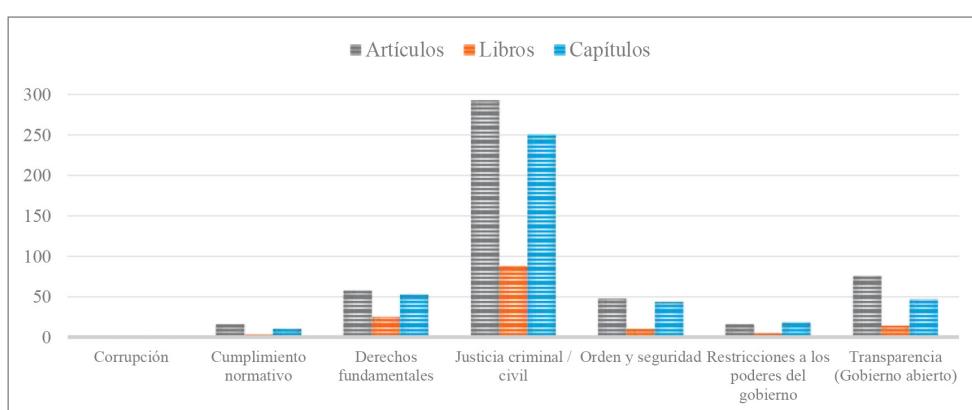


Figura 7. Producción académica colombiana sobre justicia (1986-2018).

Fuente: elaboración propia con base en la información de Colciencias (2019).

De igual manera, a partir de la década de los setenta, el crecimiento de las universidades públicas y privadas trae consigo la aparición de la industria académica en las humanidades y las ciencias sociales, que se concentran en el análisis del fenómeno de la violencia como objeto de estudio primordial. La semejanza del desarrollo de la academia colombiana con la academia norteamericana, con frecuencia concentrada férreamente en sí misma, encerrada en su “torre de marfil” y con una larga etapa de jactancias de la élite universitaria, limitó el acercamiento de los académicos de ciertos sectores a temas actuales de la realidad nacional.

El proceso de desarrollo de la academia en Colombia resulta complejo, porque las universidades públicas se hallan siempre en graves problemas financieros y el debate intelectual (por lo común nada más presente en las universidades públicas) solo excepcionalmente repercute en los ámbitos nacionales (Monsiváis, 2007, pp. 33-34). Lo anterior se relaciona con los hallazgos, dado que las instituciones de carácter privado han publicado el 65 % de los productos relacionados con la justicia en Colombia. El restante 35 % corresponde a los productos originados en entidades públicas. Pero en las universidades públicas, los artículos se publican más que los otros dos tipos de productos.

En este escenario, lo publicado con el sello de las universidades alcanza a un público mínimo, pues, pese a la profusión de revistas, libros, conferencias, simposios y mesas redondas, lo que se discute, comenta y forma opinión pública suele suceder en otro lado: en la prensa diaria, en las revistas no científicas, en los medios electrónicos, incluso en los partidos políticos (Monsiváis, 2007, p. 34).

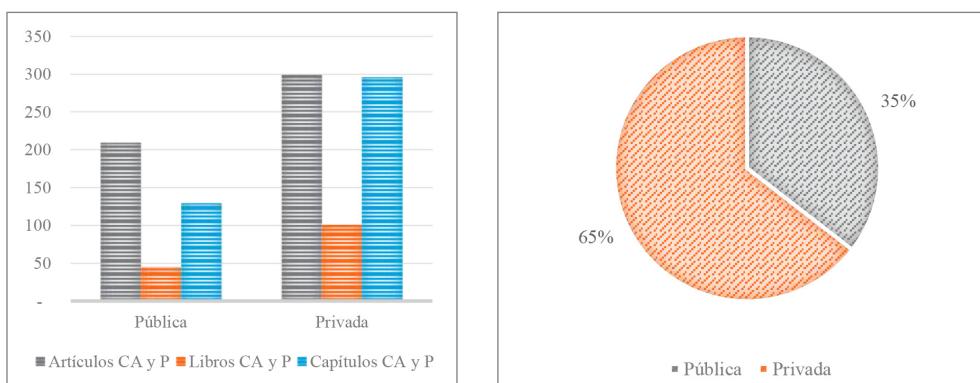


Figura 8. Producción académica colombiana sobre justicia por tipo de entidad.
Fuente: elaboración propia con base en la información de Colciencias (2019).

En este marco de acción, la cultura organizativa de los establecimientos de enseñanza y las disposiciones de los saberes determinan la formación de los científicos sociales y su inscripción en la geografía del conocimiento. Este hecho estructuró un sistema de enseñanza nacional centralizado, controlado desde el centro geográfico del poder del país, de

tal manera que la función de la universidad es ser centro de producción de los grandes proyectos de transformación social, por lo cual el Estado asumió el control directo y la organización del aparato universitario. La universidad fue concebida como la sede de una racionalidad que debía coincidir con la racionalidad del Estado (Figueroa Camacho, 2009, p. 48).

En coherencia con lo anterior, el 91 % de las publicaciones se han realizado en la Región Andina, seguida por el Pacífico (5 %) y el Caribe (4 %). En la Región Andina, se publican, en su orden, más artículos de investigación, capítulos de libro y finalmente libros. Esta hipercentralización de la producción investigativa ha dejado por fuera la discusión académica que se ha presentado en diferentes instituciones a nivel departamental y regional, por lo cual esta última aún se constituye como un esfuerzo tenue e inconexo, dada su falta de continuidad y amplitud.

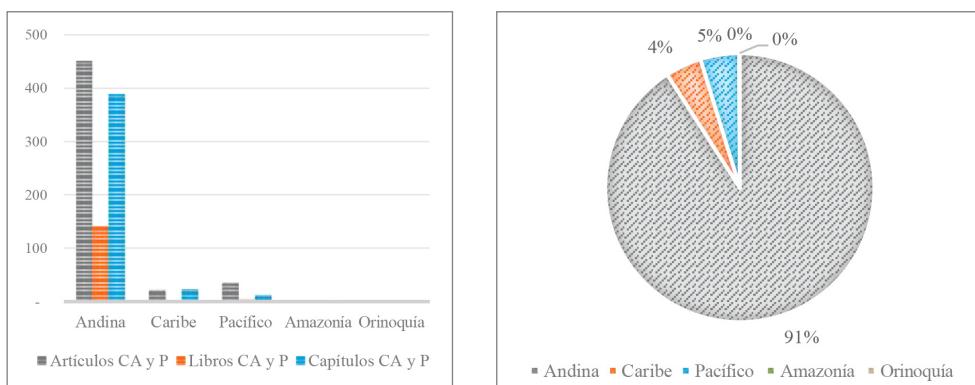


Figura 9. Producción académica colombiana sobre justicia (1986-2018)

Fuente: elaboración propia con base en la información de Colciencias (2019)

A pesar de ello, es indiscutible el crecimiento de la producción investigativa en ciencias sociales ligada a la academia colombiana. Según el área de conocimiento, los temas de justicia en Colombia han sido abordados principalmente por estas ciencias (91 %) (Figura 10). Para el tema de justicia, específicamente en el campo del derecho, también es sobresaliente el trabajo que sobre este tema desarrollan los centros de investigación sociojurídica de las universidades tanto públicas como privadas. La actividad desarrollada por estos centros se refleja en la creación de grupos de investigación y de las publicaciones que son una fuente de verificación de la producción (Carvajal, 2009, pp. 73-74).

No obstante, este dinamismo en la producción sociojurídica no ha sido una constante histórica. Durante muchas décadas, las facultades de derecho se caracterizaban por el desarrollo de una educación memorística, ligada a los códigos, a la glosa o al dogmatismo jurídico. Sin embargo, hoy en día la formación legal ha cambiado, puesto que ha entendido que es necesario el desarrollo de investigaciones que permitan evidenciar la

relación existente entre la norma jurídica y la legal a través de los centros de investigación sociojurídica (Carvajal, 2009).

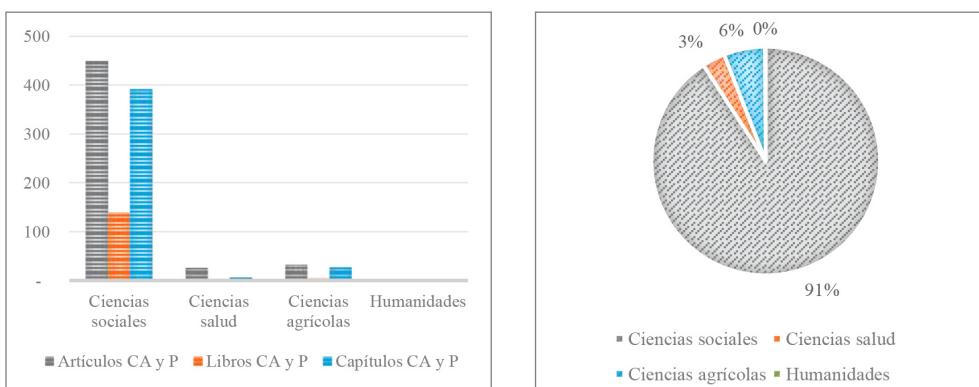


Figura 10. Producción académica colombiana sobre justicia por área de conocimiento.
Fuente: elaboración propia con base en la información de Colciencias (2019).

Consideraciones finales

Este artículo planteó cómo la falta de legitimidad es uno de los mayores desafíos de la justicia en Colombia, la cual afronta, además, una gran cantidad de dificultades, cuestionamientos y retos enmarcados en la realidad del conflicto armado y búsqueda de la paz nacional. Así mismo, demostró cómo los altos niveles de desaprobación de las instituciones y principales actores de la sociedad llamados a promover la legitimidad de la justicia deben ser reversados, para que los colombianos puedan recuperar la confianza en el sistema judicial.

En efecto, problemas de carácter estructural e histórico que son recurrentemente señalados y que indican, ante todo, una percepción y una realidad de un mal funcionamiento de la justicia en el país, de una insatisfacción amplia y creciente de la ciudadanía frente al ejercicio de la justicia como herramienta fundamental para la solución pacífica e institucionalizada de los conflictos y las diferencias, son parte central de la crisis del sector.

Frente a este escenario, el artículo sostiene que la academia se constituye como el principal actor, si no el único, que puede aportar positivamente a la comprensión del conflicto armado y la paz en Colombia, así como al avance hacia una reconciliación nacional basado en un sistema de justicia fortalecido. Si se rescata la propuesta de una perspectiva integradora que reconoce la complejidad y las nuevas configuraciones de la realidad nacional (Restrepo Parra et al., 2013), la superación de la crisis en la que se encuentra la justicia permite la inclusión de nuevos actores y lógicas que emergen del contexto nacional, para darle cabida a la producción de nuevo conocimiento y admitir el pluralismo epistemológico con la llegada de nuevos paradigmas desde la academia.

De esta forma, la tarea intelectual y académica no se aparta, entonces, de la realidad nacional. Por el contrario, como expone Sánchez Gómez (1993), su participación y compromiso dependen no solo de su ubicación como categoría social, sino del tipo de sociedad en la cual se materializa su intervención. Sin embargo, el aporte más significativo que puede hacer la academia, su producción bibliográfica, aún dista de los niveles de impacto deseados.

Si bien ha aumentado el aporte académico al entendimiento de la situación de la justicia en Colombia, en los ocho factores del modelo del Proyecto de Justicia Mundial, se identificó que la investigación nacional aún tiene falencias por superar, tanto en el privilegio de ciertas temáticas y objetos de análisis como en el limitado aporte de la academia de las zonas periféricas en la producción en temas como corrupción o cumplimiento normativo de la justicia.

Ya que no basta la conciencia social sobre una serie de problemas urgentes en materia de justicia, ni basta con el saber construido en escenarios distintos y aceptado como útil en el contexto en el cual va a aplicarse; los problemas sentidos, vividos y observados deben ser reformulados de modo tal que se expliciten sus causas, sus relaciones con otros problemas, las distintas posibilidades de solución y las implicaciones sociales, técnicas y culturales de las diversas soluciones propuestas para un escenario de reconciliación nacional. Solo así es posible elegir vías de acción que no signifiquen en el largo plazo compromisos imposibles de cumplir o mayores males sociales.

La superación de un conflicto armado no solo debe ir acompañada de un proceso de entrega de las armas y del juicio a los perpetradores de los delitos, sino que también supone identificar y corregir las causas estructurales de la violencia. Por ello, la inclusión de los derechos económicos, sociales y culturales en la justicia son primordiales para lograr un equilibrio entre la paz y la garantía de derechos a los ciudadanos. Concordamos con Cepeda Rodríguez & Pérez Niño (2018) cuando estos aseguran que, la relación entre derechos y conflicto armado es muy evidente, por lo que el aseguramiento de los derechos que materializan la igualdad blindan a las sociedades de situaciones que puedan degenerar en nuevos conflictos armados.

Agradecimientos

Los autores desean agradecer a la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” (ESMIC), a la Escuela de Aviación del Ejército (ESAVE), a la Escuela de Armas Combinadas del Ejército (ESACE) y al Centro de Misiones Internacionales y Acción Integral (CEMAI) del Ejército por su apoyo en la realización de este artículo.

Declaración de divulgación

Los autores declaran que no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con el artículo. Este hace parte de los proyectos de investigación “Geopolítica del conoci-

miento sobre conflicto y paz en Colombia: aportes, debates y tendencias” del Grupo de Investigación en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” (ESMIC), registrado bajo el código COL0082556 de Colciencias, y del proyecto “Perspectivas en seguridad y defensa en Colombia” del Grupo de Investigación en Capacitación Militar de la Escuela de Armas Combinadas del Ejército (ESACE) registrado bajo el código COL0160714 de Colciencias. Los puntos de vista y los resultados de este manuscrito pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente los de la ESMIC, la ESACE, la ESAVE, el CEMAI o el Ejército Nacional de Colombia.

Financiamiento

Los autores no declaran fuente de financiamiento para la realización de este artículo.

Sobre los autores

Maria Antonieta Corcione Nieto es PhD en Antropología, de la Universidad de los Andes, Colombia. Magíster en Biología Humana, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Antropóloga, de la Universidad de los Andes, Colombia. Líder del Grupo de Investigación en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”.

<https://orcid.org/0000-0002-3509-5519> - Contacto: maria.corcione@esmic.edu.co

Andrés Eduardo Fernández Osorio es Teniente Coronel del Ejército Nacional de Colombia; PhD (c) en Derecho y Ciencia Política, de la Universidad de Barcelona, España. Magíster en Economía, Estado y Sociedad: Política y Seguridad, University College London, Reino Unido. Magíster en Relaciones Internacionales, Higher School of Economics Moscow, Federación de Rusia. Miembro del grupo de investigación en aviación militar de la Escuela de Aviación del Ejército, Colombia.

<https://orcid.org/0000-0003-0643-0258> - Contacto: andres.fernandez@buzonejercito.mil.co

Leidy Jobanna Cabrera Cabrera es Magíster con Especialización en Docencia e Investigación Universitaria, de la Universidad Sergio Arboleda. Trabajadora Social, de la Universidad de La Salle. Investigadora del Grupo de Investigación en Capacitación Militar de la Escuela de Armas Combinadas del Ejército (ESACE)

<http://orcid.org/0000-0002-6398-6933> - Contacto: leidycabrereracabrera@cedoc.edu.co

Beyaert Camilo Rojas Yaima es Capitán del Ejército Nacional de Colombia. Administrador logístico y profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, especialista en conducción y administración de unidades militares de la Escuela de Armas Combinadas del Ejército. Oficial de ciencia y tecnología del Centro de Misiones Internacionales y Acción Integral (CEMAI) del Ejército Nacional de Colombia.

<http://orcid.org/0000-0002-5300-2400> - Contacto: beyaert.rojas@buzonejercito.mil.co

Referencias

- Acosta, J. F. (2018). La justicia en Colombia sufre. *El espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/opinion/la-justicia-en-colombia-sufre-columna-829888>
- Alcaín, M. D., & San Millan Bujanda, M. J. (1993). Uso y tendencias de las técnicas bibliométricas en ciencias sociales y humanas a nivel internacional. *Revista Española de Documentación Científica*, 16(1), 30-41. Recuperado de <https://digital.csic.es/handle/10261/23621>
- Arbeláez Villegas, L. C. (2018). ¿Qué pasa con los partidos políticos en Colombia? Recuperado de <https://cepri.upb.edu.co/index.php/lineas-de-investigacion/gobierno-territorio-y-seguridad/partidos-politicos-colombia>
- Archambault, E., & Larivière, V. (2010). Los límites de la bibliometría en el análisis de la literatura en ciencias sociales y humanidades. En Unesco (Ed.), *Informe sobre las ciencias sociales en el mundo. Las brechas del conocimiento* (pp. 268-271). México, D.F.: Unesco.
- Basset, Y. (2019). *Los partidos políticos: balance de 2018 y perspectivas de 2019*. Recuperado de <https://www.azonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/11668-los-partidos-politicos-balance-de-2018-y-perspectivas-de-2019.html>
- Cartagena Núñez, C. (2015). Marcos narrativos y emergentes contra-narrativos de la violencia en Colombia. *humanidades*, 5(1), 1-30. <https://doi.org/10.15517/h.v5i1.19386>
- Carvajal, J. (2002). La justicia, el derecho y el conflicto social en Colombia. *El Otro Derecho*, 28, 171-191. Recuperado de http://historiadecucuta.com/Biblioteca/07_El-Nacimiento-de-la-Rep%C3%BAblica/La%20justicia,%20el%20derecho%20en%20el%20conflicto%20social%20Carvajal.pdf
- Carvajal, J. (2009). La educación legal y los centros de investigación sociojurídica en Colombia: la educación legal y la garantía de los derechos en América Latina. *El Otro Derecho*, 38, 73-102.
- Carvajal Pardo, A. (2010). Justicia restaurativa: construyendo un marco englobador para la paz. *Criterio Jurídico*, 10(1), 9-34. Recuperado de <https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/view/339>
- Casos de corrupción en la rama judicial y Cortes. (2018). *El Tiempo*. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/casos-de-corrupcion-en-la-rama-judicial-y-cortes-217884>
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2012). *Justicia y paz: ¿verdad judicial o verdad histórica?* Bogotá, D.C. Recuperado de http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2012/verdad_judicial_verdad_historica.pdf
- Cepeda Rodríguez, E., & Pérez Niño, F. (2018). Derechos sociales y justicia transicional: experiencias internacionales y el caso colombiano. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, LXIV(235), 359-364. Recuperado de <http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcphys/article/view/64051>
- Charry Urueña, J. M. (2017). La crisis de la justicia colombiana. *Semana*. Recuperado de <https://www.semana.com/opinion/articulo/la-crisis-de-la-justicia-colombiana/519271>
- Colciencias. (2019). *Servicios de consulta*. Recuperado 29 de marzo de 2019, de <https://www.colciencias.gov.co/sistemas-informacion/servicios-consulta>
- Comisión de Estudios sobre la Violencia. (1987). *Colombia, violencia y democracia*. Bogotá, D.C.: Universidad Nacional de Colombia.
- Cortés Albornoz, I. R. (2015). El acceso a la justicia a la luz del Estado social de derecho en Colombia. *Revista Científica General José María Córdova*, 13(16), 81-103. <https://doi.org/10.21830/19006586.32>
- Cubides Cárdenas, J. A., Sierra Zamora, P. A., Calixto Ortiz, D. A., & Pabón Caballero, N. (2019). Terrorismo por parte de las FARC-EP y políticas públicas orientadas a la seguridad nacional en Colombia durante 1990-2000. *Revista Científica General José María Córdova*, 17(26), 309-325. <https://doi.org/10.21830/19006586.404>

- ¿Cuál es el origen de la crisis que sufre la justicia colombiana por corrupción? (2017). *Ámbito Jurídico*. Recuperado de <https://www.ambitojuridico.com/noticias/penal/penal/cual-es-el-origen-de-la-crisis-que-sufre-la-justicia-colombiana-por-corrupcion>
- Dávila, Á. (2012). *Justicia e impunidad en Colombia: reflexiones a propósito de una reforma fallida?* Recuperado de <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/09149.pdf>
- Del Hierro, J. L. (2013). Legitimidad y legalidad. *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, 4, 179-186. Recuperado de <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2103/1036>
- Figueroa Camacho, T. M. (2009). Educación jurídica ¿Crisis o realidad? La educación legal y la garantía de los derechos en América Latina. *El Otro Derecho*, 38, 43-72.
- Gallup. (2018). *Gallup Poll. Encuesta Gallup diciembre 2018*. Recuperado de <https://www.elpais.com.co/especiales/encuesta-gallup-128-diciembre-2018.pdf>
- Gallup. (2019). *Gallup Poll 129*. Recuperado de <https://imgcdn.larepublica.co/cms/2019/03/07181304/017100190000-GALLUP-POLL-129.pdf>
- García-González, J. R., Sánchez-Sánchez, P. A., & Salcedo-Díaz, L. (2017). Retos y desafíos de la democracia en Colombia: Una revisión desde la Academia. *Revista Espacios*, 38(38), 20-33. Recuperado de <https://www.revistaespacios.com/a17v38n38/a17v38n38p20.pdf>
- García Villegas, M. (2008). *Jueces sin Estado: La justicia colombiana en zonas de conflicto armado*. Bogotá, D.C.: Siglo de Hombre editores. Recuperado de <https://www.dejusticia.org/publication/jueces-sin-estado-la-justicia-colombiana-en-zonas-de-conflicto-armado/>
- Gómez Isa, F. (2014). Justicia, verdad y reparación en el proceso de paz en Colombia. *Revista Derecho del Estado*, 33, 35-63. Recuperado de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/3956>
- Guarín, R. (2012). *Paz justa. En contra de la impunidad y a favor de las víctimas, la justicia y la paz*. Bogotá, D.C.: KAS - Corporación Pensamiento Siglo XXI.
- Guerrero, R. (2003). *Violencia y exclusión: las experiencias de Cali y Bogotá, Colombia*. Recuperado de <http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd65/GuerreroViolencia.pdf>
- Guzmán, G., Fals, O., & Umaña, E. (1962). *La Violencia en Colombia. Estudio de un proceso social*. Bogotá D.C.: Carlos Valencia Editores.
- Held, D. (1991). *Modelos de democracia*. Madrid: Alianza Editorial.
- Hernández, C. A. (2000). La universidad y la vigencia de la cultura académica. *Revista Nómadas*, 12, 225-232.
- Jaramillo Marín, J. (2010). Reflexiones sobre los usos y abusos de la verdad, la justicia y la reparación en el proceso de Justicia y Paz colombiano (2005 - 2010). *Papel Político*, 15(1), 13-46. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5648658>
- Jaramillo Marín, J. (2011). Las comisiones de estudio sobre la violencia en Colombia. La “voz crítica” de uno de sus protagonistas (entrevista con el historiador Gonzalo Sánchez). *Análisis Político*, 24(73), 159-168. Recuperado de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/43713>
- Latinobarómetro. (2017). *Latinobarómetro Database*. Recuperado 25 de marzo de 2019, de <http://www.latinoebarometro.org/latContents.jsp>
- Los protagonistas del escándalo de corrupción en la justicia. (2017). *El Espectador*. Recuperado de <https://www.elspectador.com/noticias/judicial/los-protagonistas-del-escandalo-de-corrupcion-en-la-justicia-articulo-lo-714172>
- Martínez Sánchez, E. (2015). *Las perspectivas académicas sobre las reparaciones en el contexto de la justicia transicional en Colombia: un estado del arte de las investigaciones en ciencia política (2005-2011)*. Bogotá, D.C.: Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Recuperado de <https://core.ac.uk/download/pdf/86439106.pdf>
- Mojica Rozo, I. J. (2018). Justicia por mano propia en Colombia: un análisis desde los conceptos de ira e ira transicional. *Perseitas*, 6(2), 447-471. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6695826>

- Monsiváis, C. (2007). De los intelectuales en América Latina. *América Latina Hoy: Revista de Ciencias Sociales*, 47, 15-38. Recuperado de <http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/1365>
- Montoya Vargas, J. (2009). Educación jurídica en América Latina: dificultades curriculares para promover los temas de interés público y justicia social. En G. Palacio (Dir.), *La educación legal y la garantía de los derechos en América Latina* (pp. 29-42). Bogotá, D.C.: ILSA.
- Observatorio de la Democracia. (2019). *De qué va la polarización en Colombia*. Recuperado de <https://obsdedemocracia.org/publicaciones/noticias/de-que-va-la-polarizacion-en-colombia/>
- Orjuela Ruiz, A., & Lozano Acosta, C. (2012). La indeterminación del campo de la justicia transicional en Colombia. *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, 14(1), 255-281. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v14n1/v14n1a09.pdf>
- Ortiz Sarmiento, C. (1994). Historiografía de la violencia. En B. Tovar Zambrano (Ed.), *La historia al final del milenio ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana, Volumen 1* (pp. 371-442). Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia.
- Palacio, G. (1996). La investigación sociojurídica: para desafiar la estéril autocoplacencia. *Pensamiento Jurídico*, 6, 5-28. Recuperado de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/peju/article/view/39010>
- Pérez Pérez, T. H. (2011). Conflicto y posconflicto en Colombia: una mirada a la política de seguridad democrática. *Magistro*, 5(10), 129-150. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codiigo=3948593>
- Por qué las instituciones están en crisis. (2014). *Semana*. Recuperado de <https://www.semana.com/nacion/artículo/instituciones-en-crisis/409100-3>
- Proyecto de Justicia Mundial. (2019). *The World Justice Project Rule of Law Index 2019*. Washington, D.C.: World Justice Project. Recuperado de https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2019-Single Page View-Reduced_0.pdf
- Rawls, J. (2012). *Teoría de la justicia*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Resultados de la encuesta Gallup sobre corrupción y Juan Manuel Santos. (2017). *El Tiempo*. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/resultados-de-la-encuesta-gallup-sobre-corrupcion-y-juan-manuel-santos-125484>
- Restrepo Parra, A., Tabares Ochoa, C., & Hurtado Galeano, D. (2013). ¿De qué Ciencia Política estamos hablando? Las potencialidades de un enfoque integrador. *Estudios Políticos*, 43, 13-38. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-51672013000200002&script=sci_abstract&tlang=es
- Ruiz Cano, J. (2014). *La Ley de Justicia y Paz. Crónica de un fracaso bien planeado*. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
- Salinas Alvarado, C. E. (2017). *El choque de trenes entre la corte constitucional y el consejo de estado: los juegos jurídicos metanormativos en Colombia*. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6224571.pdf>
- Sánchez Gómez, G. (1993). Los intelectuales y la violencia. *Análisis Político*, 19, 40-49. Recuperado de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/75181>
- Se agudiza choque de trenes entre altas Cortes. (2018). *El Nuevo Siglo*. Recuperado de <https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2018-se-agudiza-choque-de-trenes-entre-altas-cortes>
- Se hunde proyecto que eliminaba la casa por cárcel para corruptos. (2019). *Portafolio*. Recuperado de <https://www.portafolio.co/economia/gobierno/se-hunde-proyecto-que-eliminaba-la-casa-por-carcel-para-corruptos-530805>
- Sen, A. (2010). *La idea de la justicia*. Madrid: Taurus.
- Tabarquino Muñoz, R. A. (2018). La justicia prospectiva: un reto conceptual y metodológico para la justicia transicional en Colombia. *Analisis Político*, 31(93), 133-148. <https://doi.org/10.15446/anpol.v31n93.75621>

- Tamayo, C., & Bonilla, J. (2014). El deber de la memoria. La agenda investigativa sobre la cobertura informativa del conflicto armado en Colombia, 2002-2012. *Palabra Clave*, 17(1), 13-45. <https://doi.org/10.5294/pacla.2014.17.1.1>
- Teitel, R. G. (2003). Transitional Justice Genealogy. *Harvard Human Rights Journal*, 16, 69-94. Recuperado de <https://www.qub.ac.uk/Research/GRI/mitchell-institute/FileStore/Filetoupload,757186,en.pdf>
- Torrijos Rivera, V., & Abella Osorio, J. D. (2018). El comportamiento de las FARC tras la firma de los acuerdos de La Habana. *Revista Científica General José María Cárdenas*, 16(24), 31-60. <https://doi.org/10.21830/19006586.342>
- Un Congreso que ni suena ni truena. (2013). *La República*. Recuperado de <https://www.larepublica.co/opinion/editorial/un-congreso-que-ni-suena-ni-truena-2043271>
- Ungar Bleier, E., & Arévalo, C. A. (2004). Partidos y sistema de partidos en Colombia hoy: ¿crisis o reordenación institucional? En M. Kornblith (Ed.), *Partidos políticos en la Región Andina: entre la crisis y el cambio* (pp. 51-69). Lima: International Institute for Democracy and Electoral Assistance IDEA.
- Valencia Agudelo, G. D. (2016). Violencia, conflicto armado y proceso de paz en las dinámicas indagativas de las ciencias sociales y humanas en Colombia. *Debates*, 74, 79-86. Recuperado de <http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/5191>
- Vélez-Cuertas, G., Gómez-Flórez, H., Úsuga-Ciro, A., & Vélez-Trujillo, M. (2014). Diversidad y reconocimiento de la producción académica en los sistemas de evaluación de la investigación en Colombia. *Revista Española de Documentación Científica*, 37(3), 1-14. <https://doi.org/10.3989/redc.2014.3.1133>
- Vélez Restrepo, O. L., & Galeano Marín, M. E. (2002). *Estado del arte sobre fuentes documentales en investigación cualitativa*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Vera Lugo, J. P. (2015). Antropología y “estudios de la violencia” en Colombia: en busca de una perspectiva crítica. *Revista Colombiana de Antropología*, 51(1), 245-269. <https://doi.org/10.22380/2539472X.242>
- Villa Gómez, J. D. (2013). Consecuencias psicosociales de la participación en escenarios de justicia transicional en un contexto de conflicto, impunidad y no-transición. *El Ágora USB*, 13(2), 307-338. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4734252.pdf>
- Weber, M. (1964). *Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva*. Mexico, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Wolkmer, A. C. (2002). Sociedad civil, poder comunitario y acceso democrático a la justicia. *Revista El Otro Derecho*, 26(27), 135-147.
- Yanhaas. (2019). *Encuesta Yanhaas enero 2019*. Recuperado de <https://www.scribd.com/document/398723937/Encuesta-Yanhaas-enero-2019>

Esta página queda intencionalmente en blanco.

DOSIER: GUERRAS CONTEMPORÁNEAS Y SU EFECTO EN LAS FUERZAS MILITARES

Dossier: Contemporary wars and their effect on the Military Forces

Esta página queda intencionalmente en blanco.



Revista Científica General José María Córdova

(Colombian Journal of Military and Strategic Studies)

Bogotá D.C., Colombia

Volume 17, Number 28, October-December 2019, pp. 847-868

<http://dx.doi.org/10.21830/19006586.518>

The mind and spirit are decisive weapons

La mente y el espíritu son armas decisivas

Donald E. Vandergriff

United States Naval Institute, Maryland, United States of America

ABSTRACT. Everything that is done in a military's learning has an impact; understanding it allows leadership to make informed decisions based on verifiable observations and valid scientific reasoning. This article provides a learning philosophy to drive the evolution of service members from recruitment through retirement and the proficiency of units. Learning is a foundation that can be used to inform leaders on the development of leadership traits, problem-solving skills, and intangible attributes valued by military leaders and documented in the history of successful military organizations—that win in war. Learning can be verified and validated. It can bring specifications for tasks, conditions, and standards into a keener and complete correspondence with doctrinal requirements not only for training and education but also self-development within the military.

KEYWORDS: army transformation; Auftragstaktik; military decision-making; military education; military leadership; military learning; mission command

RESUMEN. Todo lo aprendido en la formación militar genera un impacto, y la comprensión de esto le permite a los líderes tomar decisiones informadas basadas en observaciones verificables y razonamientos científicos válidos. Este artículo proporciona una filosofía del aprendizaje orientada a enriquecer la formación militar (del reclutamiento a la jubilación) y la capacidad de las unidades. El aprendizaje puede ser verificado y validado, lo cual sirve de base a quienes están al mando para identificar los rasgos de liderazgo, las habilidades para resolver problemas y los atributos intangibles documentados en la historia de estructuras militares exitosas. La validación del aprendizaje también permite identificar condiciones y estándares que se correspondan de forma más integra con los requisitos doctrinales tanto para el entrenamiento y la educación como para el autodesarrollo dentro de las fuerzas armadas.

PALABRAS CLAVE: aprendizaje militar; decisiones militares; educación militar; liderazgo militar; mando tipo misión; toma de transformación del Ejército

Section: DOSSIER • Scientific and technological research article

Received: July 22, 2019 • Accepted: September 16, 2019

CONTACT: Donald E. Vandergriff ✉ vandergriffdonald@usa.net

The art of learning

The purpose of learning is to make servicemen/women and units more combat effective. Period! Successful enterprises base their grand strategy on knowledge. They recognize that their competitive power is what their people know how to do as individuals as well as in groups. These skills allow them to develop, acquire, or partner with the other elements they need. They place their focus —*Schwerpunkt* (Focus of effort)— on continually improving technical and leadership skills both individually and as a complex collection of teams and groups (Boyd, 1988). They can prove it by documenting the resources they spend, including executive attention, on improving the acquisition and flow of knowledge. We are *not* living in an Information Age; information by itself is useless, sometimes wrong, often misleading, and always expensive to acquire and store. Knowledge, or better yet, wisdom is essential, and we only obtain that through constant, evolutionary learning (Bousquet, 2009, p. 187). Instead, this is the *Cognitive-Age*; this is the age of infinite complex problems needing continuous solutions.

Learning has evolved to a point where the distinction between training and education is no longer useful. On the traditional battlefield, training prepares a professional, and more specifically, a unit, to deal with expected situations. Education prepares decision-makers to deal with uncertainty. On the full spectrum battlefield, professionals know that they will have to be capable of performing specific tasks and following their orders to survive. However, they will also be expected to demonstrate the resourcefulness, initiative, creativity, and inventiveness demanded by the battlefield where confronting the unexpected and new is routine (Stewart, 1992).

Learning for *Full Spectrum Warfare* (Martin, 2010) must develop these skills as well as those associated with traditional tactical tasks. Likewise, professionals studying in a classroom will have to have access to virtual and synthetic environments that immerse them in a simulated battle closely resembling real war. Thus, the nature of modern war and technology is challenging the traditional concepts of training and education and causing them to merge into a new form of learning. We describe the confluence of training and education as learning packaged into the following two categories: training as field learning and education as institutional learning (Stewart, 2009)¹.

Moreover, learning to adapt to asymmetric threats requires that individual professionals and units develop new knowledge, skills, and abilities that are necessary for success but for which they have neither been trained nor educated. Conventional wisdom suggests that *we train for the known and educate for the uncertain*; this division is no longer adequate. To prepare a force to adapt, we must embrace all parts of learning and training, as well as education and experience within an uncertain environment.

1 Dr. Stewart is one of the leading scientists on how to develop adaptability.

However, the same thing does not work for everyone; everyone learns differently. The art is in that the Commander, Leader, and Teacher knows what to apply and when. There is not just one way to do it. People learn differently. Different solution skills are required from tactical to technical; tactical to dynamic problem skills are a whole different level. Undertaking learning correctly helps organizations form a learning doctrine that has to set the conditions to allow flexibility to the lowest levels of teachers in order for them to select the right approach to fulfill higher-level outcomes (Vandergriff, 2019, pp. 91-100).²

The final piece of the puzzle that an army or any professional organization must consider in developing future professionals is a rather complicated process. Substance is to substrate in emulsions as competencies are to capabilities in human development. How competencies combine with capabilities to produce development across time occurs through learning, but that is, in turn, dependent upon our senses –what we see, hear, taste, touch, and smell. Some would rightly add a sixth sense that defies rational explanation or concrete definition –intuition– that is, what we know or feel without explicit knowledge of how. Our senses provide the food for learning; they are the gatherers of raw information (Stewart, 1987, p. 20, 34, 45, 60).

Rote learning is the food not processed before it is stored

Learning Research has shown that humans can only deal with about seven raw pieces of information (number, letters, among others) at one time. Given this limitation, people develop conceptual strategies that store higher orders of information or datum in the form of *concepts* and process them further into concepts of yet higher orders, pillaring one conceptual layer on top of the other. Rote learning occurs in concepts (Gatto, 2001a, 2001b, 2010); someone else has processed the raw inputs constituting them, or the receiver can process the information into a higher order. Learning consists of both processes, but one is passive and the other active (National Health Forum, 2000).

With this in mind, Dr. Gary Klein tells us that the most frequent type of decision-making for leaders in a time-critical environment is recognitional, which requires a large amount of experience. Research also tells us that competence in decision-making is solidified by making many decisions in a stressed environment with adequate feedback and time to reflect and then try it again under different conditions; this develops intuitive decision-making. In the formal learning and field environments, short of combat experience, this is gained through frequent problem-solving exercises using tools including tactical decision games, forcing cases, *kriegspiel* (wargames), free play force on force exercises, and forcing staff rides, all followed by reflection time and constructive After-Action Reviews or AARs, accompanied by research and writing (Klein, 1998, p. 16).

² This is called the learning doctrine of Outcomes Based Learning or Outcomes Based Training and Education, which is to learning what Mission Command is to Operations.

Intuitive Decision-Making Education, what we know today as the Constructionist theory of learning, is based on Johann Pestalozzi's Method of Teaching. Pestalozzi was a Swiss educator and the inventor of Kindergarten. In the late 1700s, Pestalozzi developed his theory that students would learn faster on their own if allowed to "experience the thing before they tried to give it a name" (Gudmundsson, 2018a)³.

More specifically, Pestalozzi methods educate leaders on how to identify the core of a problem, and then deal with that centerpiece of the problem without "wasting time working their way to finding a solution." German officer cadets and officers called this approach "Kindergarten Tactics." Taking ownership of the learning by the student is key to lifelong learning and understanding, prior to them being told the doctrinal or official term. They discover it for themselves and give it a name—this is ownership of learning (Gudmundsson, 2018b).

Recent learning science confirms this approach, as the leading learning expert in the nation, Dr. Robert Bjork, Dean of the School of Psychology at the University of California Los Angeles (UCLA) has discovered. In Lindsay et al. (2006) *Remembering: Attributions, processes, and control in human memory: Papers in honor of Larry L. Jacoby*, Dr. Bjork reminds the military that there is room for improvement in its learning doctrine in his presentation "How we learn versus how we think we learn: Implications for the organization of army training." Bjork emphasizes:

As instructors, we can often be misled in this determination because what is readily available to us is the performance of our students during instruction, which can be a poor indicator of how much durable learning is actually occurring. If, for example, all we consider is the rapidity and apparent ease of learning during training and instruction, we can easily be led into preferring poorer conditions of learning to better conditions of learning. Additionally, as learners, it seems that we do not develop—through the everyday trials of living and learning—an accurate mental model, so to speak, of those operations that result in learning and those that do not. And, furthermore, we are fooled by certain indices—such as how fluently we process information during the re-reading of to-be-learned material—into illusions of learning and/or competence that then leads us to prefer poorer conditions of learning to better conditions of learning. (pp. 15-28)

We, as leaders at all levels, must understand that deciding when and how to close with an enemy may be the least important decision they make on an asymmetric battlefield. Instead, actions that build and nurture positive relationships (with a community, local leaders, and children) may be among the defining factors for success, along with the primary tools for containing an insurgency, building a nation or stopping genocide. True

³ Dr. Gudmundsson is the leading authority of Professional Military Education, and the author of several books that deal with military reform and transformation, as well as how the Germans, French, and English trained and educated leaders.

tactical prowess often entails co-opting the local population's will while shattering the cohesion of asymmetric adversaries.

The U.S. Military and most law enforcement agencies, with exceptions, have focused on the "Competency Model⁴," (Taylor, 1964, pp. 4-6) which produces leaders who are good at "what to think," but, as Bjork stresses,

When instruction occurs under conditions that are constant and predictable, learning appears to get what we might call contextualized. It looks very good in that context but doesn't support retention later when tested in other contexts and the learning acquired in the original context does not transfer well to different contexts.

In contrast, varying conditions of practice, even just the place where you study, for example, can enhance recall on a later test.

(...) if when trying to learn several things, you intertwine the learning of those things in such a way as to cause interference among them during learning, long-term performance on them will be enhanced.

This is the one desired difficulty that I am going to illustrate with experimental results (...) massing (such as cramming for exams) supports short-term performance; whereas spacing (distributing presentations, study attempts, training trials, etc.) supports long-term retention. (Bjork, 2015, p. 29)

Bjork's work, as it relates to evolving the current task-centric and process-centric approach to most current education, can be summed up in the following: Conditions of instruction that make performance improve rapidly often fail to support long-term retention and transfer, whereas conditions of instruction that appear to create difficulties for the learner, slowing the rate of apparent learning, often optimize long-term retention and transfer (Bjork, 2006).

The importance of a learning focus

Learning must always be accomplished. It is how one becomes adaptive. But first, we must define some key terms, as we have earlier, to further understand the focus on learning. Rapid decision-making cannot solely be taught in blocks of instructions in the classroom but continually reinforced through practice in the field and classroom. One builds upon the other in continual evolution.

Having members of an organization that are adaptive and have intuition is not enough to win wars, campaigns, or battles. Like other cognitive qualities, both are beneficial only when accompanied by two other characteristics: effectiveness and feasibility.

4 The Competency Model first appeared in New York City Schools in 1905. It was developed, and public schools patterned afterwards, on producing factory workers. You see it today in such concepts as "Leave No Child Behind," where students are trained for the test using memorization.

Having the ability to change things rapidly is not very helpful if those decisions lead to defeat. Thus, adaptability and intuition—which create agility in the ability to make rapid decisions—must be tempered by the fact that the new action must not only be helpful but will not cause greater difficulties than would have resulted if no changes were made. Similarly, rapid decisions are not a good idea if the other elements of the enterprise cannot do what is wanted. Both must be limited by what is possible in terms of time, space, resources, and human potential (Stewart, 1987, p. 20, 34, 45, 60).

Many people are not predisposed to be adaptive and have intuition; they like to be comfortable prescribing to set patterns and stay with familiar activities. The current training and education system molds professionals into a set of behaviors that prescribe to a set way of doing things through how we manage career timelines, how we award and promote. Most militaries have a culture that unknowingly and unintentionally teaches bureaucratic behavior. It would be good if we could only have personnel that naturally make rapid decisions (we know it as common sense), but there may be too few of them to fill the force structure, and in any case, most militaries do not know how to identify these people ahead of time very well. Therefore, what we have to do is teach people how to make rapid and sound decisions in their responses to sudden changes in the situation. We have to teach individuals as well as groups of people to be agile; this is not going to be easy (McGee, 1999).

Linear or non-linear. A place for both?

Today, most people are taught analytical decision-making, which involves collecting and analyzing information to generate, compare, and select an optimal course of action. It is linear and easy to teach. This method is based mainly on a logical analysis of a situation; this is the Military Decision-Making Planning (MDMP) process.⁵ Such analytical processes are extremely effective if given accurate information, a clearly defined goal, and a capable decision-maker. Learning in most US military and similar organizations is focused on training with decision-making, using the analytical approach (U.S. Marine Corps, 1997a, pp. 63-70, 81).

In contrast, we also create adaptability, which is defined as the process by which individuals and groups decide rapidly, almost instinctively, to changes in their situations. Adaptability and agility are closely related. Both of them lead to changes in missions,

⁵ The MDMP was introduced in the 1890s by Maj. Eben Swift. Major Swift translated a French interpretation of a German method used in tactical decision games. The French mistakenly systemized a tutorial device, and Swift broke the process into even more procedures. He created the famous five-paragraph field order. This formalism feeds an inward focus because the effort is now directed toward how the order is written rather than why it is written. Swift did not understand that the German method was simply an educational tool to introduce students to the concept of harmonization and never left the introductory level. The flaw with the MDMP is that it forces staffs to focus on “checking the blocks” of the matrix instead of focusing on the enemy, mission, and commander’s intent. In fact, the enemy only occupies a small portion of the MDMP matrix.

plans, procedures, and outcomes, but a time dimension does not constrain adaptability. Individuals, groups, and institutions can and most often do adapt slowly to changes. Agility, on the other hand, implies a rapid adaptation to changes in a situation (the use of a battle drill, for example, to overcome a surprise ambush). It is this need for rapid, almost instantaneous changes that govern military operations (US Marine Corps, 2015, p. 4; Kline & Saunders, 1993, p. 24; Schmitt, 1999).

Adaptability is a cognitive quality, and it is non-linear. It cannot be assured by technology alone. Modern technology increases the tempo of war, but it does not assure adaptability. Adaptability has little to do with weapons, munitions, vehicles, platforms, or the things upon which war ministries have labored so long and lovingly. Adaptability must be the product of people who can face the unexpected with calm resolve while finding ways to turn the tables (Bousquet, 2009, p. 187).

Coup d'oeil

Everyone says that intuition is a critical skill for future members. Carl Von Clausewitz (1984) in *On War* uses the term “*coup d'oeil*” to describe intuition, calling it a high level of situational awareness that the mind would ordinarily miss or would perceive only after long study and reflection. Clausewitz also termed this ability “genius,” with “appropriate intellect and temperament.” Sun Tzu uses similar descriptions, and tells leaders to understand this principle to have success in command (Clausewitz, 1984, p. 119; Tzu, 1963, p. 91; Lind, 1985, pp. 5-6; US. Marine Corps, 1997a, pp. 23-39).

Psychologist Carl Jung called intuition one of the four basic psychological functions: “[the] function that explores the unknown, and senses possibilities and implication which may not be readily apparent.” Any organization, in pursuit of transformation, needs to develop and reward intuition. Intellectuals from a variety of other professions highlight it as valuable and important. Intuition is a building block for several critical traits (Jung, 1971, pp. 12-20).

Daniel Goleman records that these traits range from self-awareness to social and relationship management. John Maxwell writes in his book, *The 21 Irrefutable Laws of Leadership*, that intuition is the result of a combination of natural ability, learned skills, and broad experience Maxwell, 1999, pp. 23-24, 29). Professionals with intuition become readers of certain “intangibles,” recognized as critical to battlefield success. Individuals will be exposed to situational awareness, trend analysis, systems thinking, and consensus-building to build intuition. Armies will also be introduced to socially-oriented techniques, like developing a shared vision, to ensure that culture and values prevail amongst the organization’s members. In the end, this establishes a foundation for building strategic leaders.

In the past, the militaries relegated leader training, which was often not professionally challenging to all involved, to second place to other events. Developing adaptive

professionals to win in combat is the toughest of all professions, and cannot be treated as a club function. We cannot confuse adaptability with agility. An adaptive leader is “A leader who can influence people by providing purpose, direction, and motivation while operating in a complex, dynamic environment of uncertainty and ambiguity to accomplish the mission and improving the organization” (Defense Science Board Task Force, 2003).

Agility is defined as quickness, adaptability, and ease of movement, the ability to change and cope with massive uncertainties being a core competency. Change competency is measured in terms of five performance metrics, time, cost, scope, stability, and frequency. What better description is there for armies operating in today’s asymmetric environment? Like skilled athletes, servicemen and women will be called upon to adapt to changing conditions quickly and smoothly. Agility has also been described as “operating inside the opponent’s OODA loop” (Boyd, 1986, pp. 4-5).

We must teach our professionals the Hegelian Dialectic in which two opposite views can be synthesized into a superior response. To organize the energy of a conglomerate group into purposeful action, it is necessary to provide some *principles in education*; otherwise, everyone or subgroup will do different things. This may or may not be good in general, but when the focus of activity is on “making-mission,” and “inputs” (how many individuals we push through training) is the wrong outcome. While it is important to track, it is not the sole outcome to determine the success of a unit, course or school (Leland, 2010).

“Agile commanders, both mentally and physically, quickly comprehend unfamiliar situations, creatively apply doctrine, and make timely decisions” (US Marine Corps MCDP-1, 1997, pp. 56-64). Some think that when professionals learn, personnel must be empowered to plan and execute more learning events on their own. The U.S. and United Kingdom’s doctrine of *Maneuver Warfare* requires junior personnel to accept significant increases in responsibility, with combined arms forces migrating to the lowest levels of the organization. The issue is, does the way they learn, peacetime, and the garrison cultures they operate in reflect the way they will fight?

Barriers to a culture of learning

Most militaries don’t walk the talk.

Although doing well in military task training (core military competencies) –most individuals are competent at their individual and collective military task performance (skills in the tangibles)– they currently lack in the capacity to *think and do* confidently on the ground in an operating environment that is much more complex, expansive (in time, space, and context), and decentralized. Today’s operating environment is characterized as “the strategic implications of tactical actions,” though true, most militaries are not doing their best to ensure that its personnel fully understand and can *master* the impacts of their tactical actions to affect the strategic effects intended (Plamondon et al., 1999).

Servicemen and women *do* great things at ground level that have some strategic impacts, but they do not fully understand the strategic impacts of their actions and activities. If a military taught them and educated them holistically beginning at an early stage, they could not only understand the strategic purpose of what they do in the warfighter; they could learn to intentionally take certain tactical actions (civil-mil actions) to affect specific strategic effects. This is the personification of the “strategic corporal” that GEN (Ret.) Krulak, USMC, spoke of back in the 1990s.⁶

The profession of arms has this odd and illogical (irrational) culture of masking our persona (individual and collective) as *the simpleton* —“I’m just a simple kind of guy” is a favored lead-in and credo for many personnel. Our culture promotes anti-intellectualism (we do not want to be someone who can *think* because that must mean that we cannot *act* or *do*). The services promote the atrophy of the brain muscle, instead of building that muscle the same way we focus on building ourselves physically for war. War it is said is a young person’s game, adapt to the physical challenges of the business. Warfare is not for the old. It should also not be left to the weak of mind. The military culture appreciates a person’s *thinking-doer* capabilities. It is an oddity of the organizational culture that must be overcome (Defense Science Board Task Force, 2003).

In the *Foundations of the Science of War*, Chapter 1, page 20, J. F. C. Fuller (1926) states in his 7th endnote that “The confusion between the meanings of science and art in the head of the average soldier is most pronounced. They do not understand that ‘a science teaches us to know, an art to do.’” If you replace “the average soldier” with a military’s training command acronym, you get to the essence of the problem. Most training commands specialize in scientific management of *knowledge* (Taylor, 1964, pp. 4-6). They do not specialize in teaching the art of warfighting.

Unfortunately, this problem occurs across a nation’s military. In the U.S., all training and education are tracked via the Joint Professional Military Education (JPME) certification system. It appears that one of the underlying assumptions for the adoption of a systems approach to training/education was that the more a service-member *knows*, the more he or she can *do*. The truth is, as Heraclitus observed in 500 BC, in war, “out of every one hundred men, ten shouldn’t even be there, eighty are just targets, nine are the real fighters, and we are lucky to have them, for they make the battle. Ah, but the one, one is a warrior, and he will bring the others back.” This is true whether they just graduated from the War College or are fighting for ISIL with no formal education (Salmoni, 2008, pp. 12-14, 34-35, 40-43).

To complicate matters, there is now a perception that everyone who deployed in support of OEF/OIF/Resolute Support accomplished their mission, and everyone who

6 For further reading on Victor Krulak see “The Strategic Corporal in the Three Block War.” General Robert Neller, *36th Commandant’s Planning Guidance: Innovate, Adapt, Win*, (Arlington, VA: Headquarters, US Marine Corps, July 2015), p. 2; assessed at https://www.hqmc.marines.mil/Portals/142/Docs/2015CPG_Colour.pdf

deployed is a hero. This perception disproves the above hypothesis and causes everyone to scratch their head when a true teacher is *abrasive*. In their minds, the scientific approach to training and education in the military has a proven track record. Even the U.S. Department of Education (DoE) that oversees all U.S. public school Programs of Instructions (POI) uses it with their *common core*. What could possibly be wrong with it?⁷

To make matters even worse, the trend in formal military schools are now tasked to basically “stuff 10 pounds of shit into a 5-pound bag without spilling a drop.” An *unofficial* analysis required by the U.S. DoD in 2018 of all existing Annual and Ancillary Training/Education found that in order to *know* everything required by order or directive, service personnel would have to train/teach 32 hours a day, 365 days a year. How is that even possible when there are only 24 hours in a day? It is not. The truth is that no one had ever looked at the requirements holistically. They just kept piling them on, making commanders responsible for what their units do (or fail to do). This delta between perception and reality continues to grow every time there is an allegation of rape, a DUI, or a suicide (Department of Defense, 2018).

If the *requirements* continue to increase to mitigate the *risk*, the U.S. Military cannot change; in fact, they will only get worse. It is not personal; it is systemic. The U.S. Military’s entire infrastructure is based on the scientific management of *knowledge*, which breaks *doctrine* down into testable, quantifiable parts. Every subject is assigned to a curriculum developer (civilian, usually a retired SNCO or Officer) who arranges these parts into Terminal (i.e., testable) Learning Objectives (TLO) and Enabling Learning Objectives (ELO). Every hour of instruction is accounted for in the Program of Instruction (POI), with a constant eye towards the efficient transfer of terminal learning objectives –retention be damned– (Vandergriff, 2014, pp. 34-43).

That is why bold and great teachers are constantly told to “stick to the POI” whenever they attempt to improve retention and understanding among the subordinates outside of the formal lesson cards. Scientific managers probably view any methodology other than the Competency Theory as *inefficient* and hard to quantify and test. They also probably view these methods as a threat to their livelihood (i.e., Master Teachers do not need curriculum developers). Until both DoD and DoE dismantle their scientific management models, all reform efforts will continue to exist on the fringes. Why? Because every time a senior leader sees something innovative outside the use of more delivery technology, they ask, “is there anything we need to do to update our POI to reflect what he just taught?” The answer they get in return from their curriculum developer is “no, our POI is signed and certified; we cover everything required by doctrine.”⁸

7 See “Concept to Classroom,” <https://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/>.

8 This is based on the personal experiences of the author.

War as a learning contest

What is the relationship between learning and warfighting? Is war chaos? But what is chaos? *Maneuver Warfare* is a doctrinal and cultural reaction to dealing with war as chaos. We have a proven model that allows us to deal with chaos, but we must learn to practice it again and again to master it (Kahneman, 2011, pp. 20-21).

Maneuver Warfare is a dynamic system, a semi-pattern behavior, patterns coming apart to recombine later. War is when you can recognize whether those skills apply or do not apply. When do we depart from the pattern that we have and create a new one? There is an approach that some professionals already know well for the last 30 years; however, we will revisit the OODA Loop, which is shown in Figure 1 (US. Marine Corps, 2013, p.73).

John R. Boyd demonstrated the power of making sound decisions promptly in his theory of decision-making. Boyd contends that human behavior follows a specific decision-making cycle. The four steps of the cycle consist of observation, orientation, decision, and action OODA loop. The side in a conflict that executes this decision-making process more rapidly and effectively gains an advantage over his opponent because the opponent will continuously react to his actions. These continued reactions eventually result in poor decisions followed by paralysis of the entire opposition decision-making process. The common expression of the successful execution of this procedure is getting inside the enemy's decision cycle (Boyd, 1986, p. 72).

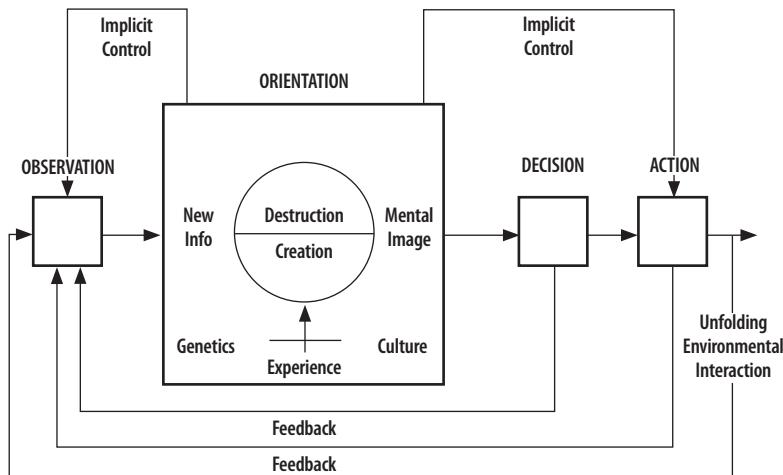


Figure 1. Boyd's OODA Loop.
Source: U.S. Marine Corps (2013, p. 72)

The critical step in the OODA is orientation. In this step, analysis and synthesis of the observations occur. The process consists of taking many different disparate nuggets of data and information and translating them into a mental picture, which the decision

maker can then use to decide. Boyd refers to this as “examining of the world from a number of perspectives so that we can generate mental images or impressions that correspond to the world.”⁹

The OODA Loop gains its power from the ability of a leader to form mental constructs. Timeliness and accuracy of decisions and actions relate directly to the decision-maker’s ability to orient and reorient to rapidly changing and uncertain situations. Personal experiences, education, and training (a.k.a. knowledge) empower the leader to form these mental constructs (Vandergriff, 2006, pp. 50-66).

Boyd’s theory emphasizes the importance of the ability of leaders to think. By-the-book answers to specific well-known situations are not good enough. It is the ability to think that allows a leader to take the knowledge from personal experiences, education, and training and adapt it to the imperfect information of the present situation to arrive at a timely, sound, and workable solution to that situation (Boyd, 1986, p. 72).

Applying the OODA Loop faster than the opposition is the essence of situational or intuitive decision-making. It is the means of quantifying a mental process into a mechanical action that all leaders can understand and apply. Decision-making superiority is merely creating a tactical decision-making base in the operating environment (Stewart, 1987, pp. 20, 34, 45, 60).

An intellectual edge in warfare

Today the U.S. military is untouchable at how it trains its members to accomplish tasks. Commonly referred to as “Task-Condition-Standard,” using the “Crawl-Walk-Run” methodology has worked well in the past to train its personnel for battle. At one time, the U.S. Military’s training doctrine was the right method for preparing mobilized thousands for war. However, since the time that the doctrine delivered the mobilization that the national military needed, war has evolved in scope, as well as how our opponents fight and the type of opponents we face.¹⁰

The U.S. is developing its joint and expeditionary capabilities against peer and near-peer threats. So, doesn’t the learning doctrine evolve alongside it too? There are signs that they are beginning to move from the Industrial Age to the Cognitive Age (Berger, 2019).

Based on the expeditionary paradigm, the U.S. military no longer has the benefit of having a learning paradigm focused a peacetime individual-centric career pattern, which shift training to a combat focus when the need arises. Leaders must be immediately capa-

9 Theoretical and empirical support for this possibility comes from some domain- general decision-making research, as well as some wayfinding Research. See https://www.researchgate.net/publication/235418838_A_Recognition_Primed_Decision_RPD_Model_of_Rapid_Decision_Making.

10 According to the article “Importance of Psychomotor Development for Innovation and Creativity,” retrieved from <http://www.iijpe.online/2012/psychomotorh.pdf>, “the affective group by emphasizing the human desire for (...) importance of the development of the cognitive and affective domains in fostering creativity in combat is paramount to a unit’s success.”

ble of conducting simultaneous, distributed operations. All leaders must be prepared to operate in all environments with a greatly expanded range of operations and skill to some minimum standard (Reed, 1996, pp. 56-60).

The minimum standard of preparation that results in successful military operations is adaptability in its members and units. The naturalistic decision-making method of Recognition Primed Decision-making is a critical skill for staying ahead of a protagonist and anticipating and recognizing events and situations and making decisions that are of a high risk/low time nature. RPD decision-making requires an appropriate broad base of knowledge for adaptability (Savery & Duffy, 1995, pp. 31-38).

The essential relationship between learning, capability, and performance

The contrast between the Pestalozzi approach and today's "crawl-walk-run" or "lecture-demonstration-practical application" system used in leader development curriculums is dramatic. This contrasting Industrial-age approach was born out of necessity in World War I. The American Expeditionary Force (AEF), arriving on the field of battle unprepared for large-scale war, followed the French approach based on the Descartes method, which evolved into the MDMP analytical decision-making and merged with the Army's approach to leader development (Pershing, 1995, pp. 31-38).

Both the analytical and heuristic methods have an appropriate place in the world of decision-making. Analytical decision-making is strongest in situations that are unfamiliar to the decision-maker or when there is enough time to apply a full, in-depth analysis to the problem to find the best answer to address it (Darwin, 2008).

Heuristic decision-making, as exemplified by the recognition primed decision-making model, addresses situations where time is not available, and a solution is required for immediate implementation. One is not necessarily better the other, and the choice of which process or even a combination of processes to use should result from the situation presented to the decision-maker.

Of the two types of decision-making, the analytical process is easier to train the inexperienced to execute. Most militaries dedicate ample training time in its professional schools to teach officers and non-commissioned officers an analytical planning process (step by step, follow the checklist or process). The planning process is a great equalizer. It affords a common method for solving problems and making decisions by individuals possessing knowledge and experience, from the novice through the expert. Its use should produce optimal solutions to the problem or, at worst, produce infallible plans (Vandergriff, 2007, pp. 30-39).

However, many of the decisions required in the field of battle or field of peace must be accomplished quickly and under stressful conditions. In this environment, the RPD

model of decision-making provides the best method of operation. However, an inexperienced and ignorant decision-maker probably will not make the most effective decisions using this model and will often produce plans that fail. The best RPD decision-makers possess a vast array of knowledge and experience from which to draw courses of action. The drawback is the amount of time required to acquire the requisite knowledge and experience to conduct effective decision-making in this manner (Klein, 1998, pp. 16-20).

The decision-making method best suited for low-time/high-risk decisions is a naturalistic/heuristic method, exemplified by the recognition primed decision-making process. Quickness in the choice of a workable solution to a problem is the critical component. A key aspect of this decision-making method is pattern recognition. It requires a sizeable personal database of knowledge for the decision-maker to be fully effective in identifying patterns in a situation and adapting an appropriate solution to it.

The implications of this are clear. The military must start to develop intuitive decision-making skills among its members, and the earlier, the better. It is also important to recognize that, while conceptually opposite, the two models are mutually exclusive in practice. It is possible, for example, to incorporate analytical elements as time permits into what is essentially an intuitive approach (Defense Science Board Task Force, 2003).

Implications of maneuver warfare on learning

There has been much debate about maneuver warfare over the years. Is it a mindset? An art? A philosophy? A theory? Or is it one of two styles of warfare? (van Creveld, 1994, pp. 1, 3-7)

The six tenets of maneuver warfare ripple throughout an entire doctrinal publication called the Marine Corps Doctrine Publication-1 Warfighting and in U.S. Army doctrine publications (Wass de Czege, 2019), as well as mentioned in other publications, yet its format relegates these words to a single chapter entitled “Styles of Warfare.” Some have pointed out that *Maneuver Warfare* existed long before it had a name, so do we really need to name it at all? We would argue that the exercise of naming things has been an essential first step to progress, much like naming lifecycle phases, animal kingdoms, or months of the year. Naming leads to recording, which then leads to eventual study and improvement (Wong et al., 2003, pp. 2-3, 42-43).

Both warfighting styles –maneuver and attrition– serve useful purposes and are never present in battle in their pure form separate from each other. The experienced warfighter knows when and how to apply both as the situation dictates. We will not emphasize one over the other, only mirror what is depicted throughout official U.S. Doctrine.

Since any development is a continuum of sorts, we will present our warfighting capability in a format referred to as a capability maturity model. It reflects the types of things a leader *does* to demonstrate their aptitude at each level according to what Maneuver Warfare determines to be an effective warfighter. It is *not* a list of training programs or

events they must complete; it is *not* intended to be a checklist, only a representation to help align a military's Learning Doctrine to its Warfighting Doctrine. While we are not opposed to checklists per se, we realize that there is a time and place for them, and this is not it (Stewart, 2009)¹¹.

This capability maturity model ultimately describes the desired capabilities of leaders at all levels. Like the warfighting doctrine, the learning doctrine is developed for officers and enlisted alike. Other more detailed models could align with this model, as the need arises.

This model focuses on the horizontal levels, not the vertical. The vertical levels are not prescribed in our doctrine, though it does subtly use the word apprenticeship to express the idea that warfighting skills take time to develop and master. As such, a learning doctrine will not ascribe ranks to the verticals because it is more practical to assume that personnel could be a novice in one area and approaching journeyman in another, based on their independent study, opportunities, and experiences. Their primary purpose is to show progression. To develop these levels, a learning doctrine groups different attributes that closely support a common theme. Then, for each attribute, a learning doctrine ascribes behaviors and actions for each level of maturity. The themes do not lift from the doctrine so neatly as the attributes; thus, a learning doctrine will take some liberties naming them (Stewart, 1987, p. 20, 34, 45, 60).

Maneuver Warfare is the primary source for this model. Sometimes, defining what something is not is just as illuminating as describing what it is. Maneuver Warfare does a fair job of painting a portrait of the expert by describing and contrasting foundational skills with advanced skills. A learning doctrine that supports Maneuver Warfare would attempt to do the same here, borrowing heavily from our doctrine and other sources that illustrate incremental aptitudes that help fill in the gaps of a military's continuum, but do not introduce anything new or contradictory (Marken, 2008, pp. 1-3).

There are clear indications that leaders need to improve. Various groups act wherever they identify the need, but these are isolated efforts that fizzle once the brain trust turns over, retires, or loses its contract. Initially, this model intends to aim attention towards a common sight picture and, ultimately, a common objective to accelerate the tempo and stimulate more coordinated actions with longer-term results, something that is not done independently. Eventually, a doctrine of learning uses it to stimulate discussions on ways to evaluate decision-making during exercises and wargames, for example. Tangentially, it may also be useful in providing leaders with an early glimpse of their trajectory as a warfighter and encouragement to maintain or kick-start their self-study. This model does not strive for a perfect picture, just the maximum effect (Swartz, 1976, pp. 246-257).

¹¹ Dr. Stewart is one of the leading scientists on how to develop adaptability.

Implications of warfighting philosophy on how leaders make decisions

If we believe Maneuver Warfare is the way we want to fight, it requires high levels of judgment, decision-making, and adaptability. The U.S. military uses these phrases and words all the time, and its leaders read about and can talk about it. If the U.S. military claims that its people are doing it as we speak, then, many will ask, “What is the problem?”

While most militaries talk a lot about adaptability, their cultures develop confirmatory, especially in the way it develops leaders—today’s leader paradigm is a combination of education, training, but more specifically how it promotes and selects. The latter two have the most significant impact on the shaping of leaders in today’s military.

This is far from a criticism of today’s personnel. Today’s leader development paradigm establishes a solid grounding in analytical decision-making. Unfortunately, this process dominates the curriculum of most military courses and unit field exercises. While the objective is to create professional military members that can make sound decisions, today’s and future operating environment demand something different. It is important to define the decision-making, decisions, two decision-making models, and how these definitions fit into adaptability.

Leaders of character make decisions and take responsibility

Decision-making is central to the military; from a soldier firing a machine gun within his assigned sector to a general maneuvering a division. A serviceman or woman who is incapable of making a timely decision or uses poor judgment is a person places the mission and other service personnel in jeopardy. The essence of effective leadership is to make and communicate sound decisions. Active service personnel applies analysis and synthesis as required by the situation rather than applying templates to problem-solving. The requirement for leaders to make and communicate sound decisions is not new to the military. The military has focused, with great success, on developing effective combat personnel.

The future military will require personnel to make decisions in a full spectrum of differing types of operations. War embraces the full spectrum. However, the personnel of most militaries does not traditionally prepare its leaders to conduct this type of operation until an impending mission requires it. Most military-centric courses and institutions concentrate on preparation for the execution of close combat. Unless directed otherwise, doctrine drives course directors to focus time and resources on training combat tasks.

Given the diverse emerging threats and mission requirements, a deviation from this focus may be required. However, this diversion of focus to non-combat related tasks will be temporary and only exercised when preparing for anticipated missions. The reality is that it is not possible to anticipate many of these missions. Nevertheless, many leaders have adapted; they had to. The concern is the many that have not adapted or are unpre-

pared to make sound decisions in a rapidly changing environment. This paper intends to help those in the military who deal with leadership and show them how to teach decision-making and develop adaptability.

The Future

Understanding how to develop and nurture adaptability through learning must be undertaken, in concert with extant a military's plans for revamping their learning doctrine for the operating forces and the institution itself to produce future leaders who will have the frame of reference (FOR)¹² necessary to change the military culture in the ways suggested next.

Adapt the model of development suggested in favor of alternative approaches that have not achieved the ends intended for at least two generations, if not more. At the strategic, operational, and tactical levels, these teachings need to focus on the essential elements of development, as defined here, and as suggested from the best available findings of human development and transformation available today.

Develop measures of both the essential elements and their behavioral manifestations. Measures of emotional development (ED-maturity)¹³ and cognitive development (CD-critical and creative thinking)¹⁴ exist but should be *user-friendly* and usable on a military wide-scale basis. Metrics cannot be the current evaluation cards used by the military, which are very complicated and compels leader observers to focus on the card and not the actions of the military and their units.

12 These competencies, factors, skills, and abilities are terms used to characterize a state-of-being. A leader should be and do X, Y, & Z. Thus, X, Y, and Z are one set of behaviors that spring from what we call a developmental frame-of-reference. One might say that there are about as many frames-of-reference as there are people. However, here, we are using the term more stringently, meaning what flows from specific developmental levels (Kegan & Freedman, 1983; Keegan, 1994; Demick & Andreoletti, 2003). Such stages describe how an individual views the world by constructing his or her "real" world, from the inside outward. Developmental levels are intrinsically associated at different times in our lives. Research shows that individuals' FOR changes as they mature, and it is the fountainhead from which many characterizations of what people do may flow. The Army can speak of a center of gravity that determines all the manifestations of a current knowledge state (Lewis & Jacobs, 1992) with cognitive dispositions and together with them form what we refer to as a frame-of-reference. This internal FOR is what leads us to be of a particular order of mind, to say, be, and do.

13 Emotional Development (ED), also a vertical (across-time) growth process, is all about how comprehensively the individual has a grasp on himself or herself, and, therefore, of others as well. It reflects a person's center-of-gravity or the center of their emotions, actions, and decisions at some point in time. Whereas Cognitive Development (CD) determines the scale and scope of problems and operations an individual can effectively take on, ED determines, mainly, why they do something –motivation–. Simply put, it is all about "*What should I do and for whom?*" Successively, a higher achievement on this dimension determines how objective the individual can be about their strengths and limitations, which also reflects how open they are to learn and discover about themselves and others. According to ED logic, people's self-identity and feelings of self-worth are defined by two distinct perceptions: their own, and what they believe others think of them, especially the views held by significant others.

14 Cognitive Development (CD) is critical to sound judgment in novel and complex situations. Sound judgment depends on reliable intuition and *thought models* to sort the routine from important problem nuances that demand critical thinking and creative solutions. Relational skills are critical to persuade and lead, negotiate, and settle disputes, as well as for cooperation and teamwork.

Implement a new tool for metrics that can be a plain card with just a printed name, mission, time, and evaluator. The rest should be space to write observations. Over time, these observations of demanding situations that require adaptability will provide a measurable evaluation of adaptability. Clearly, if we cannot measure the essential elements, they do not matter; hence, we must find ways of measuring these elements for two purposes.

- Intensive confidential individual assessment, feedback, and development planning at each schoolhouse entry or career gateway. The idea is to provide the foundation needed to guide development during the educational experience and in follow-on assignments.
- Systemic feedback. Each member should be anonymously assessed at each gateway point to provide a feedback loop at the systems level to determine if the programs and processes set in motion are having their intended effects. This will provide an interlocking chain of continuity to each service person's development from the time of boot camp or pre-commissioning onward. With such a continuity thread, it will be possible to monitor progress towards the objectives. Generically, the crucial question is developing the military's talent at the required time and place in terms of the essential elements.

Establishing a blend of instructional methodologies to use, particularly in the institutional setting, is critical to promoting synchronous growth in CD, ED, and, consequently, knowledge development (KD-learning).¹⁵ Current instructional approaches lack opportunities for experiencing the *emotional trauma of failing within a safe, face-saving environment*, which is needed to promote ED. The methodologies' coequal focus must be on CD to teach critical and reflective thinking, or how to think, replacing the overall emphasis on what to think (content) to allow building richer and deeper understandings of the self and alternative worldview; an understanding that will enrich one's own.

From the outset, a modern military's highly technical environment demands an emphasis on transformation, on growing by learning-to-learn, not on information alone. This paper has focused on the *what*. However, there will be sequels to address the *how*, which is critical to the eventual overall success of these recommendations. In many senses, the *how* is a more complicated issue, but evidence exists that gives us substantial clues about what its nature must be.

¹⁵ Knowledge Development (KD) represents the combined product of Cognitive Development (CD) and Emotional Development (ED) and is the platform for Frame of Reference (FOR), the outcome state that, in turn, defines our patterns of behavior. CD and ED are the vertical growth dimensions, and the nature of their nexus is critical to leader development. Another way of stating this is by way of an old, familiar adage that what is not thought 'in your gut' is not thought thoroughly. Whatever is transferred out of CD is abstract knowledge, in the same sense that grammar constitutes abstract knowledge (competence) in contrast to speech (performance) in real-time. *Performance* has an experiential component, *competence* does not –learning to ride a bicycle from a book without ever mounting one represents the CD component while riding it provides KD's ED complement.

The only way that a military can produce future leaders with the wherewithal to define and develop a *Culture of Innovation* is from inside the individual out. It will only be possible by growing a cadre of people with a more advanced frame of reference than that which evidence suggests exists now. Thus, the transformation that our recommendations envision will take place over a protracted period as the next generation is produced. If a military starts in earnest to focus on development now, as we have described it, rather than on its manifestations (behavioral *eaches* or meta-*eaches*), the serviceperson can reinvent itself in the ways that current trends suggest; the Maneuver Warfare culture that *MCDP-1 Warfighting* envisions with an emphasis on *Mission Command*, both in the institution and the operational forces.

If the military truly wants to raise itself to the next level, it must be prepared to grow a new, more advanced leader at all levels, and marshal the *military continuity*, a sustained, dedicated, and focused sense of purpose, necessary to make it happen. If the military culture mirrors more than less the culture at large, it will never produce the change it seeks: a culture supportive of the Profession of Arms, where mistakes are measured in lives, not dollars. Western militaries have the talent if only the institution would take the initiative and engage the appropriate, extended effort required to develop it.

Acknowledgments

I would like to thank Mr. Chris Casey and Dr. Bruce I. Gudmundsson for their insights on my thoughts behind this article, as well as my electron friend and comrade in reform Dr. Marina Miron for believing in me. I have learned much from all of them regarding warfare.

Disclaimer

The author does not declare any conflict of interest concerning this article.

Funding

The author does not declare any source of funding for this article.

About the authors

Don Vandergriff, Major (ret.), is an expert on learning, Maneuver Warfare, Mission Command and leader development. He is a retired Marine and US Army armor officer. He is currently a consultant to the US Marine Corps on Learning. Many organizations have applied his outcomes-based learning approach. He is the author of six books and over 100 articles.

<https://orcid.org/0000-0003-2308-6882> - Contact: vandergrifffdonald@usa.net

References

- Berger, D. H. (2019). *Commandant's Planning Guidance-38th Commandant of the Marine Corps*. Retrieved from https://www.hqmc.marines.mil/Portals/142/Docs/%2038th%20Commandant%27s%20Planning%20Guidance_2019.pdf?ver=2019-07-16-200152-700
- Bjork, R. C. (2006). *How we learn versus how we think we learn: Implications for the organization of Army Training* (Unpublished briefing). US Army Training and Doctrine Command. August. Fort Monroe, VA.
- Bjork, R. C. (2015). Forgetting as a friend of learning. In D. S. Lindsay, C. M. Kelley, A. P. Yonelinas, & H. L. Roediger (Eds.), *Remembering: Attributions, processes, and control in human memory: Papers in honor of Larry L. Jacoby* (pp. 15-28). New York: Psychology Press.
- Boyd, J. (1986, December). Patterns of Conflict. Briefing.
- Boyd, J. (1988, July). Patterns of Conflict. Briefing.
- Boyd, J. (1986, May). Patterns of Conflict. Briefing.
- Bousquet, A. (2009). *The scientific way of warfare: order and chaos on the battlefields of modernity*. New York: Columbia University Press.
- Darwin, M. (2008). *Outcomes based training and education, fostering adaptability in full spectrum operations* (Unpublished briefing). Fort Meade, MDL Asymmetric Warfare Group. December.
- Defense Science Board Task Force. (2003). *Training for future conflicts*. Washington, D.C.: Office of the Under Secretary for Defense for Acquisition, Technology, and Logistics.
- Demick, J., & Andreoletti, C. (Eds.). (2003). *Handbook of adult development*. New York: Springer.
- Department of Defense. (2018). *Department of Defense Appropriations for 2018*. Retrieved from <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-115hhrg28272/pdf/CHRG-115hhrg28272.pdf>
- Fuller, J. F. C. (1928). *Foundations of the science of war*. London, UK: Hutchinson & Co, Ltd., Paternoster Row, E. C. Retrieved from <https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-books/Foundationsof-Science-of-War.pdf>
- Gatto, J. T. (2001a). *Dumbing us down: The hidden curriculum of compulsory schooling*. New York: New Society Publishers, Ltd.
- Gatto, J. T. (2001b). *The underground history of American education: An intimate investigation into the prison of modern schooling*. New York: New Society Publishers, Ltd.
- Gatto, J. T. (2010). *Weapons of mass instruction: A schoolteacher's journey through the dark world of compulsory schooling*. New York: New Society Publishers, Ltd.
- Glazier, D. (2015). *Military reform through education*. Washington, D.C. Project of Government Oversight.
- Gudmundsson, B. I. (2018a). [Interview]. 25 July. Quantico, VA.
- Gudmundsson, B. I. (2018b). [Interview]. 9 August. Quantico, VA.
- Jung, G. (1971). *Psychological types*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. New York, NY: Penguin Books.
- Keegan, J., & Freedman L. (1983). *World armies* (2nd Ed.). London: MacMillan.
- Keegan, J. (1994). *A history of warfare*. London: Pimlico.
- Klein, G. (1998). *Sources of power: How people make decisions*. Boston, MA: Massachusetts Institute of Technology.
- Kline, P., & Saunders, B. (1993). *Ten steps to a learning organization*. Arlington, VA: Great Ocean Publishers.
- Leland, F. (2010). *Developing "fingertip feel" shaping and reshaping dynamic encounters and gaining the advantage*. Retrieved from <http://lesc.net/system/files/Developing+Fingertip+Feel+finaldraft.pdf>
- Lewis, A., & Jacobs, R. (1992). Individual differences in strategic leadership capacity: a constructive/developmental view. In Phillips & Hunt (Eds.), *Strategic leadership: A multiorganizational-level perspective* (pp. 121-137). Santa Barbara, CA: Quorum Books/Greenwood Publishing Group.

- Lind, W. S. (1985). *The maneuver warfare handbook*. Boulder, CO: Westview Press.
- Marken, W. (2008). Merging doctrine: Outcomes-based training and mission essential task lists compared. *Initial Entry Training Journal*. Training and Doctrine Command.
- Martin, G. (2019). COIN, complexity, and full-spectrum warfare: Is it possible to have Center of Gravity given all the Fog and Friction? *Small Wars Journal*, 6(10), 1-10. Retrieved from <https://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/591-martin.pdf>
- Maxwell, J. (1999). *The 21 irrefutable laws of leadership*. New York, NY: Nelson Incorporated, Thomas.
- McGee, T., Jacobs, W., Kilcullan, W., & Barber, J. (1999). Conceptual capacity as competitive advantage: Developing leaders for the New Army. In Hunt, Dodge, & Wong (Eds.), *Out of the box leadership: Transforming the twenty-first century Army and other top-performing organizations*. New York: JAI Press.
- National Health Forum. (2000). *Teaching the science of learning*. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5780548/>
- Pershing, J. J. (1948). *The United States Army in World War I 1917-1919*. Washington, D.C.: Government Printing Office.
- Plamondon, K. E., Donovan, M. A., Pulakos, E. D., & Arad, S. (1999, August). Adaptability in the workplace: Development of a taxonomy of adaptive performance. *Journal of Applied Psychology*, 85(4), 612-624. <http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.85.4.612>
- Reed, E. (1996). *The necessity of experience*. New Haven: Yale University.
- Salmoni, B. (2008) *Pedagogy for the long war: Teaching for the long war*. Quantico, VA: USMC TECOM.
- Savery, R., & Duffy, T. M. (1995). Problems based learning: An instructional model and its constructivist framework. In B. Wilson (Ed.), *Constructivist learning environments: Case studies in instructional design*. Englewood Cliffs: Educational Technology Publications.
- Schmitt, J. (1999). *Complexity theory applied to warfare*. Washington, D.C.: National Defense University.
- Stewart, S. R. (1992). *Leader development training needs assessment of U.S. Army Battalion Commanders* (U.S. ARI Technical Report 969). Washington, D.C.: Army Research Institute.
- Stewart, S.R. (1987). *Leader development training assessment of U.S. Army TRADOC Brigade Commanders* (U.S. ARI Research Report 1454). Washington, D.C.: Army Research Institute.
- Stewart, S. R. (2009, June 8 and October 21). Interview with author. Georgetown University.
- Swartz, R. (1976). Mistakes as an important part of the learning process. *The University of North Carolina Press*, 59(6). Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/pdf/40365921.pdf>
- Taylor, F. W. (1964). *Scientific management: Comprising management, the principles of scientific management and testimony before the Special House Committee*. New York: Harper and Row.
- Tzu, S. (1963). *The art of war* (S. B. Griffith, Trans.). NY, NY: Oxford University Press.
- U.S. Marine Corps. (1997a). *MCDP 1. Warfighting*. Washington, D.C.: Government Printing Office.
- U.S. Marine Corps. (1997b). *MCDP 6. Command and control*. Washington, D.C.: Government Printing Office.
- U.S. Marine Corps. (2013). *MCDP 1-3. Tactics*. Arlington, VA: US Marine Corps.
- U.S. Marine Corps. (2015a). *Force Development Plan*. Quantico, VA.: US Marine Corps Combat Development Command (MCCDC).
- U.S. Marine Corps. (2015b). *United States Marine Corps 36th Commandant's Planning Guidance: Innovate*. Arlington, VA: Headquarters, US Marine Corps. Retrieved from https://www.hqmc.marines.mil/Portals/142/Docs/2015CPG_Colour.pdf
- Van Creveld, M. (1994). *Air power and maneuver warfare*. Maxwell, Alabama: Air University.
- Vandergriff, D. (2006). *Adaptive Leaders Course, Part 1: Old dogs teaching new ticks*, Army. Arlington, VA: Association of the United States Army or AUSA.

- Vandergriff, D. (2007). From swift to Swiss: Tactical decision games and their place in military education and performance improvement. *Performance Improvement*, 45(2), 30-39.
- Vandergriff, D. (2014). *What are the basics? Developing for mission command*. Retrieved from <http://www.lesc.net/blog/what-are-basics-developing-mission-command-donald-e-vandergriff>
- Vandergriff, D. (2019). *Adopting mission command: Developing leaders for a superior command culture*. Annapolis, MD: United States Naval Institute Press.
- Von Clausewitz, C. (1984). *On war* (M. Howard, & P. Paret, Eds. and Trans). Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Wass de Czege, H., (2019). *The US Army Maneuver Warfare—3d Generation War Victory Began in 1982*. Retrieved from www.combatreform.org/usarmymaneuverwarfare.htm
- Wong, L., Gerras, S., Kidd, W., Prcone, R., & Swengros, R. (2003). *Strategic leadership competencies*. Retrieved from <http://bit.ly/2nFqNHB>



Revista Científica General José María Córdova

(Colombian Journal of Military and Strategic Studies)

Bogotá D.C., Colombia

Volume 17, Number 28, October-December 2019, pp. 869-889

<http://dx.doi.org/10.21830/19006586.528>

Public attribution as a regulator of emotion: Manipulating the political effects of hostilities

La atribución pública como reguladora de emociones:
manipulación de los efectos políticos de las hostilidades

Samuel Žilincík

Masaryk University, Brno, Czech Republic

ABSTRACT. Ascribing attribution in security and strategic studies often focuses on its technical feasibility not its political utility. This paper highlights the emotional effects of attribution. It contends that public attribution can convert the effects produced by hostile activities into favorable circumstances, regulating the emotions of domestic populations. Allocating responsibility to oneself can elicit guilt, shame, or pride, blaming an “other” is likely to elicit anger, and blaming impersonal circumstances can elicit sadness. Anger and pride can be harnessed to support escalation foreign policies. Guilt, shame, and sadness are likely to be used for de-escalation policies of restraint. Hence, attribution should be understood as an opportunity to manipulate the effects of hostile activity to one’s advantage.

KEYWORDS: attribution; emotion; escalation; politics; security; strategy

RESUMEN. La discusión sobre la atribución en seguridad y estudios estratégicos frecuentemente se centra en su viabilidad técnica, no en su utilidad política. Este artículo destaca los efectos emocionales de la atribución pública: sostiene que esta puede convertir los efectos de actividades hostiles en circunstancias favorables, mediante la regulación de emociones en las poblaciones domésticas. Atribuirse a sí mismo la responsabilidad puede provocar culpa, vergüenza u orgullo; culpar a “otro” genera probablemente enojo; y culpar a las circunstancias, tristeza. La ira y el orgullo se pueden aprovechar para apoyar las políticas exteriores crecientes. Es probable que la culpa, la vergüenza y la tristeza se usen para las políticas de restricción decrecientes. Por tanto, la atribución puede entenderse como una oportunidad para manipular los efectos de la actividad hostil en beneficio propio.

PALABRAS CLAVE: atribución; emoción; estrategia; política; psicología; seguridad

Section: DOSSIER • Scientific and technological research article

Received: July 8, 2019 • Accepted: September 12, 2019

CONTACT: Samuel Žilincík  samuel.zilincik@unob.cz

Introduction

Attribution is understood as the act or the process of allocating responsibility for specific activities. Issues surrounding attribution of hostile activities have recently been at the center of many discussions in security and strategic studies. In keeping with the age-old question “Who did it?”, the debates about attribution often focus on the technical feasibility of the process. This emphasis is most evident in the debates related to cyberspace whose technical specifics, combined with its relative lack of geographic constraints, pose particular challenges to anyone attempting to attribute cyberattacks successfully. Nonetheless, attribution, related to more traditional domains of combat, have also motivated similar debates. Deterrence by punishment in any domain (and across domains), against any activity, requires knowing who is responsible for the activity so that, if desired, one may retaliate. Recently, attribution has been regarded as necessary, although challenging, concerning responses to terrorism, chemical attacks, poisonings, naval disputes, air sorties, or ground to air attacks.

This focus on the practical feasibility of the process is warranted, but it often comes at the expense of examining the political utility of attribution. Knowing the identity of the perpetrator is often considered a requirement for unilateral or multilateral responses, in compliance with international law. However, as Diodotus reminds us when it comes to security issues, it is more appropriate to think about them in terms of one’s interests and desires as opposed to treating them like a court of law, where every piece of evidence ought to be given careful scrutiny (Thucydides, 1974). In other words, as almost everything in security and strategic practice, the process of attribution has no inherent value –it is only relevant in terms of its consequences. Those dealing with attribution should, therefore, always keep in mind the strategist’s most useful question, “so what?” (Gray, 2011, p. 80). Accordingly, instead of asking who did the activity at hand, a prudent statesman should ask who should be blamed for the hostile activity so that the consequences of this attribution are favorable to his desires.

One of the ways in which statesmen can influence the consequences of attribution is by making it public; this may take many forms, from speeches to international sessions to direct sanctions (Egloff & Wenger, 2019). The key here is for politicians to allocate responsibility for hostile activity publicly in an attempt to manipulate the opinions and beliefs of their population, their allies, or even their adversaries. Pointing out a specific actor as responsible is always challenging; the revelation needs to have at least some credibility in the eyes of the audience. If sufficient credibility is achieved and the attribution is made publicly, then it has the potential to influence the politics in both times of peace and war to the advantage of those who venture to attempt it.

The purpose of this paper is to explore this political utility by drawing attention to the potential emotional effects of public attribution. Emotions are understood here as a complex amalgamation of feelings and cognitive aspects, elicited by one’s appraisal

of reality. As such, emotions constitute a powerful psychological force, which influence not only human thinking but also their behavior. In the words of one famous psychologist, when it comes to cognitive processes, “Emotions are prime candidates for turning a thinking being into an actor.” (Frijda, Manstead & Bem, 2000, p. 3). Thus, when using attribution in emotion regulation, statesmen may be able to negate the psychological effects of adversary’s hostile activities or even gain support for their policies, whether escalating or otherwise.

The importance of emotions has already been recognized in various sub-fields of political science. A growing body of literature has begun to examine the importance of emotions in domestic politics and foreign policies. In domestic politics, emotions are often studied in terms of their impact on electoral behavior, political campaigns, or support for specific policies (Garry, 2014; Meier, Schmid, & Stutzer, 2019; Wang, Leviston, Hurlstone, Lawrence & Walker, 2018; Weber, 2012). In international relations, the role of emotions is studied in diplomacy, war, coercion, conflict termination and escalation, and in many other areas (Ariffin, 2016; Crawford, 2000, 2013, 2014, Hall, 2015; Markwica, 2018; McDermot, Lopez, & Hatemi, 2017; Mercer, 2010, 2013, Ross, 2014). Even in strategic studies, there are works that emphasize the need to move away from attempts to control emotions by “rational calculation” and rather to manipulate or regulate emotions in support of one’s overall strategy (Duyvesteyn, 2017; Milevski, 2019; Payne, 2015; 2018; Smith, 2014; Žilinčík, 2018).

In comparison, works on emotions transcending the boundaries between domestic and foreign politics are relatively rare. That is not to say that there are none. Richard Ned Lebow (2015) attempted to develop a holistic theory of (domestic and foreign) polities, politics, and policies that revolves around distinct emotions. Moshe Maos and James Gross (2015) wrote a thought-provoking synthesis of our current understanding of how emotions can be harnessed in support of both domestic and foreign politics. Nevertheless, the scarcity of the research connecting the two spheres may impede our understanding of some of the core mechanisms at the intersection of securitization and attribution (Rythoven, 2015). However, while securitization is limited to the intensity regulation of one specific emotion, attribution can regulate emotions qualitatively, changing one emotional state into another. The understanding of this conversion may benefit both scholars and practitioners of security.

The general argument of this paper is that public attribution can be a mechanism to convert the effects produced by hostile activities into favorable circumstances by regulating the emotions of domestic populations. Expressly, public attribution may elicit qualitatively different emotional experiences in targeted audiences, and these emotions may be subsequently harnessed for foreign political purposes. In terms of specific emotions, allocating responsibility to oneself is likely to elicit guilt, shame, or pride, blaming a specific “other” is likely to elicit anger, and blaming the impersonal circumstances is likely

to elicit sadness. Anger and pride can be harnessed to support escalation foreign policies. Guilt, shame, and sadness are likely to be used for de-escalation policies of restraint.

The paper is structured as follows. The ensuing section specifies the scope, methods, data, and the limitations of this research. The section after that examines the phenomenon of attribution and discusses recent trends in the research on the topic. Subsequently, emotions are briefly introduced from the perspective of the appraisal theory of emotions. The observations derived from this theory are then used to explain the causes of different emotional states and the consequences they may have on human decision-making. The following section discusses the real-world obstacles to the deliberate elicitation of emotions through attribution. The last section summarizes the findings and discusses their implications.

Scope, methods, data, and limitations

To define the scope of this paper, I will rely on the salient work on the subject of emotion regulation involving politics in general. Maos and Gross (2015) maintain that concerning political emotion regulation, the following three questions must first be answered: Whose emotions are being regulated, and by whom? Why are emotions being regulated? What strategy is being used to regulate emotion? This paper will first focus on the regulation of emotions in domestic populations. While public attribution can at times also influence populations of allies or adversaries, it is the domestic population that matters the most to the statesmen employing the attribution. Emotional regulation can be performed by individual statesmen, political parties, or even non-partisan organizations; all of these can be labeled “emotional entrepreneurs” (a label coined by Maos and Gross).

Second, this study considers emotions that are elicited both for their own sake and for instrumental purposes. In the first case, attribution is employed for negative purposes; in the second, it is employed for positive purposes. Negative purposes may include anything from eliciting emotions for their own sake to minimizing, negating, or reversing the emotional effect of hostile activity. Positive purposes represent harnessing the elicited emotions for particular foreign policies, escalating, or de-escalating. The distinction between the two is not always clear-cut. Even if the regulation was first conducted to achieve negative purposes, the emotions elicited could subsequently be harnessed to pursue positive ones. Sometimes, those in pursuit of a positive purpose only ever achieve a negative one. However, the difference between the two purposes is still meaningful because it draws attention to the intentions of emotional entrepreneurs. As a result, the act of attribution can subsequently be evaluated as successful or not.

Thirdly, this research focuses on the “strategy” of public attribution concerning the regulation of emotions. Maos and Gross (2015, p. 12) list five different processes by which emotions may be regulated; they are situation selection, situation modification, attentional deployment, cognitive change, and response modulation. In line with the ap-

praisal theory of emotions, this research focuses on the processes associated with cognitive change. The emphasis is placed on the process of reappraisal, which can be defined as “an attempt to change the meaning of an event in order to influence emotional responses to an event.” (Maos & Gross, 2015, p. 14) The reappraisal, in this case, means the change in the allocation of responsibility for specific hostile activities. The focus is also placed on the qualitative regulation of emotions as opposed to the quantitative, which means that the interest is primarily on the changes in the type of emotions instead of the changes in the intensity (arousal) within specific emotions.

In terms of methods and data, this research uses the theoretical analysis of the phenomenon, drawing on several sources. The analysis is divided into two phases. In the first phase, I draw upon the science of emotion to explain how subtle changes in the adjudication of attribution to different entities may elicit different emotional states in the domestic population and how these emotional states can be harnessed for foreign policy. The data for this section is gathered from theoretical treatments of emotion, laboratory experiments, and field surveys. Illustrative cases from various periods of military history complement the previous. The second phase explores the real-world complications related to emotion elicitation. This section draws on further insights from emotional psychology and biases, as well as some classical works in strategic studies.

Because this paper focuses on the emotions of entire populations, it is necessary to discuss the issue of collective emotions briefly. Though individuals always experience emotions, these can also spread in broader collectives. How this happens depends on the size of the collective. In smaller groups, emotion spreads through contagion, that is, via face to face interactions with other group members. In larger collectives, the feelings of emotion depend on each member’s identification with the shared identity. In other words, those identifying strongly with the collective identity are likely to experience similar emotions when something important happens to that collective, even if these particular individuals are not directly affected by the event (Kilduff & Menges, 2015; Kim, 2015; Kleef & Fischer, 2016; Mercer, 2014; Scheve & Ismer, 2013).

There are significant limitations to this project, related to both the underpinning arguments and data. It must be considered that the arguments presented in this work rely on observations deduced from emotion theories as well as findings from various experiments. Relying on these carefully selected insights to construct theoretical arguments about the real-world is always bound to reductionism. Therefore, the arguments presented in this work are probabilistic because there are plenty of intervening variables at play in the everyday decision-making process. For a much more in-depth discussion on the obstacles of applying insights from psychological experiments to the study of politics, see Jervis (2017) and Markwica (2018). The penultimate section of this article will address some real-world complications in more detail.

Moreover, the psychological data used in this paper should not be considered unquestionable truths. There are two reasons for this. First, the study of emotions is in

constant and rapid progress. New insights are likely to replace the older ones; this may impact the shelf-life of the findings of this research. Some of the data may rapidly be rendered obsolete. Second, the field of psychology in general faces several challenges, such as the replication crisis or the conflation of correlation and causation as they relate to the interpretation of results (Bleske-Rechek, Gunseor, & Maly 2018; Yong, 2018). These issues must be acknowledged to encourage a healthy skepticism toward the reliability of the data. To counter these limitations, I have relied on the triangulation of theoretical and empirical sources; from the latter category, on the results already replicated. There is, of course, and fortunately, no countermeasure against the replacement of the older findings by the new ones.

Trends in scholarship on attributions

Attribution is often considered as a requirement for the success of some coercive activities. For example, for deterrence by punishment, it is necessary to know who should be blamed; the defender must know in which direction to motion his credibility to tailor his potential punitive response to the characteristics of the specific actor (Rid & Buchanan, 2015; Wilner, 2019). It is also important because the very ability to adjudicate attribution successfully conveys credibility in the eyes of potential rivals and the broader international community. Ultimately, an injurious response against the wrong target may have adverse consequences, such as opening a new front of hostilities (Libicki, 2009).

Many scholars and practitioners of security have argued that attribution is a weighty problem, especially concerning the cyber domain. This domain is the most challenging and deserves increased attention. Most of its issues are directly related to the domain's nature or the instruments through which cyber power is exercised. The difficulties include the absence of physical traces, the multiplicity of actors, the lack of geographical boundaries, the transformation of code in time, the duration of cyber-attacks, and the requirement of the specific expertise, among others (Fitton, 2016, pp. 116-118; Kello, 2017, pp. 198-200; Libicki, 2009, p. 43; Iasiello, 2014, pp. 58-59; Nye 2017, pp. 49-52; Rid & Buchanan, 2015, p. 5; Trujillo, 2014, pp. 47-49).

Numerous suggestions have emerged in response to the challenge of solving the technical conundrum of attribution. For example, Caltagirone and his colleagues (2013) produced the "Diamond" model, drawing on insights from intelligence analysis. By focusing on four interconnected variables –adversary, infrastructure, capability, and victim– this model provides a well-designed way to analyze the intrusion in any domain of competition. Others have recommended the analysis of the specific characteristics of many adversaries. For example, Valeriano and Maness (2015, p. 10) have argued that one should focus on understanding the desires that motivate the attacks. The recognition of the potentially interested party in a hostile activity can help narrow the pool of suspects considerably. Conversely, Bishop and Goldman (2003) have contended for the careful examination of the

potential adversaries' capabilities. The U.S. Office of the Director of National Intelligence (2018) has published its guide to cyber attribution, synthetizing the most salient insights into a coherent framework for thinking and action regarding attribution.

As a result of the triangulation of the methods mentioned above, the actual prospects of attribution are not so grim. Rid and Buchanan (2015, p. 6) have stated that the practice of attributing cyber-attacks "is already more nuanced, more common, and more political than the literature has acknowledged so far." The cases of successful attribution in the last few years are plentiful, and they continue to grow. Some examples include sophisticated attacks such as NotPetya, WannaCry, or Russia's hacking of the Democratic National Committee (Greenberg, 2018; Modderkolk, 2018; Nakashima & Rucker, 2017). Another enabler to solve the technicalities of attribution is the attacker's indifference to being identified. For example, Prince (2018) claims that Russians seem to be less concerned with being identified than in the past and that sometimes they prefer the West to adjudicate attribution. Thus, the challenges of attribution do not seem unsurmountable.

On the other hand, works exploring the political utility of attribution are less common, although some interesting insights have recently emerged. One argumentative strain emphasizes that even if attribution is technically successful, it may not be politically beneficial to do it publicly. In line with this, Hare (2012, p. 138) argues that the technical and legal feasibility of attribution is a separate issue from its political utility. For example, when it comes to coercion, attribution is not a requirement for action. Similarly, Edwards et al. (2017) argue that several considerations drive statesmen's calculation of whether to attribute the hostile activity publicly or not. One is that the polity may not be able to respond using punishment, electing to abstain from public attribution to avoid damaging its credibility. Another reason is the attribution adjudicating polity's uncertainty about the perpetrator's specific characteristics, whether he acts by his own will or on behalf of another polity. The defending state may thus choose to deliberately abstain from public attribution to avoid scaring off the wrong target. Abstaining from public attribution may also be beneficial if the effects of hostile activities are not particularly severe. This echoes the sentiment of Rid and Buchanan (2015, p. 7), who argue that when deciding about attribution, "what is at stake politically" should always be considered.

Recently, several distinct but converging approaches have emerged on how to tackle the political factors of attribution. For example, Egloff and Wenger (2019) emphasize that the character differences in the challenges and opportunities of public attribution tend to vary according to the state's political system. Democratic systems, in general, tend to be more transparent and present more credible evidence, while more autocratic governments have relatively free hands. The authors also consider the trends and attempts at the institutionalization of attribution. Similarly, the research of Grindal and his colleagues (2018), consider the political challenges and opportunities of institutionalizing attribution in domestic politics and the transnational domain. Hare (2012), on the other hand, emphasizes the relationship between attribution and the inconsistency of

political objectives and particular policy options. Schulzke (2018) offers an interesting take on the political consequences of attribution; he explores the role of attributional uncertainty and the effects it may have on domestic populations. Specifically, the author argues that the inherent uncertainty in the attribution of cyber-attacks allows elites to exploit the situation by creating favorable narratives. These frames developed by politicians may be damaging in the long-term because they do not easily allow new and contradictory evidence. This, in turn, may give rise to prevalent conspiracy theories and the undermining of democratic accountability.

A brief survey of recent research shows that attribution in current security practices is challenging but feasible, warranting scholars in security issues to move from the examination of its technical feasibility to its political utility. Emerging works on political factors emphasize the need to understand the political utility of attribution and raise questions about the institutionalization of the actors doing the attribution, and even examine some possible effects of attributions on domestic populations. An unexplored realm is how the effects of hostile activity can be translated into favorable domestic circumstances.

The issue of how to convert hostile activity into domestic benefits is of paramount importance. Attribution has been used for political purposes throughout military history. Stalin and Hitler, for instance, attributed the hostile activity of their forces to the Fins and Poles, respectively; this was supposed to legitimize their subsequent offensives against the offenders, in the eyes of the international community and the domestic populations who were eager to defend their countries. This remains relevant in contemporary security practices, whether attribution is used to legitimize one's case for war or to increase support at home. Vladimir Putin, for example, has played with public attribution repeatedly in recent years. The more famous instances include the denial of his country's involvement in the annexation of Crimea, the blame game that followed the shooting down of a Malaysian airplane over Ukraine, or the attempted assassination of Sergei Skripal. Thus, understanding the potential of public attribution to gain support at home is of utmost importance.

Despite the apparent political utility of public attribution in the past and the contemporary security practice, its emotional logic has been under-explored in strategic studies. This disregard is curious when we consider that some of the more popular strategies, such as terrorism and deterrence, have, in essence, the goal of eliciting particular emotions. Thus, if it is possible to manipulate public emotions using attribution craftily, then, it may be possible to negate the adversary's endeavor. This echoes Sun Tzu's (1993, p. 79) advice to seek to frustrate the enemy's strategy instead of engaging him in direct combat. Attribution may thus be a political instrument to counter the enemy's plans. In the following lines, we will explore how one may achieve this by purposefully regulating emotions.

Emotions: their elicitation and effects

Much of human lives revolve around emotions. The desires we hold, the preferences we set, the decisions we make, and the actions we make are all closely related to the influence of emotions on our thinking and behavior (Frijda & Mesquita, 2000; Stein & Trabasso, 1992; Angie, Connelly, Waples, & Kligyte, 2011; Rolls, 2014; Lerner et al, 2015). It has for a long time been assumed or explicitly stated that emotions are incompatible with rational calculation; that reason and emotions are at odds with each other. However, a rapidly growing body of research on emotions has begun to question this assumption. Indeed, what this emerging research indicates is that emotions and reason are inseparable, or at the very least, mutually interdependent (Damasio, 2006; Hacker, 2018; Storberck & Clore, 2007).

There are several theories on what emotions are, how they came to existence, and what are their effects. These theories range from basic emotions, which emphasize the biological nature of the phenomenon, to constructivist theories, which emphasize the active role of individuals in the elicitation and experience of emotions (Moors, 2013). This research employs the appraisal theory of emotions, which lies somewhere in between. Emotions are hence understood as “complex, organized subsystems consisting of thoughts, beliefs, motives, meanings, subjective bodily experiences, and physiological states.” (Lazarus, 2001, p. 67). This theory’s central claim is that emotions do not emerge as a result of the direct impact of an external phenomenon on an individual. Instead, emotions emerge as a consequence of one’s subjective interpretation (appraisal) of the phenomenon (Roseman & Smith, 2001, p. 3). The process of appraisal is based on several dimensions through which the individual constructs the meaning of a situation as it relates to his or her concerns (Moors et al., 2013, p. 120). Specific combinations of these appraisal dimensions can produce a broad spectrum of different emotions (Moors et al., 2013, p. 122). Even more interestingly, the combination of dimensions that gives rise to emotion in the first place constitutes the crucial components of emotional experience (Scherer, 2001a, p. 107). In other words, the specific appraisal causes the emotion to emerge and influences the cognitive processes in the same direction (Lerner & Keltner, 2000).

These qualities make the appraisal theory similar to the constructionist in that it can explain a vast range of emotional experience. However, where psychological constructionism argues for an endless variety of emotional episodes, appraisal theorists regard some regular patterns that may help us to differentiate between the different emotional instances (Scherer, 2001a, p. 108). Furthermore, these patterns of appraisal are more or less stable across individuals and cultures (Roseman & Smith, 2001, p. 18), which makes this theory similar to the theory of the basic emotions because it includes an element of universalism. Of course, there is some criticism against various aspects of the theory (Roseman & Smith, 2001, pp. 10-18); however, its proponents offer some persuasive rebuttals (Moors, 2013).

The basic building blocks of emotions are appraisal dimensions. It is through them that an individual derives meaning from the situation. Some disagreements exist among the appraisal theorists regarding the best way to conceptualize the dimensions (Schorr, 2001). Nonetheless, the overlaps between diverse lists of dimensions are so overwhelming that the disagreements are mostly about fine-tuning the specific models and not about the core methodological differences (Scherer, 2001b). This research uses the appraisal dimensions that have been empirically tested and have theoretical coherence, and, at the same time, tightly fit the potential perception of denial activity. Several decades ago, Smith and Ellsworth (1985) identified the relevant dimensions; their dimensions have successfully undergone many empirical tests. The lists include dimensions such as pleasantness, attention, control, certainty, objective attainability, legitimacy, responsibility, and anticipated effort.

The most relevant dimension for this research is responsibility allocation. One can allocate responsibility to oneself, another person or group, or some impersonal circumstances. This research will focus on five emotions, distinguishable by their strong dependence on the allocation of responsibility. These emotions are guilt, shame, pride, anger, and sadness. The differences between these elicited emotions are determined by other dimensions, such as objective attainability, or legitimacy. The specific combination of each emotion's particular dimensions is seized by the concept of the appraisal theme, which conveys the full meaning of the emotion.

Attribution to oneself

Attributing hostile activity to oneself is likely to elicit emotions such as guilt, shame, or pride (Scherer, 2001, p. 115). The difference between guilt and shame, on the one side, and pride on the other, is whether the resulting feeling is pleasant or unpleasant. The difference between guilt and shame seems to depend on whether one is more concerned about the wrongfulness of the activity or about one's identity being tainted by the activity (Tangney, Stuewig, Hafez, 2011, p. 707). The appraisal theme of guilt is one's transgression of a moral imperative (Lazarus, 2001, p. 64). Guilty people tend to be motivated by the desire to remedy the bad deed committed; they are inclined to pursue "social reproach" to repair the impaired relationship with others (Tangney et al., 2011, p. 707). The appraisal theme of shame is a failure to live up to one's (or society's) expectations (Lazarus, 2001, p. 64). Shame is likely to motivate one to attempt "social escape" to avoid further confrontation with others (Tangney, 2011, p. 707). The appraisal theme of pride is an "enhancement of one's ego by taking credit for some achievement" (Lazarus, 2001, p. 64). Pride is likely to motivate one to be confident and assertive (Roseman, 2001, p. 71). From these characteristics, it is possible to infer that guilt and shame are more likely to be harnessed for de-escalating foreign policies, while pride can be harnessed for the escalating.

Attribution to one's polity has been a common feature of security politics, whether intended for negative or positive purposes. One of the more famous examples is American

participation and hostile activities in the Vietnam War. Various emotional entrepreneurs, mostly proponents of the anti-war movement, made regular public attributions about the war and some controversial instances, such as the Tet offensive or the My Lai massacre. These attributions resonated in the American society, often eliciting both shame and guilt, the two emotions that converged into the so-called Vietnam Syndrome (Mendible, 2016, p. 191). The American public felt ashamed of losing the war against a supposedly weaker force; this went directly against the notion of American military exceptionalism, which was rooted in the victories of the World Wars. The very identity of the American nation was thus tainted by events that were their responsibility, intensified by the guilt of fighting not only the wrong war but also in the wrong way (Kendrick, 2006, p. 139). Thus, guilt and shame were the elicited emotions instead of pleasure or pride –the expected emotions following the many tactical victories. As is to be expected from the theoretical observations, in the years to come, the anti-war movement harnessed both emotions to support the policy of de-escalation and restraint.

There have been many attempts to elicit pride by public attribution. Some of the earliest, and perhaps crudest, examples of this can be found in Classical Greece. For example, when the Thebans and their allies defeated the Spartans at the Battle of Leuctra (371 B.C.). The Thebans made sure that they were held responsible for the activity; they publicly attributed themselves the victory by engraving a telling message on the monument to that battle, which read “Thebans are superior in war.” (Stewart, 2017, p. 374). The pride of the Thebans soon transformed into heightened confidence, which allowed Epaminondas, the ablest Theban general, to persuade his countrymen to escalate the conflict with Sparta and embark on an unprecedented aggressive campaign in Peloponnese. At other times, the pride elicited by the attribution of victories, sometimes even by the attribution of defeats, has been institutionalized as nationalism and patriotism. Both of these ideologies have been regularly exploited throughout history, most notably from the end of the 18th century onward, to pursue aggressive foreign policies or, at least, stubborn resistance against foreign invasion.

Attribution to another

The appraisal theory predicts that attributing hostile activity to another entity is likely to elicit anger (Scherer, 2001, pp. 115-116). The specific appraisal theme of anger is blaming another person for blocking access to one's objectives (Smith & Lazarus, 1993, p. 238); this brings the dimensions of object attainability, responsibility, and control to the forefront. An angry challenger perceives his desired objective blocked by the actions of the defender. At the same time, he feels that the situation could be under his control if he removes the “other.” An angry individual's choices tend to be riskier; they underestimate the possibility of adverse events and overestimate the possibility of positive events (Angie et al., 2011, p. 1395). Thus, anger seems to be a perfect emotion to be harnessed for aggressive escalation of foreign policy.

Statesmen have used public attribution adjudication to another to elicit anger countless times in security history. In Thucydides' time, Cleon, an Athenian demagogue, publicly blamed the citizens of Mytilene for a revolt to elicit anger in his domestic population (Thucydides, 1976, pp. 3, 38-40). Similarly, the American president, Franklin D. Roosevelt, publicly attributed the attack on Pearl Harbor to the Japanese (Mohan, 2016). More recently, to convert the American population's grief into anger, the George W. Bush administration attributed the 9/11 terrorist attacks to Al Qaeda (Bush, 2001). All three statesmen subsequently harnessed the elicited anger to support their aggressive and escalating foreign policies.

Evidence from experimental studies and even a representative national survey support these observations. Sadler et al. (2005), for example, found that angry individuals tend to prefer confrontational policies. Their experiment also highlights the feedback loop of the appraisal dimension through responsibility; angry individuals were shown to attribute causes to others such as terrorists. Interestingly, but in agreement with the theoretical predictions, the reverse correlation was between anger and blaming one's polity (foreign policy of the US). Similarly, Lerner et al. (2003) found that anger motivates people to seek policies rooted in the desire for punishment and, therefore, escalation. Another survey by Skitka et al. (2006), conducted three years later, explicitly provides evidence that anger increases an individual's tendency to support a specific escalation foreign policy; for instance, the expansion of the American involvement in the War on Terror beyond Afghanistan. A similar survey from the same year failed to replicate the relationship of anger to the responsibility of another; however, there may be methodological rather than empirical reasons behind this (Small, Lerner & Fischhoff, 2006, p. 295).

Attribution to impersonal circumstances

The adjudication of attribution to impersonal circumstances is likely to elicit sadness. The appraisal theme of sadness is a sense of irreversible loss (Smith & Lazarus, 1993, p. 238). This theme brings forth the dimensions of objective attainability, control, and effort. A sad challenger sees his objective as unattainable because he understands that he has no control over the unfolding of events. Furthermore, he understands that the effort he would have to exert to improve the situation is extremely high. In general, sad people tend to underestimate their capabilities (Kavanagh & Bower, 1985). Sadness is, therefore, a perfect emotion to be harnessed for de-escalation policies of restraint.

Of the three types of attribution, this one is perhaps the least common in history; however, there some recent trends have emerged that hint at how the regulation of this kind of emotion may work. One example is the recent tendency of some security practitioners to blame the wars in the Middle East on the effects of climate change; this reappraisal allocates the responsibility for the hostilities to environmental changes instead of the people. A slightly different kind of emotional regulation through attribution occurred

during the second Obama administration. The administration deliberately and repeatedly blamed “extremism” (impersonal causes) for terrorist attacks without mentioning any particular group of people (Prokop, 2016). While the primary intention was, according to the president, to not alienate Muslim populations in the Middle East, the side effect might well have elicited more sadness than anger in the general US population. In both cases, the proposed and pursued foreign policies were of restraint or non-escalation, which concurs with the experiment conducted by Sadler et al. (2005) that found that sad people have strong reservations about escalation policies. Additionally, this experiment also draws attention to the feedback loop that sad people are uncertain about the causes of hostile activity, often citing impersonal factors.

One domain of competition that provides plenty of opportunities for this kind of emotional regulation is Cyberspace, given the uncertainty and friction inherent to this domain. Hostile activities can be blamed on the accidental malfunction of some technology or the unintentional effect of particular code. Thus, what has often been described as the obstacle to the technical process of attribution in cyberspace may, in fact, constitute a significant political opportunity. In other words, if an actor launches a cyber-attack, provoking an angry and aggressive response, the defender can purposefully elicit sadness and harness support for restraint instead. Although the characteristics of the cyber domain are particularly well suited for this approach, as illustrated by the previous examples, this can be possible, to some extent, even with terrorist attacks.

Real-world complications of emotional regulation

The preceding sections have discussed attribution as a viable instrument to regulate the emotions of domestic populations. The purpose of this section is to draw attention to the several nuances and obstacles that make intentional emotional regulation much more complicated in the real world than in abstract theorizing. The complications discussed below deal with the collateral emotional effects of the public adjudication of attribution on allies and adversaries, the problem of accidental emotions, and the psychological biases of individuals and groups.

As mentioned in the introductory section, security practice is all about consequences. One problem with public attribution as emotional regulation is that its consequences are not contained to the territory of the attributing emotional entrepreneurs. Instead, the allies and adversaries, and their respective societies may also be affected. In other words, one may be able to elicit pride in one’s population, but, with the same act, elicit anger in the adversary’s; this is because the adversary may see this attribution as the allocation of responsibility to a specific, hostile polity. Thus, one can effectively increase the resolve of the adversary’s group to pursue confrontational policy, even if this was not at all the adversary’s intention. Similarly, seeking to elicit sadness in one’s society by blaming some impersonal circumstances may make allies angry if they suspect or know that it was the

wrongdoing of a specific hostile actor. Ultimately, the emotional effects of public attribution may go far beyond what statesmen seek to achieve; sometimes, it can even elicit emotions that are detrimental to their desires.

The second real-world complication of emotion regulation is the ubiquitous emotions that preexist in the populations of any polity before the public attribution happens. Of course, even in experimental conditions, people are never entirely free of emotions. However, in the real world, the intensity and quality of these emotions are bound to be more complicated. Emotional stimuli are abundant in the world –too many things that people care about– unlike a laboratory setting, where one focuses on the specific tasks at hand without much interference from the outside world.

The emotions that individuals feel before the public attribution takes place are known as “accidental” or “incidental.” These may influence the whole process of emotion regulation. They may make it easier, harder, or impossible to manipulate the emotions of the public in particular ways. For example, it has been proposed and shown that the transition from feeling scared to angry may be easier than from feeling sad, and vice versa (Schwartz & Weinberger, 1980; Winterich, Han, & Lerner, 2010; Zhan, 2015). As Zhan (2015, p. 10) suggests, this may be because anger and fear are similar in their appraisal of stimuli as threatening to one’s objective. Another explanation can be derived from recent findings in neuroscience. The areas of the brain associated with feelings of anger and fear have significant overlaps, while those of sadness and anger are minor (Wager, Kang, Johnson, Nichols, Satpute & Barrett 2015). Therefore, it is likely that a population that already feels scared because of recent or potential terrorist attacks may be easily regulated to feel anger, as opposed to if it was feeling sad. More data is required to understand the synergic and counter-acting relationships between different emotions. The bottom line is that statesmen should be aware that the presence of accidental emotions may impede their intention to elicit a specific emotion, or it may be easier than they expect.

Many stimuli may elicit accidental emotions, but one prominent phenomenon for students of security is the polities’ war or peace status. In war, violence or its potential is a constant possibility that may affect the emotional experience of the masses long before any attempts at emotional regulation take place. Both Clausewitz and Thucydides give us some hints about how this may work. Clausewitz (2000, p. 328) argues that, because of the constant potential of violence, a danger is one of the eternal components of the climate of war. As it happens, a danger is the central appraisal theme for the emotion of fear (Lazarus, 2001, p. 64). Fittingly, people in war may be more suspect to the regular feelings of fear. Thucydides (1974, p. 3, 84), on the other hand, argues that war strips people of the possibility of efficiently satisfying their basic needs. Depending on whom the people choose to blame for this sad state of affairs, they may experience accidental feelings of anger or sadness. All this means that those attempting to regulate public emotions should carefully examine how people are already feeling before embarking on their endeavor to change it.

Then, there is the issue of different psychological biases. There are too many to examine them all in appropriate detail. However, the most relevant concerning this kind of emotion elicitation is arguably the human tendency to contemplate certainties rather than uncertainties, the role of chance, and the overall complexity of the real world (Jervis, 2017, p. 310). The prevalence of this bias is probably based on that it is much easier to navigate the world without continually questioning every assumption. Consequently, it is reasonable to expect that specific emotion that relies on the appraisal of high certainties, such as anger, can be elicited easier than those associated with a fair bit of uncertainty, such as sadness (Smith & Ellsworth, 1985, pp. 821-824). Other biases related to the sensitivity to particular emotions are specific to particular segments of the population. For example, there seem to be some differences related to ideological identities of conservatives and liberals (Steiger, Reyna, Wetherell & Iverson, 2019). Some biases are therefore universal, while others are group-specific. The bottom line is that statesmen should appreciate the diversity of the population and not assume that all individuals will be similarly receptive to their attempts at emotion regulation.

Conclusions

Public attribution can regulate the emotions of domestic populations by allocating the responsibility for hostile activities to different causes. It may be done for both negative and positive purposes. In the first case, the emotion is elicited for its own sake without any particular foreign policy objective. In the second, the emotion is elicited to gain support for specific foreign policies. The allocation of responsibility for different causes may elicit qualitatively different emotions in domestic populations; its allocation to oneself is likely to elicit emotions such as guilt, shame, or pride. The allocation of responsibility to another is likely to elicit anger, and its allocation to impersonal circumstances is likely to elicit sadness. Guilt, shame, and sadness are likely to gain support for policies of restraint and de-escalation. Anger and pride are likely to gain support for policies of hostility and escalation.

Many nuances complicate the deliberate elicitation of particular emotions; this research focused on three. The first one is that emotional effects are not confined within the domestic populations; public attribution may also elicit emotions in allied or adversarial societies, and these may go against the desires of the emotional entrepreneurs. The second is that people are not emotion-free before attribution happens; the accidental emotions that they experience influence how and whether it is possible to elicit all the other emotional states. It is hard to reduce the complexity of the issue here, but it is reasonable to expect that there is a marked qualitative difference in accidental emotions in wartime and peacetime. Thirdly, there are universal and specific biases, which may make it easier for some emotions to emerge at the expense of the others.

Furthermore, the theoretical arguments derived from emotion theories, though supported by laboratory evidence and data gathered from field experiments with representa-

tive data samples, still have limitations when trying to extrapolate their insights and apply them in the real world. It is always reductionist to try to infer any psychological cause and effect relationships from the carefully administrated laboratory experiments to the real world, which is inherently more complex. Furthermore, psychology, as a field, has some problems with replication of many insights, and there is a good chance that emotion science may be afflicted by the same. Lastly, there is an abundance of psychological studies that jumble correlation with causation. All these limitations should prompt readers to proceed with the utmost care when interpreting the arguments of this paper.

The arguments presented in this paper may be beneficial to practitioners and scholars alike. Statesmen, willing to adjudicate attribution publicly may be able to elicit emotional effects that benefit their cause or, at least, negate the emotional effects that benefit the adversary. They may also be better prepared to understand the adversary's use of public attribution. One finding that deserves special mention is that the characteristics of cyberspace, which are often cited as challenges to the technical feasibility of attribution, may, in fact, be converted into political assets. For scholars in the fields of security and strategic studies, this paper can serve as yet another stimulus to focus more on political opportunities of attribution than on its technical challenges.

Disclaimer

The authors do not declare any conflict of interest concerning this article.

Funding

The authors do not declare any source of funding for this article.

About the authors

Samuel Žilinčík holds a master's degree in Security and Strategic Studies from Masaryk University in Brno, Czech Republic. In his doctoral research, he focuses on strategic theory and strategic history. He has authored and co-authored several scientific papers examining the character and nature of contemporary warfare.

<https://orcid.org/0000-0001-5253-3296> - Contacto: samuel.zilincik@unob.cz

References

- Angie, A., Connelly, S., Waples, E., & Kligyte, V. (2011). The influence of discrete emotions on judgement and decision-making: A meta-analytic review. *Cognition & Emotion*, 25(8), 1393-1422. <https://doi.org/10.1080/02699931.2010.55075>
- Ariffin, Y. (2016). How emotions can explain outcomes in international relations. In Y. Ariffin, J. Coicaud, & V. Popovski (Eds.), *Emotions in international politics* (pp. 1-16). New York, NY: Cambridge University Press.

- Bleske-Rechek, A., Gunseor, M. M., & Maly, J. R. (2018). Does the language fit the evidence? Unwarranted causal language in psychological scientists' scholarly work. *The Behavior Therapist*, 41(8), 341-352.
- Bishop, M., & Goldman, E. (2003). The strategy and tactics of information warfare. *Contemporary Security Policy*, 24(1), 113-139. <https://doi.org/10.1080/13523260312331271839>
- Bush, G. (2011). *Address to Joint Session of Congress Following 9/11 Attacks*. Retrieved from <https://americanrhetoric.com/speeches/gwbush911jointssessionspeech.htm>
- Caltagirone, S., Pendergast, A., & Betz, C. (2013). *The diamond model of intrusion analysis*. Hanover, Germany: Center for Cyber Intelligence Analysis and Threat.
- Clausewitz, C. von. (2000). On war. In R. Peters (Ed.), *The book of war: Sun-Tzu's "The Art of War" & Karl von Clausewitz's "On War"* (pp. 265-958). New York, NY: The Modern Library.
- Clore, G. L., & Ortony, A. (2008). Appraisal theories: How cognition shapes affect into emotion. In M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, & L. F. Barrett (Eds.), *Handbook of emotions* (3rd Ed., pp. 628-642). New York, NY: Guilford Press.
- Crawford, N. C. (2000). The passion of world politics: Propositions on emotion and emotional relationships. *International Security*, 24(4), 116-156.
- Crawford, N. C. (2013). Emotions and international security: Cave! Hic Libido. *Critical Studies on Security*, 1(1), 121-123. <https://doi.org/10.1080/21624887.2013.790218>
- Crawford, N. C. (2014). Institutionalizing passion in world politics: fear and empathy. *International Theory*, 6(3), 535-55. [10.1017/S1752971914000256](https://doi.org/10.1017/S1752971914000256)
- Damasio, A. (2006). *Descartes' error: Emotion, reason and the human brain*. London, England: Vintage.
- Duyvesteyn, I. (2017). Global strategic studies: A manifesto. *Journal of Strategic Studies*, 40(3), 347-357. <https://doi.org/10.1080/01402390.2016.1269228>
- Edwards, B., Furnas, A., Forrest, S., & Axelrod, R. (2017). Strategic aspects of cyberattack, attribution, and blame. *Proceeding of the National Academy of Sciences of the USA*, 114(11), 2825-2830. <https://doi.org/10.1073/pnas.1700442114>
- Egloff, F. J., & Wenger, A. (2019). Public attribution of cyber incidents. In F. Merz (Ed.), *CSS Analyses in Security Policy*. Zurich, Switzerland: Center for Security Studies.
- Fitton, O. (2016). Cyber operations and gray zones: Challenges for NATO. *Connections: The Quarterly Journal*, 15(2), 109-119.
- Frijda, N. H., Manstead, A. S. R., & Bem, S. (2000). The influence of emotions on beliefs. In N. H. Frijda, A. S. R. Manstead, & S. Bem (Eds.), *Emotions and beliefs: How feelings influence thoughts* (pp. 1-9). Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Frijda, N. H., & Mesquita, B. (2000). Beliefs through emotions. In N. H. Frijda, A. S. R. Manstead, & S. Bem (Eds.), *Emotions and belief: How feelings influence thoughts* (pp. 45-64). Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Garry, J. (2014). Emotions and voting in EU referendums. *European Union Politics*, 15(2), 235-254. <https://doi.org/10.1177/1465116513514780>
- Gray, C. (2011). *The strategy bridge: Theory for practice*. Oxford, England: Oxford University Press.
- Greenberg, A. (2018, August 22). The untold story of NotPetya, the most devastating cyberattack in history. *WIRED*. Retrieved from <https://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-crashed-the-world/>
- Grindal, K., Kuerbis, B., Badiei, F., & Mueller, M. (2018, August). Is it time to institutionalize cyber-attribution? *Internet Governance Project White Paper*. Retrieved from <https://www.internetgovernance.org/research/is-it-time-to-institutionalize-cyber-attribution/>

- Hacker, P. (2018). *Passions: The study of human nature*. Oxford, England: John Wiley & Sons Ltd.
- Hare, F. (2012). The significance of attribution to cyberspace coercion: A political perspective. In C. Czosseck, R. Ottis, & K. Ziolkowski (Eds.), *4th International Conference on Cyber Conflict* (pp. 125-139). Tallinn, Estonia: NATO CCD COE Publications.
- Hall, T. (2015). *Emotional diplomacy*. New York, NY: Cornell University Press.
- Jervis, R. (2017). *Perception and misperception in international relations*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Kavanagh, D. J., & Bower, G. H. (1985). Mood and self-efficacy: Impact of joy and sadness on perceived capabilities. *Cognitive Therapy and Research*, 9(5), 507-525.
- Kello, L. (2017). *The virtual weapon and international order* (pp. 198-200). New Haven, The United States of America: Yale University Press.
- Kendrick, O. (2006). The My Lai Massacre in American history and memory. Manchester, England: Manchester University Press.
- Kilduff, M., & Menges, J. (2015). Group emotions: Cutting the Gordian knots concerning terms, levels-of-analysis, and processes. *The Academy of Management Annals*, 9(1), 1- 117. <https://doi.org/10.1080/19416520.2015.1033148>.
- Kim, J. (2015). The effects of collective anger and fear on policy support in response to terrorist attacks. *The Journal of Social Psychology*, 156(5), 455-468. <https://doi.org/10.1080/00224545.2015.1119669>
- Kleef, G., & Fischer, A. (2016). Emotional collectives: How groups shape emotions and emotions shape groups. *Cognition and Emotion*, 30(1), 3-19. <https://doi.org/10.1080/02699931.2015.1081349>
- Lazarus, R. S. (2001). Relational meaning and discrete emotions. In K. R. Scherer, A. Schorr, & T. Johnstone (Eds.), *Appraisal process in emotion: Theory, methods, research* (pp. 37-67). Oxford, England: Oxford University Press.
- Lebow, N. R. (2008). *A cultural theory of international relations*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Lerner, J., Li, Y., Valdesolo, P., & Kassam, K. (2015). Emotion and decision making. *Annual Review of Psychology*, 66(1), 799-823. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115043>
- Lerner, J. S., Gonzalez, R. M., Small, D. A., & Fischhoff, B. (2003). Emotion and perceived risks of terrorism: A national field experiment. *Psychological Science*, 14(2), 144-150. <http://www.jstor.org/stable/40063785>
- Lerner, J., & Keltner, D. (2000). Beyond valence: Toward a model of emotion-specific influences on judgement and choice. *Cognition and Emotion*, 14(4), 473-493. <https://doi.org/10.1080/026999300402763>
- Libicki, M. C. (2009) *Cyberdeterrence and cyberwar*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Iasiello, E. (2014). Is cyber deterrence an illusory course of action. *Journal of Strategic Security*, 7(1), 54-67. <https://doi.org/10.5038/1944-0472.7.1.5>
- Markwica, R. (2018). *Emotional choices: How the logic of affect shapes coercive diplomacy*. Oxford, England: Oxford University Press.
- Maos, M., & Gross, J. J. (2015). *Emotion regulation: Implications for political science and international relations*. Paper prepared for presentation at the workshop on The Politics of Non-Proportionate Policy Response. Warsaw, Poland: ECPR Joint Sessions of Workshops.
- McDermott, R., Lopez, A. C., & Hatemi, P. K. (2017). Blunt not the heart, enrage it: The psychology of revenge and deterrence. *Psychology of War*, 1(1), 68-88.
- Meier, A. N., Schmid, L., & Stutzer, A. (2019). Rain, emotions and voting for the status quo. *European Economic Review*, 119(2), 434-451. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2019.07.014>
- Mendible, M. (2016). American shame: Stigma and the body politic. Bloomington, IN: Indiana University Press.
- Mercer, J. (2010). Emotional beliefs. *International Organization*, 64(1), 1-31. <https://doi.org/10.1017/S002081830990221>

- Mercer, J. (2013). Emotion and strategy in the Korean War. *International Organization*, 67(2), 221-252. <https://doi.org/10.1017/S0020818313000015>
- Mercer, J. (2014). Feeling like a state: Social emotion and identity. *International Theory*, 6(3), 515-535. <https://doi.org/10.1017/S1752971914000244>
- Milevski, L. (2019). *Battle and its emotive effects in war termination*. Conference Paper. Oxford, England: Changing Character of War Conference.
- Modderkolk, H. (2018, January 25). Dutch agencies provide crucial intel about Russia's interference in US-elections. *de Volkskrant*. Retrieved from <https://www.volkskrant.nl/wetenschap/dutch-agencies-provide-crucial-intel-about-russia-s-interference-in-us-elections-b4f8111b/?referer=https%3A%2Fwww.google.com%2F>
- Mohan, B. (2016). A demonstration of the discourse dissection model (DDM) with an analysis of FD Roosevelt's "Pearl Harbour address to the nation". *Journal of Theoretical Linguistics*, 13(1), 62-86.
- Moors, A. (2013). On the causal role of appraisal in emotion. *Emotion Review*, 5(2), 132-140. <https://doi.org/10.1177/1754073912463601>
- Moors, A., Ellsworth, P., Scherer, K. R., & Frijda, N. H. (2013). Appraisal theories of emotion: State of the art and future development. *Emotion Review*, 5(2), 119-124. <https://doi.org/10.1177/1754073912468165>
- Nakashima, E., & Rucker, P. (2017, December 19). U.S. declares North Korea carried out massive wannacry cyberattack. *Washington Post*. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-set-to-declare-north-korea-carried-out-massive-wannacry-cyber-attack/2017/12/18/509deb1c-e446-11e7-a65d-1ac0fd7f097e_story.html
- Nye, J. (2017). Deterrence and dissuasion in cyberspace. *International Security*, 41(3), 44-71.
- Office of the Director of National Intelligence. (2018, September). *A guide to cyber attribution*. Retrieved from https://www.dni.gov/files/CTIIC/documents/ODNI_A_Guide_to_Cyber_Attribution.pdf
- Payne, K. (2018). *Strategy, evolution, and war*. Washington: Georgetown University Press.
- Payne, K. (2015). *The psychology of strategy: Exploring rationality in the Vietnam War*. Oxford, England: Oxford University Press.
- Prince, C. (2018, October 8). Countering Russian cyber operations. *RUSI*. Retrieved from <https://rusi.org/commentary/countering-russian-cyber-operations>
- Prokop, A. (2016, Jul 18). Why Republicans want Obama to denounce "radical Islam" and why he won't do it. *Vox*. Retrieved from <https://www.vox.com/2015/11/16/9745334/obama-radical-islam-isis>
- Rid, T., & Buchanan, B. (2015). Attributing cyber attacks. *The Journal of Strategic Studies*, 38(1-2), 4-37.
- Rolls, E. (2014). *Emotion and decision-making explained*. Oxford, England: Oxford University Press.
- Roseman, I. J. (2001). A model of appraisal in the emotion system: Integrating theory, research, and applications. In K. R. Scherer, A. Schorr, & T. Johnstone (Eds.), *Appraisal process in emotion: Theory, methods, research*. Oxford, England: Oxford University.
- Roseman, I. J., & Smith, C. A. (2001). Appraisal theory. In K. R. Scherer, A. Schorr, & T. Johnstone (Eds.), *Appraisal process in emotion: Theory, methods, research* (pp. 1-20). Oxford, England: Oxford University Press.
- Ross, A. A. G. (2014). *Mixed emotions: Beyond fear and hatred in international conflict*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Rythovn, E. V. (2015). Learning to feel, learning to fear? Emotions, imaginaries, and limits in the politics of securitization. *Security Dialogue*, 46(5), 458-475. <https://doi.org/10.1177/0967010615574766>
- Sadler, M. S., Lineberger, M., Correll, J., & Park, B. (2005). Emotions, attributions, and policy endorsement in response to the September 11th terrorist attacks. *Basic and Applied Social Psychology*, 27(3), 249-258.
- Scherer, K. (2001a). Appraisal considered as a process of multilevel sequential checking. In K. R. Scherer, A. Schorr, & T. Johnstone (Eds.), *Appraisal process in emotion: Theory, methods, research*. Oxford, England: Oxford University Press.

- Scherer, K. (2001b). The nature and the study of appraisal: A review of the issues. In K. R. Scherer, A. Schorr, & T. Johnstone (Eds.), *Appraisal process in emotion: Theory, methods, research* (pp. 369-390). Oxford, England: Oxford University Press.
- Scheve, Ch., & Ismer, S. (2013). Towards a theory of collective emotions. *Emotion Review*, 5(4), 406-413. <https://doi.10.1177/1754073913484170>
- Schorr, A. (2001). Appraisal: The evolution of an idea. In K. R. Scherer, A. Schorr, & T. Johnstone (Eds.), *Appraisal process in emotion: Theory, methods, research* (pp. 20-34). Oxford, England: Oxford University Press.
- Schulzke, M. (2018). The politics of attributing blame for cyberattacks and the costs of uncertainty. *Perspectives on Politics*, 16(4), 954-968. <https://doi.org/10.1017/S153759271800110X>
- Schwartz, G. E., & Weinberger, D. A. (1980). Patterns of emotional responses to affective situations: Relations among happiness, sadness, anger, fear, depression, and anxiety. *Motivation and Emotion*, 4(2), 148-170. <https://doi.10.1007/BF00995197>
- Skitka, L. J., Bauman, Ch. W., Aramovich, N. P., & Morgan, S. G. (2006). Confrontational and preventative policy responses to terrorism: Anger wants a fight and fear wants "Them" to go away. *Basic and Applied Social Psychology*, 28(4), 375-384.
- Small, D. A., Lerner, J. S., & Fischhoff, B. (2006). Emotion priming and attributions for terrorism: Americans' reactions in a national field experiment. *Political Psychology*, 27(2), 289-298.
- Smith, M. L. R. (2014). Politics and passion: The neglected mainspring of war, *Infinity Journal*, 4(2), 32-36.
- Smith, C. A., & Ellsworth, P. C. (1985). Patterns of cognitive appraisal in emotion. *Journal of Personality and Social Psychology*, 48(4), 813-838. <https://doi.10.1037/0022-3514.48.4.813>
- Smith, C. A., & Lazarus, R. S. (1993). Appraisal components, core relational themes, and the emotions. *Emotion and Cognition*, 7(3-4), 233-269.
- Steiger, R. L., Reyna, Ch., Wetherell, G., & Iverson, G. (2019). Contempt of Congress: Do Liberals and Conservatives harbor equivalent negative emotional biases towards ideologically congruent vs. incongruent politicians at the level of individual emotions? *Journal of Social and Political Psychology*, 7(1), 100-123. <https://doi.10.5964/jspp.v7i1, 822>
- Stein, N., & Trabasso, T. (1992). The organisation of emotional experience: Creating links among emotion, thinking, language, and intentional action. *Cognition & Emotion*, 6(4), 225-244. <https://doi.10.1080/02699939208411070>
- Stewart, D. (2017). From Leuktra to Nabis, 371-192. In Powel, A. (Ed.), *A companion to Sparta* (pp. 374-402). Hoboken, N. J.: John Wiley and Sons Ltd.
- Storbeck, J., & Clore, G. (2007). On the interdependence of cognition and emotion. *Cognition and Emotion*, 21(6), 1212-1237. <https://doi.10.1080/02699930701438020>
- Sun Tzu. (1993). *The art of war* (R. T. Ames, Trans.). New York, NY: The Random House Publishing Group.
- Tangney, J., Stuewig, J., & Hafez, L. (2011). Shame, guilt, and remorse: implications for offender populations. *Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 22(5), 706-723. <https://doi.10.1080/14789949.2011.617541>
- Thucydides. (1974). *History of the Peloponnesian war* (R. Warner, Trans.). New York, NY: Penguin Group.
- Trujillo, C. (2014). The limits of cyberspace deterrence. *Joint-Force Quarterly*, 75(3), 43-52.
- Valeriano, B., & Maness, R. (2015). *Cyber war versus cyber realities*. Oxford, England: Oxford University Press.
- Wager, T. D., Kang, J., Johnson, T. D., Nichols, T. E., Satpute, A. B., & Barrett, L. F. (2015). A Bayesian model of category-specific emotional brain responses. *PLoS Computational Biology*, 11(4), 1-27. <https://doi.10.1371/journal.pcbi.1004066>
- Wang, S., Leviston, Z., Hurlstone, M., Lawrence, C., & Walker, I. (2018). Emotions predict policy support: Why it matters how people feel about climate change. *Global Environmental Change*, 50(1), 25-40. <https://doi.10.1016/j.gloenvcha.2018.03.002>

- Weber, Ch. (2012). Emotions, campaigns, and political participation. *Political Research Quarterly*, 66(2), 414-428. <https://doi.org/10.1177/1065912912449697>
- Wilner, A. (2019). US cyber deterrence: Practice guiding theory. *Journal of Strategic Studies*, 42(1), 1-36.
- Winterich, K., Han, S., & Lerner, J. S. (2010). Now that I'm sad, it's hard to be mad: The role of cognitive appraisals in emotional blunting. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 36(11), 1467-1483. <https://doi.org/10.1177/0146167210384710>
- Yong, E. (2018, November 19). Psychology's replication crisis is running out of excuses. *The Atlantic*. Retrieved from <https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/11/psychologys-replication-crisis-really/576223/>
- Zhan, J., Ren, J., Fan, J., & Luo, J. (2015). Distinctive effects of fear and sadness induction on anger and aggressive behavior. *Frontiers in Psychology*, 6(725), 1-12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00725>
- Zilincik, S. (2018, September 25). Strategy and the instrumental role of emotions. *Strategic Bridge*. Retrieved from <https://thestrategybridge.org/the-bridge/2018/9/25/strategy-and-the-instrumental-role-of-emotions>



Revista Científica General José María Córdova

(Colombian Journal of Military and Strategic Studies)

Bogotá D.C., Colombia

Volume 17, Number 28, October-December 2019, pp. 891-922

<http://dx.doi.org/10.21830/19006586.522>

Insisting on victory: Victory versus success in limited and asymmetric wars

Insistiendo en la victoria: Victoria versus éxito en guerras limitadas y asimétricas

Mustafa Coşar Ünal & Petra Cafnik Uludağ

Bilkent University, Department of Political Science and Public Administration, Turkey

ABSTRACT. In a COIN campaign, using the term *victory*, a military defeat of the enemy –in its classical definition– is highly problematic. A review of the Turkey-PKK conflict reveals that after Turkey's pursuit of a unilateral military victory, the PKK pursued a broader socio-political campaign by relying on asymmetric warfare and indirectness in combat. Military victory did not successfully end the conflict; it only changed its nature. Therefore, we suggest that *success* is a better concept to assess states' counter-insurgency campaigns. It focuses on political solutions and shifts perception from one-sided victory to a favorable outcome for all parties involved. Lastly, referring to the completed phases as a success offers better accuracy because the outcome in COIN is not merely a victory or a defeat.

KEYWORDS: asymmetric warfare; insurgency; intra-state conflict; military defeat; success; victory

RESUMEN. El uso del término *victoria* para referirse a una derrota militar del enemigo (según su significado clásico) en una campaña COIN es problemático. Una revisión del conflicto Turquía-PKK revela que tras la búsqueda de una victoria militar unilateral por Turquía, el PKK llevó a cabo una campaña sociopolítica más amplia, basándose en una guerra asimétrica e indirecta. La victoria militar no concluyó el conflicto exitosamente, solo cambió su naturaleza. Por lo tanto, sugerimos que *éxito* es un mejor concepto para evaluar las campañas de contrainsurgencia. Este se enfoca en soluciones políticas y cambia la percepción de una victoria unilateral a un resultado favorable para todas las partes. Por último, referirse a las fases consumadas exitosamente con dicho término es más preciso, ya que el resultado en COIN no es simplemente una victoria o una derrota.

PALABRAS CLAVE: conflicto intraestatal; derrota militar; éxito; insurgencia; guerra asimétrica; guerra civil; terrorismo; victoria

Section: DOSSIER • Scientific and technological research article

Received: July 2, 2019 • Accepted: September 6, 2019

CONTACT: Mustafa Coşar Ünal ✉ cosar.unal@bilkent.edu.tr

Introduction

The contested concept of victory

Declaring winners and losers is a habitual outcome of a binary understanding of war, conflict, or fight where the endgame is marked with an absolute understanding of control and power of one party over the other. However, binary outcomes, namely victory or defeat, of past centuries large-scale interstate wars have dramatically eroded because of the dramatic variance in characteristics of wars and warfare. While *victory* by nature is a term developed and used purely in the military context of earlier eras, today's wars and conflicts do not hold this term in its original meaning. This is mostly because the lines between the trinity of war (the state, the people, and the army), as defined by the famous war philosopher Carl von Clausewitz's (1976), have been greatly blurred in small wars (Griffin, 2014). In these wars, the central axis of the conflict occurs between the state and a violent non-state actor, an insurgent (often the inferior party). Gleditsch et al. (2002) and many others (e.g., Licklider, 1995; Hartzell, 1999; Dupuy & Rustad, 2018; and Harbom & Wallensteen, 2005) report that limited/small wars are the most common type of wars since the Second World War. This type of small wars, where there is a state and non-state actor(s) as insurgencies fight, conceptualized as intrastate conflicts by Sarkees, Wayman and Singer (2003) and UPPSALA Conflict Data Program (UCDP)¹, yield vital differences in the character of war where a purely military concept of victory is less relevant and potentially misleading in certain aspects. Hence, if victory in war is expected to be a total defeat or unconditional surrender of the enemy resulting in the termination of a conflict, such victory can hardly ever be achieved in the case of counterinsurgency (COIN) campaigns.

Insurgencies, by definition, are political organizations representing the dissenting indigenous inhabitants. As the French theorist and practitioner, David Galula, pointed out, only 20 percent of insurgencies are military while the rest of the eighty percent are political (Galula, 2005). In this respect, there is no purely military solution in a counterinsurgency campaign; even though states' conventional military efforts might bring the military defeat of insurgents. Insurgents who are comprised not only of military branches but even more so of social and political entities (Kitson, 1977), implying that a potentially successful COIN campaign is to be 80 percent political and only 20 percent military.

In all these regards, use of the term *victory* in its classical meaning in a COIN campaign is highly problematic. Victory by definition denotes an end goal (of a military defeat of the enemy), but such a result is not decisive in bringing the insurrection to a sustainable non-violent end. The social and political domains –the major part of the insurgent problem– might be negatively influenced by a military defeat, if not carefully and sensitively managed. However, a state's military victories over the insurgent group or the

1 UPPSALA Conflict Data Program definitions are available at <https://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/>

insurgent's military defeat are only a small part of the story. Thus, we need another term that better applies for the assessment of COIN effort because the classical meaning of victory refers to something that has a very little chance of realization (Callwell, 2013). In this context, rather than a new definition of victory, *success*, with a proper approach, is to be used to assess states' counterinsurgency campaigns. We will argue that *success* is a better fitting choice of a concept for three reasons. First, *success* focuses on political solutions. *Success* shifts perception from one-sided victory to a favorable outcome for all parties involved. Finally, because the outcome in COIN is not merely a victory or a defeat, as this paper will show, referring to the completed phases as a *success*, offers better accuracy.

The literature on small wars and insurgencies has already posed the question of a necessary reconceptualization of the notion of victory in the contemporary small wars, which has been more prevalent after the Second World War (Reiter & Stam, 2002; Fortna, 2018). However, the concept of victory and defeat for intra-state wars is limited within the existing literature (Baldwin, 2016, the sanctions debate; Angstrom, 2011) and very little attention has been devoted to the concept of success in small/limited wars, in particular, home-grown intra-state conflicts. The fact that this type of asymmetric conflicts has outnumbered the interstate since the end of the WWII (e.g. Gleditsch et al., 2002; Harbom & Wallensteen, 2005; Licklider, 1995; Hartzell, 1999; Dupuy & Rustad, 2018), and more importantly, that this type of conflict does not seem to be abated in the near future (Angstrom, 2011, p. 4), begs critical analyses of the concept of success in small wars. With the rising prevalence of small wars, strategies for conducting and countering them will gain even more importance, over time.

As one of the intractable conflicts in recent times of the world history, Turkey's conflict with the Kurdistan Workers' Party (*Partiya Karkeren Kurdistâne*, PKK) reveals a valuable example of an insurgency. Turkey's long attached pursuit of unilateral military victory and PKK's adaptation in a prolonged strategic tit-for-tat. After its military defeat in a more direct fight in the initial terms of the conflict, the PKK has pursued a broader socio-political campaign by relying on asymmetric warfare and indirectness in conflict. Turkey's war against the PKK officially commenced in 1984 and has been ongoing for almost 35 years, resulting in approximately 50,000 fatalities, some 6,000 civilian casualties (Ünal, 2016a, Gürcan & Ünal, 2018). Turkey has implemented different countermeasures in its struggle against the PKK that range from enemy-centric, oftentimes repressive and iron-fist measures, to population-centric approaches, including accommodative and conciliatory measures with less emphasis on the use of armed forces. However, the central theme of Turkey's countermeasures has been around seeking a decisive unilateral military victory in pursuit of PKK's demise (Ünal, 2012a, 2016a). In fact, the Turkish Army defeated the PKK (Kayhan-Pusane, 2015) in the military sense after its first-decade insurrection in 1993/94. As explained later, the PKK's founding leader, Abdullah Öcalan, acknowledged the PKK's military defeat in a direct challenge of Turkish state and authority. However, this military defeat was by no means a decisive result. Because of many

reasons concerning the changing character of wars, particularly, small wars in the context of asymmetry, irregularity, and hybridity, it did not bring the PKK's demise at any level (social, political, military).

Despite the high death toll, the PKK has been resilient. It has managed to survive by changing its political strategies and adapting to the shifting socio-political and security environment despite Turkey's efforts to psychically eradicate it (Gürçan & Ünal, 2018; Kayhan-Pusane, 2015; Ünal, 2014; 2012a, 2016a). This strategic interaction has yielded many learning opportunities. It has had many turning points in which the conflict has undergone different phases and reached critical breaking points in its life cycle that have trapped both parties in a costly, almost four-decade deadlock, indicating PKK's resilience (Ünal, 2016a, 2016d; 2014; Ünal & Harmancı, 2016). The above is highly related to the notion of an asymmetric conflict, which is often referred to as new wars or hybrid wars, in which the insurgent (inferior, underdog) no longer pursues a capacity-oriented fight, but a will-oriented one by exploiting all the notions of asymmetry against a rule-bound state. As the result of the military campaign conducted by the Turkish Armed Forces (TAF), 32,562 PKK militants were neutralized, while 1,566 were injured, 8,162 captured and another 7,146 were surrendered (Ünal, 2016d).²

Given the discrepancy between a military victory and the successful termination of a conflict, as partly discussed above and later in this paper, this study first reviews the Turkey-PKK conflict, pointing out the failure of the concept victory in the particular case study. Later, it engages in a discussion on military victory and the essential concept of *success* in intrastate conflicts in which a state and a non-state actor struggle –either consciously or subconsciously– over perceived legitimacy by key populations. Lastly, this study applies the discussion into the reviewed case of the PKK conflict. The PKK conflict will be reviewed in two phases. First, the initial conflict phase in which the two parties were confronted by all their unilateral means and the Turkish Army quelled the PKK and impeded its initial end-state of territorial control and secession. It particularly focuses on how the nature and characteristics of PKK violence have changed after its military defeat to more asymmetrical and indirect forms concerning location, target status, and objective of violence. All of these negate the pursuit of military victory and necessitate a successful approach in a broader political campaign. Second, the study briefly outlines the rest of the conflict period. It reviews the PKK's resilience in the context of asymmetric and irregular warfare, showing the PKK's strategic shift in military and political (end-state) terms, negating the Turkish Army's earlier defeat. Overall, the focus is given to the decisive and consecutive phases. In the former, both parties pursued a capacity oriented fight for victory while, in the latter, the PKK gradually switched to a will-oriented fight that revealed significant shifts in the character of conflict and the nature (form, location, target status) of violence.

2 These data were extracted from official Government databases and periodic press releases on security operations by the TAF and Ministry of Interior.

The PKK

Historical context

Kurdish dissent is a deep-rooted historical issue that dates back to the Ottoman times. The latest Kurdish unrest, as an ethno-national identity conflict, re-emerged in both internal and external contextual dynamics in the 1970s as part of the new cycle of national awareness that was universally induced by the nation-state phenomenon of the Cold War and post-Cold War eras, which coincides with the third wave of modern terrorism or the “new left wave” as classified by Rapoport (2004). Reflecting these features, the PKK emerged as an idea in 1973 and ideologically mobilized later during the 1970s. Abdullah Öcalan officially founded the organization on November 27, 1978, in Diyarbakir-Lice province (Ünal, 2012a; Ünal & Harmancı, 2016). Öcalan, the founding father of the PKK, openly stated in the initial manifesto that the PKK would enforce a Kurdish armed mobilization by engaging in a guerilla war, in which all the Kurdish people were involved militarily in a struggle for independence (Öcalan, 1978).

Leaning on the historical roots of Kurdish dissent, the PKK aimed at founding an *Independent ‘United’ Kurdish State* in the Middle East, comprised of various territories of Turkey, Iraq, Iran, and Syria. Inspired by the Cuban Revolution, the PKK resorted to Maoist Strategy (MS), as Mao Zedong suggests (Kocher, 2007). As specified in the PKK’s founding manifesto (*The Path for Revolution in Kurdistan*) (Öcalan, 1978) in its first founding Congress of 1978, the PKK leaned on a typical three-echelon structure from the “Theory of People’s War” to reach its goal, namely, strategic defensive, equilibrium, and offensive. The PKK imagined a revolution emanated from the agrarian Kurdish peasantry living in rural areas of southeastern Turkey to metropolitan areas, as part of the Maoist theory (Ünal & Harmancı, 2016; Ünal, 2012a). Seen in this light, the PKK declared itself to be a socialist liberation movement with Marxist-Leninist ideology. After officially setting up its primary organizational goals and strategy in its initial Congress in 1978, the PKK held its first Conference in July 1981 and second Congress in August 1982. Following the 1982 Congress, the PKK leadership, predominantly stationed in the Northern Iraq and southeastern part of Turkey, officially commenced its war against the Turkish State in 1984 (Ünal, 2016c).

Confrontation (allegedly decisive) phase: the military defeat of 1993/94

After the strategic defensive between 1978-84, a preliminary phase for its guerilla fight, the PKK officially initiated its war on August 15, 1984, with two attacks in Semdinli and Eruh Districts in which one soldier was killed, and 12 were injured, three of whom were civilians. In the initial war period, the PKK directly challenged and confronted security forces which, as it perceived, were the representatives of Turkish political authority. As part of its MS strategy, the PKK conducted attacks on military outposts, remote hamlets, and villages where the governmental existence is weak in control.

The parties clashed militarily in a more direct battle between armed apparatus of both parties. The PKK sought (political end-state) territorial separation to *out-fight* Turkish forces and employed the second stage of MS (strategic equilibrium) until 1990, and *strategic attack* between 1990 and 1993/93, during which they conducted direct challenges through isolated hit-and-run attacks on the army bases and outposts. In alignment with its strategic equilibrium phase, in 1986, the PKK replaced its individual attack Kurdistan Independence Units (HRK) with its army, the People's Independence Army (known as the *Artêşa Rizgariya Gelê Kurdistan*, ARGK) and conducted raids with convened groups of up to 600 in the initial terms of the conflict. The PKK strived to *attrite* government authority in Turkey's south and southeastern region.³ To that end, from 1984 to 2000, the PKK employed selected violence against official government staff as part of its out-fight strategy and conducted 23 attacks against the mayors and statesmen in cities and villages that resulted in eight dead and three wounded. The PKK also killed 27 imams and 116 teachers (Ünal, 2012a). It employed indiscriminate violence against non-compliant Kurdish peasantry to mobilize popular support by force and intimidation, as designated Öcalan's founding Manifesto (Öcalan, 1978).

The PKK's rural insurrection caught Turkey off guard. Until 1987, it considered the PKK surge as a "bunch of bandits" to be dealt with by the responsible law enforcement unit, the Gendarmerie, which –at the time– was part of the TAF but serving as a public order maintaining law enforcement unit with jurisdiction in rural areas. Thus, no specific military action was taken. At the time, Turkey was experiencing political turmoil among ideologically competing groups in urban metropolitan areas, and martial law was underway since the coup d'état in 1980. After 1987, the TAF started to modify its military strategy and stationed different army bases throughout the region to maintain better territorial control, called *Zone Doctrine/Areal Control*. However, this approach was not designed for countering irregular or asymmetric warfare; this strategy stationed battalion army bases in rural areas to control the region considered easy targets for the PKK. In the early periods of the confrontation phase (1984-1993/4), the PKK conducted numerous raids on these bases with groups of 100-150 that convened and reached up to 600 armed militants, among them the Hakkari-Serin (9 soldiers killed in 1985), Samanli (10 in 1991), Cobanpinar (6 in 1991), Taslitepe (11 in 1991), Uzumlu (15 in 1992), and Tasdelen (27 in 1992).

From 1990 and 91, the TAF gradually shifted to a new doctrine called *Cordon and Search*, in which PKK groups were detected (using HUMINT and SIGINT radio signals) and surrounded within a large cordon. The perimeter was then tightened through searches to engage and incapacitate armed militants through large-scale military operations (MOPs). The TAF began to use land aviation units with Cobra helicopters against

³ Region and emergency rule, throughout the paper, refer to Turkey's southeast and eastern region, which is populated by Kurds and where the PKK claimed independence. Most of this region was under emergency rule between 1987 and 2002.

PKK militants who had taken advantage of the rough terrain in the region. By switching over to Cordon and Search, the Turkish military became more proactive and militarily defeated the PKK on the ground. The TAF's military doctrines in its military operations until 2000s are depicted in Table 1.

Table 1. The TAF's military doctrines until the PKK's Military Defeat

TAF's Military Doctrines against the PKK	Time frame
Public Order Approach (Gendarmerie as a law enforcement unit)	1984 - 1987
Zone Doctrine (Areal control)	1987 - 1990/91/92
Cordon and Search Doctrine (Large scale and cross-border MOPs with aviation units)	1992 - 2009/10
Search-Find-Destroy (Hi-Tech Kinetic, UAVs [dronization], and targeted killings)	2009/10 - onwards

Source: Prepared by the authors

Turkey's initial aim was to defeat the PKK militarily, deny its territorial control, and physically eradicate and exterminate it, as well as pro-PKK ideology (with the denial of Kurdish identity, linguistic, and cultural rights until the early 1990s) (Ünal, 2011). To supplement its strife for a decisive military victory, Turkey employed specific security measures. In 1985, Turkey established the *Geçici Köy Koruculuğu* (GKK; village guard system) in which the TAF trained and armed volunteer Kurdish villagers to counterbalance the PKK's social mobilization effort from rural villages (Gürcan, 2015). The PKK reacted harshly to this policy that directly blocked its main strategy. The revolution emerged from rural to urban areas and produced 15 carnages in the provinces of Sirnak, Mardin, and Siirt. The carnage in the village of Pinarcik (located in the Omerli district, in the province of Mardin) resulted in the killing of 30 Kurdish civilians, including 16 children, and 8 GKK members (Ünal, 2012a). An emergency rule was proclaimed in the region in 1987 to enable the TAF to take *de facto* charge of the region. Turkey also implemented a forced evacuation policy in which remote hamlets and villages were merged into larger and safer communities for better governmental control. The uncertain conditions of the conflict had already compelled most of the resident Kurds to leave their original territory.

The TAF conducted several large-scale MOPs, including some cross-border operations starting in 1992. The Turkish Air Force continuously carried out offensive airstrikes against the PKK camps in Northern Iraq, which has served as a safe haven for the PKK since its inception in 1978. In total, there have been several cross-border (in Northern Iraq) MOPs at varying scales. Among these, however, only the seven that fall within the period analyzed here will be listed (see Table 2).

Table 2. Prominent cross-border MOPs against the PKK

YEAR	CODE NAME	PKK		TAF	
		Killed	Injured	Killed	Injured
1992	(No Code Name)	1551	1232	28	125
1994	Operation Dragon-1	146	unknown	5	0
1995	Operation Steel	555	13	64	185
1995	Operation Dragon-2	204	89	21	0
1997	Operation Hammer	2730	415	114	338
1997	Operation Dawn	865	37	31	91

Source: Bulut (2014)

The cordon and search doctrine successfully prevented the PKK from realizing the third stage of its Maoist Strategy in taking control of the region. The impact of Turkey's cordon and search doctrine can be seen in Figures 1 and 2. While the aggregate (both results of MOPs and PKK attacks) level of violence (Figure 1) maintained its increasing trend until 1994, the PKK-initiated violence level started decreasing in early 1992 (Figure 2), indicating a lagged effect of the change in time and space initiative on the battlefield in favor of the TAF, based on the doctrinal shift in military strategy in 1992.

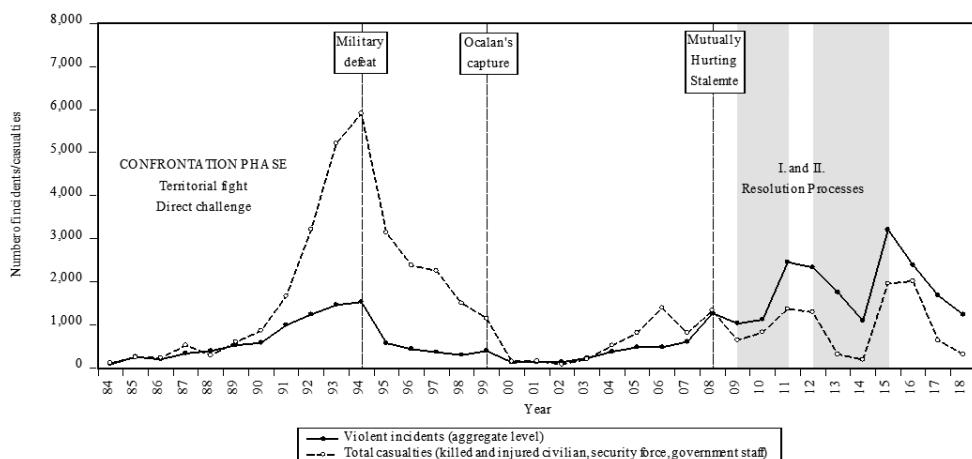


Figure 1. Number of aggregate violent incidents resulting from PKK attacks and security force operations that resulted in casualties (civilians, security forces, and GKKs), 1984-2018.

Source: Prepared by the authors

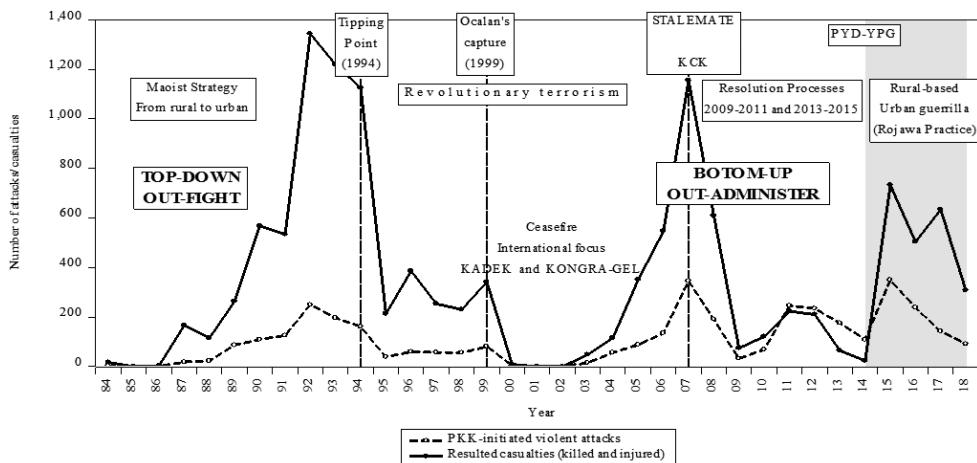


Figure 2. Number of PKK-initiated violent incidents resulting casualties (civilians, security forces, and GKKs) 1984-2018.

Source: Prepared by the authors

As a result of the success of this military doctrine and large-scale MOPs, the PKK had significant losses in its guerilla force. Approximately 8,000 PKK militants were incapacitated (and another nearly 3000 were either injured or captured) only between 1991 and 1994, as plotted in Figure 3.

In 1993, Öcalan –between the lines– acknowledged the PKK’s military defeat in a press conference with Jalal Talabani (leader of Patriotic Union of Kurdistan, PUK). Öcalan stated that following 9 years of war the time had come to shift to non-violent political means. Another confession came in his public statement to the pro-PKK periodical *Serxwebun*’s April Volume in 1994. He declared that the PKK would need at least 50,000 guerillas to reach an insurgent victory in the region; at the time, the PKK had between 8,000 and 11,000 guerillas. Moreover, the same volume of *Serxwebun* published the headline “In 1994, there could either be political or military solution” (*Serxwebun*, 1994). With this, Öcalan acknowledged military defeat by implying that the PKK’s unilateral means at the time was not sufficient for a direct challenge of the state’s authority and, for the first time, he referred to a political solution.

The PKK’s dramatic shift from seeking military victory to success: from a capacity-oriented effort to a will-oriented fight

In terms of military victory and success discussed in this article, the PKK’s military defeat on the ground in 1993/1994 was a crucial milestone in the conflict. Upon its defeat on the battlefield, the PKK gradually switched from conventional-style fighting, supplemented by guerilla tactics, to more ‘asymmetric’ means such as terrorist attacks in order to

preserve its existence. The character of violence employed by the PKK indicated a dramatic variation, from mostly massive armed attacks on army posts (and intimidation-oriented indiscriminate violence against GKK members and their families) to bombings, assassinations, and suicide attacks in the western cities of Turkey to discredit the government's monopoly of violence, as well as to break the TAF's military focus in the emergency rule region.

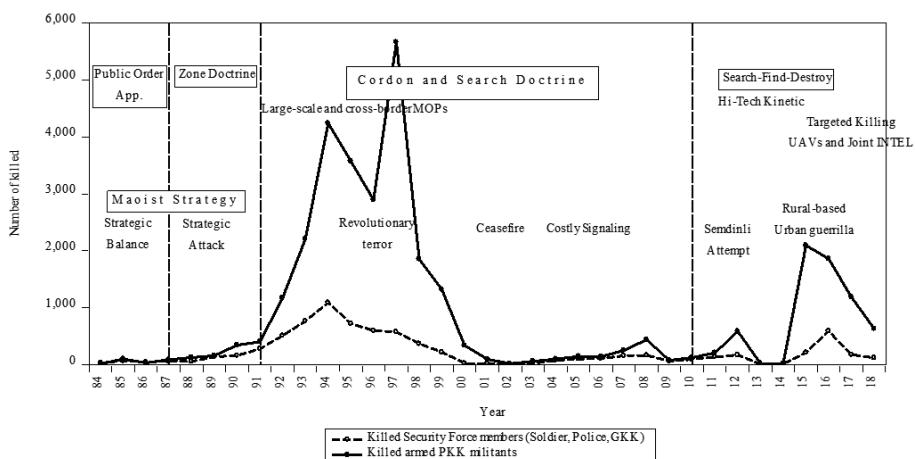


Figure 3. Killed Turkish security force members versus PKK armed militants.

Source: Prepared by the authors

The purpose of the violence shifted from direct challenge for territorial control of the southeastern region through military victory to the indirect and more asymmetrical challenge of coercing Turkey into a political compromise by attacking its will-to-fight by seeking success in a political campaign supplemented with terror and guerilla attacks to put both a physical and moral strain on the government. This shift strongly suggests that the PKK quit pursuing military *victory* in a direct sense and started seeking a *success* in realizing its overarching goal of self-determination in certain parts of Turkey in an indirect way of bringing Turkey to the negotiation table. In other words, the PKK gradually started relying on exhaustion (*costly signaling*) by *provocation* and *attrition* rather than *extermination*, (for different objectives of terrorism see Kydd & Walter, 2006) and attempted to erode Turkey's will to continue this costly struggle.

The PKK's deviation from seeking military victory in a capacity-oriented direct fight towards an indirect fight by exploiting asymmetry in its favor is evident. First, the PKK expanded its fight beyond the Kurdish-populated region (the critical region for the conflict) that claimed its independence. As plotted in Figure 4, after 1994, the PKK's attacks in emergency rule areas and non-emergency rule areas slope toward each other, indicating a proportionate increase in PKK attacks in western cities. However, in Figure 5, the PKK's urban attacks show a proportionate increase and almost converge with rural guerilla at-

tacks after the conflict's *tipping point* in 1994. In Figure 6, the number of bombings proportionately increase as a more convenient incident type in urban terror and slope toward the number of guerilla attacks.

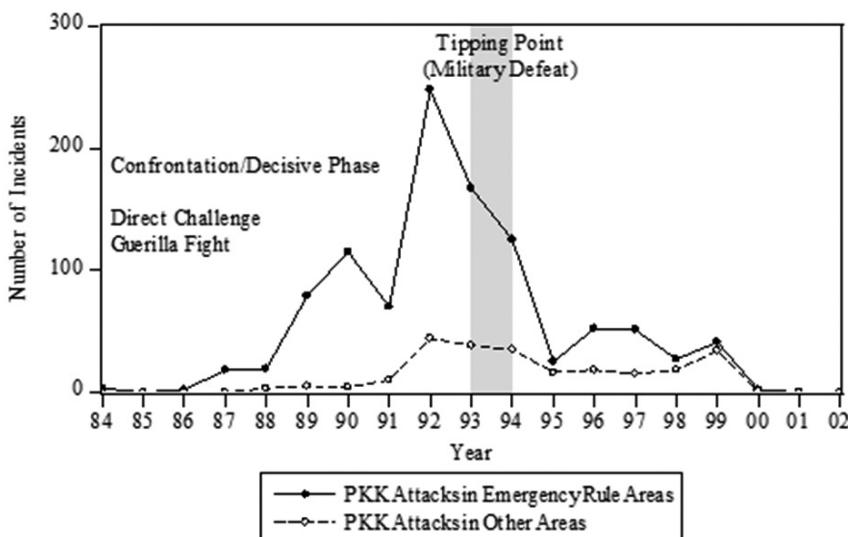


Figure 4. Location of violent incidents, emergency rule provinces (southeastern provinces) vs. non-emergency rule provinces (1984-2002).

Source: Prepared by the authors

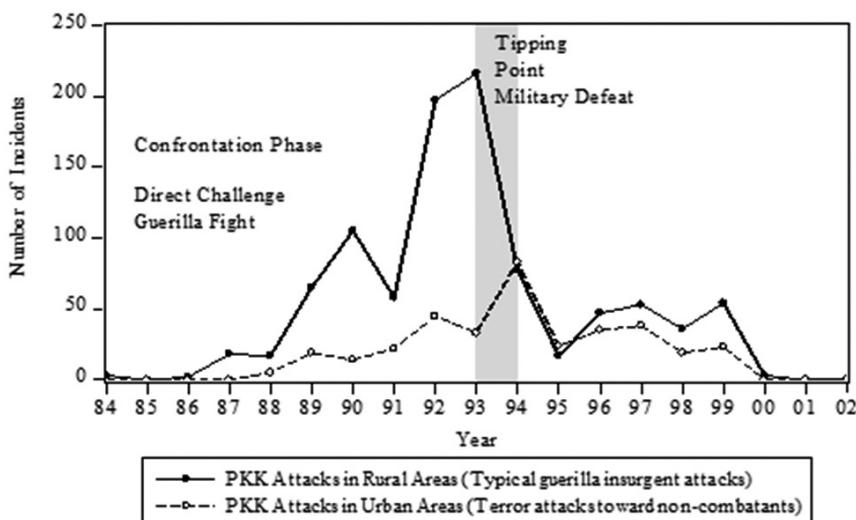


Figure 5. Number of PKK attacks in rural vs. urban areas.

Source: Prepared by the authors

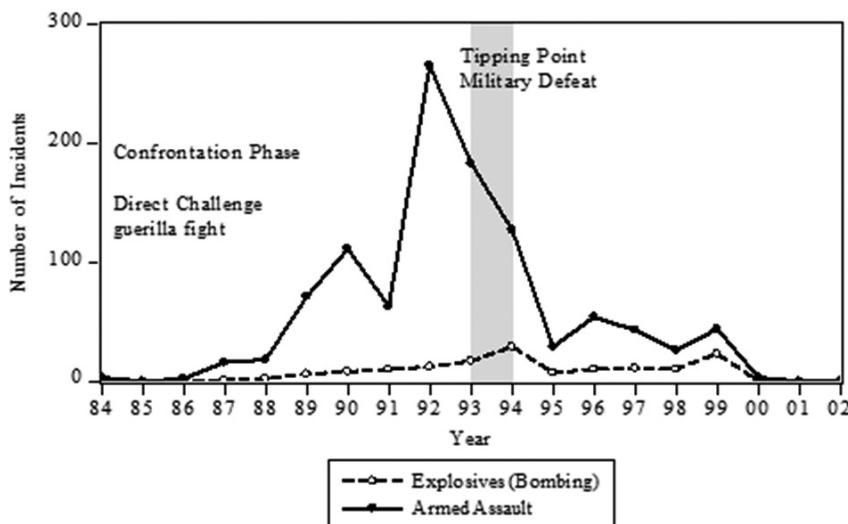


Figure 6. Bombings versus armed attacks trend.

Source: Prepared by the authors

Moreover, the PKK resorted to typical terrorist attacks in western areas of Turkey. For instance, the PKK conducted suicide and terror attacks in tourist areas against civilians in the western metropolitan areas of Turkey, as shown in Figure 7 and Figure 8.

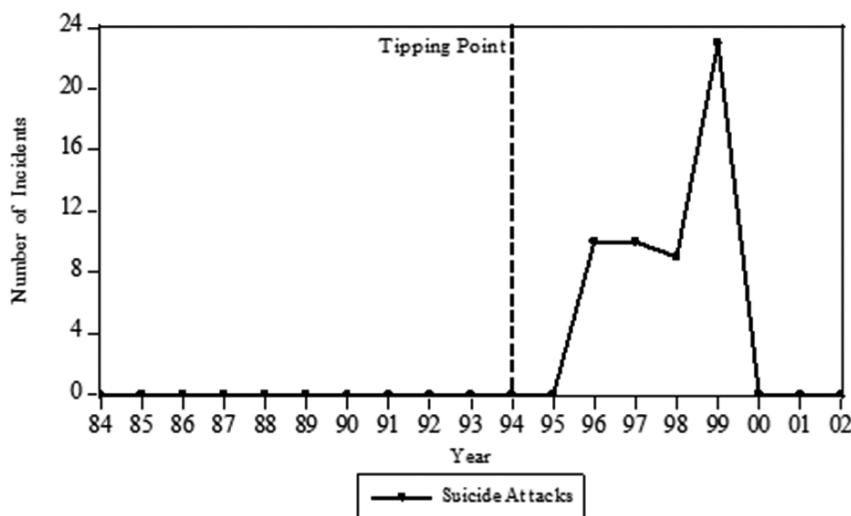


Figure 7. Number of suicide attacks carried out by the PKK.

Source: Prepared by the authors

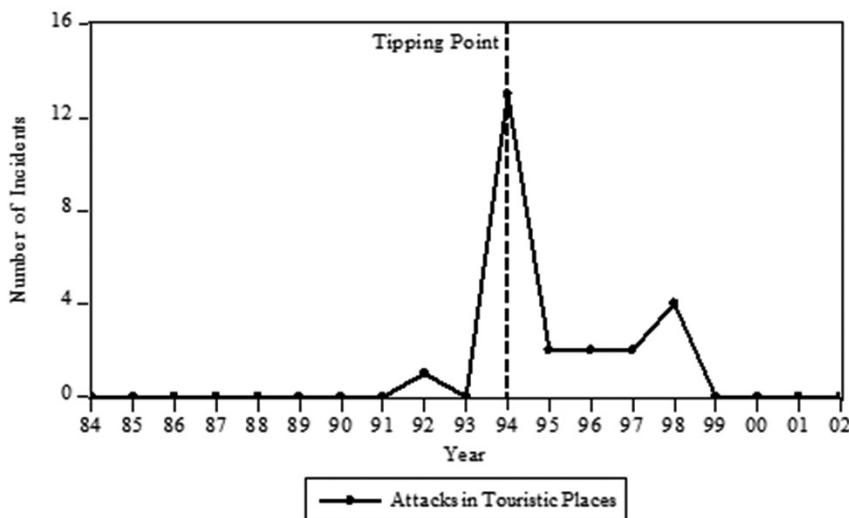


Figure 8. Number of PKK-initiated violent attacks targeting tourist locations.

Source: Prepared by the authors

As seen in the figures, both trends indicate emergence and increase after the PKK's aforementioned shift in strategy and a dramatic shift in the PKK's strategy from directly challenging the security forces in the southeastern region in order to exterminate and establish an autonomous Kurdish State and indirectly and more asymmetrically coerce Turkey into a political compromise by targeting civilians in western regions using more urbanized violence. In other words, the PKK quit seeking military victory and seeking success in a broader political campaign in which military action was inferior or supplementary or complementary in contrast to earlier terms where the military means were the essential and only instruments of its fight.

The PKK's transformation: more politico-less military character

After this critical milestone, almost the entire character of the conflict changed. The PKK, as a politico-military organization, not only shifted its strategy in a military sense but also shifted in the character of violence they employ, embracing a more politico and less military structure and acknowledging the importance of legitimate popular support for its insurgent cause and campaign. Öcalan allowed a pro-PKK political party to be established in Turkey and they founded the *Halkın Emek Partisi* (HEP; People's Labor Party) on 7 June 1989. The PKK understood the advantages of legal, political activities in mobilizing the civilian population and considered political activities advantageous to its strategy of creating a 'people's war' by drawing popular support from the masses. Later in the process, there has been a number of pro-PKK political parties serving as the political wing (Ünal,

2012a). Given that some of them were shut down by the Turkish Constitutional Court on the grounds that these political parties counter the indivisible unity of the Turkish state, the PKK leadership always reserved another party as a successor to substitute its closed predecessors (Ünal, 2012b).

The PKK adopted a new grand strategy to place international pressure on Turkey to reach a political compromise. In alignment with Öcalan's call, the PKK transformed itself in 2000 by reiterating its most prolonged unilateral cease-fire. The PKK abolished itself twice, founded the Congress for Freedom and Democracy in Kurdistan (KADEK), respectively, in its 8th Congress in 2002. It renamed itself as the Kurdistan People's Congress (KONGRA-GEL) in 2003, officially embracing non-violent means to acquire international legitimacy over the reduced political goal (constitutional recognition of Kurds in Turkey). Between 2000 and 2004, the PKK focused on political recognition as a legitimate and official representative body for Kurds in the international arena by accelerating its front activities in Europe, backed by mass demonstrations in Turkey, evident in the increased level of non-violent pro-PKK public events during these years (Figure 9). As David Romano (2012, p. 229) puts it, "Influencing non-state actors based outside one's state boundaries, however, presents a more complicated challenge." Starting in 2002, as a result of Turkey's diplomatic efforts, the PKK was recognized as a terrorist organization by numerous countries such as the United States, Canada, Australia, and the European Union (EU). Thus, the PKK resorted to its old practices starting from mid-2003 (as indicated in Figure 1 and 2) and officially declared its rebirth.

Following the less military structure and more political trend, the PKK founded the Kurdistan Communities Union (KCK) in 2007. The KCK is a trans-national political umbrella organization to pursue a pro-PKK political campaign and carry out *de facto* applications of autonomy in the region. The KCK dealt with social, economic, political, ideological, and self-defense issues based on its own. The creation of the KCK produced a new grand strategy. The objective of the KCK was to realize Öcalan's proposed Democratic Confederalism through 'out-administering' in a bottom-up approach as opposed to the top-down 'out-fighting' approach employed in the initial years of the conflict. With the creation of the KCK/TM (TM stands for Assembly of Turkey, since the KCK covers pro-PKK activities in host states of Turkey, Iraq, Iran, and Syria), the PKK pursued a power-sharing termed democratic autonomy, which sought a self-determination within a decentralized administrative system. This shift was a result of the PKK's gains in the socio-political arena through intense social engagement, widening popular support via embracing different societal segments, boosting Kurdish activism in and outside of Turkey, among others. As seen in Figure 9, pro-PKK public demonstrations and civil disobedience incidents indicate an increasing volatile trend in the entire process. However, this trend shows a steady increase after the KCK was founded.

As part of its pursuant of success with a broader socio-political campaign supplemented with asymmetrical warfare, rather than a victory in military terms, the PKK had gradually changed its military strategy after losing the territorial fight. As opposed to conventional and semi-conventional tactics using large numbers of armed militants, the

PKK limited its mobile groups to approximately 60-70 fighters after 2000, to strengthen secrecy and mobility. Before that, in the early years of the conflict, the numbers ranged from 100-150 (convened into 150-600 for army outpost raids). After 2007, this figure decreased even more, to 7-13 and sometimes even down to 5-7 as depicted in Figure 10. In this regard, the PKK abolished its army called the ARGK and created the People's Defense Forces (HPD) in which the PKK units were downsized for more mobility and secrecy for application of more asymmetry in nature.

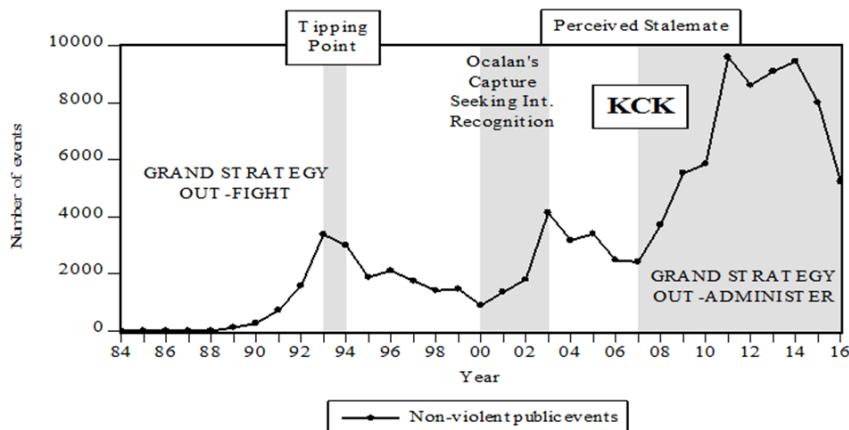


Figure 9. Level of non-violent pro-PKK public/civil disobedience events
Source: Prepared by the authors

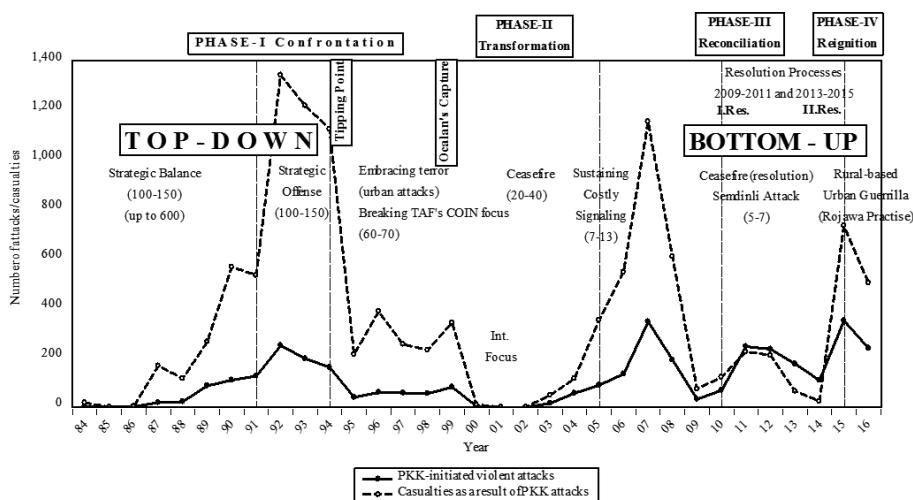


Figure 10. Introductory depiction of the PKK's response in military strategies and tactics throughout the conflict.
Source: Prepared by the authors

In sum, the PKK's grand strategy changed from a top-down military victory to a bottom-up politico-military approach with active social and political engagement with the KCK to keep the threat in the forefront of the government's agenda as well as keeping international attention. It leaned on the microeconomic concept of diminishing return rate, meaning that more militants meant easier detection, less secrecy, and more losses, and thus, less mobility. They increased its invisibility by operating in small, light groups that made them hard to spot in rural areas and could conceal themselves in urban areas in the human terrain.

Using its military apparatus not for military victory but for political success, the PKK designed its military effort as a supplementary tool for its political campaign, shifting its aim from territorial separation through military victory to establishing a 'Democratic Confederalism', coercing Turkey into a negotiated settlement with a politico-military campaign. This was, in generic sense, aligned with its grand strategy of 'exhaustion' and 'costly signaling' as well as its military strategy of sensational and symbolic attacks with the use of more asymmetry that have been embraced upon its military defeat. In order to reach its renewed end-state of democratic autonomy (as termed by the pro-PKK entities), the PKK relied mostly on events organized by the KCK in the socio-political arena in a bottom-up approach and designed its military strategy as a supplementary tool.

Turkey's perception of stalemate and search for a political success through resolution

The PKK's search for politico-military success worked. Between 2006 and 2007, Turkish officials noted the inconclusiveness of the military effort to eradicate PKK violence or to reduce it down to margins. Therefore, having recognized the costly deadlock and the stalemate in 2007, Turkey engaged in a series of backchannel talks with the incarcerated PKK leader, Öcalan, and initiated meetings in Oslo with a PKK delegation, comprised of both the political leadership in Europe and military leadership from Qandil/Northern Iraq. Set against this background, the Turkish government officially commenced the Kurdish Opening and made its intention public in 2009. However, Turkey's peace attempt revealed many contradictory events despite a short-term unilateral ceasefire declared by the PKK. The state's progressive efforts to remove grievances and employ peaceful rhetoric were interrupted by the arrest of numerous civilian Kurds including lawyers, activists, and civil society members, as well as 53 members of the pro-PKK political party, Democratic Society Party (DTP). Arrests were made on the grounds of organic ties with the KCK, which under the Turkish law was deemed the legal equivalent of the PKK. Once the mutual confidence deteriorated between the conflict parties, Öcalan –through his attorney– commenced a new era called Strategic Lunge through the use of an all-out People's War strategy for developing *de facto* autonomy in the region, which made the break-off clearer in March 2010.

After intermittent fighting and the PKK's call for a cease-fire after in late 2012, the Turkish government explicitly commenced a new resolution process and started overt negotiations with the PKK through its incarcerated leader. These negotiations were publicly declared on March 2013 in a message from Öcalan during the *Nevruz*, which celebrates the arrival of Spring and is a symbolically important day for Kurds, in Diyarbakir, a metropolitan city densely populated by Kurds. The bilateral violence stopped with an informal cease-fire and a new negotiation period –The Resolution Process– commenced. Öcalan, in his message, underlined that the moment was ripe for a resolution to bring the violent conflict to an end through political action (a negotiated settlement) toward a democratic solution, vital to the Turkish and Kurdish societies ("Öcalan's letter on peace", 2013). Öcalan also made a call for a cease-fire and the withdrawal of the PKK's armed militants from Turkish soil. Only about 20 percent of the forces withdrew after the PKK's objection to the government's alleged inaction toward specific socio-political reforms, lack of a legal reassurance for the withdrawal, and the continuation of KCK arrests while the cease-fire continued. The withdrawal started in Spring 2013 but gradually stopped upon the fracture of the peace attempt. There are multiple reasons for the break-off of the second peace attempt, including the domestic political context, and the regional instability caused by the Syrian Civil War, among others –all beyond the scope of this study.

Because the second resolution was crippled in mid-July 2015, violence between the parties increased (shown in Figures 1, 2, and 3). Turkey reinstated its intense securitization approach and its harsh anti-PKK state discourse, yielding high tensions and escalated violence, however, with a dramatic shift. The PKK changed its focus from a rural to an urban setting. As Duran Kalkan, one of the PKK's top council members, noted in his book "Rural-based urban guerrilla warfare,"⁴ the PKK shifted its focus from the physical to the human terrain (referring to the social and cultural aspects of an operational environment) in its new strategy. Based on its experience with its Syrian Democratic Union Party's (PYD) urban warfare against ISIS in Rojava (Northern Syria), the PKK started to employ urban guerrilla tactics and dug ditches and built barricades as part of their overall strategy of self-governance in Kurdish-populated towns (e.g., Diyarbakır-Sur and Silvan, Mardin-Nusaybin, Hakkari-Yüksekovalı, and Şırnak-Cizre).

As shown in Figure 11, the PKK's attacks in urban areas far exceed its attacks in rural attacks, indicating the urbanization of PKK violence in this period (shaded area). Intense clashes produced a high death toll, and by mid-July 2015 and March 2016, security forces' casualties reached 355 (265 soldiers, 133 police, and 7 GKKs), while 285 civilians lost their lives (civilian casualties include attacks by the Islamic State).⁵ According to the International Crisis Group's open-source database (ICG, 2016), the figure for incapacitated PKK members since July 20, 2015 (until July 04, 2018) was 2,150, the civilian casualty was 452, and

⁴ Publication is not accessible to the public and is thus not listed in the bibliography.

⁵ Casualty figures for security forces and civilians are reliable as they are part of a related judicial process.

security force casualty was 1,092. Government figures, on the other hand, indicate that 3,583 PKK members were incapacitated, while another 602 were captured, and 574 surrendered in one year—until June 17, 2016 (Terror results for 265 days, 2016).

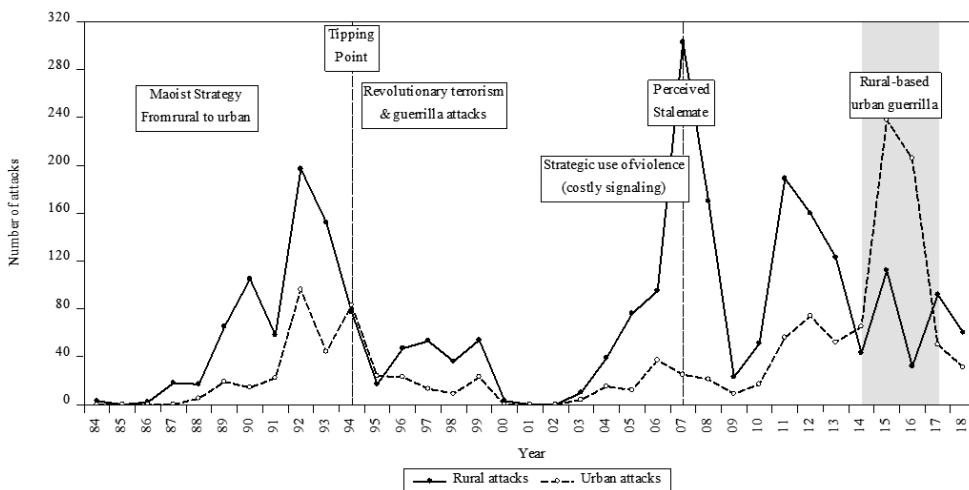


Figure 11. Number of PKK-initiated attacks in rural versus urban areas (1984–2018)

Source: Prepared by the authors

These were Turkey's first attempts seeking success with a broader political campaign with sociological peace infrastructures (e.g., wise men commission) after a long-attached effort around the official motto of "until no terrorists remain." After its fracture, the conflict yielded more complications, mostly because Turkey's once purely intrastate conflict had recently become heavily regionalized and internationalized by the developments of the Syrian Civil War. In recent circumstances, understanding the dynamics of the Turkey-PKK clashes has become almost impossible without understanding the regional dynamics shaping the civil war in Syria, e.g., the U.S., Russia, and Iran's strategic vision in the region as evident with Turkey's two important cross-border MOPs in Syrian territory: Operation Euphrates Shield on August 24, 2016, and Operation Olive Branch, against the PKK-affiliated People's Protection Units (YPG) in the Syria/Afrin region.

Overall, the current situation indicates an escalated violence in and out of the Turkish territory, including PKK's long-attached sanctuary, Northern Iraq, and newly emerged Northern Syria (east of the Euphrates). Thus, the conflict is far from being resolved. Turkey's approach to the conflict indicates the sole usage of a securitization and containment paradigm by relying on the military, police, and GKK.

Discussion of victory and success

The TAF's military victory and the PKK's multi-dimensional strategy shift

As examined in the previous section, during the initial confrontation period of 1984-94, both parties sought unilateral military victory. In that period, the epicenter of the conflict was in the military domain with the focus on the territorial control of the critical region, namely, Turkey's eastern and southeastern regions (Ünal, 2016d). The character of the war in this phase was capacity-oriented; the parties fought to exterminate one another through annihilation and attrition. For Turkey, its state's territorial unity was at stake; it was about existence or survival for the PKK, meaning that their political end-states were decisively affecting one another.

Relying on the Maoist Theory of People's war, the PKK later pursued a top-down strategy to create an autonomous and united Kurdish state in the broader Middle Eastern region with territories comprised by Turkey, Iran, Iraq, and Syria. In its pursuit of military victory, the PKK employed a more direct challenge and conducted raids on remote military outposts to physically exterminate Turkish forces from the region. Moreover, as part of its initial Maoist strategy to enforce social mobilization from Kurdish peasantry, the PKK attacked non-conforming Kurds in the key region and conducted carnages, killing mostly village guards and their family members (Gürçan, 2015). Because of his belief in military victory and military focus, Öcalan rejected any political action and even affiliations with the newly emerged pro-PKK political parties in the early 1990s (Ünal, 2012b; 2016b).

Turkey's continuous updates on military doctrines in its military COIN efforts in the early 1990s clearly disrupted PKK insurrection and resulted in its military defeat, as acknowledged by Öcalan in 1993 and 94 (Ünal, 2016a; 2016b; 2012a). Acquiring the initiative in violent clashes, the TAF impeded the PKK's attempt to realize the third stage of the Maoist strategy, namely, strategic offensive, and negated the PKK's move to maintain the control of the land in the region (Ünal, 2016d).

After its military success over the PKK's initial military challenge, Turkey foresaw the demise of the PKK by mistakenly understanding the character of insurrection as static. However, a military defeat or victory in territorial control does not guarantee conflict termination in the best interest of the counterinsurgent. In most cases, initial military victory even drives a state's misperception of the developments. In those cases, states believe that the initial military victory over the territorial control of a region will lead the insurgent's demise and thus it is believed to be the biggest, the most important, and decisive step. Because of a misconception of the initial military victory, which is just a façade of a very complex problem, states fail to recognize the vitality of the socio-political and social psychological dimensions, as the very essence of an insurgency. Thus, states tend to fail in converting the military success into favorable results in political terms (Gürçan &

Ünal, 2018) which, ultimately, results in sustained protracted wars with dramatic material and human cost adding different layers into already existent complexities (Taydas, 2006).

Most misconceptions about the initial military defeat of the lesser are related to the dominance of the military mindset in COIN campaigns. This error is mainly due to the domineering role of the army and army commanders as an actor(s) exerting and simultaneously gaining political power in COIN campaigns, particularly in its initial terms and periods (Gray, 2007). As Gray (2007) notes, it is difficult for army commanders to comprehend that the war they are pursuing is just an instrument to a specific political end state. The war they are fighting, argues Griffin (2014), should only be designed to set out the conditions for a political solution. In other terms, the insurgents do not constitute the sole and core of the problem in its entirety. The insurgents become of secondary importance when the first confrontation phase is completed, when they are militarily defeated by state forces and denied pursuit for territorial control in military combat (Ünal, 2016a; 2012b).

This emphasizes the role of asymmetric warfare on capacity and will over time. In exploiting asymmetry, insurgencies pragmatically shift to different military and political strategies in not only the tactical level (military dimension) but, at certain times, in the operational level (military and political dimension), and even in the grand strategic level (military, political, socio-political, and economic dimension), resulting in the insurgencies adaptation to newly emerged socio-political and security environment (Duyvesteyn, 2006). More importantly, the state's military (physical) defeat of a violent non-state actor (VNSA) in a direct revolutionary confrontation (learning point in credibility and capacity) would eventually lead the insurgent to act pragmatically by using every conceivable means (mostly terror) to survive and challenge the state actor asymmetrically and indirectly to attack its will to fight (Arreguin-Toft, 2001). As Isabelle Duyvesteyn (2006, p. 136) put it, "terrorism is the resort of an elite when conditions are not revolutionary" or, as Crenshaw (2007, pp. 24-26) noted, terrorism is the most indirect and asymmetrical method in war, mostly used when failed in other methods. Therefore, after experiencing capacity defeat on the battlefield, as a critical teaching moment, what becomes the primary objective for an insurgent is to survive and hurt the adversary by exhaustion (a.k.a. costly signaling).

However, most states misinterpret this critical juncture by thinking that such a military defeat would lead towards a total demise and eradication of the insurgent in subsequent terms; a different story begins to prevail at this point forward. Most states inevitably continue seeking decisive victory due to populist expectations in domestic politics, among other reasons. However, the military defeat of the inferior is the most critical juncture in the states' COIN efforts. Why powerful states fail in asymmetrical and irregular wars against inferior actor rests in this critical point. States fail to evaluate the strengths and weaknesses properly, and this is the very reason for their misconception of persistently seeking unilateral decisive victory (Arreguin-Toft, 2001). However, insurgencies –in their

strategic communication— rely more on asymmetrical or indirect violence in which a states' kinetic, direct military COIN approaches remain insufficient and produce popular support from the related population in favor of insurgencies. As a result, the insurgents not only receive more sustainability and longevity, but the states become more political vulnerability due to a frustrated public or competing elites working to end insurrectionary violence. The Turkey-PKK conflict is an example.

The PKK's military defeat in 1993-94 is one of the most crucial breakpoints in the entire history of the conflict. It produced a dramatic change in the name of the character of the fight since the PKK, as the inferior, shifted to a bottom-up approach in which the political campaign started to lead its military effort, which, in essence, strongly reflects an asymmetrical nature. More specifically, the PKK negated the TAF's military superiority by switching to costly signaling in which the PKK aimed to signal its existence by terror attacks to hurt Turkey's socio-political stability and keep its threat on the Government's security agenda as the top issue –targeting Turkey's resolve and motivation to pursue securitization and unilateral victory– so Turkey would perceive the inconclusiveness of eradicating the PKK's ability to initiate violence (military stalemate) and thus seek a political compromise.

As analyzed in the previous section, the PKK, as an adaptive organism, like its insurgent counterpart, has easily and strategically adapted to the shifting socio-political environment. In many respects, the PKK's dramatic shifts have resulted in its four decades of solid resilience, proving Turkey's expectations wrong. That is, in such a conflict, a military defeat against an insurgent is not the end, but only the beginning of the story; this is evident in the PKK's prolonged survival and resilience, revealed in many different manifestations and representations over the four-decade conflict.

Ultimately, the PKK reshaped itself into emerging contingencies of social, political, diplomatic, and military contexts of the time. It modified its end-state twice, from secession to constitutional recognition between 2000 and 2005, and after that to democratic autonomy. By doing so, the PKK's political effort outweighed the military, focused on a political campaign complemented by military tools. After its failure to obtain international recognition in the European setting, the PKK started to apply a bottom-up approach (contrary to its top-down military effort in the initial years). Notably, with the creation of the KCK, in which its military objective was to make costly signaling to coerce Turkey into a negotiated settlement. Within this framework, the PKK shifted from attrition of the Turkish security forces to moral exhaustion of the governmental authority, targeting Turkey's will to fight by conducting reactionary and sensational terrorist attacks in both rural and urban settings. This was a more aligned structure given PKK's end-state(s), its grand strategy of out-administering through de facto socio-political events, and supplementing it with low-intensity terror attacks to undermine the government's will.

The PKK's will-oriented campaign to consolidate political compromise by employing low-intensity terrorist attacks to incur a costly signaling and aligned social events was

reciprocated by Turkey. The state perceived the hurting stalemate that resulted with two consecutive resolution attempts in the succeeding phases. Overall, the PKK embraced new strategies to adapt to the shifting security environments and by employing the strategy of exhaustion (costly signaling), it managed to keep its threat level up and to remain at the forefront of the Government's agenda in hope to coerce the government to move towards a negotiated settlement.

In small wars, as in the Turkey-PKK conflict, the first military victory does not yield a clear-cut decisive victory even on the battlefield after a semi-confrontational guerilla fight. A military defeat of the VNSA/inferior/insurgent might not produce their total surrender, withdrawal or capitulation. Mostly, what they do is shift to more asymmetrical and indirect strategies once they acknowledge their military defeat in a direct fight against the state forces. Mandel calls this "limited victory" (2006, p. 29). Robert Mandel sees the difference between total and limited wars through the lenses of motives, strategy, and tactics. Total war requires decisive triumph in which the adversary is eliminated, extinguished, and vanquished, and the victor seeks dominance over the enemy by almost every means. Limited small wars, however, do not know such a victory. Thus, the state must resort to using military forces and diplomatic instruments in a grand strategic bargaining game to reach a more strategic victory encompassing political, social, economic, diplomatic, and psychological domains and make a positive impact on the adversary and related civilian population.

Limited war corollary entails the limited use of the military for directly related limited political aims that then require a subtler and comprehensive way of looking at victory and its strategic nature. The previous, because the enemy's destruction cannot be fully achieved because of the asymmetric nature of the conflict even in the initial (decisive, confrontational) phase. In subsequent phases of a conflict, this subtleness critically increases due to the shifts and moves of the inferior into other critical domains, determining the legitimacy and related popular support for the insurrection. These two main phases are the most important milestones of intrastate conflict, implying that the later phase is to be divorced from the military result by the winning states. In the second phase, a gradual transformation of the conflict into a non-violent dissent finally leads toward a meaningful concession culminated in a sustained peace via negotiated settlement as a viable and feasible exit strategy at both levels, individual and organizational. Therefore, the *strategic victory* –as called lately– entails the use of military triumph on a battlefield to be used as an instrument for durable post-war stability (Mandel, 2006). Strategic victory requires considerable time because the solutions to the political, social, and psychological ramifications of a conflict may take years after the military contest's finite ending (Albert & Luck, 1980, pp. 3, 5).

Given the two phases, prematurely assessing the outcome of war can be misleading. In most small war practices, states delve into the first phase and get caught up with its short-term results. War-winning has been pursued using unilateral military means, insist-

ing incorrectly and paradoxically on the military solution as the sole resort to bring peaceful political results. Thus, the inevitable end state of a military win has led states' political aims to be governed by their military. More importantly, military win has been regarded as an end, not a means or instrument to an end (Mandel, 2006). In the end, victory does not happen upon one side's suppression or subversion of the other, even if the shooting stops briefly in the war-winning phase of a conflict. States have to think about the socio-political domains and plan carefully to use the military triumph in the socio-political context for an enduring peaceful end. Battlefield victories are never enough to eradicate an insurrection; they are just a turning point for the inferior party of the conflict to shift to an asymmetric and indirect fight to survive.

Who defines victory and based on what?

The concept of victory is contentious and inconclusive. Generally, the outcome of a conflict is mostly judged based on the outcome of what happened on the battlefield rather than its political, cultural, and psychological ramifications and factors (Johnson & Tierney, 2007, pp. 47-48). Johnson and Tierney (2006, p. 46) point out that the concept is heavily influenced by psychological and informational biases that make it open to perception and manipulation. Griffin succinctly concurs by stating that “[W]hat constitutes “victory” and who defines “victory” can remain fluid and this is especially true in COIN.” The understanding of victory stems from pre-existing beliefs, certain symbolic events, and even more so, from manipulations used by the political or ruling elites and media. Popular support on either side is a determinant for the future of the conflict because it mirrors the perceived legitimacy of these actions. Legitimacy is again mostly based on perception and influenced by the psychology of war. What is critical in the perception of conflicts is that as Feaver and Gelpi (2005, p. 149) rightly note, the public is defeat phobic, not casualty phobic. Thus, the framing of the conflict in a particular way in the media and political discourses plays an important role. Johnson and Tierney (2007, p. 51) argue that two frameworks explain the perception of victory in conflicts, one is scorekeeping, and the other is match-fixing. While the former denotes victory by material gains and losses, such as casualties and territorial control, the latter, judges victory based on psychological and informational biases, irrespective of the concrete results on the battlefield. Scorekeeping is what states typically resort to in seeking popular support from mainstream society (not from the pro-insurgency strategic population) for their policies and countermeasures toward the conflict. The perception of victory is drawn by relying on social pressure, certain pre-existing mindsets, and symbolic events. Most coding measures on victory rely upon the military understanding of victory, which critically disregards how military outcomes are tied with or should be tied to politically advantageous results.

In other words, the focus is mostly on scorekeeping in casualties and frequency of violent events to gauge outcomes of conflicts and small wars. Jan Angstrom (2011)

summarized the US perception of victory during the Bush administration and provides the following five measures of success: casualty figures, control of territory, frequency of terrorist acts, the spread of weapons of mass destruction, and spread of democracy. She argues that the United States Government has a somewhat ambivalent view of victory for the War on Terror campaign. The same ambivalence applies to the PKK case. The numbers of incapacitated insurgent members did not serve as a panacea to reduce the PKK insurrection, let alone eradicate it. As shown in Table 3, according to the official government figures, a total of 42,230 PKK armed militants have been incapacitated in one way or another (killed, injured, or captured) during the conflict (1984-2018); another 7,146 were surrendered to security forces. According to Angstrom (2011), state officials continue to brag about killed terrorists in official state jargon and reflect upon populist dictum, saying that the counterterrorism efforts will continue until no terrorist remain. “Until no terrorist remains” has turned into a motto in state officials’ statements. As Feaver and Gelpi (2005) have rightfully noted, the public may display defeat phobia but not casualty phobia. In Griffin’s (2014) words, states tend to embrace match-fixing or scorekeeping (headcount) rather than a meaningful determination of success based on a viable, comprehensive approach inclusive of social (popular support, such as vote casting), psychological (legitimacy), economic, and political indicators in their COIN efforts. The same is true for the Turkey-PKK conflict.

Table 3. Killed, injured, captured, and surrendered PKK members (1984-2018)

INCAPACITATED PKK MILITANTS		
PKK's armed militants	Killed	Injured
Total casualty (killed and injured): 34,128		
PKK's armed militants	Surrendered/ Capitulated	Captured (Alive)
	7,146	8,102
Total incapacitated (killed, injured, and captured): 42,230		

Source: Prepared by the authors

Additionally, when it comes to limited wars, victory rarely means the end of a conflict. Johnson and Tierney (2006) show how victory is far from being a clear-cut military outcome. They argue that determining a winner and loser of war is an important and, equally, straightforward query. However, choosing a winner and loser based on net losses and gains is not clear cut and conclusive issue; even more so in intra-state conflicts. As mentioned above, an insurgent might have been subject to a military defeat, but as time

goes by, longevity works in its favor. An insurgent's resilience is an indication of a states' failure and, thus, the success of an insurgent despite its military defeat. The process in which immediate victory can turn into a defeat is the very reason for states to have a grand strategic campaign at a political level, covering different domains in which the military force is supposed to be used only as a tool (i.e., instrumentality of war) that is deployed discriminately, carefully and proportionately.

The assessment of a conflict's outcome is intricate for two reasons: one's understanding of when the conflict ends, and one's perception of the outcome are not univocal. Either short or long-term assessments could be problematic in assessing the outcome of the war. Orr (2003, p. 8) argues that wars develop and are won or lost in two phases. The first phase is the "military outcomes on the field of battle," the second phase happens "through reconstruction and reconciliation" after the battle. "What is won on the battlefield can be lost entirely thereafter if the countries attacked are not turned into better and safer places" (Orr, 2003, p. 8). Mandel (2006, p. 19) calls this first phase "war-winning"; he also calls it the confrontation (decisive) phase, in which parties to war strive to bring about a military conclusion to the war. Mandel names the next phase, "peace winning." While war-winning is mostly comprised of military effort that results in the destruction of the enemy's main forces and eliminating or considerably limiting the enemy's future war-making potentials. The previous entails a comprehensive approach including the political, social, economic, diplomatic, informational, and military domains of a conflict, which are related directly and indirectly, and important aspects to be sorted out for a strategic victory of peace winning. Turkey's peace attempt in the PKK conflict and its failure can be considered as a failure of "winning peace," neglecting the importance of a political conflict resolution after the initial military defeat. In other words, Turkey failed to convert its military defeat against the PKK into a political gain. What is more, disregarding the need for reconstruction and reconciliation following the successful first phase, did not only prevent a long-term resolution, it diminished the importance of the military win altogether. Violence and the number of casualties caused by the PKK (see Figure 10) reached peaking points several times (in 2007, 2011-2013, and 2015) after the declaration of the military victory. The critical understanding of all limited wars, so far, has been that winning a war does not earn winning the peace out of it. In these kinds of civil wars, winning war here denotes the victory in military terms, winning the peace is to be in political terms because winning the peace does not equate with the absence of war or violent strife (Duyvesteyn, 2006).

The dynamics of limited wars and military victory in an intra-state context

The assessment of victory is subjective. Particularity defines intra-state conflict. Insurgents are generally materially weaker than the state military power they are fighting. However, it has been noted that they are politically more determined, mainly because with the in-

surgency, their whole existence is at stake. In the home-grown small wars in an intra-state context, for the external power, the war is “limited.” For the insurgent of the intra-state context, on the other hand, the war is “total.” This explains the initial overreaction in the intra-state conflicts, the use of harsh military power, the leading role of the military in states’ countering efforts and thus also forgetting or not tailing a political aim to the small wars in the intrastate context. What keeps states from being narrow-minded in seeking decisive military results in the first confrontation phase of small wars originates from this “total war” syndrome or the state’s perceived threat of its existence. On the other hand, what explains the resilience of insurgents is the superior political will to fight or as Jeffrey Record notes (2007, p. 17) “the superior strength of commitment (...) [that] compensates for military inferiority.” In the end, the outcome of war is and will never be as vital for the external state powers as it is for the insurgents and internal states targeted by the insurgents –within the intra-state context.

Temporality complicates the outcome of war even further. The longevity, resistance, and delay favor the weak because the guerrilla can win by simply not losing while the state can lose simply by not winning. Andrew Mack (1975), Ivan Arreguin-Toft (2001), and Gil Merom (2003) offer significant insights on how and why the superior loses to the inferior by underlining the dynamics of strategic interaction and the democratic states’ vulnerability to carefully designed and adequately conducted irregular warfare. Jeffrey Record argues that the inferior’s superior political resolve will not be enough by itself to win without substantial external support that would alter the power relations (2007, p. 22). While a decisive military victory might be possible within the confrontation phase by unilateral military means, the overall victory and success in small wars, particularly in the intrastate context, does not determine the outcome for the later phases. Because a victory is a subjective category, most decisive military victories seen and perceived at the time might result in failure later, as analyzed in the case of Turkey’s prolonged struggle against the PKK and the PKK’s decades of resilience.

As Carl von Clausewitz pointed out, the notion of victory is comprised of three main elements: “the enemy’s greater loss of material strength, his loss of morale, [and] his open admission of the above by giving up his intentions” (1976, p. 277). The last one has become critical after the second World War when most wars have become limited. In these conflicts, the enemy has experienced the loss of material strength and morale in a direct confrontational fight, but they have never given up their intentions. Thus, Clausewitzian dictum of war as “an act of force to compel our enemy to do our will” (1976, p. 83) became more valid and the center of gravity about the nature of victory in winning small wars since the start of the twenty-first century. As the insurgents’ focuses on diminishing the states’ will to fight instead of their capacity, by exploiting all dimensions of asymmetric warfare and resorting to terror, this dictum implies that insurgents’ will to fight is a strategic aim to serve a viable political end-state designated by the state. While the use of force remains the central element of the war-winning strategy, the decisive battlefield victory (which is the central issue for Clausewitz) is what has been changed.

Military triumph has had limited relevance for concluding wars and reaching victory in the process of winning peace for civil wars of the post-1945 period.

The perspective on the outcome affects the understanding of what happened just as much. Who is assessing, the state or the insurgent leader? Is it based on the perception of the state's public or the non-state actor's public? Or is the evaluation offered by outsiders as neutral representatives of the international community? The defeated party's perception is of particular importance because their support of the inferior determines the survival and longevity of the insurgency. The war is over when the defeated side accepts the loss and submits to the winner's demands. This requires the recognition of the military outcome in the battlefield and openness to internalize it at the socio-political level. However, Metz and Millen (2003) have recognized an enigma behind the process of the recognition of defeat. They suggest that insurgencies, unlike traditional adversaries, seek and perceive victory by surviving (avoiding defeat). This avoidance of defeat shifts the main context of the conflict from direct to indirect means and targets, from rural to rural-urban conflict, from pure military confrontation against guerrilla fighting to embracing terror as a method of conflict, and so forth (Mandel, 2006). This is what happened precisely concerning the PKK's prolonged resilience and survival in which, as previously analyzed, the characteristics of violence and the nature of the PKK has changed. While PKK violence was initially more direct, PKK attacks revealed more indirect targets given the location, target status, and type of incidents. Therefore, the PKK's resilience over four decades and its continuing ability to employ violence at a level to politically hurt the Turkish state's legitimate authority (monopoly of violence) can be considered a success despite its military defeat in the mid-90s. As a result, as Robert Mandel (2006, p. 17) notes, insurgents can "easily label military defeat as political victory – with credibility in the eyes of regional onlookers—as they can label terrorists as freedom fighters."

Understanding victory as a military solution to a conflict renders the concept too flexible and vague. Thus, as Carl von Clausewitz, underlines in many accounts, wars ought to be fought to achieve political goals. Victory now has to be split into two: one is "military (credibility and resolve)" being capacity-related and the other is political being (accommodation and exit path), related with the "will to fight." If, as Thomas C. Schelling (1980) argued, the concept of victory inadequately expresses what a nation wants from its military forces, the concept has to be rethought and possibly, as we propose in this paper, substituted with another more coherent concept. Success is proper in this context for three reasons. First of all, victory stops with the military win and does not mark the end of the conflict. Success, on the other hand, indicates not a military but a political solution to a political problem with social and psychological ramifications. Second of all, success is not subjective and one-sided. It shifts the perception from one-sided victory to a favorable outcome for all parties involved. Third of all, since outcomes in COIN, are inconclusive, not binary, simply a victory or a defeat, success, as an improved understanding of war outcomes, could enable more effective long-term conflict termination.

Conclusion

With the end of the cold war –and the onset of the new risks from global terrorism– policymakers and scholars must now consciously decide what it means to achieve victory, what level of military victory is desired, what changes victory should or must bring, and what costs of war are acceptable, both for the victor and the vanquished (Mandel, 2006). Another vital issue in intrastate conflicts is to clearly understand the insurgent's perception of victory in order to design sound responses with relevant strategies in political and military terms. The problem here is the one this paper is trying to address –the lack of a formal theory of victory and the absence of an analytical concept to operationalize it.

The accepted understanding of the concept defines victory as a momentum when (1) a loser's war-making military capability is dramatically eliminated; (2) the loser, as the vanquished party, accepts the terms that the victor imposes through a formal surrender agreement, and (3) the victor possesses the monopoly of use of force (armed strength) (Kecskemeti, 1958, p. 5). However, the classic notion of victory in contemporary small wars has been an exception rather than a rule. This is due to the changing nature and forms of these conflicts. In intra-state conflicts, it does not come to the coerced formal capitulation of the insurgents as a whole. After the military victory, the insurgents begin to go deeper underground, camouflage, and blend into a non-combatant civilian society by shifting the space of the conflict. They might start targeting symbolic and indirect targets to hurt the enemy's political vulnerabilities and engaging in socio-political activities by shifting the domain of the conflict. In so doing, the insurgent's main aim is to survive and sustain their campaign. At the same time, they provoke the state's overreaction to gain legitimacy for their cause and thus widen their support base. With the growing legitimacy, they gain popular support, both passive and active, as well as group solidarity and political resilience.

Therefore, the core notion of victory has changed, and with it, the current understanding of victory should shift towards the influence over the enemy. This change of the core notion of victory becomes evident in asymmetric wars between a state and an insurgency as a non-state actor, in which the stronger party (the state) as the winner in a contemporary battle fight needs to incur strategic effect to make or manipulate the insurgent to agree on a viable political end result. In short, for small intra-state wars, a classic notion of total victory fails, because military successes in intra-state conflicts do not result in formal surrender. The usage of the concept victory is thus not appropriate for either military or strategic wins.

This paper claims that the use of “success” is more proper in this context for three reasons. First of all, it indicates not a military but a political solution to a political problem with social and psychological ramifications despite its bitter manifestations in violence as an ostensible security problem.

Second, the use of victory in political discourses connotes a strong power relation between the two groups partaking in the process that defines one as a winner and the other as a loser. Because the main aim of COIN should be restoring governmental (legitimate) authority in the insurgent areas, labeling the end of the COIN campaign as a success, instead of victory, shifts the perception of the campaign from one-sided victory, designating the insurgents as losers, to a favorable outcome for all the parties involved.

Third, the outcome of a war in COIN is never a mutually exclusive binary, either victory or defeat. Once insurgencies resort to asymmetrical warfare and use terror as a method, the counterinsurgent shall have to understand it as a strategy used to produce and design a viable counter-strategy within a broader socio-political campaign and a meaningful end-state. As Angstrom (2011, p. 4) notes, improved understanding of war outcomes, particularly for small wars, could enable more effective war termination in the long run because a flawed and unsustainable peace would result in the recurrence of violence or a new war. Thus, states need to prioritize war termination strategically, executed as a success because this way, the termination is more likely to lead towards sustainable peace.

Disclaimer

The authors do not declare any conflict of interest concerning this article.

Funding

The authors do not declare any source of funding for this article.

About the authors

Mustafa Coşar Ünal has a PhD in Public Policy and Administration from the University of Maryland. A graduate and undergraduate professor on terrorism, intelligence, security, and public policy in universities, including Bilkent University, Gazi University, NATO/Center of Excellence – Defense Against Terrorism, and the Turkish National Police Academy's Security Science Institute. His research includes terrorism and political violence, asymmetric conflict, conflict management/resolution, insurgency, counterinsurgency, counterterrorism, COIN doctrines and strategies, intelligence, and national security.
<https://orcid.org/0000-0001-8671-9574> - contact: cosar.unal@bilkent.edu.tr

Petra Cafnik Uludağ completed her PhD in Political Science at Bilkent University. Her research focuses on the interaction of politics and media particularly on the politics of othering, social and political movements, and practices of nationalism. She has an M.A. from the University of Nova Gorica, department of Intercultural Studies, and a B.A. from the University of Maribor, department of Media Communication.

<https://orcid.org/0000-0002-3110-8706> - contact: petra@bilkent.edu.edu.tr

References

- Albert, S., & Luck, E. C. (Eds.). (1980). *On the endings of wars*. Port Washington, NY: Kennikat Press.
- Angstrom, J. (2011). Mapping the competing historical analogies of the War on Terrorism: The Bush presidency. *International Relations*, 25(2), 224-242.
- Arreguin-Toft, I. (2001). How the weak win wars: A theory of asymmetric conflict. *International security*, 26(1), 93-128.
- Baldwin, D. A. (2016). *Power and international relations: A conceptual approach*. Princeton: Princeton University Press.
- Bulut, E. (2014). *A checkmate, not a stalemate: Turkey versus the PKK* (Doctoral dissertation). Monterey, California: Naval Postgraduate School.
- Callwell, C. E. (2013). *Small wars: Their principles and practices*. USA: University of Nebraska.
- Crenshaw, M. (2007). The logic of terrorism. *Terrorism in perspective*, 24, 24-33.
- Dupuy, K., & Rustad, S. A. (2018). Trends in Armed Conflict, 1946–2017. *Conflict Trends*, 5, 2018.
- Duyvesteyn, I. (2006). Paradoxes of the strategy of terrorism. In J. Angstrom, & I. Duyvesteyn (Eds.), *Understanding victory and defeat in contemporary war* (pp. 135-159). NY: Routledge.
- Feaver, P. D., & Gelpi, C. (2005). *Choosing your battles: American civil-military relations and the use of force*. Princeton: Princeton University Press.
- Fortna, V. P. (2018). *Peace time: Cease-fire agreements and the durability of peace*. Princeton: Princeton University Press.
- Galula, D. (2005). *Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice*. USA: PSI Classics of the Counterinsurgency Era.
- Gleditsch, N. P., Wallensteen, P., Eriksson, M., Sollenberg, M., & Strand, H. (2002). Armed conflict 1946–2001: A new dataset. *Journal of peace research*, 39(5), 615-637.
- Gray, C. S. (2007). *Irregular warfare: One nature, many characters*. United Kingdom: Reading University.
- Griffin, M. C. (2014). *Rethinking victory in counterinsurgency*. Carlisle, Pennsylvania: United States Army War College Press.
- Gürcan, M., & Ünal, M. C. (2018). Reaching a balance of resolve: the enduring conflict between Turkey and the PKK. In E. Lieberman (Ed.), *Deterring Terrorism: A model for strategic deterrence* (pp. 193-230). NY: Routledge.
- Gürcan, M. (2015). Arming civilians as a counterterror strategy: The case of the village guard system in Turkey. *Dynamics of Asymmetric Conflict*, 8(1), 1-22.
- Harbom, L., & Wallensteen, P. (2005). Armed conflict and its international dimensions, 1946-2004. *Journal of Peace Research*, 42(5), 623-635.
- Hartzell, C. A. (1999). Explaining the stability of negotiated settlements to intrastate wars. *Journal of Conflict Resolution*, 43(1), 3-22.
- In 1994, there could be either political or military solution. (1994, April). *Serxwebun, 148*. Retrieved from <https://docplayer.biz.tr/4016603-Ji-serxwebun-u-azadiye-bi-rumettir-tistek-nine-yil-13-sayi-148-nisan-1994-4-dm-1994-yilinda-siyasi-cozum-de-askeri-cozum-de-olabilir.html>
- International Crisis Group ICG. (2016) Turkey's PKK conflict: The rising toll. Retrieved from <http://www.crisisgroup.be/interactives/turkey/>
- Johnson, D. D., & Tierney, D. (2006). *Failing to win: Perceptions of victory and defeat in international politics*. USA: Harvard University Press.
- Kayhan Pusane, Ö. (2015). Turkey's military victory over the PKK and its failure to end the PKK insurgency. *Middle Eastern Studies*, 51(5), 727-741.
- Kecskemeti, P. (1958). *Strategic surrender. The politics of victory and defeat*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

- Kitson, F. (1977). *Bunch of five*. London: Faber.
- Kocher, M. (2007). The decline of PKK and the viability of a one-state solution in Turkey. *International Journal on Multicultural Societies*, 4(1), 1-20.
- Kydd, A. H., & Walter, B. F. (2006). The strategies of terrorism. *International security*, 31(1), 49-80.
- Licklider, R. (1995). The consequences of negotiated settlements in civil wars, 1945-1993. *American Political Science Review*, 89(3), 681-690.
- Mack, A. (1975). Why big nations lose small wars: The politics of asymmetric conflict. *World Politics*, 27(2), 175-200.
- Mandel, R. (2006). Defining postwar victory. In J. Angstrom, & I. Duyvesteyn (Eds.), *Understanding victory and defeat in contemporary war* (pp. 31-63). NY: Routledge.
- Merom, G. (2003). *How democracies lose small wars: State, society, and the failures of France in Algeria, Israel in Lebanon, and the United States in Vietnam*. UK: Cambridge University Press.
- Metz, S., & Millen, R. (2003). *Future war/future battlespace: The strategic role of American landpower*. Carlisle Barracks PA: Army War College Strategic Studies Institute.
- Öcalan, A. (1978). *Kürdistan Devriminin Yolu (Manifesto)*. Köln: Weşanê serxwebûn.
- Öcalan's letter on peace between Turkey and the PKK. (2013, March 22). *Euronews*. Retrieved from <https://tr.euronews.com/2013/03/22/abdullah-ocalan-in-mektubunun-tam-metni>
- Orr, R. C. (2003). How to win the peace: After the war, bring in a civilian force. *The New York Times*. Retrieved from <https://www.nytimes.com/2003/04/03/opinion/IHT-how-to-win-the-peace-after-the-war-bring-in-a-civilian-force.html>
- Rapoport, D. C. (2004). The four waves of modern terrorism. In A. K. Cronin, & J. M. Ludes (Eds.), *Attacking terrorism: Elements of a grand strategy* (pp. 46-73). Washington DC: Georgetown University Press.
- Record, J. (2007). *Beating Goliath: why insurgencies win*. Washington DC: Potomac Books.
- Reiter, D., & Stam, A. C. (2002). *Democracies at war*. Princeton: Princeton University Press.
- Romano, D. (2015). Iraqi Kurdistan and Turkey: Temporary marriage? *Middle East Policy*, 22(1), 89-101.
- Sarkées, M. R., Wayman, F. W., & Singer, J. D. (2003). Inter-state, intra-state, and extra-state wars: A comprehensive look at their distribution over time, 1816-1997. *International Studies Quarterly*, 47(1), 49-70.
- Schelling, T. C. (1980). *The strategy of conflict*. Harvard: Harvard University Press.
- Taydas, Z. (2006). *Determinants of civil wars: A quantitative analysis* (Doctoral dissertation). University of Missouri, Columbia.
- Terror results for 265 days. (2016, March 28). *Milliyet News*. Retrieved from <http://www.milliyet.com.tr/tsk-bilancoyu-acikladi-4-bin-432-gundem-2217174/>
- Ünal, M. C. (2011). The dichotomy in the perception, conception and the response to terrorism: the case of the PKK. *Counter Terrorism in Diverse Communities* (pp. 268-281) [Ios Press Ebooks]. 10.3233/978-1-60750-970-7-268
- Ünal, M. C. (2012a). *Counterterrorism in Turkey: Policy choices and policy effects toward the Kurdistan workers' party (PKK)*. NY: Routledge.
- Ünal, M. C. (2012b). The Kurdistan Workers' Party (PKK) and popular support: counterterrorism towards an insurgency nature. *Small Wars & Insurgencies*, 23(3), 432-455.
- Ünal, M. C. (2014). Strategist or Pragmatist: A Challenging Look at Ocalan's Retrospective Classification and Definition of PKK's Strategic Periods Between 1973 and 2012. *Terrorism and Political Violence*, 26(3), 419-448.
- Ünal, M. C. (2016a). Is it ripe yet? Resolving Turkey's 30 years of conflict with the PKK. *Turkish Studies*, 17(1), 91-125.

- Ünal, M. C. (2016b). Opening a door for return to home: impact and effectiveness of Turkish repentance laws. *Studies in Conflict & Terrorism*, 39(2), 128-164.
- Ünal, M. C. (2016c). Terrorism versus insurgency: a conceptual analysis. *Crime, Law and Social Change*, 66(1), 21-57.
- Ünal, M. C. (2016d). Counterinsurgency and military strategy: An analysis of the Turkish Army's COIN strategies/doctrines. *Military Operations Research*, 21(1), 55-88.
- Ünal, M. C., & Harmancı, F. M. (2016). Turkey's struggle with the Kurdish question: roots, evolution, and changing national, regional, and international contexts. In A. Dawood (Ed.), *Eradicating terrorism from the Middle East* (pp. 293-265). Scranton PA: Springer.
- Von Clausewitz, C. (1976). *On war*. Princeton, NJ: Princeton University Press.



Revista Científica General José María Córdova

(Colombian Journal of Military and Strategic Studies)

Bogotá D.C., Colombia

Volume 17, Number 28, October-December 2019, pp. 923-938

<http://dx.doi.org/10.21830/19006586.523>

How insurgencies end: The quest for government victory

Cómo terminan las insurgencias: en busca de la victoria del gobierno

Spyridon Plakoudas

Rabdan Academy, United Arab Emirates

ABSTRACT. Insurgency is currently the most prevalent type of war. However, success in irregular warfare cannot be quantified and measured with absolute certainty. This paper will examine how insurgencies end and how a government can achieve the optimum scenario, military victory. An insurgency could end in three possible ways: a (military) victory for the insurgents or the regime, a peace deal, or a stalemate. However, war constantly evolves; therefore, the above three scenarios can manifest at any time during the course of an insurgency. Therefore, the state should use a balanced mix of reforms and repression. A state must implement a situation-dependent policy that includes good governance and outside support, that ensures the welfare and security of the population, buttressed by an adequate narrative.

KEYWORDS: counterinsurgency strategy; enemy-centric; military victory; peace settlement; population centric; stalemate

RESUMEN. Actualmente, la insurgencia es el tipo de guerra más frecuente. Sin embargo, el éxito en la guerra irregular no puede cuantificarse y medirse con absoluta certeza. Este documento examina cómo terminan las insurgencias y cómo un gobierno puede lograr el escenario óptimo: la victoria militar. Una insurgencia podría terminar de tres maneras: una victoria (militar) para los insurgentes o el régimen, un acuerdo de paz o un estancamiento. La guerra, no obstante, evoluciona constantemente; por lo tanto, los tres escenarios anteriores pueden manifestarse durante el curso de una insurgencia. En consecuencia, el Estado debe implementar una mezcla equilibrada de reformas y represión: una política dependiente de la situación, que incluya una gobernanza justa y apoyo externo, que garantice el bienestar y la seguridad de la población y que sea respaldada por una narrativa adecuada.

PALABRAS CLAVE: acuerdo de paz; centrado en el enemigo; centrado en la población; estancamiento; estrategia de contrainsurgencia; victoria militar

Section: DOSSIER • Scientific and technological research article

Received: July 4, 2019 • Accepted: September 12, 2019

CONTACT: Spyridon Plakoudas ✉ spyridon.plakoudas@aue.ae

Introduction

At the dawn of the 21st century, insurgency (a variant of irregular warfare) undoubtedly represents the most prevalent type of war (Themnér & Wallensteen, 2013, pp. 509-521). Indeed, the last conventional war was recorded in 2008 between Russia and Georgia. Except for uninhabited Antarctica, every other continent of the world is currently plagued with insurgencies –even in Oceania where a low-intensity insurgency rages in Papua New Guinea since 1962 (Rabasa & Haseman, 2002a, pp. 106-112)¹. However, the vast majority of these insurgencies are not new; they appeared many years ago, and several of them will not end anytime soon.

Because of their nature as protracted intra-state conflicts, in modern times, these wars often demonstrate an unhappy record of intense polarization and indiscriminate violence among the civilian population of a country (or a particular region of the country) (Kalyvas, 2006; Zhukov, 2014). The invasion of Iraq (the conventional war between Iraq and the US-led coalition), for example, lasted 1.5 months at the cost of 13,500 dead amongst the Iraqi Armed Forces whereas the subsequent civil war in Iraq (the insurgency) ended (partially) after 8 years at a cost of over 200,000 dead (or as high as 655,000 fatalities according to other estimates) amongst the civilian population of Iraq. This country still reels from the war against ISIS (2014-2019) (Benjamin & Davies, 2018).

Unsurprisingly, policymakers, and scholars around the world debate how this type of war ends, when and why. This paper will examine how insurgencies end and how a government can achieve the *optimum scenario* of military victory.

How insurgencies end

An insurgency could end in three possible ways: a) a (military) victory for the insurgents or the regime (e.g., the defeat of the Tamil Tigers in Sri Lanka in 2009), b) a peace deal (e.g., the Good Friday Agreement between Britain and the IRA in Northern Ireland in 1998), and c) a stalemate (e.g., the deadlock in the War in Donbass since 2015) (Connable, Libicki, 2010, pp. 13-20).

Military victory

The issue of military victory in irregular warfare has always puzzled scholars and policy-makers, mainly, how can a military victory be defined accurately? Despite repeated efforts (Jones, 2006; Clancy & Crosset, 2007, pp. 88-100; Campbell, O'Hanlon & Shapiro, 2009), success in irregular warfare cannot be quantified and measured with absolute certainty as in positive sciences. Insurgency amounts to one of the most “elastic types of war in terms of defeat” because space and time allow the insurgents to regroup and reclaim any lost ground (Kiras, 2008, pp. 229-232).

1 For additional information on this largely unknown conflict, see Rabasa & Haseman (2002b).

Victory for the insurgents can be either partial or complete, *partial* if the insurgents achieve only a part of their political objectives (often via a propitious peace settlement), and *complete* if they accomplish their mission in full (e.g., overthrow of a government or expulsion of the foreign invaders) (Paul, Clarke & Grill, 2010, pp. xiii-xiv; Connable, Libicki, 2010, pp. 14-20). The Mujahedeen in Afghanistan, for example, attained their primary objective (i.e., the withdrawal of the Red Army) when the Kremlin abandoned the communist regime in Kabul in 1989, whereas the Kurds of Iraq achieved a partial victory when in 1970 they acceded to a short-lived peace treaty (null and void just 4 years later). The insurgents usually require 5 (maximum 9) years to overwhelm a government, whereas a government requires between 12 and 15 years to overcome an insurgency (Gorka, Kilcullen, 2011, p. 17).

Though the odds do not favor the insurgents, according to a survey of modern wars (Kilcullen, 2012, pp. 128-153), their victories meet more considerable publicity than their defeats. Whenever an “underdog” defeats its (far more powerful) opponent in this “war of the flea” (Taber, 2002)², this automatically generates “big headlines” (Mack, 1975, pp. 199-200; Arreguin-Toft, 2005).³ Indicatively, the USA defeat in Vietnam overshadowed the victory of the Philippines (with the support of the USA) over the Huk Rebellion in 1954. On the other side of the spectrum, how can victory for the counter-insurgents be measured? The return to the status quo antebellum appears to be rather unlikely in such type of wars (Beckett, 2007, p. 82). Victory for a government could manifest in three forms: *total victory* (i.e., the elimination of the insurgency), *temporary victory* (i.e., the defeat but not complete destruction of the insurgency), and *sufficient victory* (i.e., the temporary neutralization of the insurgents’ military capacity) (Amidror, 2010, pp. 1-42). The rout of the Tamil Tigers in Sri Lanka in 2009 is a standard case of a total victory, the defeat of the PKK by Turkey in 1999 is a typical case of a temporary victory, and the victories of Israel over Hamas since 2008 are representative cases of a sufficient victory.

Peace settlements

A peace settlement represents another exit strategy for belligerents in such wars. Quite naturally, such an option carries both risks and opportunities. Whenever a government agrees to initiate a dialogue with a militant group, the legitimacy of the latter is upgraded, and the former’s (conversely) undermined. Thus, the negotiations could potentially backfire for the government, the public opinion could punish these politicians in the ballot box, or the diehards amongst the military could even overthrow the government amid allegations for “treason.” Conversely, such negotiations can be utilized by insurgents to either exact concessions from an ostensibly “weakened government” or just “buy time”

2 The term is borrowed from the title of Robert Taber’s seminal book on insurgency, *War of the Flea: The Classic Study of Guerrilla Warfare*.

3 For example, see Mack (1975, pp. 199-200); Arreguin-Toft, I. (2005).

(especially after adverse developments in battle or other domains) and continue the armed struggle after a (free of enemy pressure) recovery (Byman, 2009, p. 129; Bernstein, 2012, p. 31; Duyvesteyn & Schuurman, 2011, pp. 679-679). The ultimate prize, however, renders the entire (risky) effort worthwhile. Negotiations (in good faith) could reinforce the hand of the “peace doves” versus the “hardliners” within the militant leadership and, thus open the way to a permanent cease in hostilities (Johnston, 2007, pp. 559-577; Byman, 2009, pp. 127-128).

But, how do such talks start in the first place? Usually, failures on the field of battle or transitions in the leadership (i.e., the rise to power of “peace doves”), for both belligerents, act as triggers for the initiation (or acceleration) of a peace process (Zartman, 1995, pp. 16-19). A “shock incident” (i.e., a catastrophic event such as the collapse of an external ally) (Pruitt, 2005, p. 4) and a “mutually hurting stalemate” (i.e., a deadlock in military terms) could create a “period of ripeness” (Zartman, 2001, pp. 8-18), a propitious situation for negotiations between the two sides. The mediation of an internal or external actor (mutually accepted as an “honest broker”) can, quite often, contribute positively to a peace process (Henry, 2006, pp. 60-71; Call, Cousens, 2008, pp. 1-21). As a rule of thumb, the longer an irregular conflict drags on, the bigger the prospects of a peace settlement of any variation (Mason, Weingarten & Fett, 1999, pp. 239-268).

Such negotiations can be a minefield. Often, the regime does not possess accurate information about the (actual) intentions of the rebels (*information asymmetry*) (Walter, 2013, pp. 664-665) and, by extension, their genuine willingness for peace; nor can the regime easily identify the party or person that can act as a reliable “spokesman” for the rebels (*delegation issue*) (Zartman, 1993, pp. 25-27; 1995 Ibid, p. 10). However, even when negotiations commence despite the above obstacles, the two sides cannot easily and completely reconcile their contradictory claims over a mutually sought-after prize (*divisibility issues*); for example, the possession of a specific city or territory (Walter, 2013; pp. 659-660; Plakoudas, 2017, p. 159).⁴ Often, hard-line factions among one or both sides act as *spoilers* and undermine the peace talks with their provocations (Stedman, 1997, pp. 5-53; Greenhill, Major, 2006-2007, pp. 6-40).

The most significant obstacle to peace, however, is the reluctance of both sides to *honestly commit* to a peace process –especially if the war, violence, and polarization have reached notoriously high levels or one side has reneged on its promises in previous times (Walter, 1999, pp. 127-155; Mattes, Savun, 2009, pp. 737-759). Therefore, it is fairly common practice for both sides (and usually, the insurgents) to continue their operations on a low tempo in order to dictate new favorable terms for a peace settlement or compel their adversary to abide by the roadmap for peace (Wagner, 2000, pp. 464-484; Reiter, 2003; pp. 27-43; Henry, 2006, pp. 60-71). However, the danger of an unwanted escalation and eventual collapse of negotiations from such operations is evident. A remedy to

⁴ See also Plakoudas (2017).

that problem would be a roadmap for peace with clear-cut power-sharing clauses guaranteed by a third (mutually-accepted) party (Walter, 2002, p. 92; Hartzell & Hoddie, 2003, pp. 318-332).

Since the 1980s, a pattern can be easily discerned. Before the 1980s, the majority of irregular wars were decided on the battlefield; most of them are now settled at the negotiation table (Licklider, 1995, pp. 681-690; Duyvesteyn & Schuurman, 2011, p. 667). The record, so far, is quite varied: 12% of the insurgencies ended through negotiations in favor of the regime and only 7% in favor of the rebels, whereas another 20% of them ended in a balanced way (McCormick, Horton & Harrison, 2009, p. 128). The peace treaty between Guatemala and the Guatemalan National Revolutionary Unity (URNG) in 1996 clearly amounted to a defeat for the insurgents in the Guatemalan Civil War. Conversely, the settlement between Sudan and the Sudan People's Liberation Movement (SPLM) in 2005 was a victory for the later in the 2nd Sudanese Civil War. Lastly, the deal, in 2005, between Indonesia and the Free Aceh Movement (GAM) yielded a balanced conclusion of the “Aceh Disturbance.”

The viability of the peace settlements, however, cannot always be assured; relapse to violence was observed in over 40% of the cases in recent years (Licklider, 1995, pp. 681-682, 684-687; Derouen, Bercovitch & Wei, 2009, pp. 103-120). For example, the peace treaty of 1970 between the Iraqi Kurds and Baghdad collapsed four years later. The survivability of peace settlements is especially difficult in cases of sectarian conflict due to the high levels of violence and polarization that such wars elicit (Kaufmann, 1996, pp. 136-175). For example, the Taif Accord ended the Lebanese Civil War but did not avert the outburst of violence entirely in this volatile country. Quite often, external powers intervene to undermine a peace deal that they deem injurious to their interests, causing a relapse to violence (Licklider, 1993, pp. 306-315). For instance, in 2017, Haftar declared the Skhirat Agreement null and void and, buoyed by the support of outside powers such as Egypt, endeavored to end the Libyan Civil War militarily. Thus, countries and organizations of collective security should intervene and act as guarantors of “positive peace.” However, these actors should insist on the establishment of non-partisan state institutions so that peace-keeping will be substituted over time by peace-building (Mason, 2007, pp. 70-77).

Stalemate

However, not every insurgency ends in a military victory or peace treaty; some of them could very well degenerate into a stalemate (Toft, 2005). The Yemen Civil War is a typical case, despite the armed intervention of an international coalition (under the leadership of Saudi Arabia) in favor of the legitimate government. These stalemates usually occur because of the interventions of external actors (Elbadawi & Sambanis, 2000; Regan, 2000, pp. 1-35). The intervention of Moscow in support of the communist Afghan govern-

ment, in 1979, against the Mujahedeen prolonged the survival of an otherwise ineffective and unstable regime until 1992.

Some stalemates appear to drag on forever; for example, the Western Sahara Conflict has been a stalemate since 1991. In other cases, such as the “frozen conflict” in the Donbass, peace talks attempted to end the stalemate. In the Sri Lankan Civil War, the stalemate ended with a decisive victory on the field of battle. As in the sub-category of the peace settlements, other parameters (e.g., the intervention of outside actors or a change in the balance of power) determine how long a stalemate will endure (Preston, 2004, pp. 65-83).

How governments can win

So, how does a state realize the optimum scenario –victory– over its irregular opponents? Despite the efforts of scholars to standardize the optimum practices in counter-insurgency (COIN), no panacea for every single type of insurgency has been invented thus far (Kilcullen, 2009, p. 183). Two schools of thought in COIN can be, nonetheless, discerned based on their modus operandi: an *enemy-centric* and a *population-centric* approach.⁵

The advocates of the *enemy-centric* approach consider the military defeat of the insurgents as a state’s top priority. Viewing the insurgents as nothing more than criminals or terrorists, the partisans of this school of thought contend that the elimination of these “subversives” will terminate the violent upheaval once and for all. Adopting an offensive modus operandi (the *search-and-destroy doctrine*), this school is notoriously associated with a propensity for mass violence (Kilcullen, 2009, p. xv; Heuser, 2010, pp. 422-427). For example, Nazi Germany adopted such an approach towards the various insurgencies in occupied Europe during World War II and employed mass violence in a rather indiscriminate and, eventually, counter-productive way.

In sharp contrast, the partisans of a *population-centric* approach claim that a state authority must, first and foremost, deny insurgents control over the population and the insurgency will inescapably die out since people – not the insurgents – constitute the “center of gravity” in this type of war (Kilcullen, 2009, p. xv; Heuser, 2010, pp. 427-436). The population-centric approach is further divided into two sub-categories based on the tactics employed by a state to acquire effective control over the people; one emphasizes the use of *coercion* (on a vast scale, if necessary), and the other insists on *tailored reforms* and *targeted violence* (Plakoudas, 2015, p. 132).

According to the first variant of this approach, insurgents represent nothing more than a violent minority that uses coercion to terrorize the population into submission and, by extension, subvert the regime’s authority. Accordingly, the state must prevail over

⁵ The section about victory in counter-insurgency appeared originally as an article in the journal *Studies in Conflict and Terrorism* under the title “Strategy in Counter-Insurgency: A Distilled Approach.”

the insurgents in this critical “contest of coercion” with far higher levels of force and, thus, compel the population to side with the legitimate government (Plakoudas, 2015, p. 132). The French, for example, *competed* efficiently with the National Liberation Front (FLN) in Algeria over violence and fear. The natives, in fact, dreaded the French *armée colonial* more than the insurgents. According to the second variant of this approach, the insurgents represent the military wing of a mass political movement which, in turn, springs from popular discontent. Therefore, the state should use a balanced mix of reforms and repression that will both address the sources of widespread rancor and deny the insurgents’ control over the (local) population, depriving the irregulars of the resources vital for their armed struggle (Plakoudas, 2015, p. 133). During the Malayan Emergency (1948-60), for example, Britain suppressed the communist insurgency in two ways: by promising the people of Malaya independence from colonial rule and transferring the pro-insurgent peasantry into new villages under state supervision.

Though widely popular with the academic circles and military academies of the West in the early 21st century, the population-centric approach has been criticized as an overrated concept that offers solutions only at an operational or tactical level. In other words, this approach does not represent a strategy in itself, according to its polemics (Gentile, 2009, pp. 11-15; Cox & Bruscino, 2011). After all, the population-centric focus of the USA in Afghanistan, since 2007, has not yielded the results promised by its pundits.

How then should a government act to avoid a defeat? Irregular warfare involves a formidable variety of principles, paradoxes, and imperatives on COIN (Cohen, Crane, Horvath, Nagl, 2006, pp. 49-53). However, these principles should be used as a guide and not as gospel and, therefore, a state must always implement a situation-dependent policy (Kilcullen, 2009, p. 183; Springer, 2011, p. 38). In general terms, a successful strategy broadly contains five components, the political, diplomatic, economic, ideological, and military. However, a government may not employ all the available means or utilize them in different combinations at different phases of this irregular war. The *ways* a government uses all the available *means* varies for various reasons (e.g., the quarrels between the political and military leadership). One must always remember that strategy does not remain static during the course of a war. The “*reciprocal nature* of all action in war” suggests that the policies of a state interact with those of the insurgents and, by extension, evolve over time (Handel, 1992, pp. 94-95).⁶

Good governance

Many theorists and practitioners of COIN have underlined the imperative of “good governance” (Shafer, 1988, p. 117; Fitzsimmons, 2009, pp. 11-14, 16-20) as targeted reforms; just governance usually increase the legitimacy and popularity of a state authority (O’Neill, 2005, pp. 171-172; Gregg, 2009, p. 25). Just and legitimate governance, how-

6 Handel (1992), emphasis on the original.

ever, should not be associated exclusively with a specific type of regime, such as a Western-style liberal democracy (Gregg, 2009, pp. 23-25). Often, the person who governs, not the method of governance *per se*, matters most (Fitzsimmons, 2009, pp. 278-279). The culturally-acceptable standards of legitimacy of the (local) people should be understood and respected (Cordesman, 2005, p. 16; Gregg, 2009, p. 24). For example, in Afghanistan, the elders and imams play a pivotal role in the governance of villages –as they have for centuries. In south-east Turkey, as well, the so-called *aghjas* (the Kurdish feudal lords) still manage whole villages through private armies.

The counterinsurgent should be pre-occupied with how to improve the quality of governance, not what political system to adopt (Cordesman, 2006, pp. 14-15). However, good governance does not represent a panacea for every irregular threat; nor can good governance alone secure victory (Hazelton, 2013).⁷ David Kilcullen (2006), a renowned Australian soldier-theorist during the War on Terror, upheld that a state must accomplish four core political objectives: a) provide lawful and just governance, b) strengthen the institutional capacity of the state, c) rally the people under the flag, and d) re-integrate the insurgents back to society (p. 5).

Outside support

Outside support has been recognized as a key factor (Byman, Chalk, Hoffman, Rosenau & Brannan, 2001, pp. 83-102; Salehyan, Gleditsch, Cunningham, 2011, pp. 709-744) and facilitator (Record, 2006, pp. 36-49) for the success of an insurgency and, therefore, a state should sever the insurgents' ties with the outside world (Manwaring, 2001, pp. 20-21; Staniland, 2005-2006, pp. 21-40). Usually, the counterinsurgents endeavor to achieve this isolation via diplomacy (e.g., a direct appeal to the insurgents' allies to cease this intervention in a third country's internal affairs). The vigorous propagandization of a persuasive cause (Cornish, 2009, pp. 76-78; Amend, 2010, pp. 222-226) and the continuous support from external allies (Handel, 1981, p. 120; Byman, 2006, p. 87) –especially powerful ones– increase the effectiveness of a counterinsurgent's diplomatic campaign. For example, Turkey successfully isolated the Kurdistan Worker's Party (PKK) internationally in the 1990s thanks to its persuasive counter-narrative and powerful allies (most notably, the USA).

However, diplomacy does not always yield results; the neutralization of outside support for the insurgents may also require military operations against the foreign supporters of these insurgents (Trinquier, 1964, pp. 83-88; Salehyan, 2008, pp. 54-66). In 1998, for instance, Turkey threatened Syria with open war unless the latter ceased support for the PKK. Conversely, a beleaguered government can appeal to its external allies for aid and even intervention in its support. For example, the pro-Western regime in Saigon invited

⁷ For an extensive analysis of this view, see "The False Promise of the Governance Model of Counterinsurgency Warfare" (Hazelton, 2013).

the USA to intervene militarily against the twin threats of the Vietcong and Vietminh in the 1960s.

Welfare

A government should protect the welfare of its citizens during a “war amongst the people” and, most importantly, redress the socio-economic wellsprings of the insurgency in a timely and qualified way (Barrett, 2009, pp. 43-44; Berman, Shapiro & Felter, 2011, pp. 766-819). Such a social and economic policy would provide public services (e.g., electricity) and emergency humanitarian relief (e.g., food) to the suffering people (Gompert, Kelly, Stearns Lawson, Parker & Colloton, 2009, pp. xiv-xv). For example, the monarchist regime in Greece won the *battle for the stomachs* of the people and, thus, the war against the communist insurgency in the 1940s.

A state may well request economic aid from its external allies (and the international community as well) in support of its welfare and relief policies, especially a failed or fragile state. However, funds (no matter how generous) do not operate as a magic formula for victory (Moyar, 2011, p. 2). In truth, economic aid to a beleaguered government without any insistence by the donors on reforms and transparency will inevitably lead to the misuse of the aid (Fishstein & Wilder, 2012, pp. 42-51; Connable, 2013, p. 35). The International Security Assistance Force (ISAF), for example, did not insist on the above, and successive Afghan governments have squandered the international economic aid since 2001 due to endemic corruption. The same applies to the aid by the USA to Iraq in the aftermath of the 2003 invasion.

Narrative

Sir Frank Kitson (1977), a famous British warrior-scholar of the Cold War, declared that an insurgency differed from other types of war for being “primarily concerned with the struggle for men’s minds” (p. 290). Quite naturally, ideology forms an integral element of a conflict waged for the “hearts and minds” of the population (McFate & Jackson, 2006, p. 19). A state should propagandize a “narrative” that the population understands and supports (Cornish, 2009, pp. 76-78). Turkey, for instance, demonized the PKK as a Zoroastrian or Armenian terrorist group and effectively decreased its appeal among the conservative and religious Kurds.

A government should also try to win the “favor” of the international audience (Cornish, 2009, pp. 76-78). For example, Colombia internationalized the violent conflict against the FARC through a vigorous information campaign –supported by the USA. The government should not just subvert the insurgents’ narrative but also construct and actively propagate a “narrative of victory.” A government should not, however, cultivate unrealistic expectations of victory to avoid credibility issues (Hoffman, 2007, p. 82; Cohen,

Crane, Horvath, Nagl, 2006, p. 51). The Tet Offensive in 1968, for example, shattered the Johnson Administration's "narrative of victory" that claimed that the USA was winning the war in South Vietnam against the Vietcong.

Security

Security operations in COIN intend to achieve two principal objectives: a) furnish a fair measure of security to the (local) people and b) neutralize the insurgent threat. Because the majority of the population regularly stays neutral until coerced or convinced to side with one faction (Galula, 1964, p. 56; Marks, 1992, p. 43), the state can fatally weaken the insurgents by denying them control of this "silent majority" (Kilcullen, 2006, p. 5; Cohen et. al., 2006, p. 50). Given that this war is waged amongst the (local) people, a government ought to use the military tool with caution to avoid civilian casualties. Indiscriminate violence (Thompson, 1966, pp. 50-58; Kitson, 1971, p. 165; Cohen et al., 2006, pp. 51-52) and disrespect for the rule of law can greatly minimize the popularity and legitimacy of a counterinsurgent (Cohen et al., 2006, p. 51; Etzioni, 2011, pp. 21-22). For example, the mass violence by Nazi Germans turned away even those peoples of the USSR (e.g., Ukrainians) who had greeted them as liberators in 1941.

The security policies of a state usually undergo an evolutionary process. The state re-orientates its army from regular to irregular warfare (e.g., use of drones) (Trinquier, 1964, pp. 3-5; Galula, 1964, pp. 68-69), absorbs the harsh lessons of irregular warfare (e.g., use of armored units in urban environments) (Sepp, 2005, pp. 8-12), and adapts to the prevailing circumstances (e.g., adopt a clear-build-hold doctrine) (Cohen et al., 2006, p. 51). The British, for example, underwent a similar uphill process; after 12 years, they prevailed over the communist insurgency in the Malayan Emergency.

These military operations depend on timely and reliable intelligence for their efficacy and information, which, in turn, stems from an astute understanding of the (local) population and a solid commitment to the security of the non-combatants (Cohen et al., 2006, p. 50; Kilcullen, 2010, pp. 155-156). For example, the USA's breakdown in Afghanistan is owed partly to the failure of successive Washington policy-makers to understand the inner workings of the traditional Afghan society and offer the ordinary villagers a fair measure of security. In general, the government and its military must adapt and evolve continuously (Cohen et al., 2006, p. 51; Alderson, 2007a, pp. 16-21; Alderson, 2007b, pp. 12-19); the military must become, in effect, a learning organization (Nagl, 2005, pp. 213-225).

Several theorists and practitioners have stressed the imperative of political primacy in COIN, i.e., the need to subordinate every policy to the pursuit of specific political objectives and secure political control over the direction of the war (Joes, 1996, pp. 8-9; Cohen et al., 2006, p. 50). After all, the integration of civil and military actions (unity

of effort) constitutes one of the cornerstones of theory and practice in COIN (Cohen et al., 2006, p. 50; Gompert et al., 2009, p. 182; Schadlow, 2010, p. 184). Under Sir Gerald Templer, the British achieved a robust unity of effort in the Malayan Emergency and implemented a sound COIN strategy. However, other variables, such as the type of a regime (Zhukov, 2007, pp. 458-460; DeVore, 2013, pp. 169-191) and its military culture (Cassidy, 2008, pp. 37-126; Kitzen, 2012, pp. 1-24) may exert a heavy influence on a state's security policy. For example, the Bolsheviks used excessive force (even poisonous gases) to quell all armed opposition to their rule during the first years of the Soviet iron-fist rule.

Conclusion

Despite claims to the contrary (Van Creveld, 2008, p. 268), the majority of insurgencies from 1815 to 2010 ended in defeat for the insurgents, according to a recent study (Gorka & Kilcullen, 2011, p. 17). Indicatively, Turkey suppressed four uprisings by the Kurds (1925, 1927-1930, 1937-1938, and 1984-1999) in the 20th century without suffering any territorial losses. Similarly, Assad defeated an insurgency supported by outside powers against all the odds and, after a grueling 8-year war, victory is near.

Although according to experts, the most durable peace settlements of such wars occur on the battlefield and not at the negotiation table (Toft, 2009, pp. 5-6; Luttwak, 1999, pp. 36-44), military victory over an insurgency does not necessarily translate into a permanent peace; often, space and time allow the insurgents to regroup and reclaim any lost ground (Kiras, 2008, pp. 229-232). For example, Turkey defeated the PKK in 1999, but the latter started its armed campaign anew in 2004. Moreover, the Caliphate was destroyed after the capture of Raqqa and Mosul but, as the recent crescendo of attacks demonstrates, ISIS still operates underground in eastern Syria and northern Iraq.

War is not a static phenomenon; war constantly evolves owing to the interaction of the belligerents. For that reason, the above three scenarios can manifest during the course of an insurgency: military victory for one side, peace negotiations (or even a peace treaty), and a stalemate. The case of the PKK in Turkey is an iconic example. The PKK was routed entirely in 1999; in 2004, it rose from its ashes like a phoenix and started a new armed struggle. In 2013, it agreed to initiate a peace dialogue with Erdogan, which collapsed in 2015 amidst mutual recriminations of "bad faith" (Plakoudas, 2018).

Disclaimer

The author does not declare any conflict of interest concerning this article.

Funding

The author does not declare any source of funding for this article.

About the author

Spyridon Plakoudas is an Assistant Professor of Homeland Security in Rabdan Academy, a Post-Doctoral Research Fellow at the University of Macedonia, Thessaloniki and Adjunct Lecturer at the Hellenic National Defence College. He was previously Adjunct Lecturer at Panteion University. He holds a PhD in War Studies from the University of Reading. <https://orcid.org/0000-0002-7271-5940> - spyridon.plakoudas@aeue.ae

References

- Alderson, A. (2007a). Counter-insurgency: Learn and Adapt? Can We Do Better? *British Army Review*, 142, 16-21.
- Alderson, A. (2007b). Learning, Adapting, Applying US Counter-insurgency Doctrine and Practice. *RUSI Journal*, 152(6), 12-19.
- Amend, K. (2010). Counterinsurgency principles for the diplomat. *Orbis*, 45(2), 222-226.
- Amidror, Y. (2010). Winning counterinsurgency war: The Israeli experience. *Strategic Perspectives*, 2, 1-42.
- Arreguin-Toft, I. (2005). *How the weak win wars: A theory of asymmetric conflict*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Barrett, T. J. (2009). *Operationalizing economics for counterinsurgency and stability operations* (pp. 43-44). Fort Leavenworth, Kansas: US Army Command and General Staff College.
- Beckett, I. (2007). Victory, counter-insurgency and Iraq. In I. Duyvesteyn, & J. Ångström (Eds.), *Understanding victory and defeat in contemporary war*. London: Routledge.
- Benjamin, M., & Davies, N. J. S. (2018). The staggering death toll in Iraq. *Salon*. Retrieved from https://www.salon.com/2018/03/19/the-staggering-death-toll-in-iraq_partner/
- Berman, E., Shapiro, J. N., & Felter, J. H. (2011). Can hearts and minds be bought? The economics of counterinsurgency in Iraq. *Journal of Political Economy*, 119(4), 766-819.
- Bernstein, J. (2012). Negotiating the insurgency: The case for settling Afghanistan's war and securing "negative" peace. *Yale Journal of International Affairs*, 7(1), 23-37.
- Byman, D., Chalk, P., Hoffman, B., Rosenau, W., & Brannan, D. (2001). *Trends in outside support for insurgent movements*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Byman, D. (2006). Friends like these: Counterinsurgency and the war on terrorism. *International Security*, 31(2), 79-115.
- Byman, D. (2009). Talking with insurgents: A guide for the perplexed. *Washington Quarterly*, 32(2), 127-129.
- Call, C. T., & Cousens, E. M. (2008). Ending wars and building peace: International responses to war-torn societies. *International Studies Perspectives*, 9(1), 1-21.
- Campbell, J., O'Hanlon, M., & Shapiro, J. (2009). *Assessing counterinsurgency and stabilization missions*. Washington D.C.: Brookings Institute.
- Cassidy, R. M. (2008). *Counterinsurgency and the global war on terror: Military cultures and irregular war*. Westport: Praeger Security International.
- Clancy, J., & Crosset, C. (2007). Measuring effectiveness in irregular warfare. *Parameters*, 37(2), 88-100.
- Cohen, E., Crane, C., Horvath, J., & Nagl, J. (2006). Principles, imperatives and paradoxes of counterinsurgency. *Military Review*, 86(2), 49-53.
- Connable, B., & Libicki, M. C. (2010). *How insurgencies end*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Connable, B. (2013). *Leveraging development aid to address root causes in counterinsurgency: Balancing theory and practice in "bold" and "build."* Santa Monica, CA: RAND Corporation.

- Cordesman, A. H. (2005). *The Iraq war and its strategic lessons for counterinsurgency*. Washington DC: Center for Strategic and International Studies.
- Cordesman, A. H. (2006). *The importance of building local capabilities: Lessons from the counterinsurgency in Iraq*. Washington DC: Center for Strategic and International Studies.
- Cornish, P. (2009). The United States and counterinsurgency: 'Political first, political last, political always.' *International Affairs*, 85(1), 76-78.
- Cox, D. G., & Bruscino, T. (Eds.). (2011). *Population-centric counterinsurgency: A false idol?* Fort Leavenworth, Kansas: US Army Combined Arms Center.
- Derouen, K., Bercovitch, J., & Wei, J. (2009). Duration of peace and recurring civil wars in Southeast Asia and the Pacific. *Civil Wars*, 11(2), 103-120.
- DeVore, M. R. (2013). Institutions, culture and counterinsurgency operations: Why do States fight similar insurgencies differently? *Comparative Strategy*, 32(3), 169-191.
- Duyvesteyn, I., & Schuurman, B. (2011). The paradoxes of negotiating with terrorist and insurgent organisations. *Journal of Imperial and Commonwealth History*, 39(4), 678-679.
- Elbadawi, I., & Sambanis, N. (2000). *External interventions and the duration of civil wars*. Washington DC: World Bank.
- Elbadawi, I., & Sambanis, N. (2002). How much war will we see? Explaining the prevalence of civil war. *Journal of Conflict Resolution*, 46(3), 307-334. <https://doi.org/10.1177/0022002702046003001>
- Etzioni, A. (2011). Whose COIN? *Joint Force Quarterly*, 60(1), 21-22.
- Fishstein, P., & Wilder, A. (2012). *Winning hearts and minds? Examining the relationship between aid and security in Afghanistan*. Medford, MA: Tufts University, Feinstein International Center.
- Fitzsimmons, M. F. (2009). *Governance, identity and counterinsurgency strategy* (Ph.D. Thesis). University of Maryland, College Park.
- Galula, D. (1964). *Counterinsurgency warfare: Theory and practice*. Westport, CT: Praeger.
- Gentile, G. P. (2009). A strategy of tactics: Population-centric COIN and the Army. *Parameters*, 39(3), 11-15.
- Gompert, D. C., Kelly, T., Stearns Lawson, B., Parker, M., & Colloton, K. (2009). Reconstruction under fire: Unifying civil and military counterinsurgency. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Gorka, S., & David Kilcullen, D. (2011). An actor-centric theory of war: Understanding the difference between COIN and counterinsurgency. *Joint Force Quarterly*, 60(1), 14-18.
- Greenhill, K. M., & Major, S. (2006-2007). The perils of profiling: Civil war spoilers and the collapse of interstate peace accords. *International Security*, 31(3), 7-40.
- Gregg, H. S. (2009). Beyond population engagement: Understanding counterinsurgency. *Parameters*, 39(3), 23-25.
- Handel, M. (1981). *Weak states in the international system*. London: Cass.
- Handel, M. (1992). *Masters of war: classical strategic thought* (1st ed.). London: Frank Cass.
- Hartzell, C., & Hoddie, M. (2003). Institutionalizing peace: Power sharing and post-civil war conflict management. *American Journal of Political Science*, 47(2), 318-332.
- Hazelton, J. L. (2013). *The false promise of the governance model of counterinsurgency warfare*. Paper presented at the annual convention of the American Political Studies Association (APSA), "Power and Persuasion." Illinois (USA), 29 August–1 September.
- Henry, L. W. (2006). *What is the role of negotiations when countering an insurgency?* (MA Thesis). US Naval Postgraduate School, Monterrey, California.
- Heuser, B. (2010). *The evolution of strategy: thinking war from antiquity to the present*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hoffman, F. G. (2007). Neo-classical counterinsurgency? *Parameters*, 37(2), 1-17.

- Joes, A. J. (1996). *Guerrilla warfare: A historical, biographical and bibliographical sourcebook*. Westport, CT; London: Greenwood Press.
- Johnston, P. B. (2007). Negotiated settlements and government strategy in civil war: Evidence from Darfur. *Civil Wars*, 9(4), 559-577.
- Jones, D. (2006). *Understanding measures of effectiveness in counterinsurgency operations*. Fort Leavenworth, Kansas: US Army Command and General Staff College.
- Kalyvas, S. N. (2006). *The logic of violence in civil war*. Cambridge; New York: Cambridge University Press.
- Kaufmann, C. (1996). Possible and impossible solutions to ethnic civil wars. *International Security*, 20(4), 136-175.
- Kilcullen, D. (2006). *Three pillars of counterinsurgency*. Remarks delivered at the U.S. Government Counterinsurgency Conference. Washington DC (USA), 28 September.
- Kilcullen, D. (2009). *The accidental guerrilla: Fighting small wars in the midst of a big one*. London: Hurst.
- Kilcullen, D. (2010). Intelligence. In T. Rid, & T. Keaney (Eds.), *Understanding counterinsurgency: Doctrine, operations and challenges*. London; New York: Routledge.
- Kilcullen, D. (2012). Counterinsurgency: The state of a controversial art. In P. B. Rich, & I. Duyvesteyn (Eds.), *The Routledge handbook of insurgency and counterinsurgency*. London: Routledge.
- Kiras, J. D. (2008). Irregular warfare. In D. Jordan et al. (Eds.), *Understanding modern warfare* (pp. 224-291). Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Kitson, F. (Sir). (1971). *Low intensity operations: Subversion, insurgency and peacekeeping*. London: Faber and Faber.
- Kitson, F. (Sir). (1977). *Bunch of five*. London: Faber and Faber.
- Kitzen, M. (2012). Western military culture and counterinsurgency: An ambiguous reality. *Scientia Militaria: South African Journal of Military Studies*, 40(1), 1-24.
- Licklider, R. (1993). What have we learned and where do we go from here? In R. Licklider (Comp.), *Stopping the killing* (pp. 306-315). New York: New York University Press.
- Licklider, R. E. (1993). *Stopping the killing: how civil wars end*. New York: New York University Press.
- Licklider, R. (1995). The consequences of negotiated settlements in civil wars, 1945-1993. *American Political Science Review*, 89(3), 681-690.
- Luttwak, E. (1999). Give war a chance. *Foreign Affairs*, 78(4), 36-44.
- Mack, A. (1975). Why big nations lose small wars: The politics of asymmetric conflict. *World Politics*, 27(2), 199-200.
- Manwaring, M. (2001). *Internal wars: Rethinking problem and response*. Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, US Army War College.
- Marks, T. (1992). Making revolution: Sendero Luminoso in Peru. *Small Wars and Insurgencies*, 3(1), 22-46.
- Mason, D. T., Weingarten, J. P., Jr., & Fett, P. J. (1999). Win, lose or draw: Predicting the outcome of civil wars. *Political Research Quarterly*, 52(2), 239-268.
- Mason, D. (2007). *Sustaining the peace after civil war*. Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, US Army War College.
- Mattes, M., & Savun, B. (2009). Fostering peace after civil war: Commitment problems and agreement design. *International Studies Quarterly*, 53(3), 737-759.
- McCormick, G. H., Horton, S. H., & Harrison, L. A. (2009). Things fall apart: The endgame dynamics of internal wars. In M. T. Barger, & D. A. Borer (Eds.), *The long war: Insurgency, counterinsurgency and collapsing States*. Abingdon: Routledge.
- McFate, M., & Jackson, A. V. (2006). The object beyond war: Counterinsurgency and the four tools of political competition. *Military Review*, 86(15), 13-26.
- Moyar, M. (2011). *Development in Afghanistan's counterinsurgency: A new guide*. McLean, Washington D.C.: Orbis Operations.

- Nagl, J. (2005). *Learning to eat soup with a knife: Counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam*. Westport, Connecticut: Praeger.
- O'Neill, B. (2005). *From revolution to apocalypse: Insurgency and terrorism*. Washington D.C.: Potomac Books.
- Paul, C., Clarke, C. P., & Grill, B. (2010). *Victory has a thousand fathers, sources of success in counterinsurgency*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Plakoudas, S. (2015). Strategy in counterinsurgency: A distilled approach. *Studies in Conflict and Terrorism*, 38(2), 132-133.
- Plakoudas, S. (2017). Doomed from the start? Peace negotiations in the Greek Civil War, January-July 1947. *Balkan Studies*, 50, 135-159.
- Plakoudas, S. (2018). *Insurgency and counter-insurgency in Turkey: The new PKK*. London; New York: Palgrave Macmillan.
- Preston, M. (2004). Stalemate and the termination of civil wars: Rhodesia reassessed. *Journal of Peace Research*, 41(1), 65-83.
- Pruitt, D. G. (2005). *Whither ripeness theory?* Retrieved from <https://gsdrc.org/document-library/whither-ripeness-theory/>
- Rabasa, A., & Haseman, J. B. (2002a). *The military and democracy in Indonesia: Challenges, politics, and power*. Retrieved from <http://purl.oclc.org/DLF/benchrepro0212>
- Rabasa, A., & Haseman J. B. (2002b). *The military and democracy in Indonesia: Challenges, politics and power*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Record, J. (2006). External assistance: Enabler of insurgent success. *Parameters*, 36(3), 36-49.
- Regan, P. M. (2000). *Third-party interventions and the duration of intrastate conflicts*. Paper presented at the Annual Convention of the American Political Science Association (APSA), Boston (USA), 28 August-1 September.
- Reiter, D. (2003). Exploring the Bargaining model of war. *Perspectives on Politics*, 1(1), 27-43.
- Salehyan, I. (2008). No shelter here: Rebel sanctuaries and international conflict. *Journal of Politics*, 70(1), 54-66.
- Salehyan, I., Gleditsch, K. S., & Cunningham, D. E. (2011). Explaining external support for insurgent groups. *International Organization*, 64(4), 709-744.
- Sepp, K. (2005). Best practices in counterinsurgency. *Military Review*, 85(3), 8-12.
- Schadlow, N. (2010). Governance. In T. Rid, & T. Keaney (Eds.), *Understanding counterinsurgency: Doctrine, operations and challenges*. London; New York: Routledge.
- Shafer, M. D. (1988). *Deadly paradigms: The failure of US Counterinsurgency Policy*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Stedman, S. J. (1997). Spoiler problems in peace processes. *International Security*, 22(2), 5-53.
- Springer, N. R. (2011). *Stabilizing the debate between population-centric and enemy-centric counterinsurgency: Success demands a balanced approach* (MA Thesis). US Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas.
- Staniland, P. (2005-2006). Defeating transnational insurgencies: The best offense is a good fence. *The Washington Quarterly*, 29(1), 21-40.
- Taber, R. (2002). *War of the Flea: The classic study of guerrilla warfare*. New York: Potomac Books.
- Themnér, L. L., & Wallensteen, P. (2013). Armed conflicts, 1946-2012: A new dataset. *Journal of Peace Research*, 50(4), 509-521.
- Thompson, R. (Sir). (1966). *Defeating communist insurgency: Experiences from Malaya and Vietnam*. London: Macmillan.
- Toft, M. D. (2005). *End of victory? Civil war termination in historical perspective*. Paper presented at the Annual Convention of the International Studies Association (ISA), Honolulu (USA), 3 May.

- Toft, M. D. (2009). *Securing the peace: The durable settlement of civil wars*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Trinquier, R. (1964). *Modern warfare: A French view of counterinsurgency* (Daniel Lee, Trans.). New York: Praeger.
- Wagner, H. B. (2000). Bargaining and war. *American Journal of Political Science*, 43(3), 464-484.
- Walter, B. F. (1999). Designing transitions from civil war: Demobilization, democratization and commitments to peace. *International Security*, 24(1), 127-155.
- Walter, B. F. (2002). *Committing to peace: The successful settlement of civil wars*. Princeton; Oxford: Princeton University Press.
- Walter, B. F. (2013). Civil wars, conflict resolution, and Bargaining theory. In W. Carlsnaes, T. Risse, & B. A. Simmons (Eds.), *Handbook of international relations* (pp. 664-665). London: SAGE.
- Van Creveld, M. (2008). *The changing face of war: Combat from the Marne to Iraq*. New York: Presidio Press.
- Zartman, W. I. (1993). The unfinished agenda: Negotiating internal conflict. In R. Licklider (Ed.), *Stopping the killing: How civil wars end*. New York: New York University Press.
- Zartman, W. I. (1995). Dynamics and constraints in negotiations in internal conflicts. In I. William Zartman (Ed.), *Elusive peace: Negotiating an end to civil wars*. Washington D.C.: Brookings Institution.
- Zartman, W. I. (2001). The timing of peace initiatives: Hurting stalemates and ripe moments. *Global Review of Ethnopolitics*, 1(1), 8-18.
- Zhukov, Y. (2007). Examining the authoritarian model of counter-insurgency: The Soviet campaign against the Ukrainian insurgent army. *Small Wars and Insurgencies*, 18(3), 458-460.
- Zhukov, Y. (2014). *A theory of indiscriminate violence* (Ph.D. Thesis). Harvard University, Cambridge, MA.



Revista Científica General José María Córdova

(Colombian Journal of Military and Strategic Studies)

Bogotá D.C., Colombia

Volume 17, Number 28, October-December 2019, pp. 939-970

<http://dx.doi.org/10.21830/19006586.517>

The Military Forces as an instrument of the socialization of the State

Las Fuerzas Militares como instrumento de socialización del Estado

Fabián Ricardo Giraldo-Chaparro

Escuela de Armas Combinadas del Ejército (ESACE), Bogotá D.C., Colombia

ABSTRACT. Most states continue building their Armed Forces with the premise of providing security for their citizens. This current process has motivated discussions from favorable and opposing positions. It has become a source of considerable disagreement between political parties, ethnic and religious groups, and even among generations. Because the Armed Forces are associated mainly with the use of force to obtain peace, the training of future military officers in the use of lethal means creates a contradiction in the eyes of many societies. This article demonstrates that the Armed Forces can be seen as a contributor to the socialization of any society. Moreover, they can be perceived as a source of moral strength and the foundation for the development of a nation on different levels.

KEYWORDS: Napoleonic Army; Prussian Army; Roman Empire; socialization; the United States Armed Forces

RESUMEN. La mayoría de los Estados continúan construyendo sus Fuerzas Armadas bajo la premisa de brindar seguridad a sus ciudadanos. Este proceso ha motivado discusiones tanto a favor como en contra, lo cual ha generado una serie considerable de desacuerdos entre partidos políticos, grupos étnicos y religiosos e, incluso, entre generaciones. Las Fuerzas Armadas están asociadas principalmente con el uso de la fuerza para obtener la paz, no obstante, el entrenamiento de futuros oficiales militares en el conocimiento y operación de medios letales crea una contradicción a los ojos de muchas sociedades. Este artículo intenta demostrar que, contrario a la imagen errada que ciertos sectores puedan tener, las Fuerzas Armadas contribuyen positivamente a la socialización del Estado. Además, pueden ser percibidas como una fuente de fortaleza moral y como base para el desarrollo de una nación en diferentes niveles.

PALABRAS CLAVE: Ejército napoleónico; Ejército prusiano; Fuerzas Armadas de los Estados Unidos; Imperio romano; socialización

Section: DOSSIER • Scientific and technological research article

Received: June 30, 2019 • Accepted: September 2, 2019

CONTACT: Fabián Ricardo Giraldo-Chaparro ✉ fabian.giraldo@buzonejercito.mil.co

Introduction

Through history, the Armed Forces have been one of the permanent and, arguably, most important actors to shape the current world order. Although they were not always referred to as Armed Forces, it is easy to correlate their function, for instance, with armies or navies, especially, in the ancient times. Beyond this role, the Armed Forces (AF) act in matters of defense. Looking at the broader history of humankind to analyze what, and in what way, the Armed Forces have contributed to the socialization of society is thought-provoking.

Discussions in the *Federalist Papers* between liberals and republicans about the socialization of citizens through military or any other kind of public service urge the review of the potential implications of the use of public service and to what extent it should be employed in this endeavor (Burk, 2002, pp. 7-29). This article supports the idea of using armed forces as an instrument of socialization of society, under regular percentage or current size of the military organization. Its aim is not to develop this capacity further; instead, it provides an additional justification for the investment in the domestic or foreign armed forces, from the perspective of contribution to prosperity.

The literature describes socialization as a transformation process undergone by civilians when becoming a member of the Armed Forces (Cooper, Caddick, Godier, Cooper & Fossey, 2018, pp. 156-177). In this process, people are exposed to new information and then incorporate this knowledge into how they perceive themselves, their world, and their place within that world (Atkinson, 2014, p. 19). Alastair Johnston's –a renowned social scientist, specializing in the theory of socialization– defines socialization as a process by which social interaction leads novices to embrace expected ways of thinking, feeling, and acting (Atkinson, 2014, p. 20). In the armed forces, during basic training, recruits undergo a forced separation from civilian life and emerge with a strong identification with the military organization and culture. This culture is grounded in a strict code of discipline to which recruits must quickly become accustomed. As Godfrey, Lilley, and Brewis (2012) state, the deliberate organizational socialization that takes place within basic training is aimed at producing *disciplined bodies* capable of carrying out military labor and waging war on the enemy. The civilian is thus incorporated into the military organization and inscribed with the specific cultural values, including loyalty, integrity, courage, determination, and commitment to duty, that the military seeks to promote. The process of basic training, whereby recruits first encounter military culture and its associated values, is likened to Goffman's (1976) concept of the "total institution," in which the recruit is separated from the rest of society and is devoid of any *offstage* area to withdraw, ensuring that any sense of a prior identity or individuality is removed, and achieving a full integration into the organizational environment (Cooper et al., 2018). So, how has the socialization process occurred throughout history in the Armed Forces? How do some of these practices continue complementing the current shape of society? Is it possible to emphasize that the Armed Forces can be seen as a valid instrument for the socialization of society?

War itself has provided a useful account of the debate in a collection of essays entitled *Total War and Social Change* and edited by one of its protagonists, Arthur Marwick. Marwick (1988), who sought to analyze the consequences of the First and Second World Wars in a series of important publications, stresses four main ways in which large-scale wars are likely to cause societal change. War, he argues, inherently involves the destruction of life, property, and old patterns of behavior; it tests a society's social, political, and economic institutions. It provides a psychologically significant experience, and it may –especially in the case of the Total War in the twentieth century– involve mass participation of the affected population. Elsewhere in the same volume, Alastair Reid expands this suggestion, arguing that the higher the population proportion involved in a war effort, the more likely social reforms were to result. He cited, in particular, the increased influence of trade unions in collective bargaining in Britain following the First World War (Reid, 1988; Rich & Shipley, 1993, p. 93).

The central theme of Andreski's work –which can be traced back to Aristotle (e.g. *Pol.* 4. 1289 b)– is that the social and political framework of a society is significantly linked to the military organization of that society, the size of its armed forces, how they are recruited, and how they operate. In particular, the degree of social stratification in a society is closely linked to the extent of participation in military activity within that society (Rich & Shipley, 1993, p. 94).

Finding answers to the previous questions is possible using historical evidence from several examples. However, this article will focus on the following four major experiences: The Roman Army during the Roman Empire, the French Army under Napoleon, the Prussian Army, and the United States Armed Forces, concluding with some specific examples from other armed forces. This research aims to provide enough material to inquire whether looking at the armed forces from this angle is valid and offers it more significance than just as a mere instrument for defense.

The Roman army

Ancient Roman history continues to define how the world is understood in contemporary times; it continues to underpin Western Culture and politics (Beard, 2016, p. 15). The Roman Empire lasted for 510 years, from 31 BCE to 476 CE (Smith, 2016, p. 20). However, the political history of the Roman rule can be divided into two broad periods. The first is the Republic, which stretches from the founding of the city of Rome in 508 BC to the assassination of Julius Caesar on the Ides of March in 44 BC. The second is the period of the Empire, which extends from the rule of Emperor Caesar Augustus (ruled 27 BC-AD 14) until the dismissal of Rome by Alaric, a Visigoth chieftain, in AD 410 (Opello & Rosow, 2004, p. 19). These periods were built on many notable military victories but also significant setbacks. All these actions involved both politics and the military, which were merged into a solid block of ideas and decisions at that time.

This was a culture of stern discipline and constant drilling of the Roman soldier, as registered in Vegetius' *De Re Militari* (Phillips, 1985, p. 69) primed by troubles; the Spaniards surpassed the Romans not only in numbers but also in physical strength; the Africans were superior in wealth and unparalleled in matters of deception and strategy; and the Greeks, indisputably, were far superior in skill, arts, and all kinds of knowledge (Phillips, 1985, p. 75). This setting required an Empire to be aware of its military capacity. Ultimately, this entire endeavor ended bringing changes to society, as well as to the ways to exercise politics, economy, engineering, art, and so on.

The Roman Empire, which expanded greatly under Caesar Augustus (ruled 27-14 BC), reached its highest territorial magnitude during the reign of Trajan (ruled 98 - AD 117). Rome's army was stationed along the Empire's frontiers and made up of peasants recruited from the countryside. It constituted the world's first standing army, that is, a permanent military force paid, fed, clothed, and armed by the city-state. Enlistments were long (twenty years), after which legionaries were given a lump-sum payment equal to thirteen years' service or a grant of land. The Roman army was the finest military organization of its time, well trained, incredibly disciplined, and extremely mobile. It was virtually invincible from the Punic Wars to the third century AD. At its strongest, the Roman army numbered about six hundred thousand men and consumed about 75 percent of the state's budget (Opello & Rosow, 2004, p. 23). The impact of having an army of this magnitude changed the dynamics within society.

Having an army with such a high budget (75 percent of Rome's entire budget) implied the required efforts of the whole concept of society towards the massive organization. It could be claimed that the impact on the economy, culture, infrastructure, even religion, among other factors, concerned the military. It is worth noting that soldiers were a separate part of society, viewed with a mixture of respect, incomprehension, and dislike by the civilian population, as some armies were stationed in the frontier provinces, and only occasionally had major wars to fight. The rest of the Empire's subjects enjoyed the *Pax Romana* –the Roman peace (Rich & Shipley, 1993, p. 6)– which was guaranteed by the armed forces.

To understand the Roman organization, it is important to mention that all Roman citizens were subject to the military service. Apart from the poorest and freedmen (who were ineligible for the legions), most, if not all, Roman citizens of the early and middle Republics served in several year campaigns during their youth (Rich & Shipley, 1993, p. 1), indicating the level of involvement of the society in the military organization. For the Romans, valor in arms won the highest fame, and members of the elite were under heavy pressure to enhance their family's glory by distinguishing themselves in war (Rich & Shipley, 1993). The higher the reputation, the more opportunities one had to become a well-known politician, but, achieving this status required success in arms where skills, discipline, and knowledge were essential.

However, military service has not always been like this. The earliest Roman army consisted of the king, his retainers, the nobles, and whatever clan members could be organized to fight, mostly in raids against neighboring communities. It was a citizen militia habituated to seasonal warfare, during which soldiers were motivated by ideas of survival, self-defense, and patriotism to ensure the survival of the Roman State (Campbell, 2002, p. 22). Also worth mentioning is the ferocity of Roman troops, reflected in the alleged intimidation of a Macedonian soldier. It has been suggested that the Romans had an apparent willingness to use violence against those they perceived to be alien peoples and behaved somewhat more ferociously than most of the other politically advanced peoples of the Mediterranean world (Campbell, 2002, p. 23). This behavior offers a different perspective of the character of Roman soldiers, their attitude, and the idea of going to battle to kill those considered their enemies, a characteristic of the society of the time.

The Roman invasion in third century BC extended simultaneously eastwards against the Greeks and Macedonians and to the West and the South against Carthage, the great commercial and military power that had grown out of a Phoenician colony in present-day Tunisia. The situation generated three Punic wars (264 – 241 BC, for Sicily; 218 – 201 BC, for Italy and Spain; and 149 – 146 BC, for Carthage itself). These presented a struggle for the central Mediterranean, culminating in the abject destruction of Carthage (Parker, 2005, p. 50).

The former events were followed by constant battles against Germanic tribes (the Cimbri and Ambrones, 113 -102 BC), and to the South against African Jugurtha in Numidia (112 – 106 BC), and East against Mithridates of the Black Sea region (96 – 82 BC), which demanded either restructuring of the republican legions or the cessation of further such interventions altogether (Parker, 2005, p. 50). Faced with this situation, the dynamic of the war as a constant model through history seems to give rise to a new dilemma for the Romans, whose continuous campaign, which now spanned the entire Mediterranean and took place during the entire year, left little chance for legionaries to return home and farm after a series of summer battles (Parker, 2005, p. 50), delivering a new set of requirements for the soldiers involved, thus society.

This new condition required permanent, professional troops to master skills beyond those of mere battlefield combat to construct, craft, as well as siege and police garrison walls, forts, harbors, and entire frontiers. Given this situation, it is possible to assert that society required this new role for the military, but the foundation for this new role was still the discipline and skills acquired, mainly, from military experience and education. It is an example where the Roman Army used its military to not only expand its vast territories but also consolidate and build its society abroad.

These events caused the legions to be called on to create physical infrastructure in the provinces from virtually nothing. Of their later activity as permanent garrison troops in Egypt, an anonymous Roman historian of the fourth century AD observed:

There are still to be viewed in very many parts of the Egyptian cities, public works of the emperor Probus (AD 276 – 82), which he had constructed by military labor (...) he built bridges, temples, porticos, and basilicas, all by the labor of the soldiers, and he dredged many river-mouths, drained a large number of marshes and converted this into good agricultural land. (Parker, 2005, p. 50).

If Roman soldiers were to take on the combined roles of professional killers, construction workers, and occupational guards, they needed a much higher degree of training and organization.

For a portion of the society, having military members from all ranks and skillsets in a level of discipline and professionalism helping in the construction of society can be seen as a luxury. For others, this can generate disapproval, perhaps due to the ignorance of all its capacity with noble causes; others yet can also see it as a waste of precious resources that should be dedicated solely for the cause of war, or the defense of sovereignty. What many do not see is that the military is part of their own community, their own family, and their own society, that beyond its initial purpose, its capacity can be employed in other matters out of necessity or simply because there is not always war. On the other hand, all the experience, the skills, and –perhaps some resources as well– can be used once the soldier is discharged from active duty.

Rome was not always at war, nor its troops always engaged in a war. These circumstances opened spaces for continuous reforms; for instance, a professional long-service army replaced the old citizen militia. The practice of raising additional troops to fight a specific war and discharging them when the war was over was ended during the Augustus era (Rich & Shipley, 1993, p. 5). These decisions drove Augustus' dissolution of the link between citizenship and military service; this had a price. That link had assured the Republic of a vast reserve of manpower, which enabled it to surmount its greatest crises. The army of the later Roman Empire, though larger than under the principedom, proved unequal to the barbarian challenge (Rich & Shipley, 1993, p. 7).

On other fronts, and other times, the same dynamic gave rise to the hiring of armies. For instance, Sulla, a junior officer under Marius in the war against Jugurtha, joined forces with his old mentor (and former bitter rival) in bringing to an end the so-called Social War (90 – 89 BC) against Rome's allied Italian states (the *socii*), which received the formal rights of Roman citizenship, with equal opportunity to join the Roman army (Parker, 2005, p. 55). Measures like this brought Rome other challenges such as the rebellions under Sertorius in Spain (80 – 72 BC) and Slave uprisings led by Spartacus (73 – 71 BC), among others (Parker, 2005, p. 55). These events also led to new changes in society, a result of decisions about military service.

By Caracalla's edict of AD 212, nearly all the subjects of the Empire had Roman citizenship. However, the Roman state did not turn to them to offset the military deficit; instead, they employed barbarians to fight on its behalf. The Romans had always employed

allied troops, but with rare exceptions (like the defeat of Scipio in Spain in 211 BC), they had ensured that the preponderance of allies did not become so high as to threaten their security. Later, this principle was forgotten (Rich & Shipley, 1993, p. 7). Roman history provides, perhaps, an excellent example of what happens when there is a rift between the armed forces and society. Peace, which was achieved by a series of military actions, was taken for granted by society. When minor threats remained, Roman society opted to use barbarians, which proved to have challenging results for their society.

A possible explanation for the above behavior could be an answer to a regular cycle of societies where the relations between the armed forces and society vary according to the level of threat. If the level of threat is high, then society, under its leadership and institutions, establishes a capable military, resulting in a strong civil-military relationship. If the military succeeds, not only in protecting its population but also in being a model for them, then, there will be more chances of a long-lasting relationship. Once peace is achieved and the level of threat reduced, lack of interest in the military results in a weak and fragile relationship. Because the levels of Roman belligerence fluctuated, fundamental changes took place in the nature of their military commitments. In the second half of the second century, for instance, opportunities for war and expansion were often missed, and many consuls did not engage in warfare at all (Rich & Shipley, 1993, p. 53), obeying to a normal cycle of conflict, which could explain the shifts in civil-military relations.

Other contributions to society could be discussed from the individual capacity of acquisition that activates the economy. When a soldier volunteered or was conscripted into the army, it was for a specific campaign rather than a specific number of years (Rich & Shipley, 1993, p. 98). Many of the volunteers who came forward did so because they saw that those who had served in earlier campaigns in the East had become rich. Certainly, a soldier could, if he was lucky, acquire substantial amounts of booty, but the length of time he would normally be obliged to serve away from home might well mean that he would find himself competing on the open market to buy land to replace his original property (Rich & Shipley, 1993, p. 99). This practice suggests the promotion of the economy. Although the Romans, like other ancients, lacked a systematic view of economics, either viewing it as an abstract theory or an activity independent of politics, the basic principle that institutions are involved in economics as soon as transactions reach a relevant size and cost was acceptable (Scheidel, 2012, p. 25).

During the Second Punic War, soldiers were occasionally given small plots of land on discharge following years of service abroad, veterans were likely to have been among the settlers in Latin and citizen colonies, but the distribution of land to veterans became more of a contentious issue at the very beginning of the first century BC, following the victories of Gaius Marius over Jugurtha and then the Cimbri and Teutones. It has been traditionally conceived that an increasingly severe shortage of manpower led Marius, in 107 BC, to recruit soldiers from the poorest section of the Roman population, the *capite censi*. As a result, the land had to be found for them upon their demobilization, because,

unlike ordinary recruits, they had no estates to which they could return after leaving the army. Although recent studies suggest that Marius indeed recruited from the rural peasantry, that enrolment won Marius popularity because he gave rise to the designated land grants for army veterans (Rich & Shipley, 1993, p. 102).

Concerning the exploitation of land, there is evidence that although high demand, fostered by social equality, urbanization, and trade, played the most crucial role in permitting Greco-Roman farmers to exploit the land to its fullest potential, the structure of their society also provided a powerful stimulus to agriculture in more indirect and subtle ways. *Centuriation*, which still marks the modern countryside of Italy, France, Tunisia, and Spain, is the most visible indication of the transformative effect of Roman culture upon the landscape (Scheidel, 2012, p. 166). Proper distribution of land and help from the government with the agricultural challenges represented a higher production of food, which undoubtedly brought prosperity to the Roman economy. Measuring the contribution of the military, with its formation, skills, discipline, principles, and values, seems difficult; however, it can be undisputedly concluded that the role of the military in all these outcomes was crucial in creating the most important empire, which, to this day is remembered for its greatness.

Romans of the early Republic made little to no distinction between civilians and soldiers. It was the duty of all men of certain property value to serve in the army and return to civilian life and their farms after the end of the campaigning season. Even in the later Republic and early Empire, when the army was beginning to be distinct from the mass of civilians, the career paths of officers still consisted of a combination of military and civilian posts (Southern, 2007, p. 76). This combination had a profound effect on the lives of civilians, not only in establishing internal law and order and protection from external dangers but also in changing and boosting the economy and contributing to a gradual *Romanization* of the provincials (Southern, 2007, p. 77). Here, it is possible to claim that the Roman army with all its culture of discipline and skill (Phillips, 1985, p. 75), as Vegetius stated, could influence Roman society beyond its role as an institution created for conquest and defense.

Relations between the Roman military and civilians sometimes extended to soldiers erecting buildings on behalf of civilian communities. Military architects were sometimes seconded to civilian projects. Tacitus relates, for instance, how the governor of Britain, his father-in-law Julius Agricola, encouraged and helped the Britons to build temples, marketplaces, and private houses, implying that official sanction for these activities involved the loan of military builders. Another inscription from the province of Dacia (modern Romania) records that soldiers built the walls of the city of Romula (Southern, 2007, p. 78). There is evidence of a vast contribution by the Roman army to the infrastructure of the nation, bringing innovation and solution to boost the service sector. The inspiration probably lies in the necessity of providing mobility and counter-mobility in sectors with

limited access for tactical purposes. In the end, all this knowledge was successfully applied in sectors such as infrastructure building.

Conversely, soldiers who had been recruited from all over Italy, and their transferal—often after many years of service—to a completely different part of the peninsula, had a significant cultural impact; for example, in transforming local practices of burial and commemoration and encouraging the proliferation of more standardized tomb-monuments such as those, documented by Torelli, with Doric friezes in many areas of central and southern Italy (Rich & Shipley, 1993, p. 108). Another ceremonial contribution from the Roman Army culture that remained in people's minds was the ever-lasting monuments that helped refine mourning practices and gave space to a new identity.

In another scenario, the old fort sites and fortresses left behind by the army after moving on to other provinces as the conquest progressed were often given to civilians where they enjoyed extended independent civilian lives. Others retained their military associations or became veteran colonies. As the frontiers were crystallized and forts became permanent, the army units settled and the relationship with civilians developed and increased. While the Empire was expanding, the primary purpose of the army was fighting battles, but once the Empire ceased to expand, the army only occasionally fought in a pre-emptive or reactionary fashion. Whenever the army settled, civilians would become an integral part of its daily transactions. Soldiers began to form relationships with local women, trade with local people, and cultivate the land. Literary and archaeological sources confirm that fields and meadows were laid out in the immediate vicinity of Roman forts. Roman occupation was not simply a matter of placing forts in isolated territories. Civilians soon moved in to take advantage of the pay that soldiers received and wanted to spend (Southern, 2007, p. 78). It is attested that in several provinces, centurions exercised judicial functions in both military and civilian cases. In some instances, because the centurion was the highest-ranking official in the vicinity or because he was the officer sent to arrest people who had been accused of crimes, his judgment was accepted by the civilians (Southern, 2007, p. 82).

Although, as stated at the beginning of this paper, the main reason for the creation of the Roman Army was the defense from different threats, its contributions to society were palpable in many fields. Over the years, the Romans built perhaps the most powerful army of the time. With this power, they set out on other endeavors, such as conquering new territories. The creation of an Army of this magnitude required enormous manpower, but more importantly, it required a doctrine, a discipline, and a set of principles and values. Sometimes with almost no distinction between civilians and members of the military, a common cultural ground made its own path in the minds of the Romans, changing the way they perceived things and bringing progress and power.

However, the actions of the Roman army were not always glorious. On some occasions, they abused their power. Some of these events are recorded, and perhaps many stories of small-scale successes have been overshadowed by those actions. What can be

concluded is that the influence of the military in the Roman Empire was decisive, and a motivating factor for further study from the perspective of its contribution to the socialization of society.

The French army

“The Revolution changed everything and forever, though not in the way its proponents intended; the heritage was far more complex” (Fenby, 2015, p. 1). These are the words with which Jonathan Fenby, a British writer, journalist, and analyst, started one of his books about France (The Guardian, n.d.). Words that set the preamble for the complexity of the armed forces’ contributions to French society during the Revolution, the imperial rule of Napoleon Bonaparte, the restoration of the Bourbon monarchy, and the period of Napoleon the III, as well as the subsequent ramifications for France.

The period of the Revolutionary and Napoleonic Wars has been called the first *total war*, a war that affected millions of people’s lives, brought a whole continent into contact with armies and bloodshed, and subsumed the economies of most European states to the needs and exigencies of the military (Forrest, Hagemann & Rendall, 2009, p. 1). Because it was a time of empires and kingdoms, the Napoleonic wars had implications in different regions of the world. These wars were, in many respects, part of what may be regarded as the first world war. They were also the first wars fought by all combatant parties as national wars, with mass armies recruited on the basis of universal mobilization and supplied by requisitioning and plundering (Forrest et al., 2009, p. 1), suggesting implications for the nations involved. For this study, the implications will be concerning the French population and its inhabitants.

The size of the standing army in France varied little between the end of the seventeenth century and 1789. Recent military histories have made use of the personnel records, or *contrôles*, of the French army of the eighteenth century, which list the details of a soldier’s date of birth, birthplace, profession, and date of enrollment. From a peacetime number of about 150.000, the army’s manpower increased to a peak of approximately 400.000 in times of war, at least on paper. By 1789, there were 172 regiments, including 32 foreign ones, namely, Swiss; German; Irish; Liègeois, from the Prince-Bishopric of Liège; and Hussar, theoretically Hungarian. Foreign troops were scattered throughout the army and made up about 15 percent of the total force, while French soldiers populated the foreign regiments to an ever-greater extent. Infantry regiments absorbed the bulk of the troops with over 100.000 men. Apart from the Royal household units of the French and Swiss Guards, there were also cavalry and artillery regiments (Mainz, 2016, p. 38). The size of the French Army suggests a request of an impressive amount of manpower, impacting the living culture of the French.

In this sense, the portrayal of French youth leaving the comforts and affective pleasures of civilian life, of hearth, home, family, and loved ones, to take up arms, and adopt a

more uniform and anonymous outward appearance in the drill formations is compelling, finalizing these scenes of transition and departure with depictions of the march off to join the regiment and –in times of war– combat (Mainz, 2016, p. 31). These scenes represent not only the involvement of the society's youth in the business of war but also a change in the way of thinking, expression, and perhaps new values that conflicted with the notion of Napoleon as the highest inspiration. Comparing timespans, one can assume that these two empire's motivations were different. For the Romans, it was about Rome and its almighty connotation for future generations, expressed in its conquest of new land for the wealth of the Empire. In contrast, the French seemed to obey more to an inspirational leader who was supposed to bring progress and fundamental changes to society. Maybe both empires were looking for the same objectives, but the motivators sharply differed.

The military's influence on society can be outlined when comparing the Romans and French. While the military in the Roman era was creating a union based on its discipline and professionalism, the French military was a subject of continuous debate and, perhaps, division within the nation. There is evidence that on the eve of the revolution, the French army concealed a number of serious internal flaws behind an imposing façade. The officer corps, for instance, was divided between aristocrats who monopolized higher commands and the lesser nobles who did most of the work, but found promotions blocked for advancement (Rothenberg, 1989, p. 986). Military education was complicated by social tensions and resentment of aristocratic dominance. The king decreed the entrance to all military schools, limiting access to those who could prove that they had been born into a family that had been ennobled for at least four generations. While this regulation was not always strictly adhered to, and a number of non-noble officers were admitted over the years, the issue was very much in view when the French system of military schools was recognized and conceived during the French Revolution and Empire (Kennedy, Kennedy, Neilson, 2002, p. 5). As a result of this situation, collectively, the corps fell out of touch with rank and file. Senior non-commissioned officers, recently deprived of any hope of rising into the officer caste, were disaffected, while the ranks, overwhelmingly native volunteers with urban artisan backgrounds, tended to identify with the grievances of the third state. Thus, the cohesion of the army was fragile, and its loyalty to the crown uncertain (Rothenberg, 1989, p. 986). Indiscipline and insubordination were common in the early periods of the revolution; this condition led to the creation of *Le Grand Armée*.

Le Grand Armée was a product of the *levee en masse* (Gat, 2013, p. 246)¹ of 1793 when the First Republic adopted universal service liability in order to withstand invasion by a coalition including most of the other European powers (Sondhaus, 2010, p. 21). Massive conscription-based armies raised by Napoleonic France forced all European states

¹ The term "mass" connotes popular concentration, interaction, and mobilization rather than numbers because multitudes of peasants had always existed in pre-modern large states, typically comprising 85-95 percent of the population.

to consider how to increase their military manpower, with Britain being no exception (Forrest, Hagemann, Rendall, 2009, p. 205). One of the ramifications of this practice of universalizing the military service was to be used as a driver for national socialization and the promotion of national ethos (Gat, 2013, p. 247). Arguably, as discussed previously, the military was used as an instrument to deliver a message of national identity, and beyond that, to convince the citizens of a state to accept a cause in search of mutual benefit. Undoubtedly, the military organization is a potent tool to gain adepts hopefully in the noble cause of enhancing the quality of life. However, there is a significant risk since populism in its extreme manifestation can seek other objectives, perhaps not the common ones but individual or minority objective. In this sense, the French left favored a conscript army because they viewed a professional army as a threat to liberty (Sondhaus, 2010, p. 21). This specific issue will be discussed further in this article.

Napoleon made the continent a clear strategic priority, selling Louisiana to the United States and letting rebellious Haiti go free (Sondhaus, 2010, p. 20), as mentioned previously, achieving this strategy required impressive manpower. Through the imposition of conscription, the Grande Armée saw nearly 2.5 million men pass through its ranks, 1.660.000 of whom were French. The Grande Armée constituted a social space in which a minority of professional soldiers mingled with civilians who had not chosen the profession of arms but now found themselves confronted with a war of unprecedented brutality. The challenge of the army life affected large numbers of young men who had been born into the popular classes of society. For the vast majority of them, peasant boys, in the main, and more familiar with the rigors of farm-work, exposure to the army brought a need to change their most basic assumptions and adapt to new practices (Forrest et al., 2009, p. 45). A society should be aware of the impact of creating or enhancing a military force where scarce military culture is present. Abruptly changing the lives, especially, of young generations leads to consequences in the medium and long term for the construction or reconstruction of society. Arguably, a moderate military culture will reduce this impact. France's young generations had no other option; the new project required them, and society would face the consequences of this decision in the future.

The army was provided with only limited rations, e.g., bread. Meat was provided only during military campaigns. An individual soldier's pay had to provide them with the most basic necessities, to buy food and maintain their clothes and boots. To make matters worse, their pay was often late; soldiers risked long periods of penury and near starvation. At the end of 1806, for instance, payments were overdue by as much as five months. Soldiers' memoirs are full of complaints about their financial condition (Forrest et al., 2009, p. 45). With this outlook, a large portion of the Grande Armée had little or no resources; their logistics no longer based on army provisions, the armies now survived on general requisitioning. The armies took what they needed from the lands they marched through or fought for (Forrest et al., 2009, p. 5). Armies like the Grande Armée greatly affected the civilian population, some dying during the bombardment of villages and

towns, others from starvation in besieged cities, and most often victims of the epidemics (especially dysentery and typhus), which soldiers brought to thousands of cities, villages, and homes all over Europe.

Being part of an army with such limitations required a special kind of motivation and leadership and that was embodied in Napoleon; the leader one had to follow to secure victory. In this sense, the men who served in the imperial armies fought less for their nation and more for one man; they must be understood in a specific context, against the backdrop of a specific war (Forrest et al., 2009, p. 48). With this context in mind, the French population's acceptance of the military forces was threatened, creating an undesired path in the minds of many citizens.

After 1815, Napoleonic veterans constituted a significant element in the political life of the early nineteenth century. Small numbers of them came to acquire significant prestige when compared with their fellow citizens in urban districts and country towns. For them, the life of the nation could be assured if France was governed by a charismatic sovereign (Forrest et al., 2009, p. 48), suggesting an important link of influence between them and the government. The fact that the White Terror (General History, n.d.)² was also directed against soldiers reveals how the army, at the beginning of the Restoration, was far from being perceived as an incarnation of a nation mobilized against a foreign enemy. This army was, on the contrary, regarded with suspicion –a force recruited and paid by an internal enemy. For a significant part of the population in 1815, being a soldier also meant being a Bonapartist. Because of the widespread confusion that accompanied the dispersal of the army, veterans were often regarded as deserters. The new regime did little to help them normalize their administrative position. And, although the government was troubled by some of the atrocities that took place, the general air of confusion was exploited, and suspicions of the veterans persisted (Forrest et al., 2009, p. 49).

In addition to a divided army, the conditions for veterans were not the best. Legally, retirement pay was granted automatically to all of those who had completed 30 years of service. However, even if the years of campaigning counted double, this arrangement overlooked the majority of soldiers enlisted after 1804, unless they suffered from injuries causing the loss of sight or limb. Those who did would have the automatic right to retirement pay, but this was fixed at a derisory sum. After 30 years of service, the ordinary soldier received 150 francs per years, or 300 francs if he had completed 50 years of actual service; a sum that was not equal to the salary of a day laborer. As for those soldiers who were deemed incapable of achieving 30 years of service due to disabilities, they could “be nominated for

² The so-called White Terror was an attack launched against the terrorists and all who had properly been accused of doing well from the French Revolution. White was a Bourbon color, and some historians have taken this as indicating the movement for revenge as a royalist adventure, but this is not strictly true. Very few wanted a restoration of the old régime; they simply wanted to settle old scores. Clever men had taken advantage of the Terror, grabbing land and property by force and murder, including Church lands. Many had appointed themselves as government officials, with powers emanating from the awful force of the Terror.

retirement pay, or a simple bonus"; the King reserved the right to determine the quota of those able to benefit from this compensation (Forrest et al., 2009, p. 50).

This inevitably created serious discrimination, and those veterans who were hostile to the regime could expect little help (Forrest et al., 2009, p. 51). Evidence of this discrimination was flagrant with the Egyptians, who like other French men serving in the army, had retired after a few years of military service. These men were sent to the Depot of Egyptian Refugees in Marseille, or the smaller Depot in Paris, where they were added to the lists of those receiving pensions. Thus, Marseille, in particular, received a steady stream of young ex-soldiers, used to fighting and plundering, and with a cause for discontent. Like many soldiers, however, they still identified the Emperor as their savior against the machinations of the bureaucracy, local government, or their own community. After attempting to cut pensions expenditures by the First Restoration government, it is not difficult to imagine the jubilation of these people at the news of the Emperor's unexpected return (Bessel, Guyatt, Rendall, 2010, p. 72). In fact, it was not until the 5th of May of 1869 that a law was passed, establishing a pension that was available to all of the former non-commissioned officers and soldiers of the Republic and Empire, though, once again, on certain conditions (Forrest et al., 2009, p. 49).

Arguably, the French Army of the 18th and 19th centuries might appear to have provided only a limited contribution to the socialization of society. However, this does not mean that its role was not essential for achieving the revolution's political ends. In fact, Napoleon's success was predetermined by the superiority, or at least, the greater efficiency and modernity of the French political system –in comparison to its adversaries' (Rothenberg, 1989, p. 982). Here, an important argument emerges concerning the justification of the armed forces' work with the state solely for the purpose of war or defense that disregards that the intensity and number of conflicts can decline and that such institutions require adequate regulations whose provisions go beyond mere fighting during the war. These regulations cover a myriad of fields; the most important is to provide enough conditions for the re-incorporation of the soldiers into society, assuring an added velour in the prosperity and stability of the nation.

Apart from the lack of adequate regulations for veterans, it is worth highlighting other relevant issues in the French Army. Care should be exercised when using military forces as an instrument against its people. A clear example was mentioned with the *White Terror* when there was a perception that the employment of the force was against State's own people. Today, there are classic examples of the use of the military against revolutionaries, terrorists, or local guerrillas. This scenario requires an adequate use of force operation, in line with the concepts of Human Rights or International Humanitarian Law. Although such detailed regulations were not present during the French Revolution, it is worth noting how a society can become divided as a result of such actions.

Finally, it is plausible to claim that the French Army was more obedient given the need to consolidate the Napoleon objectives, which, once reinforced, had to be structured

for the future of the French Society to avoid unnecessary stresses in places like Marseille, but most importantly, to preclude the hardships of the many soldiers that served the Empire and awaited a fair payback, proportionate to their sacrifice. However, the government preferred to pay more attention to other matters, jeopardizing the future of an institution as important as le Grand Armée.

The Prussian army

More than in any other Continental State, the history of the Army in Prussia is also that of the Constitution. Very early on, the Prussian sovereigns succeeded in ending the power of the nobility; consequently, the military organization rapidly passed from a feudal system to a standing army, and popular institutions began to dominate the *Landwehr* (defense of the country) (Greenwood & Smith, 1866, pp. 548-563). The creation of the Prussian Army brought about a problem similar to that of Napoleon's French Army, especially in terms of becoming a driver of the division between the civilian population and itself. Some decided to take both sides. It is interesting to explore how society was continuously impacted by the constant political debates to create an adequate standing army that would be an impartial actor in the power struggle.

Arguably, tensions with society originated at the beginning of the Thirty Years War during which mercenaries occupied the place of national troops and acted as a scourge rather than a defense for the country. Because the government was unable to procure the necessary funds to pay them in cash, they proceeded to take what they perceived was owed to them from the people amongst whom they were stationed. This naturally led to considerable abuses (Greenwood & Smith, 1866, pp. 548-563) and unrest, which required the immediate creation of a functional state that would be strong enough to survive the threats of the time, including its neighbors' desire for power, mainly the French.

If, as it has often been said, the Prussian army created the Prussian State, it is also true that the subsequent political development of Prussia and Germany was dependent, to a far greater extent than in any other country, upon the organization of the army, its relationship to the sovereign power, and the will of its leaders. It was the army's reorganization during the period of 1807-13 that made possible Prussia's liberation from French domination and the recovery of its position as a Great Power. It was the hope of the soldiers like Scharnhorst, Gneisenau, Grolman, and Boyen that inspired that reorganization and would ensure a comprehensive political reform to create the new army (Craig, 1964).

The need for an army for defensive purposes demanded suitable national reserves. There was a system that offered the advantage of diminishing the expenses in times of peace and assured an effective defense of the state during wartime (Jomini, 1854, p. 46). Prussia started the design of an army suitable to the harmony of society that, while being reluctant to accept it, had no other option for protecting its interests and bringing an exemplary institution that inspired many foreign armies (Bara, 2012), strategists, pol-

iticians, and academics. The army achieved by Otto von Bismarck and Helmuth von Moltke the Elder engendered scrupulous debates that at times became restless battles of ideas, and power struggles and individual interests.

The substantial severity, which characterized the Prussian discipline, encouraged desertion. The total number of desertions between 1713 and 1740 was 30.216. The most significant sources of decrease were age and sickness, which annually led to the discharge of 20 percent of the effective force. The kingdom's physical and moral foundations were shaken when as many as 180.000 Prussians died in uniform, not to mention the civilian losses from disease and privation. The social contract of the Prussian State, namely, service and loyalty in return for stability and protection, was also shaken (Olsen & Van Creveld, 2011, p. 37). The then King, Frederick William I, soon found that he could not hope to replace these losses by relying upon volunteers. He believed in a perpetually active army, exhaustively drilled and dressed to go to battle at any moment (Greenwood & Smith, 1866). During his early years, the King resorted increasingly to the impressment of his subjects and abundant recruiting in neighboring states, which at times was indistinguishable from kidnapping (Craig, 1964, p. 8). This situation started, perhaps, one of the most assiduous discussions of the time, concerning universal conscription vs. a professional army; this discussion would take shape later.

Rather than an obligation by law or universal conscription, there should be a moral obligation where not only every citizen feels required to serve his country but also their parents encourage this commitment as part of a traditional set of values. As Hintze wrote, the foundation must be prepared by "fixed ideas and conceptions, inherited and cultivated, and confirmed by tradition." (Craig, 1964, p. 10). The number of recruits accepted every year should be consonant with the budget, and the capacity of the force. However, this capacity should be ambitious because the benefits, in the long run, will be more profitable for the nation.

Remarkably, the Prussian government developed a culture of self-reflection, seeking to learn from its mistakes. The Prussians created commissions, although with strong political content to, through analysis, find solutions. This was the case when the Prussian army was thoroughly defeated in 1806. The main contributing factors to its defeat in the field were lack of organization, training, and leadership, which were already apparent since 1763 (Craig, 1964, p. 22). These findings were the product of the Military Reorganization Commission appointed by the King. This commission was instructed to investigate the recent campaign and cashier and punish those officers whose conduct had been improper, as well as to propose changes in army organization, supply, service, regulations, selection of officers, and education and training (Craig, 1964, p. 39). It is worth mentioning that the ideas of Scharnhorst (Greenwood & Smith, 1866) and his colleagues of the Military Reorganization Commission set out not only to correct the deficiencies that had been revealed at the Battle of Jena but also, in Scharnhorst's words, "to raise and inspire the spirit of the army, to bring the army and the nation into a more intimate union

and to guide it to its characteristic and exalted destiny." (Craig, 1964, p. 41). The *union factor* between society and army plays an important role even today; the governments and institutions should fight against the culture of *them and us*, seeking the integration of all the state's institutions.

For Hermann von Boyen, who would become Prussia's war minister in 1814 and a member of the general staff in 1806, the problem during the 1790s and 1900s, was the gradual disappearance of idiosyncratic but decisive generals from the time of the Seven Years War, such as his own commanding officer, who had barely been able to read and had given briefings in his kitchen, but who had "maintained a certain independence at decisive moments, which can only be won by a profound inner education, not by social forms." (Hewitson, 2013). Boyen emphasized a broad education for the military. After Boyen's fall, the younger officers ceased to be *Boyensche* in their ideals and interests, and his conception of the enlightened citizen-soldier who played a full and active role in the life of the society to which he belonged disappeared. In its place, a concept of the army as a special calling grew, followed by technicians who were essentially separate from civil society. The growth of this tendency can be found in the heated debates concerning the curriculum of the *Allgemeine Kriegsschule*, and the obligatory cultural –although gradual retreat of Rühle von Lilienstern from his insistence that his program should include such instruction– as well as purely military subjects (Craig, 1964, p. 80).

The scope of military preparation has been widely discussed for hundreds of years. If one of the key drivers of the creation and quality improvement of the armed forces is to socialize the society –which is the main idea in this article– the citizen-soldier should have a broader preparation. In the end, after service and return to society, the citizen should be able to contribute to generating prosperity. Nonetheless, what amount of knowledge can embrace enough capacity to face the current threats that require broader concepts emphasized on the profession? Boyan defended this idea. If it were necessary to establish a precise date of the origin of the military profession, August 6th, 1808, would be a good choice. On that day, the Prussian government issued the decree on the appointment of officers, which set forth the basic standard of professionalism with uncompromising clarity:

The only title to an officer's commission shall be, in time of peace, education and professional knowledge; in time of war, distinguished valor and perception. From the entire nation, therefore, all individuals who possess these qualities are eligible for the highest military posts. All previously existing class preference in the military establishment was abolished, and every man, regardless of his origins, had equal rights and duties (Huntington, 1985, p. 31).

In the years between 1819 and 1840, everything that Scharnhorst and his disciples had done to reconcile the military establishment with civilian society had been destroyed; the army was once more widely regarded as the main barrier to social progress. It was clear that, in the event of significant domestic upheaval, its existence would be in jeop-

ardy (Craig, 1964, p. 81). This statement validates the long-term challenges for Prussia as a divided society, especially with the military. In any country, the implementation of armed forces should overcome all the difficulties that enhance the arguments of divisions. Neutrality perhaps is one of the most important principles that along with professionalism, can help overcome any source of division.

The first Prussian National Assembly convened on the 22nd of May, 1848 (Craig, 1964, p. 110) to discuss military affairs. The Assembly would have been well advised to concentrate on the constitutional issues involved, to define with precision the powers of the King and the War Minister and make provision for a clear and unequivocal military oath of allegiance to the Constitution of the State. The left took the position that the time had come to abolish the regular army, which had been the source of so many of the country's ills, and to replace it by a genuine *Volkswehr* or popular militia, which would be the surest and only guarantee of civil freedom (Craig, 1964, p. 111). Arguably, the use of heavy weapons, preparation for attending external threats, and other military challenges require much more drill and sacrifice than those related to internal affairs. In this way, it is possible to discuss that this level of professionalism is only possible through the dedication and constant training of military personal. The ramifications, as discussed, can include citizens that are more prepared to be part of society; the military is one of the vehicles to achieve this level of skill.

Following the continuous dispute about the army in the session of 1860, a bill was laid before the lower House proposing a reorganization of the army based on the Law of 1814, about times of conscription, size of the army and funding (Greenwood & Smith, 1866, p. 558). After several changes, the 1860 bill survived until Otto von Bismarck became president in 1862. Bismarck, of course, introduced a new bill, which, this time, required almost double the budget of the past bill –some nine million of thalers (Greenwood & Smith, 1866, p. 558). Bismarck was fully in accord with the technical considerations that had motivated the army reform; he completely agreed that the King's power over the military command and military affairs, in general, must not be subjected to parliamentary control (Craig, 1964, p. 161), achieving thereby what the King had always insisted on. In military affairs, the Chamber had only a budgetary right; however, decisions about the size, organization, and command of the army were made by the King alone (Craig, 1964, p. 163).

In October 1862, Minister of War, Albrecht von Roon, and Bismarck, serving as Minister-President and Foreign Minister at that time, conceived an entirely new approach to the army issue related to the reform. The two ministers drafted an army service bill for submission to the Chamber that provided first, that the size of the army would henceforth be fixed at a given percentage of the population, probably 1 percent. This army would consist of two elements: long-term volunteers (*Kapitulanten*) comprising one-third of the total force; and conscripts that would serve for only two years. To support the volunteer formations –the existence of which presumably reduced the number of conscripts called

annually— all eligible males were placed in the *Ersatzreserve* instead of being called to active duty. All conscripts wishing to ensure that their term of service would not exceed two years would pay a special tax (*Einstandsgeld*). Finally, instead of having to study the intricate details of a military budget, the Chamber would automatically grant a fixed annual sum (*Pauschquantum*) for each soldier in the army (Craig, 1964, p. 162). The funding of any endeavor will always complicate the associated decisions; this was the case in Prussia. Ultimately, the government managed to reorganize the army as necessary, but it was not easy to go on without fighting for resources. Although those were times of war, threats, battles for supremacy, and other invitations to violence, in present times, the battle for the funding of the armed force is still intense, requiring a proper and detailed justification. A professional force capable of maintaining equilibrium in society can help achieve those funds much easily.

Arguably, Minister Roon managed to overcome the impasse created by 45 years of reliance on an outdated military system and made the Prussian army fit for the Wars of Unification (1864-71), which created a new German empire dominated by Prussia (Walter, 2009, p. 270). At the very least, it can be said that Roon found a way to fund the new army, increasing its size. The German Wars of Unification transformed the political and military map of Europe. For two centuries, since the days of Louis XIV, France had been, with some exceptions, the dominant power of the European Continent. Now, this position was taken by the new German Empire. Prussia accomplished this in a remarkable feat of military proficiency, and now the world looked up to Prussia when it came to military affairs (Gat, 2001, p. 314). Becoming a benchmark for other armies required great thinkers, such as Helmuth von Moltke (the Elder) who wanted to build on the Prussian officer corps' culture of independent thinking to create an effective system of command, one which also ensured cohesion (Bungay, 2011, p. 58). Similar ideas added to the use of the staff, discipline, and effectiveness; they created a doctrine that is still present in many militaries the world, opening a new opportunity in terms of international cooperation that benefits a state because it adds prestige and international recognition, benefitting society as a whole.

The consolidation of the Prussian Army after the Thirty Years War shows a remarkable political effort through a bloody path. There are a couple of questions that should be taken into account during the reorganization of an army or armed forces more broadly. The first question is: Is the establishment of powers set? The second is, is there an adequate system of *checks and balances* to create an equilibrium that permits its normal functioning? Prussia was exposed to vicious debates, which sometimes seemed hopeless. However, in the end, Prussia managed to overcome all those difficulties, creating a world-class army.

Beyond all the victories, perhaps today's German culture largely reflects what brave soldiers and brilliant military and political minds offered to enhance its military culture. The great Scharnhorst, Gneisenau, Grolmann, and the Prussian Military Commission mark the beginning of the military profession in the West. They established the insti-

tutions and ideals that dominated the Prussian forces for the rest of the century and furnished the model upon which virtually all other officer corps were ultimately based. Each nation has made its unique contributions to the culture of western society. The distinction of originating the professional officer is earned by Prussia (Huntington, 1985, p. 31). This professionalization of the military became a standard and an essential requisite for creating militaries that drive the socialization process within their respective societies.

The United States Armed Forces

Social science research on the American military during the first four decades of the twentieth century was minimal, both because the social sciences were not particularly well developed and because the military did not have a major institutional presence in the United States during a period when the country was not at war. The size of the military surged through the mobilization of the militia and conscription when the United States was engaged in combat; it declined with demobilization during interwar periods (Nielsen & Snider, 2009, p. 195). Prior to this, in 1855, the long tradition of the US armed forces, its roots in collecting information from other armed forces to produce continuous changes in its organization (Kretchik, 2011, p. 68), contributed to creating a powerful standing armed force. In light of its size, its analysis is worthwhile given its impact on society.

In the mid-twentieth century, scholars sporadically attempted to describe the emerging structural relationships between the armed forces and their host societies in the modern world. C. Wright Mills' book, entitled *The Power Elite* and Harold D. Lasswell's developmental model of "the garrison state" were among the most important. Mills saw the military elite only as one actor in a national power structure. For Lasswell, the changing role of the military was driven by changes in the technology of war that increased the importance of security concerns in national agendas. His focus, however, was also on the elite. It was not until the late 1950s, at the peak of the behavioral revolution in the social sciences, that political scientists and sociologists started concerning themselves with the military, changing their focus from individual soldiers to the corporate organization of the military and its relationship with the broader society (Nielsen & Snider, 2009, p. 197). Arguably, this change of focus brought about a new concept related to the impact of the armed forces that stretched beyond their mere use as a defense instrument for the purpose of security.

At the end of the 1960s, the Vietnam War had become the US's Greek Tragedy, its Pyrrhic victory. Despite a long record of military victories over the enemy forces –conventional and guerrilla– American soldiers and, above all, their State lost the war and, more importantly, the peace that was expected to follow. Surviving that loss and physically and psychologically recovering from it as a nation took over 20 years. Many did not survive; others survived but never fully recovered. All in all, they overcame the tragic loss (Wilson, 2013, p. 3). Between 1960 and 1963, the president, John F. Kennedy, and civilians iden-

tified the communist-inspired insurgency as the predominant threat to the interest of the United States. Kennedy's National Security Action Memorandum No. 124 of January 18, 1962, for instance, defines insurgency as a "major form of politico-military conflict equal in importance to conventional warfare" (Thornton, 2007, pp. 150-175).

Notwithstanding such a recognition, the army remained wedded to a doctrine suitable only for conventional warfare in Europe (Miron, 2019a, p. 471; Miron, 2019b, pp. 21-25). As an American General memorably remarked of Vietnam to an interviewer from the RAND Corporation in 1970, "I'll be damned if I permit the United States Army, its institutions, its doctrine and its traditions, to be destroyed just to win this lousy war" (Beckett, 2001, p. 24). This statement indicates the determination to maintain cultural beliefs that could be shifted with a new way of thinking for the armed forces.

The Army, Navy, and the Air Force now moved further toward becoming training and administrative organizations, while the fighting edge of the armed forces was embodied in the "unified and specified commands" of the Joint Chiefs of Staff and their superiors, the Secretary of Defense, and the President (Weigley, 1977, p. 449).³ This new organization promised a different outcome. Although this type of organization prevailed, it was not enough to ensure victory in Vietnam. Endless literature on the reasons for failing in Vietnam has been written. However, for this article, it is essential to identify those reasons that produced friction in society. For instance, the fact that Lyndon Johnson's administration, relying primarily on conscripts, ignored the lessons learned by the Roman, Chinese, British, and French empires, among others. All of them had found that pacification operations far from home were seldom popular and invariably costly and long-lasting, and were generally better left to volunteer professional soldiers rather than enthusiastic citizen-soldiers whose deployment was sure to spark social unrest back home (Boot, 2013, p. 417). This division, polarization, and decisive societal pressure effectively contributed to ending the war.

The Vietnam War prevailed as a reason for division in the United States society and at the same time as a motivation for unitedness, as President Ronald Reagan put it when formally accepting the Vietnam Veterans Memorial on behalf of the nation. Reagan referred to the "scars" suffered by those who served in Vietnam and made a reference to those who had "strong opinions on the war." Having alluded to the protest stemming from the war, Reagan went on to argue that it was time to "move on, in unity," thereby rhetorically relegating a divisive experience to the past and presenting social unity as a condition necessary for America's progress into the future (Beattie, 1998). Connecting the United States' reasons for going to war in Vietnam and the rise of a new concept of war, in this case against old doctrine and culture, as well as the use of conscripts rather than pro-

3 McNamara used the authority to create multiservice commands under the Reorganisation Act of 1958 to form analogous packages in the forces themselves, bringing all combat troops into one of the various inter-service commands.

fessionals, the war and other matters depict a remarkable impact on the society that raises questions about the political decisions on the use of armed forces and the consequences thereof for society. As mentioned before, using examples of armies from other times and other nations, this case is not any different.

Perhaps, because of the violence seen on the televisions in homes in the United States, the Vietnam war remained for a period, “the war that dared not speak its name.” Vietnam veterans became the Quiet Americans (Beattie, 1998, p. 58). Then, during Ronald Reagan’s administration, the Vietnam veteran was hailed a hero and allowed, even invited, to articulate his/her experience (Beattie, 1998, p. 58). The recognition of the Vietnam veterans represented a cultural change in the society of the United States, opening new opportunities for expression, creating spaces for development, identifying specific groups to promote reconciliation, and, perhaps most importantly, a segmentation of the society which, for good or for bad, has been spotted by politicians in their government plans and, especially, during their political campaigns. The United States has a veterans-leading program, inspiring other countries to follow this practice. Its current budget, under the umbrella of the Department of Veteran Affairs, is \$183.1 billion (IISS, 2018, p. 36). The military forces underwent modifications after Vietnam. These changes continue to occur following the Gulf War, the Iraq War, and the Afghanistan War; however, these will not be discussed in detail because of space limitations.

The US military is not one force but several. The first force is commonly known as the active component, which operates full time as part of the Department of Defense (DoD) and is governed by Title 10 (United States Code, 1956)⁴ of the United States Code. The second major force is the Reserves, which is broken into two distinct groups. The first group is the reserves. Each service, the US Army, the US Navy, the US Air Force, the Marine Corps, and the US Coast Guard has its own reserves that operate exclusively under federal control when training at home or deployed overseas to support the active component. The second group of reservists, the National Guard, differs considerably from the first. The National Guard consists of the Army and Air National Guard, both fall under the National Guard Bureau; a federal-level headquarter under the DoD (Campbell & Auerswald, 2015, pp. 72-73).

The reserves have played an important role in different nations throughout history. For the United States, the Reserves were a vital contributor of manpower and technology during World War I and II. However, their use decreased during the Vietnam War (Cohen, 2015, pp. 16-21), regaining its prominence, yet again, during the Global War on Terrorism (Cohen, 2015, pp. 22-29). The use of reserves implies having a force somewhat trained in military affairs, but highly skilled in civilian affairs. These skills, adequately

⁴ Title 10 is an Act to revise, codify, and enact into law, title 10 of the United States Code, entitled “Armed Forces,” and Title 32 of the United States Code, entitled “National Guard.” *Title 10 and Title 32, United States Code*. Enacting during the Second Session of the Eighty Fourth Congress of the United States of America. Washington 1956. This document has been enacted in several occasions.

balanced with the use of active force, can produce significant results on the battlefield, but beyond that, it serves to connect active military personnel with civilians to bring prosperity not only after any conflict in which they can be involved but also on a daily basis. Not many countries can have reserves integrated into the actual military. Most of the time, this is due to the scarce allocation of resources. The use of the Reserves as extensions of the active force represents an opportunity to involve society with the military for purposes of defense closer and serves as a bridge that facilitates transitions in both ways from the civilian world to the military and, most importantly, from the military world to the civilian.

A part of the contributions from the military to society is encapsulated in the compensation offered to its members. If a member of the military receives more benefits, appropriately used, this can help bring prosperity to society. For the US, the objective of the military personnel compensation system is to attract, motivate, retain, and ultimately manage the departure of service members. The military establishes compensation policies based on the unique needs and characteristics of the organization to meet these goals. For example, the military is a hierarchical organization without lateral entry that attempts to manage the supply and demand of military personnel through manpower policies such as its retirement system. Military compensation today is a combination of multiple types of pay and benefits (Campbell & Auerswald, 2015, p. 90), such as cash pay, which includes regular military compensation and special and incentive pay, and noncash pay, which includes in-kind and deferred benefits (Campbell & Auerswald, 2015, p. 91). Military compensation promotes personal development. It enables commercial investments in many fields in regions in which the military is deployed and prepares military personnel for a better performance during their military career, creating an experience acquisition foundation that can be used later in the civilian world. It also promotes stability and fair treatment, especially for those who are wounded and so on. Therefore, it is essential to maintain a balance with the motivation of the patriotic duty because the lack of it will mislead the core of the armed forces.

Another interesting feature of the US armed forces –similar to the Prussian Army– concerns the exporting of security, which ultimately offers the military opportunities to acquire new experiences, new knowledge from different cultures, and perhaps, new opportunities of trade and many other exchanges for their homeland. Militaries do more than merely fight wars. Governments around the world look to the United States to assist them with their security deficits. However, advanced aircraft, ships, and tanks are not the key to secure political objectives; it is the human skills that the United States promotes and tests in combat zones that may be critical. Success is not contingent on being warriors alone; instead, military personnel must also be builders, diplomats, and guardians (Reveron, 2016, p. 13). Having this set of skills requires a different approach to building military capacity, one which is more positioned to be employed in another set of scenarios and will contribute to creating better societies (Thornton, 2000).

Exporting security is also an instrument to improve the well-being of other societies. The United States and other countries are aware of this situation; however, the United States is the leader in military cooperation programs. A clear example of this is the expansion of its security programs which, for instance, in terms of status of force agreements went from 40 in 2000 to 117 in 2016. Its foreign military financing budget went from \$3.6 billion in 2000 to \$5.8 billion in 2016, and, not less impressive, its international military education and training budget increased from \$58 million to \$111 million for the same period (Reveron, 2016, p. 44).⁵ Currently, the foreign military financing budget continues to increase and is mostly used in Afghanistan (Operation Freedom's Sentinel), Iraq, and Syria (Operation Inherent Resolve) (IISS, 2018, p. 36), alongside other international cooperation programs.

The history of the US armed forces is vast and complex, and it is one of the most significant drivers for US society. During the twentieth century, and presently, the US armed forces have been the main protagonist in the most challenging wars and conflicts with significant consequences that, apart from their international impact, had ramifications in its society. Perhaps the most remarkable was the Vietnam War, which brought the horrors of war to American television, changing the American minds forever. The debate over the Vietnam War influenced many subsequent discussions on foreign policy. Almost every military initiative since then has been debated in terms whether it would lead the US into ‘another Vietnam,’ e.g., sending the Marines to Lebanon; invading Grenada; deploying military advisers to El Salvador; supporting the Contras in Nicaragua; helping South American countries fight drug trafficking; and sending troops to Iraq (Wilson, Dilulio & Bose, 2014, p. 434).

The US armed forces were the object of more exhaustive follow up after the Vietnam War, producing necessary modifications, that, beyond the mere military, produced perhaps one of the most important in terms of contribution to society, President Ronald Reagan’s promotion of the Veterans Administration to a cabinet-level executive department in October 1988. The change took effect on March 15, 1989, and administrative changes occurred at all levels. President George H. W. Bush hailed the creation of the new department when he said: “there is only one place for the Veterans of America, in the Cabinet Room, at the table with the President of the United States of America.” The Veterans Administration was then renamed the Department of Veterans Affairs (U.S. Department of Veterans Affairs, n.d.). It certified and improved all sort of benefits, including transitions assistance, compensation, education and training, vocational rehabilitation and employment, and home loans, among many other significant benefits (U.S. Department of Veterans Affairs, n.d.), bringing progress to society through a military system.

Through its armed forces, the US government persists in its role as an exporter of security. One of the reasons for this insistence is that this can boost its defense sec-

5 See Table 2.1. Expanding security programs.

tor, bringing prosperity to the nation and providing stability to different regions of the world. An interesting example of this practice is the International Military Education and Training Program (IMET), which aims to increase understanding between the US and other nations, allowing participating countries to become more self-reliant, and increase the awareness of internationally recognized human rights issues (Reveron, 2016, p. 132). Measures such as IMET open opportunities not only to the US military but also to other foreign militaries. Having access to a new technology, new practices, and, in general, a whole new concept of ideas can contribute to the socialization of their societies, on top of the defense priorities.

Special considerations

There are lingering concerns in society about the military holding an absolute monopoly on force, and how to keep it strong enough to defend the state and subservient enough not to threaten it is the central question in civil-military relations (Hooker, 2004, p. 2). Although the military is a violent institution designed by society for protection, the dilemma is finding the balance of a military strong enough to do so but not so strong as to violate its trust and bring violence to the society it is supposed to protect. Deborah Avant has called this the balance between efficiency and accountability (Morgan, 2006, pp. 202-218). Avant suggests that armed forces should be highly ordered, disciplined, but accountable. If this can be achieved, it is possible to be less concerned and, more importantly, to adjust an organization to achieve different objectives in the education of society under the amalgamation of the principles and values of a nation, less worried about the monopoly of force and the ingredient of violence.

In terms of the politics beyond the discussion on submission of power raised by Huntington or Janowitz among other renown academics, it is important to mention other concerns. First, politics is beyond the scope of military competence, and the participation of military officers in politics undermines their professionalism, curtailing their professional competence, dividing the profession against itself, and substituting extraneous values for professional values (Hooker, 2004, p. 8). Second, the role of the retired military elite should be balanced in their thinking and aware of their responsibilities during the election processes and general government activities. Their decisions can alarm the old tradition of military non-partisanship (Hooker, 2004, p. 5), and tend to politicize the armed forces in the short and medium-term excessively (Strachan, 1997, p. 1)⁶. Such action is not convenient for the institution. Lastly, care should be taken at the moment of using polls of social confidence. Measurement of the military by itself can lead to a positive coaxing of the results. Prestige and popularity in society might be vital to the ability to exert political leverage, legitimizing the intervention in politics. The military should not

⁶ “Armies are self-evidently political institutions (...) Nothing empowers a polity more succinctly than its armed forces; no act more clearly defines its ultimate interests than a decision to fight.”

act as a guarantor of democracy or other values. That used to be the case of the Turkish military, which declared itself as a defender of secularism, following a long tradition since Atatürk times. A discussion on this specific subject requires an in-depth study. However, mentioning these caveats can make governments and military elites aware of issues that must be addressed, otherwise, rather than contribute to the socialization of society, the armed forces may achieve the opposite, its division.

Contemporary military culture is tremendously complex. It involves fragmentation and harmony, traditional and current features, and multiple overlapping spheres of influence, including professional and institutional, bureaucratic, occupational, warrior, peace-keeper-diplomat, leadership and followership, multirole, versatility, and a myriad of other cultural influences, orientations, and tools (Hajjar, 2014, pp. 118-145). An interesting reflection from Dr. Remi M. Hajjar about the theory's use of the *dominant military professional* variable implicitly provides cultural insights regarding the purported prominent archetypical traits of the top general officers and military leaders across different eras, ranging from *combat leader* in the modern era (from 1900 to 1945) to the *manager or technician* in the later modern era (from 1945 to 1990) to the *soldier-statesman and soldier scholar* in the postmodern era (from 1990 to 2001) to the *soldier-warrior, soldier-manager, soldier-statesman, soldier-scholar, and soldier-constable* in the hybrid era (from 2001 to present). The growing complexity of the dominant military professional's crucial traits in the postmodern era hints at the emergence of postmodern military culture (Hajjar, 2014, pp. 118-145). Hajjar's statement provides ideas of the military cadre of evolution. From this perspective, it is easier to understand what is happening with the military way of thinking, its evolution, and how this new set of skills can be used in society.

It is important to stress that the military presence in civil society is not confined to serving members of the active-duty military. It encompasses all who serve or have served, both active and reserve. For example, millions of veterans with first-hand knowledge of the military and its value system exist within the population at large. The high incidence of married service members and an increasing trend towards off-base housing mean that hundreds of thousands of military personnel and their dependents live in the civilian community. Reserve component installations and facilities and the reserve soldiers, sailors, airmen, and marines who serve there bring the military face to face with society every day in thousands of local communities across the country (Hooker, 2004, p. 3).

In regards to veterans, it is important to mention two the United States and the United Kingdom. In the UK, the most up-to-date figures from the Royal British Legion Household Survey (2014) estimate that 4.4% of the U.K. population (2.83 m) are veterans. A further 3.2% are dependent adults (2.09 m) and 1.5% are dependent children (0.99). In total, it is estimated that 9.2% of the U.K. population (5.91 m) is part of the veteran community (Cooper et al., 2018, p. 157) and as of 2014, it is estimated that there were about 22 million living veterans in the United States (Neill-Harris et al., 2016, pp. 585-604) without counting all the persons linked to the veterans as the

British example. These numbers provide evidence of the remarkable sizes of community that in some way receives benefits from the government through the armed forces, but they also indicate that they are in a better and deserved position after serving their countries. Furthermore, it suggests that those individuals continue supporting their nations from different positions.

Another interesting aspect is the security gap, which is a current option for the armed forces. Peter Neuteboom and Joseph Soeters (2017) provide a stimulating case study, analyzing how the Dutch military performed during security gaps in the three (post) conflict areas of Bosnia and Herzegovina, Kosovo, and Iraq. They conclude that army units were frequently involved in interim policing and *de facto* operated as Hybrid organizations, without leaving the military paradigm behind. Policing is generally not seen as a primary task of the military. However, to adapt to the reality of security gaps and increase the operational effectiveness in the field of public security, the military would benefit from reflecting on their current military paradigm and on what they could learn from current policing practices (Neuteboom, Soeters, 2017, pp. 711-733). That is the case of the Colombian military forces where army units⁷ are dedicated to combating criminal organizations due to increasing activities where local police cannot respond to the coverage demand.

However, the armed forces should stay away from any political affiliation. But how to reconcile from one side the necessity, for instance, of improving military pay, quality of life for the militaries and their families, and make the force stronger for defense purposes, with some political parties offering solutions to these necessities, but not all of them. That reconciliation is perhaps possible with adequate attention (provide enough interest as an important group of society and an organization) to the military system, focusing on its role as a guarantor of the national defense and the key player in the contribution of the prosperity of society. This adequate attention should be addressed by all political parties, staying clear from populist practices such as those promising unjust and unachievable pay raises or benefits, but remaining aware that a strong and reliable military force can guarantee national defense and can help lead society through a much better path.

Conclusion

The Romans created the first permanent army that was paid, fed, clothed, and armed by the state, and based on skills and discipline. When Rome was not at war, the legions were called to provinces to create physical infrastructure from virtually nothing. Arguably, the Romans placed their society at risk by employing barbarians to fight on its behalf. The Romans also started a program for veterans that provided lands that would contribute to local economies. Roman soldiers also brought culture to new regions; they helped with judicial functions and

⁷ For instance, the Counter-Narcotics Brigade, which operates against criminal organizations connected with narco-trafficking.

many other activities, becoming incorporated fully into society. All these actions and many others suggest an arguable concept of consciousness from the Roman authorities towards their army, concerning its use as an instrument of socialization.

During the Napoleonic Wars, mass armies were recruited based on universal mobilization, changing the ordinary lives of the youth and their way of thinking, inspired not by their Nation, but by Napoleon's ideas. Desperate measures were taken to create an enormous army whose organization was flawed because of profound differences between officers and soldiers, creating tension. A conscript army was favored because a professional army was viewed as a threat to liberty. Poor conditions for veterans and discrimination degraded the lives of former militaries, creating unrest in some areas such as Marseille that received a steady stream of young soldiers used to fight and pillage. These events suggest that during the Napoleonic Wars, there was a limited concern for the armed forces as an instrument of socialization since their creation and operation was purely focused on the business of war.

Although similar to the French Army in terms of tensions between the army and government, the Prussian Army was organized for the defense of the country (*Landwehr*) following the disastrous experiences during the Thirty Years War and the imminent threat of the French and other neighbors. Through several re-organizations the Prussian Army managed to become one of the strongest armies, introducing a clear concept of professionalization that made the Prussian Army an effective benchmark for armies around the world. Arguably, the most significant contribution to the socialization process was the concept of professionalism in the army. This concept still inspires other countries to train their militaries to the highest standard to make them more efficient and competitive. All these characteristics are fundamental to the socialization process.

Lastly, the US Armed Forces are currently a symbol of power and technology. In the field of socialization, perhaps, its most remarkable achievements are related to their capacity of exporting security, becoming a source of cultural, technological, and academic exchange with other fields. Similarly, their comprehensive model for veterans is noteworthy, offering thousands of soldiers, and their relatives, benefits that contribute to the economy of local communities. Moreover, these groups are homogenized in a force that remains the key player in the process of socialization.

Using the evidence of the four militaries (Romans, French during the Napoleonic Wars, the Prussian Army, and the US Armed Forces), it is possible to arrive at some conclusions. Armed forces have the primary mission of protecting a nation, throughout history, they sometimes enabled conquests and expansions; however, that is not the case today and hopefully will not be in the future. They can also provide a source for work, education in military affairs, and opportunities to expose citizens to cultural exchange. They have brought about technology and other sorts of progress. Armed forces are also an instrument of violence, but that was not the focus of this paper. Today, armed forces continue to be the central pillar for defense and an invaluable asset for security and socialization.

The objective of this article was to provide evidence of the role of the armed forces in the socialization of society by providing examples from different countries at different times. This article also calls to delve deeper in several areas concerning the impact of the direct and indirect contribution of the armed forces to the prosperity and stability of a nation. Some future studies could include identifying the role of veterans in the economy of a country, determining how government-issued benefits change the lives of veterans, their relatives, or beneficiaries and how society aims to include its militaries (veterans and active duty) in the complex process of creating prosperity, and establishing how military knowledge and skills can be harnessed to increase a society's competitiveness and what can be done to improve this situation. There are many other questions to justify the funding of the armed forces from perspectives other than mere national defense and security; many whose discussion inevitably brings the civilian leadership into conflict with the military (Herspring, 2009, pp. 667-687). Emphasizing this approach can bring a new common ground to reconciling the differences between the government and the military for society.

Lastly, reflecting on the examples of the armed forces from around the world that were part of this study suggests that they are institutions that represent, to a certain extent, the national identity of their countries. They are the guardians of the security of the states and their citizens and, most importantly, they have the possibility to create opportunities for young generations and citizens, in general, to reinforce their values, principles, culture, and identities through a challenging experience that inspires the unity of a nation, not against other nations, but against common threats and they are also, perhaps, a source of union for world prosperity.

Acknowledgments

The author wishes to thank King's College London for the support given to this article as part of his Master's degree in International Security and Strategy.

Disclaimer

The author declares that there is no potential conflict of interest related to the article.

Funding

The author does not report sources of funding for this article.

About the author

Fabián Ricardo Giraldo-Chaparro is a Colonel in the National Army of Colombia, currently serving as Chief of Staff at the Training and Education Command (CEDOC).

He holds an MA in International Security and Strategy (King's College London) and is a graduate of the UK Defence Academy – Royal College of Defence Studies (RCDS), and the Command and General Staff College at Fort Leavenworth, United States. During his career, he has served as Commander of the Special Operations Aviation Battalion, the 33rd Aviation Brigade, and as Chief of Acquisitions for the Colombian Army Aviation.
<https://orcid.org/0000-0002-3855-5648> - contact: fabian.giraldo@buzonejercito.mil.co

References

- Atkinson, C. (2014). *Military Soft Power: Public Diplomacy through Military Educational Exchanges*. Maryland: Rowman & Littlefield.
- Beard, M. (2016). *SPQR: A history of Ancient Rome*. London: Profile Books.
- Beattie, K. (1998). *The Scar That Binds: American Culture and the Vietnam War*. New York; London: NYU Press.
- Beckett, I. (2001). *Modern Insurgencies and Counter-insurgencies: Guerrillas and their Opponents since 1750*. New York: Routledge.
- Bessel, R., Guyatt, N., & Rendall, J. (Eds.). (2010). *War, Empire and Slavery, 1770-1830*. London: Palgrave Macmillan.
- Boot, M. (2013). *Invisible Armies: An Epic History of Guerrilla Warfare from Ancient Times to the Present*. New York: Liveright.
- Bungay, S. (2011). *The Art of Action: How Leaders Close the Gaps between Plans, Actions, and Results*. London: Nicholas Brealey Publishing.
- Burk, J. (2002). Theories of democratic civil-military relations. *Armed Forces & Society*, 29(1), 7-29.
- Campbell, B. (2002). *Warfare and society in imperial Rome, C. 31 BC-AD 280*. London: Routledge.
- Campbell, C., & Auerswald, D. (Eds.). (2015). *Congress and Civil-Military Relations*. Washington: Georgetown University Press.
- Cohen, R. (2015). *Demystifying the Citizen Soldier*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Cooper, L., Caddick, N., Godier, L., Cooper, A., & Fossey, M. (2018). Transition from the military into civilian life: An exploration of cultural competence. *Armed Forces & Society*, 44(1), 156-177.
- Craig, G. (1964). *The Politics of the Prussian Army 1640-1945*. Oxford: Oxford University Press.
- Fenby, J. (2015). *The History of Modern France: From the Revolution to the War on Terror*. Croydon: Simon and Schuster.
- Forrest, A., Hagemann K., & Rendall, J. (Eds.). (2009). *Soldiers, Citizens and Civilians: Experiences and Perceptions of the Revolutionary and Napoleonic Wars, 1790-1820*. London: Palgrave Macmillan.
- Gat, A. (2013). *Nations: The long history and deep roots of political ethnicity and nationalism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gat, A. (2001). *A history of military thought: From the Enlightenment to the Cold War*. Oxford: Oxford University Press.
- Greenwood, F., & Smith, G. (1866). The Prussian Army. *The Cornhill Magazine*, 14(83), 548-563.
- Godfrey, R., Lilley, S., & Brewis, J. (2012). Biceps, bitches and borgs: Reading Jarhead's representation of the construction of the (masculine) military body. *Organization Studies*, 33(4), 541-562.
- Herspring, D. (2009). Civil-Military Relations in the United States and Russia: An Alternative Approach. *Armed Forces & Society*, 35(4), 667-687.
- Hewitson, M. (2013). Princes' Wars, Wars of the People, or Total War? Mass Armies and the Question of a Military Revolution in Germany, 1792-1815. *War in History*, 20(4), 452-490.

- Huntington, S. (1985). *The soldier and the State: The theory and politics of civil-military relations*. Harvard: Harvard University Press.
- International Institute for Strategic Studies. (2015). *The Military Balance*. London: Routledge.
- Jomini, A. H. (1854). *Summary of the Art of War: Or, a New Analytical Compend of the Principal Combinations of Strategy, of Grand Tactics and of Military Policy*. New York: GP Putnam's Sons.
- Kennedy, G., Kennedy G. C., & Neilson, K. (Eds.). (2002). *Military education: Past, present, and future*. Santa Barbara: Greenwood Publishing Group.
- Kretchik, W. (2011). *US Army Doctrine: US Army Doctrine. From the American Revolution to the War on Terror*. Lawrence: University Press of Kansas.
- Mainz, V. (2016). *Days of Glory? Imaging Military Recruitment and the French Revolution*. London: Palgrave Macmillan.
- Miron, M. (2019a). On Irregular Wars, Insurgencies and How to Counter Them: Enemy- and Population-centric Approaches in Comparative Perspective. *Revista Científica General José María Córdova*, 17(27), 457-480. <http://dx.doi.org/10.21830/19006586.497>
- Miron, M. (2019b). *Counterinsurgency Operations in the 21st Century: Insights from the United States Army Experiences in Iraq*. Bogotá D.C.: Sello Editorial ESMIC.
- Morgan, M. (2006). American empire and the American military. *Armed Forces & Society*, 32(2), 202-218.
- Neill-Harris, K., Resnick, S., Wilson-John, W., Miller-Stevens, K., Vandecar-Burdin, T., & Morris, J. (2016). Assessing partnerships between the military and civilian agencies to meet transitioning service members' needs. *Armed Forces & Society*, 42(3)2016): 585-604.
- Nielsen, S., & Snider, D. (Eds.). (2009). *American civil-military relations: The soldier and the state in a new era*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Olsen, J. A., & Van Creveld, M. (Eds.). (2011). *The evolution of operational art: From Napoleon to the present*. Oxford: Oxford University Press.
- Opello, W., & Rosow, S. (2004). *The nation-state and global order: A historical introduction to contemporary politics*. Boulder: Lynne Rienner.
- Parker, G. (Ed.). (2005). *The Cambridge illustrated history of warfare: The triumph of the West*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Phillips, T. (Ed.). (1985). *Roots of strategy: The 5 greatest military classics of all time. Vol. 1. The Military institutions of the Romans/by Vegetius*. Mechanicsburg: Stackpole Books.
- Reveron, D. (2016). *Exporting security: International engagement, security cooperation, and the changing face of the US military*. Washington: Georgetown University Press.
- Rich, J., & Shipley, G. (Eds.). (1993). *War and society in the Roman world*. London: Routledge.
- Rothenberg, G. E. (1989). Soldiers and the Revolution: The French Army, Society, and the State, 1788–99. *The Historical Journal*, 32(4), 981-995.
- Scheidel, W. (Ed.). (2012). *The Cambridge companion to the Roman economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Smith, D. (2016). *The State of the Middle East Atlas*. Oxford: New Internationalist.
- Sondhaus, L. (2010). *Strategic culture and ways of war*. London: Routledge.
- Southern, P. (2007). *The Roman army: A social and institutional history*. New York: Oxford University Press, New York.
- Strachan, H. (1977). *The politics of the British Army*. Oxford: Clarendon Press.
- Thornton, R. (2000). Cultural Barriers to Organisational Unlearning: The US Army, the 'Zero-Defects' Culture and Operations in the post-Cold War World. *Small Wars & Insurgencies*, 11(3), 139-159. <https://doi.org/10.1080/09592310008423292>

- Thornton, R. (2007). *Asymmetric Warfare: Threat and Response in the Twenty-First Century*. Cambridge, UK: Polity Press.
- US Army Training and Doctrine Command. (2014). *Pamphlet 525-3-1 The US Army Operating Concept: Win in a Complex World*. Tradoc: Fort Eustis Virginia.
- Van Creveld, M., & Keegan, J. (2005). *The art of War: war and military thought*. New York: Harper.
- Walter, D. Roon, the Prussian Landwehr, and the Reorganization of 1859-1860. *War in History*, 16(3), 269-297. <https://doi.org/10.1177/0968344509104193>
- Weigley, R. (1977). *The American way of war: A history of United States military strategy and policy*. Bloomington: Indiana University Press.
- Wilson, I. (2013). *Thinking beyond war: Civil-military relations and why America fails to win the peace*. New York: Palgrave Macmillan.
- Wilson, J., DiJulio J., Bose, M., & Levendusky, M. (2016). *American government: Institutions and policies*. Boston: Cengage Learning.

Revista Científica

General José María Córdova

(Revista Colombiana de Estudios Militares y Estratégicos)

Editorial: Dosier “Guerras contemporáneas y su efecto en las Fuerzas Militares”

Andrés Eduardo Fernández-Osorio

La violencia terrorista como espectáculo en internet: una aproximación criminológica

Miguel Ángel Cano Paños

Geopolítica del Polo Sur: intereses y necesidades de Colombia en el Tratado de la Antártida

Carlos Enrique Álvarez Calderón y Eduardo Námen Mesa

El río Amazonas: corredor estratégico para una Colombia trioceánica

Valeria Rodríguez Ardila

La política de fronteras de Colombia ante las nuevas amenazas de seguridad y defensa

Cipriano Peña Chivatá, Paola Alexandra Sierra-Zamora y Juan Carlos Hoyos Rojas

La reparación de víctimas en la implementación de un proceso de justicia transicional

Katterin Viviana Camargo García

Aportes de la Academia a legitimidad de la justicia en Colombia

María Antonieta Corcione Nieto, Andrés Eduardo Fernández Osorio, Leidy Johanna Cabrera Cabrera y Beyaert Camilo Rojas Yaima

DOSIER: GUERRAS CONTEMPORÁNEAS Y SU EFECTO EN LAS FUERZAS MILITARES

La mente y el espíritu son armas decisivas

Donald E. Vandergriff

La atribución pública como reguladora de emociones: manipulación de los efectos políticos de las hostilidades

Samuel Žilinský

Insistiendo en la victoria: victoria versus éxito en guerras limitadas y asimétricas

Mustafa Coşar Ünal & Petra Cafnik Uludağ

Cómo terminan las insurgencias: en busca de la victoria del gobierno

Spyridon Plakoudas

Las Fuerzas Militares como instrumento de socialización del Estado

Fabián Ricardo Giraldo-Chaparro

Rev. Cient. Gen. José María Córdova	Bogotá Colombia	octubre-diciembre 2019	Vol. 17	Núm. 28	pp. 683-970	ISSN 1900-6586
--	--------------------	---------------------------	---------	---------	-------------	-------------------



ESCUELA MILITAR DE CADETES
General José María Córdova



ISSN 1900-6586



9 77190 0 65800 4